



NICARAGUA
(1979-1990)
LA REVOLUCIÓN ENREDADA

SALVADOR MARTÍ I PUIG





NICARAGUA
(1979-1990)
LA REVOLUCIÓN ENREDADA

SALVADOR MARTÍ I PUIG



Salvador Martí i Puig, 2012

Edita:

Salvador Martí i Puig, 2012

La primera parte de esta obra fue editada en 1997 por Libros de la Catarata y Cooperació.

Imagen de portada de Vanessa García Blanca: imagen de un mural presente una escuela pública de la ciudad de León, Nicaragua.

ISBN: 978-84-695-3876-0



NICARAGUA
(1979-1990)
LA REVOLUCIÓN ENREDADA

SALVADOR MARTÍ I PUIG

ÍNDICE

El autor	9
Prólogo a la segunda edición	11

PARTE 1

LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA Y SU DESENLACE 15

Introducción	17
Capítulo 1. La crisis del régimen Somocista	23
Capítulo 2. La insurrección	41
Capítulo 3. La gestación del régimen	61
Capítulo 4. La búsqueda de la hegemonía	81
Capítulo 5. La institucionalización de la revolución	111
Capítulo 6. El desenlace electoral de 1990 y el nuevo realineamiento político	131
Capítulo 7. Desmantelamiento del estado revolucionario y la reacción popular ...	155
Capítulo 8. El Sandinismo después de la derrota	177
Capítulo 9. Conclusiones	189

PARTE 2

LA CONTRARREVOLUCIÓN 199

Introducción	201
Capítulo 10. La reforma agraria sandinista o el reto de la modernización	207
Capítulo 11. El debate sobre la realidad agraria y su desenlace: el ocaso de los Campesinistas	225
Capítulo 12. El país campesino	233
Capítulo 13. Los campesinos de la frontera agrícola: la gestación de la Contra campesina	249
Capítulo 14. A modo de conclusión: ¿la última rebelión campesina?	267
Bibliografía	277
Acrónimos	309

EL AUTOR



SALVADOR MARTÍ I PUIG es doctor en Ciencia Política y Máster en Historia de América Latina. Actualmente es profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, y ha impartido docencia en varios centros de investigación en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Su área de interés es la política latinoamericana, en concreto los procesos de democratización y desarrollo, y también los temas vinculados con la acción colectiva, participación e identidad. Es autor de diversos libros y artículos en revistas especializadas sobre los temas expuestos. Para mayor información sobre sus trabajos véase: <http://campus.usal.es/~acpa/?q=node/64>

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Este volumen contiene dos partes. La primera, que versa sobre el proceso revolucionario sandinista, está basada en mi Tesis de Maestría titulada *Nicaragua 1977-1996. La revolución enredada*, de la que se han hecho algunas variaciones con el fin de ser más ágil y amena al lector. Por otro lado, la segunda parte que trata sobre *la contra campesina*, es el resumen de una parte esencial de mi Tesis Doctoral en Ciencia Política y que defendí en 1997 en la Universidad Autónoma de Barcelona con el título de *Revoluciones, rebeliones y asonadas. Cambio social y violencia política en Nicaragua, 1961-1994*. También creo necesario exponer que los dos textos, si bien analizan una misma realidad nacional desde dos ángulos y experiencias distintas, no se contradicen. Al contrario, creo que se complementan.

Por otro lado también debo apuntar que los dos textos son el resultado de investigaciones realizadas hace ya más de una década, sin embargo creo que han resistido bien el paso del tiempo. Cuando decidí publicar este texto pensé ac-

tualizar parte de su contenido a la luz de nuevos trabajos que he ido publicando sobre Nicaragua y Centroamérica ⁽¹⁾, pero al final opté por dejarlos básicamente igual, sólo introduciendo pequeños cambios. Con esta decisión pretendí mantener intacta la visión de Nicaragua que tuve durante mis primeras estancias en dicho país.

Mi relación con Nicaragua y la región se remonta a finales de los años ochenta, cuándo entré en contacto con organizaciones de solidaridad con Centroamérica gracias a la red de solidaridad con los pueblos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua que existía en Cataluña. Fue entonces cuando, acabando mis estudios de licenciatura, pensé en vivir una temporada en Nicaragua. Entonces dos excelentes profesores universitarios de Barcelona, Joan Vintró y Ricard Gomá, me contactaron con la Universidad Autónoma Nacional de Nicaragua para que pudiera impartir clases en la Facultad de Derecho en León a cambio de alojamiento y manutención. Me pareció una excelente idea. Al cabo de algunos meses tomé el avión y crucé el Océano Atlántico. Solo falló un pequeño detalle. Al llegar a Nicaragua ya no había revolución: los sandinistas habían perdido las elecciones celebradas el 25 de enero de 1990.

Cuando llegué a Nicaragua vi una sociedad a medio camino entre la reconciliación, la reconstrucción, la desmovilización y la ruina. El exilio de Miami había vuelto al país con ansias de revancha y desquite, y los sandinistas estaban bastante atareados. Una parte de ellos se preguntaba sobre las razones por las cuáles la revolución había perdido el favor del pueblo; mientras otra parte se peleaba acusándose mutuamente de todos los errores cometidos a lo largo de una década. Y en medio de ese guiriguai unos cuantos sandinistas -que eran una minoría, pero muy visible- aprovechaban el desconcierto para embarnecer su patrimonio antes de entregar el poder a los nuevos gobernantes. Era el peor momento (y el peor país) para que un joven estudiante hiciese un viaje iniciático, épico y romántico.

1) Me refiero a los libros *The Sandinistas & Nicaragua Since 1979* publicado en 2011 por Lynne Rienner y editado junto con David Close y Shelley McConnell, *Nicaragua y el FSLN ¿Qué queda de la revolución?* publicado por Edicions Bellaterra en 2009 y editado junto con David Close, *Tiranías, rebeliones y democracia* publicado en 2004 también por Edicions Bellaterra. Y también a mis artículos “The Adaptation of the FSLN: Daniel Ortega’s Leadership and Democracy in Nicaragua” (Journal of Latin American Politics and Society, 2010), “Nicaragua 2008: Polarización y pactos” (Revista de Ciencia Política, 2009) y “El regreso del FSLN al poder: ¿Es posible hablar de realineamiento electoral en Nicaragua?” (Revista Política y Gobierno, 2008).

Al mismo tiempo, había otros espacios que despertaban más entusiasmo. En El Salvador y en Guatemala estaba a punto de firmarse unos Acuerdos de Paz que se celebraron casi como una victoria. En Chile se desmantelaba el régimen de Pinochet y había una fraternidad contagiosa entre todos aquellos que habían luchado contra la dictadura. Pero a mí me tocó vivir en una sociedad desgarrada por una guerra de agresión, la pobreza y el rencor. No pretendo decir con ello que mi primera experiencia en Nicaragua no significara un aprendizaje colosal. Nada más lejos. De mi primera estancia (y del resto de estancias que realicé posteriormente) extraje un aprendizaje profundo y duradero de la naturaleza humana y de las sociedades en desarrollo. Fue una vivencia dura, pero también muy enriquecedora.

Tal como he expuesto, llegué a Managua y a León a inicios de los años noventa, justo después de la derrota electoral del FSLN y con la persistencia aún de múltiples grupos armados –*recompas, recontras, rejuntos y revueltos*. Posteriormente, entre 1994 y 1997, pasé largos períodos en el país. En cada una de mis visitas puede compartir junto con amigos nicaragüenses la vida en un país donde aún se sentían los efectos demoledores de la guerra. Pude participar en el debate interno y las rupturas que experimentó el sandinismo, fui a las zonas rurales del interior (sobre todo a Matiguás) para entrevistar y buscar testimonios de los *contras campesinos* que se levantaron en armas a lo largo de la década de los años ochenta y que poco a poco –y con muchas dificultades- se insertaron a la vida civil, y también pude reflexionar sobre la dificultad de construir instituciones representativas en el marco de un Estado de Derecho cuyos líderes pocas veces trabajan para el bien común. A lo largo de una década experimenté como la economía de mercado irrumpió de forma abrupta en una sociedad maltrecha, generando brechas sociales crecientes y nuevos elementos de conflicto más allá del binomio que polarizó el país durante toda una década y, a la vez, observé como la gente sencilla y humilde se organizaba para luchar por su supervivencia y dignidad. Creo que esas sensaciones se reflejan en las páginas que siguen.

Finalmente, sólo me resta decir que parte de mi experiencia vital y académica está íntimamente vinculada a Nicaragua. Desde mi llegada a Nicaragua, ya hace más dos décadas, hasta hoy he trabajado e investigado sobre diversas temáticas y países; sin embargo mi itinerario intelectual (ni el vital) no hubiera sido el que fue sin el paso por ese precioso país lleno de volcanes, lagos, poetas y dignidad. Precisamente por ello me es difícil enumerar a las personas a que han contribuido a la confección de este libro. Eso es casi imposible. Con todo, sí

quiero señalar a algunos amigos que, desde hace ya muchos años, forman parte de mi geografía sentimental en Nicaragua: Quim Rabella, Montse Julbe, Alejandro Bravo, Alexei Hüper, Juanita Bermúdez, Gabriel Álvarez, Alfonso Silva, Selene Guevara, Eduardo Mangas, Margarita Vannini, Jan Kees y Fidel de Rooy, Loli Estrada, Juan Carlos Gutiérrez Soto, David Llistar y Jordi Oriola.

Salamanca, junio del 2012



PARTE 1

**LA REVOLUCIÓN
POPULAR SANDINISTA
Y SU DESENLACE**

INTRODUCCIÓN

Al principio, era un remoto paisaje de selvas, lagos y volcanes como fondo de un rostro: el del «padre nuestro» del lado más jugoso de nuestra herencia poética, Rubén Darío. Nicaragua, así, era un vocablo mágico en los atlas de la fantasía del niño y del muchacho⁽¹⁾.

Los economistas acuñaron la ya célebre expresión de «La década perdida» para referirse al desarrollo económico de Latinoamérica durante el período que abarca los convulsos ochenta. Si bien los economistas han hecho lugar común de dicha expresión, los politólogos pueden calificar de muchas maneras la inestable realidad política latinoamericana en dicho período pero, en ningún caso, de la misma manera como lo han hecho sus «colegas» economistas. Golpes, contragolpes y autogolpes; liberalizaciones de regímenes autoritarios, transiciones hacia sistemas democráticos e involuciones; revoluciones, contrarrevoluciones e invasiones configuran una panoplia tal de acontecimientos políticos que si tuviéramos que calificar los avatares de los ochenta en América Latina utilizaríamos –en todo caso– la expresión de «La década prodigiosa».

1) Párrafo extraído de Valverde en ZAMPAGLIONE, 1992: 141.

Si del marco subcontinental focalizamos el área regional de Centroamérica, observamos que los pequeños países del istmo han sido, durante el período 1977-1996, un escenario de complejas transformaciones políticas. Pareciera que en la opaca historia de los pueblos, la energía social acumulada a través de prolongados períodos se condensara para estallar en un breve plazo. Éste es, quizás, el caso de los países centroamericanos. En poco más de una década en ellos se han llevado a cabo profundas, conflictivas y –a veces– contradictorias transformaciones en lo que se refiere a la estructura social, política y económica. En la actualidad, la fisonomía de dichas sociedades y regímenes es sustancialmente distinta a la que existía en los no demasiado lejanos años setenta.

En el caso de que nos obligaran a responder a las –en ningún caso ingenuas– preguntas: ¿Cuál ha sido el epicentro de la compleja crisis regional en la que se sumergió Centroamérica durante los últimos quince años? ¿Cuál ha sido el proceso político en el que más intensamente se volcaron pasiones, esperanzas y recelos?... La respuesta sería *la revolución acaecida en Nicaragua*.

En el presente trabajo, consideramos que la revolución nicaragüense se enmarca dentro del concepto de *revolución social*, en contraposición de otros conceptos como los de revolución política, rebeliones o golpes de estado. Entendemos por revolución social el «derrocamiento de una élite gobernante por parte de una élite insurrecta (o vanguardia revolucionaria) que ha conseguido movilizar y capitalizar un amplio apoyo popular y que pretende, desde el poder, transformar las estructuras sociales, políticas y económicas de la sociedad» (Selbin, 1993: 11-13). Cabe señalar, a la vez, que una revolución social presupone un proceso dialéctico donde se engarza la pretensión de destruir el «orden anterior» y se pretende construir una nueva articulación de la realidad política, social y económica de la sociedad.

Existen diversos criterios en la periodización de estos procesos. En el presente caso, nosotros hemos escogido uno que establece tres momentos:

- 1) La insurrección, en tanto período donde se observa una profunda crisis de soberanía y donde diversos contendientes disputan a los titulares del poder político los resortes del Estado.
- 2) La victoria política, período en el que se realiza una traslación de la soberanía desde los titulares del antiguo régimen hacia el gobierno revolucionario, formado por las élites que proponen una ruptura total respecto al período anterior y donde no cabe posibilidad de transacción intra-elitaria.
- 3) La institucionalización y consolidación. En dicha fase se asientan las

instituciones surgidas de la insurrección y se pretende llevar a cabo una transformación de la estructura económica, social y de las actitudes políticas de los miembros de la sociedad.

Sobre la base de esta definición y periodización del concepto de revolución social, en el presente trabajo pretendemos realizar un análisis de *la dinámica de los actores políticos presentes a lo largo del período insurreccional, del proceso revolucionario, y del posterior desmantelamiento de la institucionalidad revolucionaria acaecido en Nicaragua desde 1977 hasta 1996.*

¿Por qué razón nos centramos en los actores políticos? La respuesta radica en la misma definición de revolución social que hemos adoptado y por una opción metodológica sobre la base de la cual preferimos el análisis de sujetos sociales concretos y limitados, a la adopción de grandes paradigmas unitarios, perspectivas lineales o leyes que los acontecimientos ejemplifican. De esta definición se desprende que, para el análisis de las revoluciones sociales, es necesario:

1) El estudio de los actores políticos, en tanto sujetos individualizados con consciencia de tales, con capacidad de intervención en la realidad y con intereses y objetivos definidos. En este sentido, discrepamos con los paradigmas absolutos que pretenden analizar el desarrollo de las sociedades de forma lineal. Se trata, desde dicha perspectiva, de un desplazamiento del objeto desde la sociedad a *lo social*, desde el sistema a los *actores*.

2) El reconocimiento del peso e influencia de las ideas y del discurso.

3) La certidumbre de que los cambios y las transformaciones sobre una determinada realidad nunca están predeterminados, debido tanto a la capacidad creadora y estratégica de los actores, como a las constricciones en que estos se ven envueltos.

Una vez aquí, cabe formular las cuestiones que, para nuestro estudio, nos parecen más relevantes del proceso revolucionario nicaragüense. Antes de ello, sin embargo, es necesario señalar que toda revolución social supone una dinámica política de *inclusión* de las masas populares en la vida política y una dinámica de *ruptura violenta* (es decir, de enfrentamiento) con aquellos actores preeminentes del período anterior. Estos dos elementos –la *inclusión* y la *ruptura*– estarán presentes a lo largo de todo el proceso y marcarán profundamente su desarrollo.

Respecto a las cuestiones que planteamos, éstas pueden sintetizarse en seis puntos:

- 1) Por qué en Nicaragua la crisis del sistema político y la conflictividad social supusieron un estallido insurreccional, y por qué, del desarrollo de dichos acontecimientos, triunfó la convocatoria revolucionaria. Cuáles fueron los elementos diferenciales respecto a los demás países centro-americanos –en especial referencia a El Salvador y Guatemala– en donde también se lanzaron convocatorias revolucionarias.
- 2) Sobre la base de qué actores, o coalición de actores, pudo llevarse a cabo el triunfo de la convocatoria revolucionaria. Quién hegemonizó dicho proceso y por qué –cuáles fueron los intereses que los unieron, el discurso generado y las estrategias desarrolladas.
- 3) Hasta qué punto la coalición que permitió la victoria revolucionaria se mantuvo cohesionada con el paso del tiempo. En caso de sufrir un notable desgaste –tal como aconteció– qué factores fueron los más relevantes. Qué rol ejerció la intervención directa de la administración de los Estados Unidos en la dinámica política de dicho proceso y hasta qué punto ésta supuso un cambio de dirección en el proyecto revolucionario.
- 4) Cuáles fueron los cambios más relevantes que, con el tiempo, fueron sufriendo diversos actores a lo largo del período y cómo estos cambios incidieron en sus estrategias e intereses.
- 5) Con las elecciones de 1990 y el cambio de escenario político consiguiente: ¿es posible hablar de una recomposición de las lealtades y los intereses en el seno de los diversos actores políticos?
- 6) Hasta dónde el desmantelamiento del Estado Revolucionario y la aplicación de medidas neoliberales descomponen a los actores políticos anteriormente enfrentados, y sobre la base de qué intereses pueden resurgir nuevas propuestas que defiendan los colectivos populares en el marco de un régimen democrático.

Estas son, a grandes trazos, las cuestiones que, modestamente, pretendemos ir señalando a lo largo del presente trabajo. Los instrumentos analíticos a partir

de los cuales trataremos dichas cuestiones variarán según cada objeto específico. Respecto al análisis de los actores de carácter partidario utilizaremos la bibliografía clásica de la estasiología; en referencia al análisis del proceso insurreccional nos basaremos en un estudio multicausal, a la vez que contrastaremos el caso nicaragüense con el de El Salvador y Guatemala; en cuanto al desarrollo del proceso revolucionario –una vez expuesto el caso nicaragüense– pretenderemos destacar aquellas dinámicas «generalizables» o «constantes» de este tipo de procesos en los países de América Latina; en referencia a los cambios acontecidos en la institucionalidad surgida de la insurrección tomaremos algunas herramientas de los análisis de los estudios sobre transiciones. Finalmente, intentaremos esbozar una breve interpretación del proceso revolucionario de Nicaragua, interpretación que –tal como es propio en este tipo de objetos de estudio– no estará exenta de contradicciones, dudas e interrogantes.

Respecto al material utilizado para tal fin, cabe hacer referencia a la utilización de fuentes indirectas –sobre todo, bibliografía especializada– y directas –periódicos, revistas y documentos. En la confección del presente trabajo cabe señalar el trabajo realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en León, durante los años 1991, 1992 y 1994, y en el Instituto de Historia de Nicaragua, en Managua, durante el año 1996; y sobre la base del cual pude realizar entrevistas y tener contacto directo con la realidad nicaragüense.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, el presente trabajo se articula en nueve capítulos ordenados en base cronológica y uno, el último –a modo de conclusión– de naturaleza interpretativa y atemporal.

CAPÍTULO 1

**LA CRISIS
DEL RÉGIMEN
SOMOCISTA**

1.1. EL RÉGIMEN SE TAMBALEA

«Hay que estimular el turismo», ordena el dictador a mediados de julio, mientras arden los barrios orientales de Managua, incendiados por los aviones [...] Desde el búnker, gran útero de acero y cemento, gobierna *el último* Somoza. Allí no se escucha el trueno de las bombas, ni los aullidos de la gente, ni nada que perturbe el perfecto silencio; desde allí nada se ve ni se huele [...] Somoza organiza la liquidación de los negocios y el desvalije de toda Nicaragua. Después, Somoza declara por teléfono: —¡Ni me voy ni me van!⁽¹⁾.

Tal como expuso Carlos Fonseca, Somoza era como una prenda preciosa donde se aglutinaban todas las contradicciones del pueblo nicaragüense, donde se confundía un poco la liberación nacional con la liberación de la dictadura⁽²⁾. Anastasio Somoza Debayle era el último miembro de una dinastía que gobernó Nicaragua desde 1933. Su padre, Anastasio Somoza García, fue el artífice del estado moderno nicaragüense. En el período en que éste detentó el poder, se establecieron las bases del subsiguiente desarrollo económico, político y, cómo no, también las condiciones que posibilitaron la posterior ruptura revolucionaria⁽³⁾.

1) Texto extraído de GALEANO, 1986: 301.

2) Esta expresión ha sido extraída de RUIZ, 1980.

3) Sobre el régimen de Anastasio Somoza García cabe dirigirse a WALTER, 1993. Ésta parte de la hipótesis de que en el período fundacional del «Somozato», las dos décadas en que el primer Somoza gobernó, se gestaron sus elementos definidores. En ese período se configurarían las directrices del desarrollo económico y político que harían de Nicaragua un régimen singular. Políticamente podemos caracterizar la labor del primer Somoza sobre la base de tres puntos: 1) la cooptación o neutralización de los viejos caudillos y líderes locales; 2) la reordenación de las instituciones del estado con el objetivo de desarrollar la economía agroexportadora; y 3) el uso de la coerción en momentos de crisis política (WALTER, 1993: XVII).

La explicitación del término «*Estado*», en tanto que marco en el que se mueve nuestro objeto de estudio —los actores políticos— tiene una gran relevancia. En el caso de Nicaragua, esta consideración es primordial, ya que, después de un largo período de control autocrático en beneficio de un sector restringido de las élites, a finales de los setenta, el Estado cambió radicalmente su forma de dominación política. El Estado no es una entidad abstracta ni la reificación de una idea. No es posible observar al Estado como un ente ajeno a la dinámica y articulación de los actores políticos y sociales, ni a las relaciones de preeminencia y subordinación existente entre ellos. Si bien los diferentes actores mantienen espacios de autonomía, existe una relación de congruencia entre el Estado y el poder político, y de éste con la estructura de poder social y económico⁽⁴⁾. Esta observación es clave para entender el desarrollo político de Nicaragua desde su independencia. La profusión de guerras civiles, conflictos regionales, intervenciones de los Estados Unidos, así como los constantes alzamientos de caciques acabaron por hacer imposible una sólida articulación de las instituciones del Estado⁽⁵⁾.

El régimen somocista adquirió una caracterización muy singular. El tipo de régimen que nos ocupa aquí, ha sido calificado de diversas formas por diferentes teóricos. Linz y Stepan utilizaron el término *sultanista* (Linz, 1975; Linz y Stepan, 1978), Rouquié el de *patrimonial* (Rouquié, 1984), Falcoff el substantivo de *mafiaocracy* (Falcoff en Wickham-Crowley, 1993), González el de *nepotismo cleptocrático* (González, 1992). Si tuviéramos que exponer brevemente las características básicas de estos regímenes observaríamos cinco elementos comunes: 1) la existencia de un gobierno personal, no partidario; 2) el hecho de que las élites políticas no se corresponden con las élites socio-económicas tradicionales; 3) la dominación personal de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad; 4) la

4) En cualquier caso el control del Estado es el objetivo último de la actividad política. En este sentido, todo estudio sobre su construcción y consolidación debe identificar a los actores políticos, debe definir a los grupos, clases o sectores de la sociedad, que participan en el conflicto en pos del control del Estado, y cuyos intereses se reflejan en las decisiones políticas y en las medidas que desde la administración se ejecutan (WALTER, 1993). Existe abundante literatura que teoriza sobre el Estado en América Latina, y entre ésta cabe destacar la compilación de textos de «clásicos» sobre dicho tema: BOSSET & KLARÉN, 1986. La literatura homóloga para los casos centroamericanos es notablemente más reducida; con todo, es necesario señalar las siguientes obras: BALOYRA, 1983; BROCKETT, 1988; CASTILLO-RIVAS, 1983; TORRES-RIVAS, 1983; WEEKS, 1986.

5) Respecto a la debilidad y a los crónicos conflictos entre las élites nicaragüenses durante el siglo XIX y la primera mitad del XX cabe dirigirse a la obra: Barahona *et al.*, 1983. En referencia a la misma cuestión durante el período somocista nos remitimos al capítulo 6 de Wheelock, 1976. En cuanto a la capacidad de las élites políticas nicaragüenses de articular un espacio político nacional es interesante el trabajo: Berntzen, 1990.

corrupción como una práctica institucional; y 5) el ejercicio de la coerción y la represión hacia los colectivos opositores (Wickham-Crowley, 1993: 269-280).

Si bien podríamos calificar el caso nicaragüense como un caso único, también es posible clasificarlo junto con las prolongadas dictaduras o *gobiernos autocráticos caribeños*, como el de Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer en la República Dominicana, o el de Fulgencio Batista en Cuba. En este tipo de regímenes, el ejercicio directo y absoluto del poder por parte de reducidas camarillas genera una verdadera personificación del poder político, que opera como plataforma de lanzamiento hacia el enriquecimiento, a través de los aparatos del Estado. Las instituciones del Estado son, en sí mismas, una potencia económica que permite la conversión de grupos en clases definidas por su control sobre los medios de producción y cambio. Aparecen, de este modo, contradicciones complejas y profundas entre las fracciones que se enriquecen gracias a la manipulación del poder y de los aparatos del Estado, y las que tienen en el mercado su ámbito único o predominante de acumulación. El *modus operandi* de los detentadores del poder político aparece, frente a las demás fracciones de la burguesía, transgrediendo sistemáticamente las reglas del juego — vale decir *racionalidad del mercado*— y cuestionando su propia capacidad de expresión económica (Vilas, 1984).

El Estado somocista no se caracterizó solamente por su personalización. La Guardia Nacional⁽⁶⁾, un entramado clientelar de actores políticos y sindicales afines, el apoyo explícito de las diferentes administraciones de los Estados Unidos, y una cosmética constitucional⁽⁷⁾, fueron los pilares sobre los cuales el somocismo se asentó. Es necesario tener en cuenta, para comprender la larga duración de la dinastía, el efecto *amortiguador de conflictos* que supuso el prolongado ciclo de expansión económica que precedió a la segunda guerra mundial⁽⁸⁾.

6) Tanto en el acceso como en la consolidación del poder, los Somoza contaron con la absoluta fidelidad de la Guardia Nacional (GN), de la que los miembros de la dinastía siempre detentaron la máxima autoridad. La GN fue un «gendarme doméstico» impuesto por los Estados Unidos una vez que los marines abandonaron Nicaragua. Pero también fue un cuerpo garante del orden regional. La dependencia personal de estas fuerzas hacia los Somoza se ejemplificaba con la estrategia en que se organizaba la cúpula de dicho cuerpo. Cualquier oficial con ambición personal o carisma era destituido y expulsado del cuerpo, lo mismo sucedía con aquellos que pretendían «modernizar» la institución. Los integrantes de la GN vivían en barrios separados, tenían hospitales y escuelas exclusivas y otros privilegios negados al resto de la sociedad. Existe una notable literatura sobre esta institución, por su calidad destacan las obras de BOOTH, 1982; MILLET, 1979.

7) Sobre la regulación legal del régimen somocista, ver GONZÁLEZ, 1992: 66-70; WALTER, 1993.

8) La más completa y detallada obra sobre la economía política centroamericana y sus efectos es Bulmer-Thomas, 1987. En referencia a los efectos políticos del desarrollo económico iniciado en los años cincuenta cabe dirigirse a Dunkerley, 1988: 169-219. Sobre este período Henry Kissinger

Tal como escribe Secundino González, a finales de 1972 el sistema de dominio establecido durante décadas sobre Nicaragua por parte de los Somoza, empezó —y aquí la expresión es literal— a tambalearse (González, 1992: 90). El 23 de diciembre de 1972, un terremoto destruyó casi el setenta por ciento de los edificios de la ciudad de Managua. Desde los Estados Unidos y desde muchos otros países llegaron cientos de millones de dólares en ayudas para la reconstrucción y para los necesitados, pero, muy pronto, se empezó a rumorear sobre el modo en que Somoza utilizaba o distribuía el dinero.

«Ésta es la revolución de las oportunidades», dijo Anastasio Somoza Debayle. El seísmo no solo supuso la posibilidad de engrosar el patrimonio de los Somoza, sino que les dio la oportunidad de retomar el poder formal. Por medio de un decreto hecho público el 23 de enero, Somoza Debayle se hizo nombrar presidente del Comité Nacional de Emergencia.

El detonante, en términos de la estabilidad del régimen, fue la injerencia —utilizando recursos públicos y los resortes del Estado— de las empresas de Somoza en los sectores económicos considerados, hasta entonces, espacios reservados a las élites económicas tradicionales. A partir de entonces, el régimen no solo hizo caso omiso de las demandas que surgieron desde los diversos sectores organizados de la burguesía, sino que aprovechó el estado de sitio, implantado poco después, para continuar su lógica *cleptomaniaca*⁹⁾.

A finales de enero de 1977, poco antes de que Jimmy Carter prestara juramento

expuso (*Kissinger Report*, en Dunkerley): «With the launching of the Alliance for Progress in 1961, the role of United States in Central American development underwent a major transformation. This was a bold and unprecedented effort to encourage comprehensive national planning and to promote a wide array of social, political, tax and land reforms... The goals of the Alliance were three: economic growth, structural change in societies, and political democratization. But... it was only in the first area that significant progress was made».

9) El desarrollo de estos acontecimientos están relatados en Christian, 1985: 36-41. En este contexto, en el marco de las «elecciones celebradas» en 1974, el número de partidos liberales y conservadores disidentes creció notablemente. Éstos, junto con sindicatos no vinculados con el régimen, crearon una coalición, liderada por Pedro Joaquín Chamorro, llamada Unión Democrática de Liberación (UDEL), que perviviría hasta el período insurreccional. Respecto al nuevo ímpetu que tomó la *lógica cleptomaniaca* del régimen, ésta llegó a extremos draconianos. Con todo, como no hay mal que por bien no venga, y tal como expuso un dirigente sandinista (Rushdie, 1987: 27-28: «La carretera de Campoa es de ladrillo, como otras carreteras en Nicaragua. Somoza tenía una fábrica de ladrillos. Después del terremoto de 1972 se empeñó en que todas las vías de tránsito del país se reconstruyeran con ladrillos presidenciales, vendidos a la nación a precios muy elevados. —Pero nos dimos cuenta que los ladrillos son muy fáciles de apalancar— me contó muy ufano Luis Carrión. —De modo que durante la insurrección pudimos detener con facilidad sus convoyes, gracias muchas veces a esas carreteras de ladrillos».

de su cargo como presidente de los Estados Unidos, un grupo de académicos, procedentes de diversas universidades estadounidenses, se reunieron en Washington bajo los auspicios del Departamento de Estado para realizar un coloquio sobre América Central. Los oradores y las discusiones se ocuparon de cuestiones muy amplias y diversas, pero si hubo alguna línea general que persistió durante toda la sesión fue la de que en Centroamérica no podía ocurrir nada que afectara directamente a los intereses norteamericanos o que, por cualquier otra circunstancia, exigiera la atención urgente de los funcionarios estadounidenses. Las discusiones se centraron en cómo los Estados Unidos podían ir reduciendo sus compromisos en dicha zona. Se tomó nota de los grupos guerrilleros que estaban actuando en El Salvador, pero se juzgó que la solución de los problemas socioeconómicos de aquel país era más urgente. También se habló del movimiento sandinista en Nicaragua, pero se lo dejó de lado al considerarlo una débil amenaza contra la familia Somoza que, por otra parte, entraba en su décimo lustro en el poder.

De las directrices básicas en que se articuló la retórica de la política exterior de la administración Carter, la de la *promoción de los derechos humanos*, fue la que tuvo mayor impacto en Nicaragua. El interés de la nueva administración norteamericana en referencia al respeto de las libertades civiles, los derechos humanos y la liberalización de los regímenes cabe observarse, en la perspectiva de los Estados Unidos, como un instrumento de política exterior que tenía como objetivo desarticular los potenciales riesgos rupturistas y revolucionarios que amenazaban la estabilidad política de los países centroamericanos.

En este caso, los agudos analistas norteamericanos no afinaron con demasiada precisión. El último de los Somoza ya no pudo ver la madrugada del 17 de julio de 1979 en Nicaragua. Un helicóptero *Sikorski* lo llevó desde el búnker, en la loma de Tiscapa, a los hangares de la Fuerza Aérea. Con él se llevó los lingotes de oro del Banco Central, ocho papagayos de colores y los ataúdes de su padre y de su hermano. Subió a su avión privado, un jet *Sidney-Howker*, rumbo a Miami, girando primero sobre la ciudad donde brillaban las fogatas de la insurrección.

1.2. LOS MUCHACHOS

Recuerdo lo que Leonel Rugama dijo al grupo de compañeros que estaba allí discutiendo con él. Frunció el ceño y dijo: «Hay que ser como el Che... ser como el Che... ser como el Che...».⁽¹⁰⁾

10) Frase extraída de la obra: CABEZAS, 1982: 20. En ésta se expone la experiencia de los jóvenes estudiantes de la Universidad de León y sus relaciones con el Frente Sandinista.

A la luz del ejemplo ofrecido por la revolución cubana, en toda América Latina, surgieron numerosos grupúsculos revolucionarios⁽¹¹⁾. En 1959, en Managua, se constituyó la «Juventud Patriótica», organización con vocación revolucionaria y partidaria de la lucha armada. Ésta desaparecería poco después, disgregándose en una constelación de organizaciones del mismo carácter. Posteriormente algunas de ellas formarían el «Movimiento Nueva Nicaragua», preludio del FSLN. Será en 1961, en Tegucigalpa, cuando se creará el Frente de Liberación Nacional (FLN), fruto de la voluntad de jóvenes radicales disidentes del Partido Socialista de Nicaragua⁽¹²⁾ y del Partido Conservador. Los fundadores —entre los que se encontraban Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge y Silvio Mayorga— pertenecían a la generación que observó la habilidad de Anastasio Somoza García en instaurar un régimen de carácter patrimonial y en cooptar a los cuadros del Partido Conservador⁽¹³⁾.

Las bases teóricas a partir de las cuales el FSLN desarrollaría su identidad y proceder fueron: el marxismo, el vanguardismo, el foquismo y el nacionalismo. El marxismo constituyó una fuente de donde fluyó una visión del mundo, un discurso y un marco para la acción. Víctor Tirado, miembro de la Dirección Nacional, afirmó (Tirado, 1986):

El marxismo fue una revelación a partir de la cual primero nos descubrimos a nosotros mismos, y luego a nuestro país a través de nuestro pueblo... a partir de Marx profundizamos en Sandino, su historia, sus objetivos...

Posteriormente, Bayardo Arce, también miembro de la Dirección Nacional, acuñaría la frase de que «la diferencia entre sandinismo y marxismo en Nicaragua puede considerarse nula, un marxista en Nicaragua es necesariamente sandinista» (Arce en Invernizzi *et al.*, 1986). Sin embargo, si bien los sandinistas insistieron en su concepción marxista del mundo, la verdad es que la realidad del FSLN siempre

11) Esta influencia también se percibió en Nicaragua. En referencia a la revolución cubana Tomás Borge expuso (BORGE, 1982): «La victoria de la lucha armada en Cuba fue una luz que nos permitió ver más allá de los antiguos dogmas [...] Fue la respuesta a nuestras dudas, la justificación de nuestros sueños».

12) El PSN pertenecía a la III Internacional. Éste nunca apostó por la lucha armada ni por la vía revolucionaria. No cabe olvidar, a la vez, que en los primeros años de Somoza García el PSN estableció muy buenas relaciones con el régimen al que percibieron como nacional-popular.

13) Para la obtención de información más detallada sobre la fundación del FSLN y sus protagonistas cabe remitirse a las obras: ALEGRIA Y FLAKOLL, 1982; Borge en ARIAS, 1980; BLACK, 1981; BOOTH, 1982; BORGE, 1980; POMARES, 1979; POZAS, 1988.

fue mucho más ecléctica. No todos los marxistas estaban en el Frente ni todos los sandinistas eran marxistas. Carlos Fonseca, en 1964, observó que la estrategia del FSLN pasaba por la creación de una organización de amplia convocatoria (Fonseca en Dunkerley, 1988: 221):

Pienso que los revolucionarios nicaragüenses tienen que acogerse a la doctrina que les permita construir la liberación del pueblo de Nicaragua. En mi propio pensamiento están presentes las raíces populares de diferentes ideologías, el marxismo, el liberalismo, el socialcristianismo...

De las lecturas de Débray, Harneker, Lenin, del estudio de la guerra de Argelia, de la revolución vietnamita y cubana, los sandinistas tomaron el concepto de *vanguardia revolucionaria*, que adquirió una importancia vital en el aspecto organizativo. La premisa de que la existencia de una *vanguardia* —en tanto que organización selectiva, jerárquica y disciplinada de militantes— era un requisito para el *triunfo* tuvo una gran influencia en la práctica organizativa del Frente Sandinista (Gilbert, 1988). El *foquismo* fue un legado de la revolución cubana. El FSLN se convirtió en una organización política armada donde la acción guerrillera era un elemento central⁽¹⁴⁾.

El nacionalismo y el anti-imperialismo emanó del mito de Augusto César Sandino, político liberal y jefe guerrillero, figura catalizadora del rechazo a la presencia norteamericana durante el primer tercio del presente siglo. Este personaje fascinó a Carlos Fonseca —co-fundador y teórico del FSLN, quien en 1961, después de la campaña guerrillera de Raití-Bocay, refundó el FLN para introducir el adjetivo de *Sandinista*⁽¹⁵⁾.

Una vez constituido el FSLN, la actividad guerrillera y la penetración en el medio rural tuvieron preeminencia sobre la organización, la educación política de las masas y la agitación en las zonas urbanas. La guerrilla sandinista fue, en el grueso de su historia, un pequeño foco guerrillero en las montañas del norte y centro del país que se nutría, mayoritariamente, de cuadros estudiantiles. De este largo período, el FSLN, si bien pudo sobrevivir a diversos ataques a los que se vio sometido, obtuvo pocas victorias en el plano militar. Sin embargo, a partir de esa experiencia

14) La estrategia *foquista* provino de las obras de Débray y Guevara. Estos la definieron como una versión del marxismo-leninismo y como la única estrategia posible para conseguir una *victoria revolucionaria* cuando no existían sólidos vínculos con las organizaciones populares. Según los autores citados, la lucha armada, en esos casos, suponía la única actividad posible para las organizaciones revolucionarias (Débray, 1961; Guevara en Nolan, 1986).

15) Sobre Augusto César Sandino existe vasta bibliografía, entre ella destacamos las siguientes obras: HODGES, 1986; RAMÍREZ, 1974; SELSER, 1974.

se difundiría una mitología referente a las montañas. La llamada *mística de las montañas* hablaba del marco donde se gestó la incipiente actividad guerrillera.

Tal como expone Omar Cabezas en su novela, la montaña se convirtió en *algo más que una inmensa estepa verde* (Cabezas, 1981: 24):

Y en la ciudad, los clandestinos y los legales, hablábamos de las montañas como algo mítico, donde estaba la fuerza e incluso las armas. Allí estaban los mejores hombres...

Este período se convirtió en una de las referencias básicas a partir de las cuales posteriormente se establecería la *mitología sandinista*. Gioconda Belli, una de las poetas más representativas de la poesía nicaragüense en el período sandinista, escribiría:

... nosotros sabemos, camarada,
que en las montañas
enterraremos el corazón
del enemigo.

Con todo, independientemente de su temprana fundación, los analistas políticos han coincidido en clasificar al FSLN como una organización guerrillera que pertenece a la «segunda ola guerrillera» latinoamericana debido a que aquel adquirió relevancia política a partir de 1975⁽¹⁶⁾. El carácter hermético del régimen nicaragüense y

16) El fenómeno guerrillero latinoamericano de la segunda mitad del siglo veinte se ha dividido cronológicamente en dos períodos: la «primera ola» y la «segunda ola». La primera hace referencia a aquellas organizaciones que surgieron a la luz del ejemplo de la guerrilla cubana y que tuvieron su actividad en la década de los sesenta. Estas guerrillas se caracterizaron por su implantación en zonas rurales y por su notable capacidad de maniobra. Bajo el denominador común de guerrillas de «primera ola» cabe destacar el Movimiento 26 de Julio (M-26) en Cuba; el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en Guatemala; las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en Colombia; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Perú; el foco guerrillero liderado por Che Guevara en Bolivia; y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Venezuela. La «segunda ola» hace referencia al resurgimiento de la actividad guerrillera, a partir de 1975. La «segunda ola» tuvo relevancia en algunos países en que anteriormente la guerrilla había tenido poca incidencia en la vida política —como El Salvador y Nicaragua— y en su revitalización en Guatemala, Colombia y Perú. Para un mayor detalle sobre la actividad guerrillera latinoamericana entre 1956 y 1990, ver: WICKHAM-CROWLEY, 1992.

su rechazo a cualquier pretensión reformista produjo la confluencia de buena parte de los colectivos, organizaciones y movimientos opositores hacia la canalización de su actividad política fuera de los canales institucionales que «ofrecía» el régimen. En el último lustro de la década de los setenta, y no antes, colectivos urbanos, élites políticas y ciertas personalidades descontentas con el somocismo, empezaron a observar la opción guerrillera como algo más que una simple quimera⁽¹⁷⁾.

De esta forma, solo durante los años previos a la insurrección, a la luz de dos escisiones que se produjeron en el seno del FSLN (La Tendencia Proletaria, FSLN-TP⁽¹⁸⁾ y la Tendencia Tercerista o Insurreccional, FSLN-I⁽¹⁹⁾) se desarrollarían actividades de penetración activa en los colectivos urbanos. En este contexto, regresar a la ciudad significaba regresar a un escenario conocido.

Es importante, en este aspecto, recordar el origen urbano estudiantil de la mayoría de líderes del movimiento guerrillero sandinista y el papel de los colegios y las universidades como semillero de opositores antisomocistas⁽²⁰⁾. Otro elemento

17) En El Salvador y Guatemala existió una dinámica política parecida; sin embargo en Nicaragua, el conflicto político intra-elitario fue, desde el inicio del mandato de Somoza mucho más crispado y profundo. Existe una notable documentación sobre este fenómeno. Para una mayor y más detallada exposición sobre dichos acontecimientos las obras: BLACK, 1981; BOOTH, 1982; CHRISTIAN, 1986; DUNKERLEY, 1988.

18) A mediados de los setenta, con el endurecimiento de la política represiva del régimen somocista, la desconexión y el alejamiento de los componentes del FSLN, empezaron a surgir discrepancias en torno a cuestiones estratégicas. Estas discrepancias se zanjarían con dos escisiones en el seno de la organización. Un sector, encabezado por Jaime Wheelock, planteó priorizar la lucha política en apoyo de las demandas de los sectores obreros y semi-proletarios de las áreas urbanas. La dirección política del FSLN se reafirmó en los tradicionales planteamientos de carácter foquista de la «Guerra Popular Prolongada» en las zonas rurales del país. En octubre de 1975 se expulsó formalmente a quienes comulgaban con los nuevos planteamientos. De esta expulsión surgió la llamada «Tendencia Proletaria», organización que continuó la actividad política en la zona noroccidental del país. Sobre estos acontecimientos hay más información en Nolan, 1986: 75-88; Núñez *et al.*, 1991.

19) La segunda escisión se produjo a inicios de 1977, cuando Humberto Ortega convenció a la mayor parte de la dirección sandinista de que las condiciones de una guerra civil insurreccional estaban ya presentes (Nolan, 1986: 88-118; Ortega, 1981). La estrategia de los terceristas fue la incorporación de élites políticas civiles y colectivos populares urbanos en el proceso insurreccional (Núñez, 1987). La Tendencia Insurreccional supuso el traslado del peso de la lucha de la montaña a la ciudad. La agitación se concentró progresivamente en las ciudades y la cultura que generó fue concentrándose en las masas urbanas. Mientras el FSLN aglutinaba y catalizaba las masas insurrectas de los barrios, éstas le daban un matiz claramente urbano (Núñez *et al.*, 1991).

20) Como muchos autores han señalado, el centro de reclutamiento básico de los movimientos guerrilleros latinoamericanos ha sido la universidad. Esta afirmación es especialmente cierta en el caso de Nicaragua. Los estudiantes fueron los colectivos que más intensamente apoyaron, y posteriormente nutrieron, a la guerrilla sandinista. En este sentido también cabe recordar que buena parte de los miembros del FSLN tenían su origen en las clases medias y acomodadas. Tal como expuso José Fajardo

importante fue el impacto que tuvo la difusión de la teología de la liberación en los colectivos cristianos, de donde surgieron las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). Sobre la base de la experiencia religiosa diversas personalidades con notable peso en la vida social nicaragüense empezaron a estrechar vínculos con el sandinismo⁽²¹⁾. Es ya conocido el impacto de la teología de la liberación en el movimiento revolucionario nicaragüense. A inicios de los setenta, las comunidades eclesiales de base empezaron a tomar un compromiso creciente con la oposición al régimen. En 1973 jóvenes universitarios creyentes y algunos sacerdotes habían formado el Movimiento Cristiano Revolucionario, movimiento que posteriormente daría notables cuadros al FSLN (entre ellos un miembro de la Dirección Nacional, Luis Carrión). Sobre esta cuestión un miembro de la Dirección Nacional del FSLN expuso (Carrión en Arias, 1980: 87-88):

El movimiento cristiano surgió con una serie de compañeros que comenzaron a encarrilarse con las teorías revolucionarias que apoyaba la Iglesia. Entonces se hablaba de cristianismo revolucionario. Esta cuestión la impulsaba también una serie de curas jesuitas, entre los que estaban Fernando Cardenal, Uriel Molina y Félix Jiménez. Indudablemente que una parte del movimiento cristiano desempeñó posteriormente un papel muy importante.

El segundo lustro de los años setenta es testigo de un giro de la táctica de lucha contra la dictadura (Núñez *et al.*, 1991: 64-70). La guerrilla que se localizaba en las zonas rurales y que apoyaba al campesinado, se percató de la aparición de nuevos *sujetos sociales*⁽²²⁾. El alzamiento de colectivos urbanos se presentó como

(Fajardo en WICKHAM-CROWLEY, 1993: 213): Buena parte de líderes sandinistas provenían de sectores acomodados, así como de centros universitarios... y una alta proporción de ella se habían educado en colegios de los jesuitas. Sobre la misma cuestión son gráficos los libros que narran experiencias personales de los jóvenes que se integraron en la actividad guerrillera: ARIAS, 1980; CABEZAS, 1982; RAMÍREZ, 1990.

21) La literatura sobre la influencia y el papel jugado por la religión en el proceso político nicaragüense es muy extensa, entre ella cabe destacar: BERRYMAN, 1984; CABESTERO, 1983a, 1983b; CASALDÁLIGA, 1986; ECKSTEIN, 1989; GIRARDI, FORCANO y VIGIL, 1986; LEVINE, 1988, 1990; RANDALL, 1983; RIEKE, 1990. Para el análisis de este fenómeno en un marco latinoamericano es interesante referirse a LEVINE, 1986, 1992.

22) Tal como expone Vilas (Vilas, 1984: 169-198) entendemos por *sujeto social* al participante real de la insurrección, como síntesis de determinaciones socioeconómicas —de clase, ocupacionales, familiares, etc.— e ideológicas. Este concepto, según Vilas, tiene un referente de clase, pero no reduce el sujeto a la clase. El mismo autor advirtió la *extrema juventud* de los participantes de la insurrección.

una acción espontánea, de rechazo a las medidas económicas, sociales y políticas de la dictadura. La vida cotidiana de la sociedad nicaragüense empezó a politizarse intensamente y esta radicalización fue encauzada por el FSLN.

El FSLN era, ante todo, un actor político que se caracterizaba por el desarrollo de una actividad específica —la lucha armada—, en un ambiente determinado —el marco hostil y represor del régimen somocista—, y por un objetivo —la obtención del poder. Es a partir de estos rasgos donde cabe observar la naturaleza del FSLN. Se trataba de una organización de carácter político-militar altamente centralizada, construida a partir de enlaces verticales y compartimentos rígidos y estancos. La dirección, desde su nacimiento, tomó la forma de una jerarquía militar. Los órganos intermedios se configuraron en torno a las divisiones administrativas del país, apareciendo así los Comités de Dirección Departamental y Zonal, que se subordinaban directamente a la Dirección Nacional —máxima autoridad política y militar. Las unidades de base eran dos, la milicia, de naturaleza militar —que quedaba integrada a comandos, y ésta, a columnas guerrilleras—, y la célula, exclusiva de áreas urbanas. Los militantes, dado el carácter clandestino de la organización, se comprometían a un conjunto de responsabilidades que suponían una dedicación exclusiva y disciplinada. La militancia política en el FSLN suponía el encuadramiento de todas las actividades a las exigencias de la vida partidaria. La obtención de la militancia requería la superación, durante un período, de ciertas pruebas. Una vez superadas se procedía a un mecanismo formal y reglado de adhesión. En la ceremonia de ingreso se realizaba el siguiente juramento (Fonseca, 1981: 194):

Delante de la imagen de Sandino, delante de la memoria de los héroes y mártires de Nicaragua, América Latina y de toda la humanidad, pongo mi mano sobre la bandera roja y negra que significa Patria Libre o Morir y juro defender, con las armas en la mano, la dignidad nacional y luchar por los oprimidos y explotados. Si cumplo esta promesa la liberación de Nicaragua y de todos los pueblos será mi logro...

ón —el 71% tenía entre 14 y 24 años—, una proporción casi tres veces más alta que el peso de ese mismo grupo de edad en la pirámide demográfica. La otra característica básica del colectivo revolucionario fue el *carácter popular* en sentido amplio de masas trabajadoras —más que de proletario en sentido estrecho. La pequeña producción y el trabajo no asalariado emergieron como la fuerza social básica de la insurrección. El sujeto social de la Revolución Sandinista, en la etapa que culmina con el triunfo del 19 de julio de 1979, se aproxima a otras revoluciones del Tercer Mundo: se trata, sobre todo, de una revolución popular y antiimperialista asentada en amplios colectivos populares.

Tal como hemos expuesto en anteriores trabajos (Martí, 1992), retomando el análisis que estableció Duverger (Duverger, 1961) al contrastar las categorías *Gemeinschaft*, *Gesellschaft* y *Bund*, cabría clasificar el FSLN en la tipología de *Bund*, en tanto que colectivo creado deliberadamente, de carácter casi-sagrado, la adhesión al cual requiere un compromiso que orienta la totalidad de actos de los miembros.

El tamaño (número de miembros) fue, durante todo este período, muy reducido. Durante la década de los sesenta y la primera mitad de los setenta la organización difícilmente llegó a los 150 miembros, entre *legales* y *clandestinos*, aumentando sensiblemente si se tiene en cuenta a los *colaboradores*. A partir de 1977, con la progresiva descomposición del régimen somocista y las diferentes convocatorias insurreccionales, se observó un crecimiento sustancial de la organización. Con todo, después de realizar un recuento exhaustivo de todos los miembros y colaboradores de las tres tendencias, la cifra no llegó a los 500 (Arce en Invernizzi *et al.*, 1986; Dunkerley, 1988).

Referente a la *estructura del poder organizativo* ⁽²³⁾, ésta se caracterizó —fruto del reducido tamaño y su articulación altamente jerarquizada— por su simplicidad: los *recursos del poder organizativo* se concentraban y gestionaban en la cúpula partidaria. Una cuestión de vital importancia fue la naturaleza de las relaciones entre el Frente y su *entorno organizativo* —que eran las organizaciones de masas de orientación sandinista—, muchas veces creadas bajo el auspicio del propio FSLN. Esta relación se caracterizó por la dependencia de las organizaciones a favor de los intereses del Frente y en función de la lucha armada. En este sentido, la articulación entre guerrilla y *movimiento popular*, en Nicaragua, tuvo un proceso inverso al acaecido en la mayoría de países de América Latina y, en especial, a los casos salvadoreños y guatemaltecos, donde primero fue la activación del movimiento popular y posteriormente la vinculación o creación de organizaciones guerrilleras —el FMLN en El Salvador y la URNG en Guatemala. Así pues, las organizaciones de masas, en tanto que apoyaban la lucha contra la dictadura, se adherían y subordinaban a las directrices del Frente ⁽²⁴⁾. Esta visión de organización centralizada, reducida y altamente

23) Utilizamos dicho concepto tal como lo presenta Angelo Panebianco en su obra (PANEBIANCO, 1990). La estructura del poder organizativo se basa en los llamados «recursos del poder organizativo» en tanto que factores en torno a los cuales se desarrollan las actividades vitales de una organización: la competencia, las relaciones con el entorno, la comunicación, las reglas formales, el financiamiento y el reclutamiento.

24) Cabe señalar que la tradición organizativa popular en Nicaragua fue relativamente escasa hasta mediados de la década de los setenta. El nacimiento y activación de Organizaciones de Masas fue, en gran medida, fruto de militantes sandinistas con el objetivo de articular grupos amplios de apoyo a la lucha armada. Así surgió la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), los Comités de Defensa

jerarquizada no es, en ningún caso, ajena al contexto en que desarrolló su actividad. La hostilidad del entorno, altamente represivo, exigió una cohesión organizativa sin la cual cualquier desorden podía poner en cuestión la misma supervivencia organizativa. No es gratuita, en este sentido, la expresión acuñada en Nicaragua antes del triunfo de la insurrección de que en «Nicaragua ser joven era un delito».

El FSLN, tras una espectacular acción en noviembre de 1974, en la que asaltó la casa de Chema Castilo, un reputado dirigente somocista, y estuvo a punto de secuestrar al embajador de los Estados Unidos —mediante la cual obtuvo fondos económicos, difusión de manifiestos y propaganda, y la liberación de varios presos—, sufrió sucesivos descalabros. Hasta finales de 1977, cuando se iniciaron una serie de ataques generalizados en diferentes zonas del país, el Frente nunca fue considerado como un actor político relevante. Sus acciones, si bien habían tenido un *efecto de demostración* con el que ganaron la simpatía y el reconocimiento de muchos nicaragüenses, nunca, hasta entonces, tuvieron una continuidad y sistematización suficiente como para pensar en la posibilidad de convertirse un agente político que ofreciera una alternativa plausible al régimen que empezaba a resquebrajarse.

1.3. LA OPOSICIÓN CIVIL

De Somoza se dirá no sólo que derramó sangre de su pueblo, sino que la vendió en el extranjero ⁽²⁵⁾.

En Managua, en la mañana del martes 10 de enero de 1978, Pedro Joaquín Chamorro —director del periódico *La Prensa*, líder del movimiento conservador Alianza Nacional Conservadora (ANC) y de la coalición opositora Unión Democrática de Liberación (UDEL), y máximo dirigente de la oposición civil al régimen somocista— comenzó su viaje diario desde su casa, situada en el parque de Las Palmas, hacia las oficinas de *La Prensa*. Poco después de las ocho de la mañana, mientras pasaba por las ruinas de lo que había sido la ciudad antes del terremoto de 1972, su coche fue interceptado por una furgoneta. Le obligaron a detenerse. Desde la furgoneta le dispararon y seguidamente emprendieron la huida.

Civil (CDC), el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER). De esta forma, a diferencia de lo que sucedió en El Salvador, donde la red asociativa de carácter popular tenía una larga tradición y nunca se subordinó incondicionalmente a las directrices de los grupos guerrilleros —en aras de mayor independencia pero en detrimento de la eficacia y rapidez de la lucha insurgente—, en Nicaragua, la dependencia absoluta de estas organizaciones a las directrices del FSLN supuso una notable sincronización entre la estrategia armada y la movilización popular.

25) Expresión extraída de CHAMORRO (1990: 318).

La muerte de Chamorro supuso un gran golpe para la oposición civil, ya de por sí débil, y para los gremios empresariales que siempre lo habían considerado su líder. Pablo Antonio Cuadra, un poeta con quien compartía la dirección del periódico, declaró unos días después del asesinato, que la muerte de Chamorro tendría el efecto de fortalecer la unión de los grupos antisomocistas, pero, al mismo tiempo, dejaba a la oposición civil sin su jefe más significativo. «Él era la figura que hubiera podido catalizar en un momento dado un gran partido de oposición», dijo Cuadra⁽²⁶⁾.

Con todo, los partidos políticos nicaragüenses, durante todo el período del *somozato*, se caracterizaron por su elitismo, faccionalismo interno, personalismo, debilidad organizativa y reducida base social. Durante el período que va desde 1924 a 1979 se llevaron a cabo diez elecciones generales. Éstas estuvieron siempre *muy lejos* de la calificación de democráticas. En este marco, el régimen somocista nunca dudó en llegar a determinados pactos y alianzas con facciones de la *oposición* en pos de la negociación de determinadas prebendas —sin ninguna intención de alterar la naturaleza del sistema político. De esta forma, en dicho período, se articularon trece alianzas, doce con el objetivo de obtener mayores cuotas de representación institucional y solo una, en 1959, con el objetivo de enfrentarse al régimen somocista⁽²⁷⁾ (Godoy, 1992). Los dos pactos más relevantes —llevados a cabo por el Partido Conservador y el Partido Liberal Nacionalista⁽²⁸⁾— fueron el *Pacto de los Generales* en 1950 y el *Pacto de Kupia Kumi* en 1972, en aras de la consecución, por parte de los conservadores, de un tercio y el 40% de la representación

26) Los acontecimientos que sucedieron de enero a septiembre de 1978 están detallados con precisión en SHIRLEY, 1985: 54-76.

27) En 1959 la mayoría de partidos políticos de la oposición, bajo el liderazgo del Partido Conservador, crearon la Unión Nacional Opositora con el fin de presionar al régimen somocista y dar apoyo al que sería el último alzamiento armado dirigido por los conservadores. En dicho alzamiento participarían cuadros de las Juventudes Conservadoras que posteriormente intervendrían en la vida política de los años setenta —entre ellos estaban Pedro Joaquín Chamorro, Reinaldo Téfel, Coronel Kautz.

28) El Partido Liberal Nacionalista (PLN) era el partido del régimen somocista. Mientras que a la Guardia Nacional le estaba adjudicado el papel de repartir sanciones, el Partido Liberal Nacionalista se convirtió en el instrumento para distribuir los beneficios y las recompensas. Articulado a partir de una red clientelar, su función era la de confeccionar un apoyo civil al régimen. La relativa autonomía del régimen frente a las clases dominantes permitió, en sus inicios, una cierta retórica obrerista —expresada en la promulgación del Código del Trabajo. Concesiones de este tipo le permitieron consolidar un apoyo dentro de algunos sectores del movimiento sindical. La red civil del somocismo se completaba con la institución de los «jueces de mesta», responsables del mantenimiento del *orden* en las comunidades campesinas. Para la obtención de información más detallada sobre la articulación civil del somocismo cabe dirigirse a González, 1992: 63-79; Walter, 1993: 66-117.

parlamentaria — junto con sus prebendas correspondientes. En este paisaje, entre la represión, la ilegalidad y la cooptación, los partidos políticos permanecieron pequeños, débiles y divididos. En esta situación, los partidos nicaragüenses nunca pudieron establecer una red de militantes independiente de las prácticas clientelares y menos una cierta legitimidad entre la población ⁽²⁹⁾.

En los años setenta, a medida que aumentaba la agitación popular, se incrementó la descomposición y resquebrajamiento de los partidos hasta entonces existentes. Del Partido Conservador, largamente desacreditado, surgió la formación Alianza Nacional Conservadora, el partido Social Cristiano (PSC), y de éste el Partido Popular Social Cristiano (PPSC). En la izquierda, fruto de divisiones en el seno del Partido Socialista de Nicaragua (PSN) y del Partido Comunista de Nicaragua (PCdeN), aparecerían el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista (MAP-ML).

A mediados de los setenta, cuando se inició la crisis del régimen, la mayor parte de la oposición cívica estaba agrupada en torno a la UDEL, bajo el liderazgo de Pedro Joaquín Chamorro. En las últimas elecciones del régimen somocista esta coalición optó por la estrategia de la abstención — ¡No hay por quien votar!, era la consigna. Posteriormente, esta formación planteó el inicio de un «Diálogo Nacional» donde se exigía al régimen unas «demandas mínimas». Estas «demandas mínimas», exigidas por la UDEL y hechas públicas en el periódico *La Prensa*, eran: 1) el levantamiento del Estado de Sitio y de la censura de los medios de comunicación; 2) la libertad de organización política y sindical; 3) el nombramiento de un militar con suficientes méritos y sin vínculos con la familia Somoza como responsable de la Guardia Nacional; 4) la creación de un orden jurídico que garantizara el pluralismo político; y 5) la amnistía general a los presos políticos.

El diálogo no llegó a producirse. Sin embargo, la presión de la administración Carter, obligó a Somoza al levantamiento de la censura de prensa, hecho que permitió a Chamorro desplegar una intensa campaña periodística de denuncia a la corrupción, atacando directamente a negocios donde la familia Somoza tenía intereses.

Durante el transcurso de esta campaña, apareció un artículo en el periódico oficialista *Novedades* (el «no verdades», según el ingenio popular) donde se expo-

29) Hablando con la gente, ésta aún recuerda que, en enero de 1967, una coalición política opositora, bajo el nombre de Unión Nacional Opositora, realizó una manifestación en Managua en apoyo a la candidatura presidencial del líder Fernando Argüello. La manifestación terminó con un ataque de la Guardia Nacional en el cual perdieron la vida 500 manifestantes. Cuatro años más tarde, Fernando Argüello firmaría un pacto, llamado *Kupia Kumi*, con Somoza Debayle. Este suceso marcó profundamente la credibilidad, y posterior desarrollo, de los partidos políticos opositores.

nía que Pedro Joaquín Chamorro se había erigido, por sus continuas denuncias al régimen, «en hombre de horca y cuchillo, mediante la insolencia, el irrespeto, la falta de ética moral y social, que lo están conduciendo a límites insospechados, de mucho peligro para él» (*Encuentro* en González, 1992: 106).

El asesinato del líder opositor convirtió, como muy bien sentenció Robert Pastor —que en aquel entonces ejercía como consejero de asuntos latinoamericanos en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos—, la *crisis política* en *crisis revolucionaria* (Pastor, 1987: 59). Todo el mundo conocía las prácticas represivas y la impunidad con que la Guardia Nacional asesinaba a los opositores, pero los hombres de negocios, las élites económicas, los miembros de las *grandes familias*, se habían considerado seguros como para llevar a cabo una oposición pacífica. Esta forma de actuar formaba parte de un acuerdo no escrito —de la misma forma que *había* determinados sectores económicos donde los Somoza «no debían» inmiscuirse— pero Pedro Joaquín Chamorro era uno de ellos, descendiente de presidentes y generales, y su asesinato significaba que ya nada ni nadie garantizaba su «derecho» a discrepar ni, y esto era mucho más grave, su seguridad.

CAPÍTULO 2

LA INSURRECCIÓN

2.1. EL PROCESO INSURRECCIONAL

Se ha vuelto loco este país: el plomo flota, el corcho se hunde, los muertos se escapan del cementerio y las mujeres de la cocina⁽¹⁾.

En el mundo de la física, cuando una manzana cae de un árbol, sigue una trayectoria totalmente previsible. De conocer la distancia de ésta al suelo podemos llegar a saber, incluso, la velocidad y la aceleración que tendría en el momento del impacto. En el mundo de las ciencias sociales las cosas son *un poco* diferentes. Si las revoluciones fueran manzanas, al caer del árbol, su trayectoria siempre sería incierta. Nunca, *a priori*, podríamos llegar a saber si la trayectoria de *nuestra manzana* seguiría una línea recta o parabólica, no tendríamos ni siquiera la certidumbre de que ésta impactará en el suelo.

Las revoluciones son manzanas cuya trayectoria, una vez desprendidas de la rama del árbol que las sostiene, siempre es incierta. Quizá por esta razón el estudio de las revoluciones siempre ha fascinado a los científicos sociales.

El proceso revolucionario nicaraguense fue, en este sentido, una manzana de trayectoria inesperada. Así lo demuestra el texto de Booth y Walker, dos estudiosos norteamericanos especializados en el istmo centroamericano, que recuerda cómo interpretaban los acontecimientos ocurridos en Nicaragua medio año antes del triunfo de la insurrección (Booth y Walker, 1993: 209):

Walker remembers with some embarrassment how, in the manuscript of a chapter on Nicaragua that he wrote in 1978 for a textbook being edited by two other scholars, he confidently observed that even in the Somoza's overthrow, «it is unlikely that a socially revolutionary

1) Texto extraído de GALEANO, 1986: 303.

or progressive democratic government will come to power». At time the validity of the prediction had seemed obvious: Surely, he had reasoned, the Nicaraguan National Guard would have a sufficient instinct for self-preservation to get rid of Somoza, declare a reformist, superficially democratic regime, and thus avert a real social revolution or even significant reform. To Walker's chagrin, the author had come to an opposite conclusion and just month before the FSLN rebel army entered Managua and accepted the unconditional surrender of what remained of Somoza's armed forces.

El levantamiento acaecido en septiembre y octubre de 1978 y la contundente represión con que respondió la GN hizo ver a la Casa Blanca que aquello ya no era un asunto que la administración Carter pudiera manejar dentro del marco general de su *política de derechos humanos*. Con todo, según dijo Robert Pastor, el especialista de Asuntos Latinoamericanos del Consejo Nacional de Seguridad, «Carter decidió que nosotros no debíamos intervenir en solitario, que la era del unilateralismo de los Estados Unidos era algo pasado; que debíamos ir allí, consultar con los demás y conocer los puntos de vista de todos» (Christian, 1985). Carter habló de escribir a Carazo, a Andrés Pérez, a Torrijos, y a algunas otras personas para conocer sus puntos de vista⁽²⁾. El objetivo del Departamento de Estado era que Somoza aceptara la mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para llevar a cabo una transición ordenada del poder donde se excluyera toda posibilidad de que los sandinistas pudieran hacerse con la «legitimidad suficiente» como para obtener notables cuotas de poder.

Una vez fracasada la posibilidad de establecer una Comisión Mediadora — promovida por la OEA — que intercediera entre la oposición moderada y el régimen⁽³⁾,

2) La narración detallada de las reacciones de la administración Carter, los contactos que se establecieron con los presidentes y con las élites políticas centroamericanas está expuesta en los libros de los norteamericanos CHRISTIAN, 1985; PASTOR, 1987; PEZZULLO Y PEZZULLO, 1993. Como ya se ha indicado Pastor perteneció al Consejo Nacional de Seguridad y Lawrence Pezzullo, que escribió el libro con su hijo, fue el embajador norteamericano en Managua durante el período de la insurrección. Otra perspectiva de los mismos acontecimientos, desde Panamá, puede leerse en la obra del escritor inglés Graham Green: GREEN, 1985.

3) El 22 de septiembre de 1978 se reunió con carácter de urgencia la OEA con dos objetivos: la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar un informe *in situ* sobre las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Nicaragua, y el establecimiento de una Comisión de Mediación — formada por representantes de los EE. UU., Guatemala y la República Dominicana — con el objetivo de mediar entre Somoza y la oposición civil. Una semana después, Somoza aceptó la propuesta de realizar un plebiscito. Cuestiones referentes a la supervisión internacional, la

se gestó una dinámica política donde diferentes actores se disputaban el control de los resortes del Estado. Se generó, pues —utilizando un término acuñado por Tilly—, un escenario de *soberanía múltiple* (Tilly, 1978: 198). La intransigencia y terquedad de Somoza redujo a dos las opciones de la oposición civil al régimen: aliarse con los sandinistas, o hacer las paces con Somoza, y ésta última, con el paso del tiempo, se hacía cada vez menos plausible.

Por otro lado, la capacidad de confección de alianzas por parte del FSLN fue inesperadamente efectiva. En este sentido, la división del FSLN en diferentes tendencias supuso una «sectorialización» del trabajo. La Tendencia *Proletaria* y la Tendencia *Guerra Popular Prolongada* lideraron las alianzas donde se integraban los partidos de izquierdas, las organizaciones de carácter popular y los sindicatos⁽⁴⁾. La Tendencia *Tercerista*, por su lado, estableció múltiples conexiones con sectores de la oposición civil moderada —contactos que no fueron ajenos a las vinculaciones familiares de varios de los dirigentes guerrilleros con las *grandes* familias conservadoras de origen granadino⁽⁵⁾— y creó una amplia red de contactos internacionales⁽⁶⁾. En este sentido, el genio de las tres tendencias sandinistas fue tejer

renuncia inmediata de Somoza, y las desavenencias entre sectores de la oposición hicieron fracasar el tortuoso proceso negociador.

4) El 17 de julio de 1978 se constituyó el Movimiento del Pueblo Unido (MPU) donde figuraban como fuerzas políticas principales la tendencia *Proletaria*, la *GPP* y el Partido Comunista de Nicaragua. En esta organización se integrarían, a la vez, diferentes sindicatos y organizaciones populares.

5) Sobre la intensa red de relaciones familiares en el quehacer político nicaraguense *pre* y *post* revolucionario cabe dirigirse a las obras: CASAUS, 1992; STONE, 1990; VILAS, 1992.

6) Ya desde inicios de 1977 la tendencia *tercerista* promovió la creación de un grupo de doce notables nicaraguenses —que posteriormente se conocería como el *Grupo de Los Doce*—, de reconocido prestigio internacional y sin adscripción política partidaria. Éste se opuso a la continuidad de Somoza en la presidencia y propuso al FSLN como interlocutor en el «proceso de transición». Dicho grupo estaba formado por Sergio Ramírez (escritor y académico), Fernando Cardenal (sacerdote), Arturo Cruz (economista, funcionario del BID en Washington), Joaquín Cuadra Chamorro (abogado conservador, del grupo del Banco de América), Felipe Mántica (gran empresario vinculado al grupo del Banco de América), Carlos Gutiérrez (médico), Ernesto Castillo (abogado), Miguel D'Escoto (sacerdote), Carlos Tunnermann (ex-rector de la Universidad Nacional), Casimiro Sotelo Rodríguez (arquitecto), Emilio Baltodano Pallais (empresario), Ricardo Coronel Kautz (ingeniero agrónomo) y, posteriormente, se integrarían Reynaldo Antonio Tefel y el sacerdote Edgar Parrales. En julio de 1978, se crearía el Frente Amplio Opositor (FAO), donde estaría presente el Grupo de Los Doce, el PLI, el MLC, la ANC, el PSN, el PCN, el PSC, el PCA, el PPSC, diferentes confederaciones sindicales vinculadas a dichos partidos, y el recién creado Movimiento Democrático Nicaraguense (MDN) —partido fundado por un grupo de jóvenes empresarios y dirigido por Alfonso Robelo. Referente a las relaciones internacionales, los *terceristas* (calificados como el sector socialdemócrata del FSLN) mantuvieron excelentes relaciones con el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez y sus homólogos Torrijos, en Panamá, y Ouduber y Carazo, en Costa Rica. Estos «amigos» fueron unos

un amplio abanico de contactos, tanto a nivel nacional como internacional, con sectores y grupos políticos y sociales que tenían como único denominador común su declarado antisomocismo. «La sabiduría política del sandinismo consistió en aglutinar este complejo caleidoscopio de perspectivas y catalizarlo contra la dictadura» (Vilas, 1991b: 32).

Fue en diciembre de 1978 cuando las tres tendencias del FSLN comunicaron la existencia de un acuerdo de coordinación de sus acciones. El 13 de marzo, después de cinco años de pleitos internos, se unificaron las tres tendencias, formando una Dirección Nacional Conjunta de nueve miembros⁽⁷⁾ —tres de cada tendencia— y colocando todos sus efectivos bajo una conducción única. En ese mismo período, el Frente Amplio Opositor (FAO), coalición que agrupaba a buena parte de los partidos políticos de la oposición civil se resquebrajó como consecuencia de los diferentes posicionamientos existentes en su seno respecto a cómo actuar frente a la crisis. De la alianza de una parte de los sectores escindidos del FAO, junto con el Movimiento del Pueblo Unido (MPU) —coalición de organizaciones populares dentro de las cuales el FSLN tenía gran ascendencia— surgió el Frente Patriótico Nacional (FPN).

Mientras avanzaba el tiempo, la iniciativa de la oposición civil iba reduciéndose en aras de una mayor hegemonía y capacidad estratégica del FSLN (Borge, 1979: 26-27):

Se hicieron la ilusión de que el FSLN se debilitó política y militarmente después de la ofensiva de septiembre. Los sectores reaccionarios del gobierno norteamericano y Somoza se equivocaron. Por eso la maniobra de mediación fracasó rotundamente. En Nicaragua hay una guerra. Nos hemos fortalecido hasta el punto de estructurar un ejército revolucionario, popular y sandinista para ganar el poder y sustituir la Guardia Nacional [...] El FSLN estuvo dividido pero se ha unido alrededor de cuestiones políticas concretas. No es una alianza política. Es una unidad estratégica que sienta las bases para llegar a corto plazo a la unidad orgánica total. En el pasa-

buenos aliados que intercedieron en su favor en los foros internacionales, actitud que no fue ajena a las agrías relaciones que mantuvieron éstos con Somoza. En este sentido, el 9 de septiembre de 1978 Venezuela firmó un pacto de defensa con Costa Rica que iba a facilitar el flujo de armas al FSLN. Posteriormente, el 21 de noviembre, Costa Rica rompió relaciones con Nicaragua.

7) La Dirección Nacional, que se mantendría intacta hasta el Congreso Nacional del FSLN en 1991, estaría formada por Humberto Ortega, Daniel Ortega y Víctor Tirado, provenientes de la tendencia *tercerista*, Bayardo Arce, Tomás Borge y Henry Ruiz, de la *GPP* y Luis Carrión, Jaime Wheelock y Carlos Núñez, de la *proletaria*.

do había divergencias en cuanto a estrategias y tácticas. Hoy estamos de acuerdo sobre quiénes son nuestros amigos y nuestros enemigos. El FSLN tiene un programa político común. Apoyamos al FPN cuyo eje central es el MPU. Del FPN saldrá un gobierno provisional, popular y amplio que el FSLN apoya [...] La unidad sandinista ha llegado al acuerdo de formar un ejército revolucionario. No puede haber revolución en ninguna parte del mundo sin un ejército que garantice la lucha y el triunfo.

El *acuerdo de unidad* del FSLN, que dio a luz en febrero, se difundió en el interior y en el exterior del país —se publicó en la revista cubana *Bohemia* (13-1979) y en la revista panameña *Diálogo Social* (111-1979)— con el objetivo de dar a conocer tanto la noticia de la unidad de las tres tendencias sandinistas y su estrategia política y militar. Aunque dicho documento se anunció como un acuerdo de consenso entre las tres tendencias, los *terceristas* obtuvieron preeminencia tanto en su concepción estratégica como en sus directrices programáticas.

Sobre la base del documento del *acuerdo de unidad* los objetivos principales que se exponían en lo político eran dos: el derrocamiento de la dictadura somocista y la construcción de una *democracia popular* que sentara las bases para, posteriormente, llevar a cabo un proceso revolucionario en Nicaragua. Para ello —según el documento de unidad— las tareas a realizar eran: 1) la consolidación y ampliación del Frente Patriótico Nacional; 2) la hegemonización, en esa alianza, del Movimiento Popular del Pueblo Unido; 3) la organización de un Gobierno Provisional en el que estuvieran representadas todas las fuerzas antisomocistas, con el objetivo de hacerse cargo de la reconstrucción nacional y de neutralizar los potenciales enemigos internos y externos; 4) concitar el apoyo de «los sectores progresistas y democráticos de la comunidad internacional» con el fin de evitar «una intervención militar del imperialismo u otras fuerzas reaccionarias del continente» (*Diálogo Social*, 1979).

Respecto a la cuestión militar, el *documento*, una vez proclamado que el FSLN concebía la insurrección armada como la síntesis de un proceso de lucha ininterrumpido desde la creación de la guerrilla capitaneada por Augusto C. Sandino, exponía que la única garantía del triunfo revolucionario pasaba por la formación de un Ejército Popular. En cuanto a la organización del FSLN, se dio a conocer el proceso de reunificación, se explicitó la creación de una Dirección Nacional Conjunta, se enumeró sus potestades y, finalmente, se reconoció a los diferentes Frentes Guerrilleros⁽⁸⁾.

8) En relación a los frentes guerrilleros el documento mencionó al Frente Norte Carlos Fonseca, al

A partir de mayo, los pueblos y ciudades del norte fueron cayendo en manos de los sandinistas, que llevaban ya varios meses entrando y saliendo de ellos. El hecho de que el régimen perdiera el control de las poblaciones situadas en el norte del país no fue casual. Tal como expuso René Vivas (Vivas en Arias, 1980: 110):

Hubo que tomar en cuenta la coyuntura internacional, en ese momento los países que más pleitos tenían con Somoza eran Costa Rica y Panamá. Somoza sabía que por allí los sandinistas se movían con facilidad. Por eso Somoza tenía interés en cuidar Rivas y Río San Juan. Éste sabía que en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, los sandinistas no teníamos apoyos. Eso lo llevó a crear líneas militares mucho más consistentes en el sur.

La conquista más importante fue León, segunda ciudad de Nicaragua, a mediados de junio. Los enfrentamientos, sin embargo, continuaron en todo el país. En este sentido, la revolución sandinista ha llamado la atención por la amplitud e intensidad de la participación de las masas en la estrategia insurreccional del FSLN. En todo el proceso insurreccional miles de ciudadanos, sin adscripción política definida, fueron incorporándose en los órganos que *sobre la marcha* el FSLN iba construyendo (los Comités de Defensa Civil, los Comités de Defensa de los Trabajadores, las Milicias, las Brigadas...). Aunque de forma bastante simple, un dirigente sandinista dio razón de este fenómeno aduciendo que (Ortega en Arias, 1980: 173-174):

Fueron veintiún largos años en los que el sandinismo logró, con su ejemplo, hegemonizar la crisis política del somocismo. Éste fue nuestro principal logro: el habernos ganado la autoridad, el cariño y la confianza del pueblo. Nosotros no habíamos logrado ni siquiera una estructura partidaria, ni un aparato de agitación intermedia de masas, y mucho menos una organización militar. Lo que habíamos logrado, sin embargo, era lo fundamental: la autoridad política y moral.

Como expusieron posteriormente militantes sandinistas, la organización de grandes colectivos fue intensa, pero relativamente fácil. La predisposición con que grandes sectores de la población se incorporaron a la insurrección fue producto

Frente Nor-oriental Pablo Ubeda, al Frente Sur Benjamín Zeledón, el —aún no ubicado— Frente Roberto Huembes y el Frente Interno.

de varios factores. Entre los coyunturales —posteriormente intentaremos analizar los estructurales— cabe destacar el progresivo apoyo que dio la Iglesia Católica a la insurrección y la reacción a la cruenta represión que llevó a cabo la Guardia Nacional. En referencia a este fenómeno es gráfica la declaración de una madre nicaragüense a sus hijos durante la insurrección: «y yo les dije a mis chavalos que mejor se metían en el Frente, porque si no, de todos modos la Guardia me los mataba, por ser jóvenes, nomás, figúrese» (Vilas, 1984: 167). En la misma dirección, un dirigente sandinista expuso (Arias, 1990: 194):

Ya a principios de julio la gente se estaba organizando en los Comités de Defensa Civil, básicamente a través del Movimiento del Pueblo Unido. Fue un trabajo intenso de organización. En los barrios populares de Ducualí, Meneses y María Auxiliadora, que quedaban dentro de la zona oriental de Managua, ocupada por el Frente, la respuesta de la gente fue realmente espontánea y nosotros solamente teníamos que canalizarla.

Paralelamente, en San José de Costa Rica —durante los meses de mayo y junio— se negoció la composición de Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN). En pocos días se llevó a cabo una frenética actividad negociadora entre los miembros del FSLN, la oposición civil y los altos funcionarios estadounidenses —básicamente Lawrence Pezzullo, embajador en Managua y William P. Bowdler, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos. Los temas básicos que se trataron fueron la creación de un nuevo poder civil y la configuración de una renovada fuerza militar que preservara una parte de la Guardia Nacional e integrara la guerrilla sandinista. Referente a las autoridades civiles, la JGRN fue integrada por cinco miembros: Violeta Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, Alfonso Robelo, empresario, líder del MDN e integrante del FAO, Daniel Ortega, representante del FSLN, Sergio Ramírez, representante del Grupo de Los Doce y Moisés Hassán, representante del MPU. En lo que respecta a la cuestión militar, la intención del embajador norteamericano de construir un cuerpo armado formado por la Guardia Nacional y los sandinistas bajo un mando aceptado por los Estados Unidos no pudo establecerse con independencia de lo que sucedía en la arena militar.

Los desenlaces fueron inesperados. Cada uno de los actores siguió una estrategia con el objetivo de maximizar sus bazas. En este sentido, los sandinistas, según expone Sergio Ramírez, se salieron con la suya (Ramírez en Arias, 1980: 201-202):

Yo creo que los yanquis se dieron cuenta de que la Guardia estaba derrotada cuando comenzaron a presionar para que la Junta de Gobierno se ampliara con dos miembros más. Lo único a lo que ellos aspiraban era salvar una parte de la Guar-

dia Nacional. En ese tiempo se estaba hablando de que hubiera un Jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional que arreglara el surgimiento de un nuevo ejército con el Frente Sandinista. Nosotros, tácticamente, insistíamos en que era posible. En los últimos días, Bowdler nos dijo que qué día queríamos nosotros que Somoza renunciara, porque tenía en sus manos la renuncia. Entonces nosotros fuimos retrasando la fecha mientras acabábamos de consolidar nuestras fuerzas. El plan de los Estados Unidos era que aquello apareciera como una transición ordenada del poder y que ellos quedaran como una especie de árbitros.

Como ya es sabido el desenlace fue, para el antiguo régimen y para los intereses de la administración norteamericana, el peor de los posibles. Somoza abandonó el país cediendo el poder al Congreso de la República. Francisco Urcuyo, un político allegado a la familia Somoza, fue elegido Presidente por el Congreso. Éste, creyéndose *presidente constitucional*, declaró su intención de agotar el mandato establecido legalmente hasta 1981 y ordenó a la Guardia Nacional que continuara la guerra. La reacción de Urcuyo supuso la imposibilidad de establecer ningún nexo de continuidad entre el régimen somocista y el nuevo poder emergente, así como la rendición incondicional de la Guardia Nacional.

En breves instantes se vino a bajo la estrategia cuidadosamente articulada por los esmerados *policymakers* norteamericanos. El resultado final, sin embargo, guarda relación con las enseñanzas que, en su día, expuso el florentino Niccolo de Machiavelli en su obra *El Príncipe*: «cuando el pueblo toma las armas contra ti, poca será la ayuda que te puedan ofrecer los aliados extranjeros».

2.2. UNA PERSPECTIVA ANALÍTICA DE LA INSURRECCIÓN

En las páginas anteriores hemos esbozado, en orden cronológico, los acontecimientos que supusieron el proceso insurreccional. En este apartado, sin embargo, enfatizaremos los diferentes factores que intervinieron en éste con el objetivo de analizarlos con la pretensión de interpretar *por qué*, o sobre la base de qué factores, en Nicaragua se desarrolló un proceso insurreccional y revolucionario. En este sentido, tal como dice el politólogo Rod Aya, es necesario sistematizar e interpretar la realidad ya que «los hechos no hablan por sí solos, excepto por *ventriloquía teórica*» (Aya, 1985: 8).

Tal como expusimos anteriormente, definimos revolución social como «el derrocamiento de una élite gobernante por parte de otra élite (usualmente calificada como vanguardia revolucionaria) que consigue movilizar y capitalizar un amplio apoyo popular y que pretende, desde el poder, transformar las actitudes de la población y las estructuras políticas y económicas de la sociedad» (Selbin, 1993: 11-13).

En este proceso observamos tres fases diferenciadas: 1) la *insurrección*, en tanto que período donde se observa una profunda crisis de soberanía y donde diversos contendientes disputan a los titulares del poder político los resortes del Estado (es la fase que Tilly califica de «soberanía múltiple»); 2) la *victoria política*, período donde se realiza una translación del poder de los titulares del antiguo régimen hacia las élites revolucionarias; y 3) la *institucionalización y consolidación*, fase en que se asientan las instituciones surgidas de la insurrección y en que se pretende llevar a cabo una transformación de la estructura económica y social y de las actitudes políticas de la sociedad.

Nuestro interés radica, en este epígrafe, en esbozar brevemente las posibles claves interpretativas de *por qué* hubo una insurrección y una victoria política en Nicaragua.

Tal como exponen diversos teóricos, el estudio de las revoluciones comporta —so peligro de caer en explicaciones tautológicas o parciales— necesariamente la adopción de una perspectiva multicausal donde se integren factores de carácter diverso —contingentes, socio-económicos, discursivos— (Wickham-Crowley, 1993: 5-16; DeFronzo en Booth y Walker, 1993: 197). Con esta pretensión, Timothy P. Wickham-Crowley, después de analizar los diferentes intentos insurreccionales acaecidos en América Latina desde 1956-1990 a través de diversos marcos teóricos, y de evaluar la incidencia que tienen varios factores de diferente naturaleza, termina por concluir (Wickham-Crowley, 1993: 320):

Revolutionaries came to power in Latin America from 1956 to 1990 only when a rural-based guerrilla movement secure strong peasant support in the countryside and achieved substantial levels of military strenght; if that movement also faced a patrimonial praetorian regime (a.k.a. *mafia*cracy), then it was structurally pressured to seek, and succeeded in securing a cross-class alliance against the patrimonial dictator who, laking the social bases of support to resist such alliance, in the end fell to a national resistance; under such conditions the United States tended to withdrawn support from the dictatorship because of the symbolic and social pressures exerted by the constitutionalist and electoral symbols under which the revolutionaries and their more moderate allies united.

Mao Zedong expuso, hablando de revoluciones, que «las causas externas podían convertirse en operativas solo a través de las causas internas. Con una temperatura conveniente, de un huevo puede salir un pollito, pero nunca, de una determinada temperatura, una pieza de madera se convertirá en un pollito...». Parafraseando

esta metáfora, en Nicaragua, durante el período de la insurrección, coincidieron factores de carácter contingente, socio-económico, político y organizativo, y aquéllas se hicieron operativas. La existencia de un régimen de carácter neopatrimonial presionado por una oposición de naturaleza interclasista, el apoyo al proceso insurreccional por parte de grandes colectivos rurales y urbanos —fruto de la dislocación de la estructura productiva tradicional—, la existencia de una organización político-militar que catalizara el proceso insurreccional y neutralizara las demás organizaciones opositoras, y la existencia de una amplia red de contactos internacionales que bloquearan una posible intervención de los Estados Unidos, son, a nuestro entender, los factores explicativos de la victoria del proceso insurreccional en Nicaragua.

El somocismo dio un carácter diferencial al estado nicaragüense. Si bien en Centroamérica no se llevó a cabo la tendencia, manifiesta en otros países latinoamericanos a partir de 1940, de que los militares se implicaran en la arena política jugando un papel nacionalista y modernizador⁽⁹⁾ —el caso de Velasco Alvarado en Perú es, quizá, el mejor ejemplo—, en Nicaragua tampoco se gestó un régimen parecido a los de sus vecinos —régimen calificado, generalmente, como *despótico reaccionario* (Baloyra, 1983; Torres-Rivas, 1983; Weeks, 1986). En el resto de países centroamericanos se estableció una poderosa y cohesionada alianza entre los militares y la oligarquía tradicional con la pretensión de bloquear cualquier tentativa de carácter reformista. El caso nicaragüense se diferenció del resto de regímenes de Centroamérica por el rol que ejerció la familia Somoza y por la forma en que ésta utilizó los resortes del Estado. El carácter personal del régimen bloqueó incluso la posibilidad de desarrollar un sistema de cooptación que permitiera a las élites económicas tradicionales sentirse integradas en éste. El Estado somocista sentó sus directrices sobre la base de los intereses del clan Somoza y, en este sentido, fue relativamente autónomo en relación con las clases sociales dominantes. La percepción de imposibilidad, por parte de diferentes sectores sociales, de articular sus demandas en el sistema institucional fue uno de los elementos que hicieron factible el arraigo de una convocatoria en pos de un régimen alternativo. La confrontación con el régimen político estuvo ligada, ante todo, a un sentimiento colectivo de ser víctima de un sistema de injusticia e indignidad —o, como lo llama Barrington Moore—, de *moral outrage*.

9) El caso guatemalteco sería el único donde se pretendió llevar a cabo un proyecto reformista en el breve período que transcurre entre las presidencias de Arévalo y Arbenz. Dicho intento, como ya es sabido, fue abortado por las fuerzas reaccionarias guatemaltecas. Descartamos también el caso de Costa Rica por tratarse de un país con un desarrollo político diferente del resto de las naciones de la región.

Consecuencia directa de lo anterior, las élites económicas tradicionales siempre percibieron al régimen de los Somoza como —en palabras de Falcoff— el triunfo de la arbitrariedad y la mala educación (Falcoff en Wickham-Crowley, 1993: 275). El somocismo fue *de facto* —que no premeditadamente— un intento de quebrar una estructura de poder secularmente articulada a partir de las grandes familias y de disputar a éstas la hegemonía tradicional —las marginó del gobierno y las enfrentó en el terreno de los negocios. Con Somoza Debayle —quien no tenía reparo alguno en manifestar: «yo soy empresario, pero humilde»— las élites tradicionales empezaron a articular organizaciones a partir de las cuales presionar al régimen. En este sentido, ya desde la década de los sesenta, jóvenes de encumbradas familias conservadoras comenzaron a involucrarse en una oposición activa a la dictadura, y a buscar vías de superación al tradicional bipartidismo liberal/conservador. Fue en el ámbito universitario y religioso en el cual se produjeron los primeros contactos del FSLN con estos jóvenes⁽¹⁰⁾. En este sentido, los factores de linaje estuvieron presentes en la final aceptación —por parte de una porción de los grupos tradicionales— de la fórmula revolucionaria. La presión ejercida por el somocismo contra los jóvenes de la burguesía conservadora en su condición de militantes o colaboradores sandinistas, incrementó el potencial de conflicto de sus padres con un gobierno que no solo los excluía de los buenos negocios, sino que, además, disparaba contra sus hijos (Vilas, 1992b: 15-16).

El amplio apoyo que recibió la insurrección por parte de colectivos rurales no fue ajeno al proceso de transformación de la titularidad y de los usos de la propiedad agraria. La abundante literatura sobre los procesos de transformación productiva del agro y sobre los procesos de movilización e insurgencia campesina coincide en otorgar gran importancia a los procesos de modernización (ya sea por las demandas del Estado, por el crecimiento de mercados exteriores, o por la presión en pos de tierra cultivable) en la dislocación de las relaciones productivas tradicionales y en la destrucción de los sistemas de articulación social basados en lealtades de carácter clientelar (Paige, 1978; Scott, 1976). En Nicaragua, a partir de los años cincuenta, la introducción de las explotaciones de algodón y la extensión de las áreas destinadas al ganado —sobre todo en la zona noroccidental— produjeron corrientes migratorias, a veces bajo coacción, que rompieron las antiguas relaciones de lealtad, propias de las redes clientelares caciquiles y el sentido de

10) Este hecho ayuda a explicar que su reclutamiento se diera a través de las tendencias *terceristas* y *proletarias*. La tendencia de la *guerra popular prolongada*, por su énfasis en una estrategia de guerrilla rural, quedó al margen de este proceso. Con todo, por su ubicación geográfica, la GPP mantuvo vínculos con colectivos de estudiantes de la Universidad de León.

pertenencia a una determinada zona (Brocket, 1991; Paige, 1975). La movilización de grandes colectivos en el ámbito rural no fue ajena a la anterior desarticulación de las comunidades rurales y a su *semi* o *sub* proletarización. En el ámbito urbano, la capacidad movilizadora tuvo mucho que ver con el carácter *inacabado* del capitalismo nicaragüense, basado en unas relaciones capitalistas de producción que se subordinaban a las formas previas de producción pero que no las desplazaban ni superaban; en este sentido, lo que caracterizó a las masas que se implicaron en el proceso insurreccional fue la falta de perspectivas. En referencia a este punto, «la materia prima» de la revolución popular sandinista y, sobre todo, de la insurrección final, no fue substancialmente diferente de las masas populares que protagonizaron los alzamientos revolucionarios e insurreccionales en el resto de países del Tercer Mundo en la segunda mitad del siglo xx.

Fueron, en gran medida, estos sectores explotados por la modernización productiva, o marginados de sus beneficios, los que se opusieron a la dictadura e hicieron a la revolución, o se sumaron a ella, o la apoyaron. Pero la hicieron, o la apoyaron, o se montaron en ella, movidos por horizontes distintos. Algunos por opción ideológica; otros, por falta de alternativas. Unos, mirando hacia adelante, pensando en lo que podían ganar. Otros, como un mecanismo de defensa para no perderlo todo⁽¹¹⁾ (Vilas, 1991b: 32).

La persistencia de una organización de carácter político-militar, fundada en 1961 bajo la influencia de la revolución cubana y de las teorías *foquistas* elaboradas por Débray y Guevara (Débray, 1968; Guevara, 1968), fue un elemento central en la articulación y catalización de un amplio movimiento popular que dudaba de unos partidos débilmente implantados y que, históricamente, se caracterizaban por acabar —en último momento— pactando con el régimen somocista. La polarización a que llegó el contexto político nicaragüense dio una inesperada centralidad a la opción que abanderaba el FSLN. Ésta, a la vez, supo articular y hegemonizar una gran coalición anti-régimen donde figuraba una amplia representación de los demás actores políticos y sociales.

En el aspecto de las relaciones internacionales, si bien, durante casi toda la dinastía, el régimen somocista fue extremadamente sensible y receptivo a la orientación política de los Estados Unidos, en sus últimos años, la administración Carter empezó a mostrar cierta desafección hacia éste. Dicho cambio de actitud de la

11) Posteriormente observaremos que la heterogeneidad de perspectivas a partir de las cuales se realizó la insurrección generarán, a la hora de construir proyecto, conflictos y tensiones que van a marcar el proceso político posterior.

administración norteamericana fue un factor decisivo en el desplome de la legitimidad del régimen somocista. En este sentido, Skocpol, expuso que los agentes internacionales dejan de ser «favorables» para pasar a ser «cruciales» cuando pasamos de *grandes potencias con ambición de poder a pequeños países de la periferia del Sistema internacional*. Dicha afirmación es acertada tanto si nos referimos al ambiguo rol de la administración estadounidense como a los posicionamientos de los gobiernos de Costa Rica, Venezuela, Panamá, México y Cuba. La vacilante política norteamericana que pretendía debilitar al régimen somocista con la intención de posibilitar una transición controlada —cuyos beneficiarios políticos tenían que ser, a su entender, los grupos que componían la oposición moderada—, comportó una súbita pérdida de legitimidad del régimen que acabó activando una crisis por la que irrumpió la insurrección (González, 1992: 189).

Una vez enumerados los *factores necesarios* sobre la base de los cuales se activó el proceso insurreccional, cabe exponer la articulación entre éstos e interpretar el porqué, en dicho contexto, triunfó la convocatoria de un proceso revolucionario.

En primer lugar, es obligatorio hacer referencia a la situación socio-económica de grandes sectores de la población nicaragüense del ámbito rural a lo largo del tercer cuarto de siglo —cabe tener en cuenta que la población rural en Nicaragua significaba, en 1950, el 81% del total. Con la expansión del sector de la agroexportación, el campesinado nicaragüense sufrió una acelerada y traumática transformación de su medio de vida. Con el *boom* del cultivo del algodón y la expansión ganadera, a partir de los años cincuenta, las élites económicas tradicionales —junto con los Somoza, quienes disponían del 23% de la tierra cultivable y el 43% de las fincas mayores de 850 acres— obtuvieron enormes beneficios. En ese contexto, buena parte del campesinado fue desplazado de sus tierras y se vio empujado a ejercer como trabajador temporal en los grandes latifundios.

En las tablas que se exponen a continuación se ilustra gráficamente la situación económica y social nicaragüense. La tabla n.º 1 refleja el acelerado crecimiento de la economía nicaragüense desde los años cincuenta hasta mediados de los setenta; en la tabla n.º 2⁽¹²⁾ se refleja la desigual distribución de la propiedad de la tierra y su concentración en pocas manos; la tabla n.º 3 da cuenta de la magnitud de la expansión de los cultivos destinados a la agroexportación a partir de 1950; y en la tabla n.º 4, al ofrecernos la relación existente entre el trabajo temporal y el fijo en los cultivos de algodón, nos da una idea de la precariedad laboral de grandes sectores de la población nicaragüense.

12) En la tabla n.º 2 las siglas n.d. significan: no se dispone de datos.

Tabla 1. Crecimiento de la economía nicaragüense, 1950-1979

Período	Crecimiento PIB (%)	Crecimiento poblacional (%)
1950-9	5,6	3,2
1950-9	7,5	3,3
1950-9	2,5	2,6

Fuente: Dunkerley, 1988:173

Tabla 2. Distribución porcentual de la tierra en Nicaragua según tamaño de las fincas, 1960-1970

Tamaño (hectáreas)	1963	1970
-0,7	n.d.	n.d.
+0,7-3,5	1,6	1,0
+3,5-7	2,0	1,2
+3,5-7	12,0	11,1
+3,5-7	12,5	11,7
+3,5-7	30,8	28,1
+3,5-7	11,3	11,0
+3,5-7	29,7	35,8

Fuente: Brockett, 1991:73

En dicha coyuntura, la incapacidad de las áreas urbanas de absorber la mano de obra expulsada del campo fue el otro rasgo definitorio de la economía nicaragüense —en 1962 el proletariado industrial suponía solo el 9,8% de la fuerza de trabajo nicaragüense, en 1968 el 10,6% y en 1975 el 11,6%⁽¹³⁾. En 1980, la población urbana suponía el 54% del total.

El régimen somocista no prestó ninguna atención hacia los problemas sociales que se estaban gestando en el campo. La política del régimen se limitó a mantener

13) Datos extraídos de Mayorga en DUNKERLEY, 1988: 207.

Tabla 3. Crecimiento del sector agroexportador en Nicaragua, 1950-1975

	Área (millones de hac.)	Producción (miles de tn. métricas)
Café		
1950	56	19
1977	88	62
Banana		
1950	1	13
1974	40	250
Azúcar		
1961	21	971
1970	42	2.578
Algodón		
1950	47	13
1974	147,7	250
Ganado (miles de cabezas)		
1952	1.068	
1972	2.670	

Fuente: Dunkerley, 1998: 187-189

Tabla 4. Empleo permanente y temporal en la producción algodonera, 1960-1975

Año	Trabajadores permanentes	Trabajadores temporales	Total	% Trabajo temporal
1960-1961	4.075	44.280	48.958	92%
1964-1965	9.566	114.797	124.363	92%
1969-1970	9.303	100.783	110.086	92%
1974-1975	20.350	180.602	200.952	90%

Fuente: Enríquez, 1991:69

el «orden» sobre la base de la sistemática represión que ejerció la Guardia Nacional. A partir de los años sesenta, con el inicio de la actividad guerrillera en ciertas áreas rurales, dicha represión de la Guardia Nacional se hizo sistemática. En las áreas donde el FSLN operaba —en las zonas del norte y noroeste—, la Guardia Nacional desarrolló una política de ocupación militar. Según un estudio, durante los treinta y tres meses anteriores a la victoria insurreccional, cada Guardia Nacional asesinó un promedio de trescientos campesinos (Booth en Brockett, 1991: 168). En ese período, un reportaje de Amnistía Internacional en 1977 expuso (AI, 1977: 26):

The Northeast came to be under a virtual military occupation... with frequent, apparently arbitrary, killings, torture, massive detentions and disappearances, as well as the confiscation of goods, occupation of property, and the burning of crops, homes and farm buildings...

Junto a la crisis social en las zonas rurales, el régimen somocista —a diferencia del resto de países del área— terminó enfrentándose con todas las fuerzas políticas nicaragüenses. Sin embargo, la convocatoria multitudinaria que supuso el proceso insurreccional no fue ajena a la existencia de grandes colectivos, tanto urbanos como rurales, excluidos del modelo de crecimiento de desigual desarrollo en los años cincuenta, ni a la sistemática represión a que se vieron sometidos. En este contexto, la convocatoria lanzada desde el FSLN tuvo una gran acogida entre aquellos colectivos que, en aquel estado de cosas, no tenían perspectiva alguna.

Si bien en toda América Central la situación social era explosiva, solo en Nicaragua se observó un desenlace político donde los insurgentes tomaron el poder. Una perspectiva comparada nos hace suponer la necesidad de buscar otros dos factores explicativos del éxito del proceso insurreccional: 1) la configuración del régimen nicaragüense y su subsiguiente crisis intra-elitaria, y 2) la capacidad del FSLN de crear una convocatoria amplia y su aparición como fuerza hegemónica en el desenlace insurreccional.

El enfrentamiento entre las élites políticas nicaragüenses ha sido tratado anteriormente. Con todo, cabe preguntarse por qué el FSLN tuvo la capacidad de aglutinarlas y satelizarlas en torno a su proyecto. En este fenómeno cabe tener en cuenta tres elementos:

- 1) La adhesión a la convocatoria sandinista de grandes colectivos excluidos del proceso de desarrollo económico y de las instituciones del Estado —convocatoria que se articulaba, sobre todo, en un discurso de carácter socio-económico y no institucional.

2) El carácter armado del conflicto político y su consiguiente polarización. La única salida posible era la ruptura y, por consiguiente, solo las fuerzas políticas situadas en los extremos tenían la capacidad de conducción del proceso político. En esta coyuntura, las opciones moderadas perdieron, rápidamente, la centralidad.

3) La convocatoria antisomocista ofreció a las élites económicas tradicionales acabar definitivamente con Somoza, su máximo competidor tanto en el plano económico como en el político. Una vez derrocado Somoza y nacionalizadas sus propiedades era posible llevar a cabo una reforma agraria que desactivara el malestar social en el campo sin necesidad de afectar las tierras de la burguesía tradicional —salida que no era posible ni en El Salvador ni Guatemala, donde la propiedad recaía totalmente bajo las élites tradicionales. En la misma dirección, el discurso nacionalista, junto con la amplia articulación de la Tendencia Tercerista con connotados miembros de la burguesía conservadora, hicieron prever que el nuevo proceso político podía tomar un cariz reformista.

En virtud de estos factores, el FSLN fue capaz de construir un proyecto hegemónico alternativo al régimen somocista. La hegemonización se basó tanto en la capacidad de articular, bajo un mismo proyecto, sectores muy dispares como por la misma dinámica que supuso un desenlace de naturaleza militar.

En este sentido, la convocatoria sandinista, como todo proceso revolucionario, adquirió el poder a partir de la confección de una *gran coalición*. En el fondo, el concepto de *hegemonía* tiene que ver con la capacidad de un actor de articular un proyecto político donde figuren actores políticos con intereses diversos e, incluso, contradictorios. Otra cosa es que, una vez en el poder, la priorización de determinados intereses —y no otros— supongan la erosión de esa *gran coalición*.

CAPÍTULO 3

**LA GESTACIÓN
DEL RÉGIMEN**

3.1. LA GESTACIÓN DEL PROYECTO SANDINISTA

—«El señor Constant, como buen francés, es un fanático de los intereses absolutos» —apuntó el general. En cambio el abate Pradt dijo lo único lúcido de esa polémica, cuando señaló que la política depende de *dónde* se hace y *cuándo* se hace⁽¹⁾.

El triunfo de la insurrección fue el punto de partida del proceso revolucionario. Es importante señalar, al inicio de este capítulo, que la capacidad de autonomía estratégica de los diferentes actores en los procesos revolucionarios siempre está condicionada por el marco geopolítico (el *dónde*) y por el *world time* (el *cuándo*) en que dichos procesos se desarrollan. El *dónde* y el *cuándo* nos darán trazos y pistas sobre la naturaleza, las pretensiones y las limitaciones del proceso revolucionario nicaragüense.

En este caso, el *dónde* nos habla de un pequeño país —de 127.755 km²— insertado en la periferia del mercado mundial e históricamente dependiente de los Estados Unidos, quienes siempre consideraron las pequeñas repúblicas centroamericanas como una área de influencia natural e incuestionable. El *cuándo* nos remite a la década de los ochenta, década calificada —respecto a América Latina— de muchas formas —*perdida*, según la literatura generada por los economistas; como una *segunda guerra fría*, según ciertos politólogos (LaFeber, 1993; Robinson & Norsworthy, 1987); *neoimperial* en palabras de estudiosos de la política exterior de los EE. UU. (Chomsky, 1987; Petras & Morley, 1992); de profunda crisis de los mecanismos de articulación sociopolítica del Estado y de su misma legitimidad (Cavarozzi, 1991; Touraine, 1988)... —; pero, en cualquier caso, siempre bajo el adjetivo de convulsa.

1) Párrafo extraído de GARCÍA MÁRQUEZ, 1989: 129. La cursiva es mía.

El proyecto revolucionario nicaragüense, como toda revolución social en un país subdesarrollado, fusionó y sintetizó una multiplicidad de objetivos. Las revoluciones sociales en sociedades *subdesarrolladas* son al mismo tiempo revoluciones de liberación nacional y anti-dictatoriales, y éstas implican una transformación social y económica y un cuestionamiento de la dominación política. Los diferentes retos a que se enfrentan este tipo de procesos pueden resumirse alrededor de tres cuestiones básicas: la *cuestión democrática*, la *cuestión de la soberanía nacional*, la *cuestión del desarrollo y transformación de la estructura socio-económica*. No se trata, sin embargo, de cuestiones separadas o independientes unas de otras.

Otra cuestión es la preeminencia o subordinación de alguno de estos elementos en aras de un proyecto preconcebido. Esta dinámica tiene que ver, a la vez, con las relaciones entre los actores que impulsan (o frenan) y dirigen (o combaten) el proceso revolucionario, y de sus horizontes culturales e ideológicos. La forma en que esta dinámica se plantea, y su posterior articulación e interacción, no es ajena, pues, a las relaciones de poder existentes entre los diversos actores, a su capacidad de liderazgo y articulación de los diferentes colectivos, ni a su ingenio en la formulación de estrategias y discursos.

En este sentido, la forma, la dirección y las pretensiones que conllevan estos procesos de cambio son concebidas de manera diferente por los diversos actores. Sobre dicho aspecto, el inicio de la Revolución Popular Sandinista mantuvo cierta ambigüedad. La participación de sectores de la burguesía en la lucha contra el régimen somocista fue una baza a partir de la cual una parte de ésta —que compartió, y compitió, con el FSLN por los resortes del poder— quiso influir en la naturaleza de las transformaciones que suponía el proyecto revolucionario.

Se inició, de esta forma, un período donde diferentes actores políticos mantuvieron pretensiones de dominio sobre la misma comunidad política y sobre las mismas estructuras del *enforcement* del sistema⁽²⁾. Una cosa era la unidad que supuso el derrocamiento de un régimen considerado como dictatorial, y otra cosa el proyecto de cómo y hasta dónde transformar las bases materiales e institucionales de la sociedad nicaragüense. Las alianzas que se crearon con el objetivo de combatir a un enemigo común se debilitaron a la hora de gestar y construir un proyecto compartido. Hubo quienes observaron el fin de Somoza como la culminación de un proceso, otros, como el inicio. Durante los veinte meses que siguieron al triunfo insurreccional se configuraría la correlación de fuerzas a partir de

2) Existe diversa literatura sobre las dinámicas de cambio de regímenes a partir de procedimientos rupturistas, entre ellos cabe destacar: TILLY, 1975: 519-530.

la cual, posteriormente, se pretendería hegemonizar el proceso de transformación revolucionario.

El 19 de julio de 1979 la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), creada anteriormente y configurada sobre la base de la *coalición vencedora*, proclamó el *Estatuto Fundamental de Derechos y Garantías*⁽³⁾ donde se trazó la naturaleza y la organización institucional del Estado. También se establecieron las directrices básicas de actuación política en el *Programa de Gobierno*. En el *Estatuto* quedaban garantizados un amplio número de derechos civiles, además de asumir como propios los consignados en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA. Referente a la articulación de los espacios políticos, se establecieron garantías de participación política y sufragio universal, así como de organización y funcionamiento de los partidos políticos, con excepción de aquellas organizaciones que pretendían un retorno al somocismo. A la vez, el Estatuto derogó y abolió las leyes del anterior régimen consideradas represivas y las instituciones que las ejecutaban⁽⁴⁾.

En función de los nuevos decretos, los poderes del Estado se configuraron de la siguiente forma. La JGRN, resultado de la política de alianzas del período insurreccional, detentaba el poder ejecutivo. Debido a la situación de emergencia y a la necesidad de disponer de instrumentos que permitieran agilizar la reconstrucción del país, la JGRN asumió también la potestad legislativa, compartiéndola con el Consejo de Estado, órgano provisional de carácter semicorporativo integrado por treinta y tres miembros en tanto que representantes directos de diversas organizaciones de carácter político, económico y social⁽⁵⁾. En referencia a la organización del Sistema Judicial que provenía del régimen anterior se dismanteló totalmente. El nuevo Sistema se compuso de una serie de Tribunales Ordinarios y Especiales y

3) El Estatuto de Derechos y Garantías se promulgó como Decreto n. 52 el 22 de julio de 1979 y se publicó en la GDO n. 1, el 22 de agosto de 1979.

4) El *Programa de Gobierno* y los decretos más relevantes promulgados durante el primer año por la JGRN se publicaron en *Encuentro*, 1980, 17. Para una exposición más detallada sobre la nueva organización jurídica e institucional del nuevo régimen ver: DUNKERLEY, 1988: 269-280; GONZÁLEZ, 1992: 212-220; MOLERO, 1988: 40-49, POZAS, 1988: 54-65.

5) El hecho de que el FSLN se hubiera erigido como actor principal del proceso revolucionario se reflejó en la distribución de los representantes del Consejo de Estado; los sandinistas se atribuían seis miembros, mientras que las demás organizaciones políticas disponían de uno. La suma de los representantes directos del Frente junto con los delegados de fuerzas sociales y gremiales afines sumaban 17 —sobre los 33 miembros de que se componía. Con todo, el Consejo de Estado no se reunió hasta mayo de 1980. En esas fechas la composición de éste ya había cambiado, ampliando la mayoría que los sandinistas ya disponían. Dicho acontecimiento fue uno de los detonantes del conflicto entre el FSLN y un sector de sus aliados.

por la Corte Suprema de Justicia ⁽⁶⁾. Con referencia a los cuerpos armados el *Programa de Gobierno* se limitó a mencionar la organización de un nuevo Ejército Nacional cuyos principios fundamentales serían la defensa del proceso democrático y la soberanía e independencia de la nación, y de una Policía Nacional que estaría sujeta a un régimen especial que tomara en cuenta la naturaleza de las funciones cívicas y de protección de la ciudadanía.

A la par que se establecían los principios y reglamentos de la nueva institucionalidad, en la sociedad civil se desarrolló una dinámica política que, en ningún caso, fue ajena a la forma traumática en que se desarrollaron los acontecimientos. La ruptura violenta con el antiguo orden no se hizo sentir solamente en las esferas jurídico-administrativas del gobierno sino en todas y cada una de las instancias del poder.

En este sentido, la cuestión clave de las revoluciones sociales es que no solo hay que construir un *nuevo Estado*, sino que hay que articular, simultáneamente, a la sociedad civil. Este hecho implica que el poder no solo está en los resortes del Estado, sino en cada una de las instancias de esta sociedad. En estas circunstancias, el poder no está dado, esperando que se redistribuya, sino que se construye y crece con el desarrollo de nuevas formas de organización civil, que articulan y movilizan a diferentes colectivos. En el caso nicaragüense, cabe apreciar que, una vez derrocado el somocismo, no existía un Estado susceptible de transformación. A la derrota de la dictadura le siguió una estampida de todo el aparato militar, político y jurídico-administrativo de tal manera que el *poder emergente* tuvo que reponer todo el andamiaje organizativo necesario para atender a las necesidades de la población (Núñez *et al.*, 1988: 195-196).

En tal contexto, a los pocos días de la victoria insurreccional, el diario oficial del FSLN —*Barricada*— proclamó la consigna: *¡Organización, organización, organización!* (Gilbert, 1988: 41). Los cuadros sandinistas, en aquellas circunstancias, fueron ocupando puestos de responsabilidad, no solo en los aparatos del Estado —donde los compartían con las demás fuerzas de la coalición—, sino en los espacios donde se reorganizaba la vida cotidiana de la población ⁽⁷⁾.

6) El Sistema Judicial fue el *poder* que tuvo mayor autonomía relativa respecto a la voluntad política del FSLN, pero también fue el pilar más débil de los *tres poderes del Estado* (MOLERO, 1988: 48). Cabe señalar que, con todo, varias instancias del ejecutivo terminaron ejerciendo funciones judiciales, como en el caso del Ministerio de Justicia. Tal vez, en este sentido, el conflicto más relevante fue la creación de los *Tribunales Populares Antisomocistas* —a los que se opuso sin éxito la Corte Suprema— y que entre noviembre de 1979 y febrero de 1981 encausaron 6.310 guardias somocistas.

7) Durante la insurrección el FSLN tenía una indudable ascendencia y prestigio en el seno de la sociedad. En esta atmósfera, las organizaciones populares, en tanto que espacios de participación

Durante los primeros meses después del triunfo revolucionario, las denominadas Juntas Municipales de Reconstrucción fueron la única expresión político-administrativa del Estado en toda la extensión territorial del país. Éstas, que gozaron, por lo general, de un amplio apoyo popular, fueron designadas por ciudadanos que tenían como principal fuente de legitimidad ser depositarios de la confianza política del FSLN. A estas primeras expresiones de poder les correspondió el restablecimiento de la *normalidad* en sus localidades —poner en funcionamiento y administrar los servicios básicos de la población, así como la normalización y el ejercicio de responsabilidades vinculadas al orden (Núñez *et al.*, 1991: 197). Dicha situación reflejaba —como en todo proceso revolucionario— que *el poder nacía de la insurrección y de la guerra y aún guardaba mucho de la lógica de ésta*. Institucionalizar significaba ordenar un poder que estaba parcelado y segmentado en una multitud de grupos armados.

Si bien dicha dinámica tuvo lugar desde el inicio del período postinsurreccional, fue en el documento llamado *Análisis de la coyuntura y tareas de la Revolución Popular Sandinista* donde, además de interpretar los acontecimientos acaecidos, se esbozó la reorganización del FSLN y su estrategia en el nuevo escenario⁽⁸⁾. En este documento se plasmarían las pretensiones hegemónicas y mayoritarias del FSLN.

ciudadana, surgieron o como retaguardia y apoyo de la lucha insurreccional, o, posteriormente, como instrumento para canalizar la efervescencia *postrevolucionaria*. Entre las organizaciones existentes antes del triunfo insurreccional estaban la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), los Comités de Defensa Civil —posteriormente Comités de Defensa Sandinista (CDS)—, la Asociación de Mujeres sobre la Problemática Nacional (AMPRONAC) —posteriormente Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE). Las organizaciones que nacieron con posterioridad a la victoria insurreccional fueron la Unión Nacional de Empleados (UNE), la Central Sandinista de Trabajadores (CST), la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC), la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS19J), la Asociación de Niños Luis Alfonso Velásquez (ANS) y la Unión Nacional de Agricultores y Granjeros (UNAG). Si bien en su inicio las organizaciones populares (también llamadas Organizaciones de Masas) fueron unos instrumentos indispensables para articular la participación y organizar las tareas de carácter comunitario que el Estado no podía prestar, posteriormente, tuvieron limitaciones y dificultades para hacer valer sus propias perspectivas y para proyectarse a la sociedad con una imagen de relativa autonomía respecto al FSLN y a las instituciones del Estado.

8) Dicho documento, fruto de una reunión de 82 destacados cuadros sandinistas llevada a cabo el 23 de septiembre de 1979 —conocido posteriormente como el «Documento de las 72 horas»—, además de formalizar la unificación de las tres tendencias del FSLN y de eliminar el calificativo de «Conjunta» a la Dirección Nacional del FSLN, estableció las orientaciones y directrices a partir de las cuales los sandinistas tenían que actuar. Para mayor información sobre este documento ver: CHRISTIAN, 1985: 136-140; GONZÁLEZ, 1992: 220-221; SANABRIA Y SANABRIA, 1986: 215-248.

Con la pretensión de conservar el espacio político conquistado, el FSLN percibió la necesidad de convertir la guerrilla sandinista en los cuerpos armados del nuevo poder político⁹⁾. En esta dirección, aunque durante los primeros meses de la revolución un ex-coronel de la Guardia Nacional, Bernardino Larios, fuera el Ministro de Defensa, el mando efectivo de las Fuerzas Armadas lo ejercieron los miembros de la Dirección Nacional del FSLN, Humberto Ortega —entonces comandante en jefe— y Tomás Borge —que ocupaba el cargo de Ministro del Interior. Sobre este aspecto otro miembro de la Dirección Nacional, Bayardo Arce, señaló (Arce, 1983: 3):

No estoy seguro de que en esos días tuviéramos, en la Dirección Nacional, suficiente lucidez como para determinar las prioridades organizativas que teníamos que impulsar. Sí tengo claro, sin embargo, que lo primero que dijimos fue que teníamos que organizar las fuerza armadas, es decir, teníamos que dar forma al instrumento que nos sirvió de eje para que nuestro pueblo pudiera obtener su victoria. De tal manera, los primeros esfuerzos —expresados en cuadros, recursos humanos, energía y recursos materiales— los priorizamos en dar forma al ejército revolucionario.

Otro de los terrenos en que los sandinistas adquirieron rápidamente el monopolio fue en el de lo simbólico (González, 1992: 222). Así lo demuestra la rápida conversión de la figura de Augusto César Sandino y de Carlos Fonseca como héroes nacionales, la presencia de la bandera rojinegra del FSLN en todos los edificios públicos, o la calificación del ejército, la policía y la televisión pública de *sandinistas*. En esta dirección, tal como señaló Francois Furet, refiriéndose a la revolución francesa, «la ideología revolucionaria se convierte en el escenario por excelencia de la lucha política de los diferentes colectivos» (Furet en Aya, 1985: 52).

La correlación de fuerzas que se estaba cristalizando en el seno de la sociedad pronto incidió en la composición política de las autoridades que ocupaban cargos en las instituciones. Después de fuertes tensiones entre la dirigencia sandinista y

9) Cabe tener en cuenta que el FSLN nació como una organización político-militar que tenía la lucha armada como uno de sus pilares básicos. En el «Programa Histórico del FSLN» —confeccionado en 1969— ya se expuso la necesidad de sustituir la Guardia Nacional por un «ejército de carácter popular y revolucionario capaz de defender la revolución frente a las fuerzas reaccionarias y del imperialismo» (FSLN, 1970). Sobre el aspecto de la titularidad de los instrumentos de fuerza y coacción, los sandinistas siempre tuvieron presente el derrocamiento de los gobiernos de Jacobo Árbenz en Guatemala y de Salvador Allende en Chile por parte de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas. El FSLN, en este sentido, era consciente del peligro que suponía una institución militar ajena al proyecto político revolucionario.

sus aliados, el 20 de diciembre de 1979 se modificó la composición del Consejo de Ministros a favor del FSLN. Tres miembros de la Dirección Nacional del FSLN, Jaime Wheelock, Humberto Ortega y Henry Ruiz, fueron nombrados ministros de Desarrollo Agrario y Reforma Agraria, Defensa y Planificación, respectivamente, en sustitución de representantes de la patronal y de partidos de la oposición moderada. También hubo relevos entre los responsables de los Ministerios de Comercio Interior y Exterior —donde se colocaron personas de confianza del Frente Sandinista. El detonante de un agrio conflicto entre los sandinistas y el resto de fuerzas políticas fue, sin embargo, la ampliación unilateral del Consejo de Estado, en abril de 1980, modificando y ampliando la mayoría que el FSLN ya disponía⁽¹⁰⁾.

El día siguiente de la alteración en la composición del órgano legislativo, Alfonso Robelo, miembro de la JGRN, anunció la dimisión de todos sus cargos aduciendo que «se habían producido cambios medulares en las directrices del programa de gobierno» (Coraggio y Torres, 1987: 46). Cuatro días más tarde, Violeta Barrios de Chamorro, también miembro de la JGRN, dimitió aduciendo razones de salud. Dichas renunciaciones hicieron eco en la organización patronal nicaragüense, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quien forzó al FSLN a entrar en negociaciones bajo la amenaza de renunciar a sus representantes en el Consejo⁽¹¹⁾.

De esta forma, a mediados de 1980 se hacía ya patente una incipiente polarización entre los diferentes actores políticos respecto al futuro proyecto revolucionario⁽¹²⁾. Pronto se observó que bajo una aparente armonía subyacían dos orientacio-

10) Dicha modificación se realizó en el Decreto n.º 89/80, publicado en el GDO de 22 de abril de 1980. La composición del Consejo pasó de 33 a 47 miembros debido a que diversas organizaciones de masas de adscripción sandinista demandaron una mayor representación en los órganos institucionales del Estado. Fruto de esta nueva correlación de fuerzas el FSLN impuso normalmente su voluntad en la mayoría de las votaciones (POZAS, 1988: 62-65).

11) Los puntos incluidos en la agenda de patronal fueron cinco: 1) el fin de las confiscaciones; 2) la anulación del decreto de estado de emergencia; 3) la publicación de un decreto que garantizara la propiedad privada; 4) la sustitución de los dos miembros que habían dimitido de la JGRN por dos de la misma adscripción política; y 5) el establecimiento de una fecha para la celebración de elecciones. Cabe puntualizar que dichas demandas no diferían a las expuestas por el resto de partidos moderados y por la Administración Carter.

12) En el interior de las fuerzas políticas no sandinistas se irían obviando dos actitudes. Por un lado, un grupo de partidos que concebía la revolución como un proceso necesario para el país y con el cual era indispensable colaborar. Dichas fuerzas, que si bien no defendían la gestión sandinista, sí sabían que fuera del marco que ofrecían las nuevas instituciones su existencia difícilmente sería posible —éstas eran el Partido Popular Social Cristiano, el Partido Liberal Independiente, el Partido Socialista de Nicaragua, el Partido Comunista de Nicaragua y el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista. De éstos, junto con el FSLN, se crearía una plataforma política llamada Frente Patriótico Revolucionario (FPR), con el objetivo de defender políticamente el nuevo proceso político. Por otro

nes políticas claramente diferenciadas. Este hecho se manifestó con contundencia a partir de las críticas que, desde diversos colectivos no sandinistas, se hicieron a la conducción del proceso revolucionario que el FSLN estaba, *de facto*, hegemonizando⁽¹³⁾. La convocatoria de elecciones y el papel a desempeñar por parte de los actores políticos tradicionales en el proceso revolucionario despertaron los mayores enfrentamientos.

Una de las pretensiones del FSLN era la conducción del proceso revolucionario sin ceder capacidad de decisión a los sectores de la burguesía. El reto era convertir a las élites económicas tradicionales —tal como lo hizo en su momento del régimen somocista— en una clase productora que no tuviera capacidad de incidencia política⁽¹⁴⁾. En este sentido, es gráfica la declaración de uno de los comandantes de la Dirección Nacional del FSLN (Wheelock en Invernizzi *et al.*, 1986: 137):

Si la burguesía está dispuesta a respetar la estructura popular del poder, si está de acuerdo en ser un factor de producción y de progreso, y de compartir con la revolución todas las limitaciones que supone ser productor en un país subdesarrollado..., entonces no tenemos ninguna objeción en que ésta posea los medios de producción.

Respecto al tema de la convocatoria de elecciones, si bien el FSLN nunca la negó, tampoco enfatizó la centralidad de los procesos electorales. La desconfianza inicial hacia las elecciones y la democracia electoral obedeció tanto a la concepción de democracia que tenía el FSLN, como a la historia de los partidos y de los comicios en Nicaragua. A estos dos factores se añadieron, a la vez, los esfuerzos del FSLN por consolidar su posición en el Estado y en la sociedad en momentos en que se iniciaban los embates de los grupos empresariales, la jerarquía católica, los partidos políticos tradicionales y el gobierno de los Estados Unidos que, enarbolando la bandera de elecciones inmediatas, querían acotar el avance sandinista y la movilización popular

lado, se observó un núcleo de fuerzas que se fue posicionando, cada vez con más contundencia, en contra del régimen —el análisis de este grupo, junto con otros elementos, será el objeto del siguiente epígrafe.

13) Cabe señalar que en aquellos momentos el FSLN estaba adquiriendo una compleja articulación organizativa que, muchas de las veces, se confundía y suplía a la del Estado. Sobre este fenómeno es gráfico exponer que, cada vez más, la Dirección Nacional del FSLN, compuesta por nueve Comandantes, iba convirtiéndose en la máxima autoridad del régimen —tanto a nivel simbólico como real.

14) La pretensión de subordinar políticamente a las élites económicas nicaragüenses fue uno de los objetivos prioritarios del FSLN en su primer lustro en el poder. Este proyecto es uno de los ejes de la obra que escribió Jaime Wheelock, miembro de la Dirección Nacional del FSLN: WHEELOCK, 1985.

en que se apoyaba. Implicarse de inmediato en la democracia electoral significaba, para el sandinismo, inmiscuirse en un terreno desconocido e inseguro.

En esos días de euforia contagiosa y de esperanza generalizada, el rechazo hacia las prácticas electorales se enraizaba en el rechazo hacia los partidos tradicionales y sus endémicas complicidades con el somocismo. Para amplios sectores de la población, la adhesión a la revolución involucraba el repudio a todo lo que oliera a somocismo, incluyendo la política tradicional. En esta dirección, cabe recordar el abucheo del público hacia el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, cuando en su discurso en el acto de clausura de la Cruzada Nacional de Alfabetización —el 23 de agosto de 1980—, en Managua, mencionó la necesidad de convocar elecciones⁽¹⁵⁾ (Christian, 1985; Green, 1985; Rushdie, 1987; Vilas, 1991b).

Estaba claro que, en aquella coyuntura política, la gran mayoría de colectivos que se sumaron a la convocatoria insurreccional del FSLN demandaban, en primer lugar, la posibilidad de acceder a una parcela de tierra que cultivar, la oportunidad de saberse atendidos por una red —aunque mínima— de asistencia social, de tener la certidumbre de que sus hijos tendrían acceso a educación... Se trataba de que, por primera vez, grandes colectivos se sentían integrados a una *res publica*, incluidos a un proyecto político donde ellos eran partícipes mediante su incorporación en organizaciones gremiales, en sindicatos, en campañas de alfabetización, de salud, de reconstrucción⁽¹⁶⁾. Para este sector de la población, la sensación de *inclusión* —en oposición al concepto de *exclusión*— en el nuevo orden político pasaba por esta dinámica de participación y por tener consciencia de que se estaba elaborando un proyecto donde su presencia era real y útil; para éste, la mayor o menor periodicidad de elecciones —no cabe olvidarse que durante el somocismo se desarrollaron «procesos electorales»—, la forma en que se articularan las nuevas instituciones, las garantías legales respecto a la propiedad privada..., no eran ni sus preocupaciones inmediatas ni suponían —a su manera de ver— los requisitos esenciales para el establecimiento de un «orden democrático».

15) Sobre esta cuestión es gráfico el párrafo que escribió el escritor inglés Graham Green cuando, invitado por el presidente de Panamá, Omar Torrijos, asistió a la clausura de la Campaña Nacional de Alfabetización (GREEN, 1985: 167): «Yo me sentía desconcertado ante su reacción hasta que recordé lo que significaba la palabra “elecciones” en Nicaragua». En el transcurso de su largo reinado Somoza había convocado con frecuencia elecciones, legitimando así su dictadura, al menos ante los Estados Unidos, ganándolas siempre por mayoría, de tal forma que para la mayoría de la gente que se encontraba allí la palabra «elecciones» significaba engaño.

16) Existe abundante literatura —aunque no sistematizada— sobre las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno sandinista durante sus primeros años en el poder; nosotros destacamos a: WILLIAMS, 1991; BAUMEISTER, 1991; RICCIARDI, 1991.

Este fenómeno, sin duda, no fue ajeno al discurso que el FSLN desarrolló durante los años en que estuvo en la clandestinidad. En un contexto de represión, exclusión y privaciones, el FSLN elaboró un discurso donde el concepto «democracia» tenía más que ver con las condiciones cotidianas de gran parte de las masas campesinas y urbanas que con un entramado institucional de garantías jurídicas. En esa dirección, al inicio de su llegada al poder, FSLN percibió y anunció la «democracia» como una cuestión más amplia que la electoral:

Para el Frente Sandinista la democracia no se mide únicamente en terreno político y no se reduce a la participación del pueblo en las elecciones. Democracia significa la participación del pueblo en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras más tome parte el pueblo en esa materia será más democrático. La democracia se inicia en el orden económico, cuando las desigualdades principian a debilitarse, cuando los trabajadores y los campesinos, mejoran sus niveles de vida [...]. Una vez logrados estos objetivos, se amplía al campo del gobierno [...] En una fase más avanzada democracia significa participación de los trabajadores en la dirección de las fábricas, haciendas, cooperativas y centros culturales. En síntesis, la democracia es la intervención de las masas en todos los aspectos de la vida social (FSLN, 1980).

Algunos creen que democracia es ir a votar el 25 de marzo de mil novecientos cualquiera, y que el resto del año democracia es una palabra que se repite (Borge, 1988: 57).

El ingrediente central de esta concepción era la participación popular, pero en un esquema conceptual de niveles y etapas: primero lo socioeconómico y lo político después⁽¹⁷⁾. El intento de superar las limitaciones institucionalistas y formalistas

17) Sobre este debate, cabe observar que el mayor o menor énfasis en la dimensión socioeconómica o en la participación electoral, se relaciona también con el perfil social particular de cada colectivo. Generalmente son las clases medias y altas quienes ponen más énfasis en la cuestión de la democracia entendida como proceso electoral. Esto tiene su lógica, pues las contradicciones a partir de las cuales estos sectores se integran en el proceso revolucionario son fundamentalmente de naturaleza política, o ideológica. La transformación socioeconómica y las nuevas vías de participación social, les resultan menos importantes que la vigencia de las instituciones representativas. Sin embargo, para amplios sectores de la población que sufren ante todo la pobreza, la marginación y la arbitrariedad del poder, la satisfacción de las necesidades materiales básicas, y el logro de un sentimiento de estabilidad y de seguridad, tienden a ser las cuestiones centrales: *no es que no estén interesados en la libertad, pero ésta también incluye librarse de las privaciones materiales* (VILAS, 1991b: 5).

de democracia, sin embargo, suponían un problema serio: ¿Qué pasa con el gobierno en las primeras etapas del período revolucionario? ¿Quiénes deciden en lo relativo a la creación de las precondiciones socioeconómicas para la democratización política? ¿Quiénes deciden sobre la duración de esta etapa inicial, y juzgan cuándo pasar a la etapa siguiente? ¿Qué ocurre cuando las propuestas socioeconómicas de la conducción política del proceso revolucionario no coinciden, o entran en colisión, con las identidades e intereses de los actores sociales del campo popular? (Vilas, 1991b: 10). La respuesta a estas preguntas la contestaron dos dirigentes del Frente Sandinista, Humberto Ortega y Sergio Ramírez:

El poder lo ejerce el sandinismo, que significa el pueblo. Aquí subsisten otros sectores que no son sandinistas, pero subsisten en tanto que el poder les permite subsistir y en tanto que realmente no afecten al proyecto revolucionario. La revolución está hegemonizada por los sandinistas y esos otros sectores están ahí en tanto que estén sujetos a leyes de esta Revolución y no afecten el proyecto revolucionario en el cual nosotros tenemos el poder y la voluntad de las masas (Ortega, 1981: 90).

No podemos apartarnos del proyecto original. Pero si debido a la fuerza de las circunstancias la economía mixta, el pluralismo político y la libertad de prensa dejan de ser compatibles con la supervivencia de la revolución, optaremos por ésta. El proyecto histórico del pueblo no es circunstancial. La revolución no ganó el poder en unas elecciones, sino enfrentándose a la muerte... Aquí hay una revolución con hegemonía popular. El esquema de nuestra revolución es popular. Todo puede cambiar menos la hegemonía del proceso (Ramírez en Lozano, 1983: 283).

Las declaraciones arriba expuestas, comportan el riesgo, sin embargo, de proyectar a la sociedad un conjunto de ritmos y estilos de conducción política caracterizados por el control y el verticalismo —hecho tanto más factible al tratarse de sociedades en que el subdesarrollo económico y la dependencia externa definen polarizaciones sociales y culturales extremas (Chaliand, 1978; Thomas, 1984). En este sentido, en el caso nicaragüense, la conversión de una organización que actuó durante largo tiempo en la clandestinidad, a un actor político hegemónico, agregó riesgos en la creación de un escenario político donde nuevos contenidos de transformación y democratización pudieran recaer en la reproducción de viejas formas de mando y obediencia (Vilas, 1991b: 11).

3.2. LA GESTACIÓN DE LA COALICIÓN ANTISANDINISTA

La revolución en Nicaragua es más peligrosa que la Cuba de Castro, dado que tiene fronteras en Honduras y Costa Rica [...] si no podemos prevenir la consolidación del régimen sandinista en Nicaragua se convertirá en un arsenal de insurgentes [...] tenemos que anticiparnos a la división de América Central. Tal desarrollo de los hechos nos obligaría a levantar una nueva línea de frente militar del conflicto Este/Oeste justo aquí, en nuestro continente⁽¹⁸⁾.

El *somozato* fue más que una sangrienta dictadura. Si bien compartía métodos y estilos con otras tiranías del istmo, en ésta se observaban dos características originales, una a nivel interno —que ya hemos analizado anteriormente— y otra a nivel externo: el rol decisivo que detentaba la política internacional en Centroamérica⁽¹⁹⁾. En este orden de cosas los Somoza se parecían más a una *dinastía de guardianes* que a los *guardianes de una dinastía*. Guardianes, en este caso, de los intereses que correspondían esencialmente a las necesidades estratégicas de los Estados Unidos (Cerdas, 1986: 175).

La huida de Somoza García y la victoria insurreccional supuso un golpe a la Administración Carter. Los *policymakers* norteamericanos, que tanto trabajo y esfuerzos habían realizado en aras de una salida favorable a los intereses estadounidenses, vieron cómo el resultado final no tenía ningún punto en común con su proyecto. Los Estados Unidos, sin embargo, en ningún momento dejaron de concebir la política centroamericana como una cuestión que pudiera resolverse sin atender a sus intereses. Sobre este aspecto, una interpelación del asesor del Consejo Nacional de Seguridad, Zbigniew Brzezinski, al Presidente Carter recordó que la política norteamericana debía mantener el estilo acuñado por la Doctrina Monroe (Kornbluh, 1991: 323):

We have to demonstrate that we are still the decisive force in determining the political outcomes in Central America and we will not permit others to intervene.

18) Estas fueron las palabras del secretario adjunto de defensa, Fred Iklé, pronunciadas ante el Consejo de Asuntos Exteriores de Baltimore el 12 de septiembre de 1979. La cita pertenece a Chace en BARBÉ, 1985: 261.

19) Sobre esta cuestión son gráficas las acciones que desarrollaron los Somoza en los conflictos con gobierno de Teodoro Picado en Costa Rica durante la guerra civil (1948); en diversos problemas fronterizos con José Figueras (1949 y 1955); por el apoyo otorgado a Castillo Armas en Guatemala (1954); o en la preparación del intento de invasión de Cuba de Bahía Cochinos (1961).

Después de fracasar en el intento de que la OEA enviara un cuerpo armado para «pacificar e intervenir» en Nicaragua y de fracasar en la pretensión de negociar con los sandinistas sobre la composición del nuevo ejecutivo e influir en las directrices del nuevo régimen, la administración Carter reacomodó su estrategia con el objetivo de convivir con el nuevo régimen bajo la intuición de que, de esa forma, podría condicionar su desarrollo. Con esta intención utilizó la *estrategia de la zanahoria*, ofreciendo ayuda económica: la administración de los Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares para la reconstrucción de la guerra y el Congreso otros 75 millones más⁽²⁰⁾. En septiembre de 1979, los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN recibieron una invitación para entrevistarse con Carter en la Casa Blanca.

Con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos se reemplazó la *zanahoria* por un *gran garrote*⁽²¹⁾. Ya en 1980, la plataforma electoral Republicana que apoyaba la candidatura de Reagan estableció como una de sus prioridades el derrocamiento de los sandinistas en Nicaragua. El reportaje de ese año de la *Heritage Foundation*, una de las instituciones donde salieron buena parte de los asesores de la política interamericana de la administración Reagan, expuso:

A well-orchestrated program targeted against the Marxist Sandinistas government... The longer that government remains, the stronger its security apparatus will become, and more difficult it will be to dislodge it... The Sandinistas government is still weak and could be dislodged through a coordinated effort⁽²²⁾.

Otra de las figuras en las que se inspiró la política exterior de Reagan fue Jeane J. Kirkpatrick, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown y posteriormente, en 1981, embajadora de los Estados Unidos en la ONU,

20) Del monto total de la ayuda aprobada por el Congreso 5 millones eran en granos básicos cultivados en los Estados Unidos y el resto en crédito para la compra de bienes norteamericanos; esta ayuda, a la vez, tenía como condición que el 60% se canalizara a través de empresas privadas, que el gobierno mantuviera inalterada las garantías hacia los derechos humanos, que se celebraran elecciones en un período breve de tiempo y que no se utilizaran los fondos para pagar personal cubano (ROBINSON & NORSWORTHY, 1987: 40).

21) Existe abundante literatura sobre la política de Reagan respecto a Nicaragua, mucha de ella, sin embargo, utiliza un tono más bien panfletario —venga del lado que venga— que académico. Entre las obras de carácter riguroso cabe destacar: KORNBLUH, 1987; LAFEBER, 1987; ROBINSON & NORSWORTHY, 1987; WALKER ed., 1987, WHITEHEAD, 1983.

22) Párrafo extraído de: Documento *Committee of Santa Fe*, en KORNBLUH, 1991: 230.

quien, una vez derrocado Somoza en Nicaragua y el Sha en Irán, expondría sus dudas sobre la naturaleza de los nuevos regímenes emergentes (Kirkpatrick en Whitehead, 1983: 327):

Both Somoza and the Shah were, in central ways, traditional rulers of semi-traditional societies... neither sought to reform his society in the light of any abstract idea of social justice or political virtue... Both did tolerate limited opposition... but both were also confronted by radical, violent opponents... Both rulers, therefore, sometimes invoked martial law to arrest, imprison, exile, and *occasionally, it was alleged*, torture their opponents... the Shah and Somoza were not only anti-Communists, they were positively friendly to the US, sending their sons to be educated in our Universities, voting with us in the United Nations and regularly supporting American interests and positions... In each of these countries the American effort to impose liberalization and democratization on a government confronted with violent internal opposition not only failed, but *actually assisted the coming to power* of new regimes in which ordinary people enjoy fewer freedoms, and less personal security than under the previous autocracy —regimes, moreover, hostile to American interests and policies.

La administración Reagan supuso la alternativa beligerante ante la cuestión nicaragüense y la problemática centroamericana. Dicha alternativa, sin embargo, no supondría una intervención bélica de carácter convencional —tal como se realizó en el caso de la guerra de Vietnam— sino que los asesores norteamericanos diseñarían para Nicaragua una *Guerra de Baja Intensidad* (GBI).

En febrero de 1981, uno de los primeros documentos de la era Reagan sobre la estrategia contrainsurgente en istmo centroamericano, el *Covert Action Proposal for Central America*, presentaba una acción integrada donde, en palabras de Robert McFarlane, antiguo asesor nacional de seguridad de la administración estadounidense, se deducía:

The key point to be made now is that while we must move promptly, we must assure that our political, economic, diplomatic, propaganda, military, and covert actions are well coordinated⁽²³⁾.

23) Las afirmaciones de McFarlane son parte de las declaraciones realizadas una vez estallado en escándalo Irán-Contra (Farlane en KORNBLUH, 1987: 326-346).

En esta estrategia, se contemplaba una nueva visión de los conflictos bélicos que, según los manuales editados por el Pentágono, pretendía una «*synergistic application of comprehensive political, social, economic and psychological efforts*». Combinando diferentes espacios de intervención, la administración norteamericana pretendía llevar una *total war at the grassroots level*. En Nicaragua esta «estrategia de guerra total» se articuló en cinco frentes: operaciones paramilitares encubiertas, apoyo a las operaciones militares de la oposición armada, desestabilización económica, una ofensiva propagandística, y el apoyo a la articulación de los sectores sociales nicaragüenses opuestos al proyecto sandinista (Kornbluh, 1987: 327; Núñez *et al.*, 1991: 121-140).

Así pues, ya en sus primeros pasos, el régimen tuvo que enfrentarse a una administración estadounidense que desarrollaba una estrategia agresora —ya fuera directamente a través de operaciones de sabotaje coordinadas por la CIA o a través del apoyo hacia los grupos armados contrarrevolucionarios que empezaron a asentarse en la frontera hondureña, el Frente Democrático Nicaragüense (FDN), en la Costa Atlántica (los grupos MISURA y KISAN) o en los territorios limítrofes con Costa Rica, ARDE y posteriormente el Frente Sur⁽²⁴⁾. En este sentido, una economista norteamericana, al analizar las diferentes estrategias de desestabilización norteamericanas sobre diversas experiencias revolucionarias en América Latina, expuso por qué en el caso de Nicaragua se llevó a cabo una política de agresión directa a través de un ejército contrarrevolucionario (Helwegge, 1989: 231):

The USA had a few avenues for exerting economic pressure in Nicaragua. Standards of living among most Nicaraguans did not depend on foreign support, and idle land provided an opportunity to improve standards of living among rural Nicaraguans without increased access to foreign exchange. US support of the *contras* has created the economic disruption that could not be achieved with sanctions; agricultural output has been

24) Quienes crearon la Contra fueron colectivos pertenecientes al bloque somocista desplazado del poder tras la insurrección y que, posteriormente, se organizaron con gran celeridad. El primer paso fue la creación de una fuerza armada irregular llamada «Legión Quince de Septiembre» —el mismo nombre de una de las unidades especiales de la Guardia Nacional— y que posteriormente se pasaría a llamar Frente Democrático Nicaragüense (FDN). Sus dirigentes eran altos cargos del régimen somocista —el exponente más visible era el ex-comandante de la Guardia nacional Enrique Bermúdez. Posteriormente se crearían dos núcleos más de grupos de carácter armado, uno en la zona limítrofe de Costa Rica, compuesto básicamente por cuadros del COSEP y por profesionales que colaboraron, en sus inicios, con los sandinistas; y otro en la Costa Atlántica, donde errores políticos de los sandinistas junto con el liderazgo de líderes autóctonos y de la iglesia morava gestaron un conflicto que convertiría esa zona en uno de los puntos más delicados del proceso revolucionario.

hurt by attacks on farmers, and resources have been diverted to defence. The shift in tactics toward military intervention reflected US recognition that economic pressure was unlikely to succeed in creating instability. The Soviets were also ambiguous in their refusal to provide massive economic assistance to Sandinistas. As a result, the *contras* have been used to wear down support for the Sandinista regime.

Así pues, a partir de la administración Reagan, se desarrolló en Nicaragua una *arena militar* donde combatieron el régimen sandinista y las fuerzas contrarrevolucionarias. En sus inicios, el fenómeno contrarrevolucionario se convirtió en un proyecto según el cual «los argentinos pondrían los asesores militares, los hondureños el territorio, los americanos el dinero, y los nicaragüenses la gente» (Cruz, 1989: 130).

Si nos preguntamos por qué la administración norteamericana —y la administración Reagan en particular— respondió de forma tan agresiva al proyecto político liderado por el FSLN, cabría señalar, en primer lugar que —tal como nos ha señalado la historia— no existe proceso revolucionario y transformador que no se vea, cuando menos, amenazado (ese es el caso de la revolución mexicana y boliviana) por el poder hegemónico del statu quo⁽²⁵⁾. En el caso que nos ocupa, Nicaragua, es necesario señalar su ubicación geopolítica —ya sea en relación con sus países vecinos como en referencia a los Estados Unidos, quienes hasta entonces, ejercieron un patronazgo próximo al de un *protectorado*. Así pues, la interpretación de las razones por las que los Estados Unidos combatieron de forma tan feroz al proyecto revolucionario pasa por tres ejes:

1) La intolerancia hacia la posibilidad de gestar un proyecto político autónomo en una zona donde, hasta entonces, se consideraba como propia —en este sentido, la actitud de la administración norteamericana fue recurrir a la intervención unilateral, la potestad calificada por Chomsky como la *quinta libertad* (Chomsky, 1988).

2) El peligro político que suponía el desarrollo de un proyecto de transformación profunda de las estructuras socio-económicas sobre la base

25) Sobre la actividad desestabilizadora de los Estados Unidos hacia los proyectos políticos de carácter transformador cabe dirigirse a: HELWEGWE, 1986. En relación a la postura intervencionista de la administración norteamericana respecto a la política latinoamericana, ver: BOESNER, 1982.

de una legitimidad, discurso y lógica totalmente ajenas —por no decir contrapuestas— a la tradición norteamericana⁽²⁶⁾.

3) El potencial *efecto demostración* —es decir, el detonante para activar la conocida *teoría del dominó*— de dicho proceso para con sus vecinos (especialmente El Salvador y Guatemala) en el caso de que éste sobreviviera y enfrentara con éxito parte de los problemas que las pequeñas sociedades periféricas plantean a grandes sectores de la sociedad⁽²⁷⁾.

La agresión que se le vino encima a la Revolución Sandinista, fue, sin duda, un factor decisivo para entender las dificultades crecientes del proyecto sandinista. Pero tan decisivo como aquélla fue la forma en que el régimen la encaró. En dicho escenario, los sectores desafectos del proyecto sandinista —algunos sectores de las clases medias y de la burguesía, las organizaciones vinculadas a la patronal (el COSEP), la jerarquía católica— agudizaron sus críticas y polarizaron sus posiciones. Pero no solo dichos sectores engrosarían las filas de la base social que apoyó la Contra, tal como observaremos; también determinados colectivos campesinos de las regiones del interior fueron distanciándolos —unos mediante la indiferencia y otros de forma más beligerante— del proyecto sandinista.

La estrategia de agresión contrarrevolucionaria era clara, y también clásica, pues respondía a la que en su día —en 1832— definió Clausewitz (1932: 1984):

Si la victoria rápida sobre el enemigo no es posible, han de concentrarse esfuerzos en su desgaste: incrementar el coste de la guerra, destruirle su territorio, aumentarle su sufrimiento y desgastarlo poco a poco, debilitando su posición moral y física... Se tiene que aniquilar su voluntad de resistencia a través de operaciones que tengan repercusiones políticas directas.

26) Sobre esta cuestión es gráfica la atención que dio y el discurso que generó la administración Reagan. Un claro ejemplo de ello fue cuando el presidente Ronald Reagan, en la sesión conjunta del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, el 27 de abril de 1983, declaró (Reagan a GOROSTIAGA, 1984: 372): «No existe ninguna área en el mundo que esté tan integrada al sistema político y económico de los Estados Unidos y ninguna tan vital para nuestra seguridad como América Central. Si perdemos esta región seremos incapaces de prevalecer en ninguna otra parte del mundo. Nuestra credibilidad se pondría en duda, nuestras alianzas se colapsarían, y la seguridad política de nuestro país estaría gravemente amenazada».

27) No es casual que buena parte de la legitimidad que se «auto-otorgó» la administración norteamericana, en relación la intervención en Nicaragua, fuera el potencial desestabilizador del proyecto político en la región y su voluntad de «exportar» la revolución. En relación a ello ver: BARBÉ, 1985; ELLIOT, 1987; REAGAN, 1983, 1984; US Department of State, 1984, 1985.

Evidentemente la agresión comportó consecuencias políticas. En febrero de 1982, a raíz de la escalada militar en ascenso, se declaró por primera vez el Estado de Emergencia Nacional, a fin de cerrar filas frente a la nueva situación. *La breve luna de miel de los sandinistas parecía terminarse* (Molero, 1987: 74). A partir de entonces, la agresión —y la forma en que ésta se combatió— empezó a jugar un papel determinante dentro de la dinámica política nicaragüense. La etapa posterior nos mostrará cómo esta nueva realidad supuso un realineamiento de los actores políticos.

CAPÍTULO 4

**LA BÚSQUEDA
DE LA HEGEMONÍA**



4.1. LAS DISYUNTIVAS DEL PROYECTO REVOLUCIONARIO

Los propósitos de los hombres, especialmente en una revolución, son tantos y tan variados, tan contradictorios, que su compleja interacción produce resultados que nadie intentó ni siquiera prever⁽¹⁾.

Como ya hemos observado, la búsqueda de la hegemonización del proceso revolucionario por parte del Frente Sandinista tropezó con dos escollos: el distanciamiento de diversos actores políticos y la agresión de un heterogéneo colectivo conocido generalmente como la *Contrarrevolución*. La coincidencia de estos dos elementos generará una dinámica de doble impacto a partir de la cual se creará una arena política, fluida e inestable, donde la estrategia de los actores políticos no sandinistas estará condicionada por los acontecimientos acaecidos en el plano militar, y viceversa.

En tal sentido, a seis años de la insurrección, en una entrevista sobre el problema de cómo mantener y consolidar la hegemonía política sandinista, Tomás Borge, miembro de la Dirección Nacional, Ministro del Interior y uno de los líderes más carismáticos de la revolución, expuso la compleja situación del proceso revolucionario. Borge sentenció (Borge, 1985: 8-9):

No hay un proyecto ideológico, ni puede haberlo, tan diáfananamente definido como el de Cuba. El nuestro es un proyecto enredado y complicado, y los proyectos enredados confunden a las masas. Hasta ahora no hemos sido capaces y, es posible que no seamos lo suficientemente capaces, de lograr que el pueblo entienda toda esta complejidad. A veces tampoco

1) Cita extraída de Gordon Wood en GONZÁLEZ, 1994: 259.

hemos sido lo suficientemente receptivos para captar las inquietudes populares. Otras, ni siquiera nosotros tenemos la claridad suficiente para entender la naturaleza extremadamente compleja de este proceso.

Como indicamos, tan relevante fue la hostilidad hacia el proyecto sandinista y la volatilidad de las alianzas políticas de los diferentes actores políticos opositores como la forma en que el FSLN respondió a dichos acontecimientos.

Ciertamente, la guerra es un marco poco propicio a la democratización y, en este sentido, Bayardo Arce, miembro de la Dirección Nacional del FSLN, declaró: «en la medida en que se fue tensionando la situación fueron cerrándose los espacios de libertad con que la revolución había querido manejarse y con que nació» (Arce en Invernizzi *et al.*, 1986: 191). Sin embargo, si bien la agresión reforzó las tendencias de control y verticalismo, ésta también contribuyó a generar un discurso donde se justificaron errores, torpezas y abusos.

Las consecuencias de la guerra, en el desarrollo del proyecto revolucionario, tuvieron gran relevancia en lo que atañe a aspectos económicos y sociales (Vilas, 1988: 182):

The indirect impact of the war was inequally great. Military aggression has produced a general distortion of national economic and social life in a whole number of areas: the non-productive use of scarce resources, the lack of both labour and machinery in the productive sectors, the relocation of large sectors of rural population, the disarticulation of channels of circulation goods, an inorganic money supply, a growing fiscal deficit, budget imbalances etc. About half of government spending, and about 20 per cent of economically active population, have been absorbed by the defence effort.

Pero, en las cuestiones de organización política, la situación bélica también produjo un fuerte impacto (Serra, 1988: 44):

La situación de guerra prolongada adquirió una lógica propia que implicó una estructuración particular de las relaciones sociales y del mundo simbólico, alterando el proyecto político que en un inicio se pretendió llevar a cabo [...] Las fuerzas armadas se expandieron rápidamente. Este hecho supuso el encuadramiento de gran parte de de la población en una estructura militar caracterizada universalmente por su carácter jerárquico [...] En dicho contexto, los métodos organizativos fueron permeándose de una lógica militar.

En este epígrafe trazaremos, brevemente, cuál fue la forma en que el FSLN respondió a la agresión en lo que concierne a la organización política interna e institucional, así como el discurso generado. También observaremos como estos hechos tuvieron, simultáneamente, consecuencias sobre el resto de la sociedad civil. Finalmente, nos referiremos al proceso electoral que tuvo lugar en noviembre de 1984, en tanto que elemento utilizado por el FSLN en el intento de hegemonización del proceso revolucionario. En el marco de dichas elecciones, haremos referencia a las diferentes organizaciones partidarias y su posicionamiento.

«El régimen sandinista, siguiendo el modelo cubano, había tomado la costumbre de bautizar cada año con un lema oficial, que indicaba las prioridades políticas del período venidero. Así, 1979 había sido el año de la *reconstrucción*, 1980 el de la *alfabetización*, y 1981 el de la *defensa y la producción*. Cuando se adjetivó 1982 como el año de la *unidad frente a la agresión*, el FSLN sabía lo que se le venía encima» (González, 1992: 310). Sin embargo, la centralidad del fenómeno bélico se extendería a todo el lustro posterior, de esta forma, el año 1983 fue calificado como el año de la *lucha por la paz y soberanía*, el lema oficial de 1985 fue *por la paz, todos contra la agresión* y el de 1986 *todas las armas contra la agresión*.

Durante los primeros años del gobierno sandinista (1979-1982), se llevaron a cabo políticas de expansión de la demanda, se subvencionaron los productos que formaban la canasta básica, se redujeron las tarifas de transportes, se incrementó la prestación de servicios, se construyó una red de educación y se realizaron profundas transformaciones de la estructura de propiedad —tanto urbana como rural (Harris & Vilas, 1988; Martínez Cuenca, 1990). Las directrices de las políticas gubernamentales cambiaron radicalmente de sentido, la lógica de las políticas de desarrollo —que los años anteriores se inspiraron en el principio del *trickle down*— de la primera etapa del gobierno sandinista se articularon sobre la base de la *lógica de las mayorías*, con la pretensión de priorizar las necesidades básicas de grandes sectores de la población que, anteriormente, se vieron excluidos del modelo de desarrollo (Williams, 1991).

Respecto a las políticas agrarias, el gobierno respondió a la fuerte presión que ejercía el campesinado en aras de la realización de una reforma agraria, de forma diferente a lo largo del tiempo (Brockett, 1991: 169-173; Deere, Marchetti & Reinhardt, 1985: 75; Enríquez, 1991: 83-107). En un inicio, la redistribución de tierras afectó solamente a las propiedades de Somoza y sus colaboradores más próximos, y la titularidad de éstas pasó a manos del Estado; posteriormente, a causa de la persistencia de la presión de ciertos sectores de las zonas rurales, la política de transformación del agro tomó un cauce más pragmático y flexible —afectó a diversos latifundios y las formas de redistribución fueron diversas (Thome & Kaimowitz,

1985). Con todo, tal como se observa en la tabla n° 5, la transformación de la estructura de propiedad en el agro fue profunda.

Tabla 5. Cambios en la estructura de propiedad en Nicaragua, 1978-1987
(en miles de manzanas)

Tamaño y titularidad	1978 Área	1978 %	1983 Área	1983 %	1987 Área	1987 %
Privada	8.073	100	5.232	65	4.875	60
+500	2.920	37	1.132	14	769	9
+200-500	1.311	16	1.021	13	968	12
+50-200	2.431	30	2.391	29	2.426	30
-10-50	1.241	15	560	7	581	7
-10	170	2	127	2	128	2
Cooperativa	0	0	1.183	14	1.730	22
Estatal	0	0	1.657	21	1.076	13
Abandonada	0	0	0	0	0	0
Total	8.073	100	8.073	100	8.073	100

Fuente: Enríquez, 1991:93

A pesar de los esfuerzos realizados en la tarea de organizar amplios colectivos de la población —tal como se deduce de los datos expuestos en la tabla n° 6—, de transformar la estructura productiva, de llevar a cabo políticas sociales que cubrieran las necesidades básicas de amplios colectivos, a partir de 1982, la *defensa* fue la máxima prioridad y, en esa dirección, se reorganizaron todas las instancias organizativas del FSLN y del Estado. En primer lugar, los cuadros sandinistas más cualificados se destinaron preferentemente a las estructuras castrenses —a finales de 1984 un 56% de ellos se encontraban en las Fuerzas Armadas (Molero, 1987: 47). Una de las decisiones más relevantes, en este sentido, fue la reorganización administrativa del país —tomando como unidad base la región—, en julio de 1982, con el objetivo de garantizar una mayor eficacia en el apoyo institucional a la defensa. Este hecho supuso una centralización de las decisiones —en tanto que los responsables de los departamentos regionales pertenecían a la Asamblea Sandinista—.

Tabla 6. Centrales sindicales de adscripción sandinista y su afiliación, 1985

Central sindical	Número de sindicatos	Número de afiliados
Central Sandinista de Trabajadores, CST	504	111.498
Asociación de Trabajadores del Campo, ATC	480	42.000
Federación de Trabajadores de la Salud, FETSALUD	39	15.613

Fuente: Barricada, 7-2-1985

ta— y una cierta militarización del Estado, en la medida que diversas instituciones se pusieron al servicio de la defensa.

De esta nueva organización territorial del Estado emergió un conflicto competencial entre los delegados regionales del FSLN y los Ministros de las Juntas Regionales que, generalmente, acabó resolviéndose a favor de los primeros. Un hecho semejante se observó a nivel local, donde la autoridad de las Juntas Municipales fue progresivamente absorbida por las instancias regionales en aras de una mayor eficacia en el plano militar.

La guerra generó exigencias y creó las condiciones para el fortalecimiento del control, la centralización y el verticalismo. Este fenómeno se dejó sentir sobre la organización de las diferentes instituciones del Estado, pero, sobre todo, en la organización misma del FSLN y de las organizaciones de masas de adscripción sandinista. Sobre esta cuestión, a mediados de la década de los ochenta, Bayardo Arce, miembro de la Dirección Nacional y miembro de la Dirección Política del FSLN, declaró (Arce en Invernizzi *et al.*, 1986: 65):

En nuestro caso nos regimos por el centralismo democrático. A estas alturas somos más centralistas que democráticos.

El Frente Sandinista, que nació bajo la consigna de la lucha armada, tres años después de su acceso al poder se vio nuevamente en la necesidad de reemprender la actividad militar y, con ella, una dinámica de dirección, trabajo y autoridad propia de las situaciones bélicas. En dicho contexto, en la organización del FSLN

resurgieron buena parte de los «tics organizativos» de la antigua organización guerrillera. De hecho, la autoconcepción del Frente Sandinista como un partido de *vanguardia* vertebró su lógica organizativa en tres pilares que reforzaban la conducción vertical de las decisiones partidarias. Por un lado, la existencia de una cúpula partidaria, la Dirección Nacional (la DN), que interpretaba y resolvía las directrices políticas. Ésta supuso que la mayor parte de las decisiones se produjera en el vértice de la organización⁽²⁾. Por otro, la concepción de la militancia como un cuerpo muy reducido y selecto de miembros comportó, en determinadas ocasiones, una visión cerrada y sectaria de la organización política⁽³⁾. El tercer pilar reposó sobre la existencia de vínculos semi-orgánicos con las organizaciones de masas de adscripción sandinista (donde se incluían sindicatos vinculados al FSLN). Estas organizaciones tuvieron un rol muy importante en la rearticulación de grandes colectivos en la sociedad civil en el período post-insurreccional, sin embargo, con la intensificación de la agresión y la crisis económica, obedecieron cada vez más a las

2) Referente a este punto, es gráfica la declaración de un miembro de la Dirección Nacional: «La conducción política del proceso revolucionario corresponde a la vanguardia de la vanguardia, es decir, a la Dirección Nacional» (Arce en INVERNIZZI *et al.*, 1986: 63). Durante el decenio revolucionario la DN se convirtió en la cúpula partidaria del FSLN y del Estado. La frase «¡Dirección Nacional ordene!» fue una clara expresión de la autoridad que llegó a ejercer este cuerpo colegiado (SELSEY, 1991). La dirección colectiva del partido significó, por una parte, la integración orgánica de las tres tendencias, y por otra, el rechazo al «caudillismo». Con todo, la DN no escapó de ser idolatrada. La individualidad de los Comandantes se expresó a menudo en el llamado «feudalismo institucional». Éste significó la fragmentación de la estructura administrativa del Estado en función de quien dirigía la gestión de determinados ministerios (MARTÍNEZ CUENCA, 1990).

3) Sobre este punto, en el acto de la Segunda Promoción de Cuadros, el 21 de febrero de 1982, el comandante Carlos Núñez pronunció (Núñez en FSLN, 1982: 123): «Las puertas del FSLN sólo se abren a los mejores miembros de la sociedad [...] Ser militante del Frente es un gran honor, las puertas de la vanguardia no se abren a cualquiera [...] Los que pertenecemos al Frente tenemos que luchar contra todas las energías por sus principios». El partido nunca fue concebido para grandes colectivos, sino para un número reducido, fiel y selectivo de militantes (GILBERT, 1988). A la vez, el nivel de exigencias que comportó la militancia fue muy intenso y éstas conllevaron, en determinadas circunstancias, una visión sectaria del FSLN. La actividad partidaria de la militancia osciló entre las instituciones del Estado, el partido y las organizaciones de masas. Con el recrudecimiento de la situación bélica y la profundización de la crisis económica aumentó, para el FSLN, la necesidad de disponer de todas las instancias para movilizar y dirigir la sociedad. Con ello, la población enraizó la percepción de que el Estado y el partido se convertían progresivamente en la misma cosa (NÚÑEZ *et al.*, 1991). Sobre el número de miembros del FSLN, estimaciones realizadas antes de las elecciones de 1990 ofrecieron el dato de que el número de militantes con que contaba era menor a 50.000 (Arce en SABALLOS, 1990), cantidad que no excede al 3% de la población adulta —índice inferior al que, según Gilbert, presentan partidos de la misma naturaleza en el poder. Aun así, teniendo en cuenta que en 1981 el Frente se constituía por menos de 1.500 miembros, las cifras de 16.000 en 1985 y algo menos de 50.000 en 1990 nos indican un crecimiento exponencial.

necesidades estratégicas del Frente Sandinista. De los datos de la tabla n° 7 puede observarse la relevancia de dichas organizaciones en la vida política nicaragüense durante los años ochenta.

Las organizaciones de masas fueron los «recipientes» donde se aglutinó la mayor parte de la población simpatizante del proyecto revolucionario sandinista. En los primeros años, el estallido de la participación popular se canalizó a través de estas organizaciones. Durante ese período, grandes colectivos, hasta entonces ajenos a todo quehacer público, se hicieron partícipes de un proyecto común (Vilas, 1991b: 20):

El pueblo recuperó su voz para hacer oír sus problemas, para expresarlos por sí mismo, y retomó y potenció su capacidad de acción colectiva. Por primera vez en mucho tiempo — para muchos, por primera vez en la vida — la gente se sintió parte de una comunidad nacional, de un todo compartido. Los grandes logros sociales de la revolución — la alfabetización, la medicina preventiva, la educación de adultos... — fueron posibles por el involucramiento masivo, voluntario y esperanzado de una multitud de hombres y mujeres, mayoritariamente pertenecientes a las clases populares.

Tabla 7. Resultados electorales en las elecciones legislativas

Partidos	N. votos (en miles)	% Sobre inscritos	% Sobre voto válido	Diputados
FSLN	736	47,4	67	61
PCD	154,3	9,9	14	14
PLI	105,6	6,8	9	9
PPSC	61,2	3,9	5,6	6
PC de N	16	1	1,5	2
PSN	14,5	0,9	1,5	2
MAP-ML	11,4	0,7	1	2

Fuente: Consejo Supremo Electoral, 1984

Sin embargo, la dirección sandinista no estableció relaciones fluidas y continuas con estas organizaciones y, a partir de la guerra, éstas fueron subordinándose a los intereses coyunturales del FSLN. Si bien existen pocas referencias al respecto, la

función que el FSLN asignó a las organizaciones de masas fue la de «velar y trabajar por el fortalecimiento de la revolución y la de ser los verdaderos instrumentos de expresión y canalización de las demandas más apremiantes de las masas» (Núñez en Pozas, 1980: 20-21); en la práctica, no obstante, prevaleció la primera de las tareas.

El FSLN convocó las organizaciones de masas y las movilizó, sobre la base de un control centralizado desde el partido y el gobierno, como si se trataran, la mayor de las veces, de piezas de ajedrez. Dicha tendencia se agudizó con la intensificación de la guerra y con el aumento de las restricciones económicas. En este nuevo escenario fueron surgiendo contradicciones crecientes entre los intereses inmediatos y cotidianos de la gente y aquellos llamados «estratégicos» para la defensa del proyecto revolucionario. El resultado fue que la participación popular comenzó a decaer (Vilas, 1990b: 24):

Por un lado, se esperaba que las organizaciones de masas maximizaran los esfuerzos de movilización y propaganda en función de dos objetivos prioritarios: la incorporación de la población de la defensa — ante todo la incorporación de los jóvenes al servicio militar— y el cumplimiento de los planes y directivas económicas del gobierno. Por otro, se insistía desde el gobierno y el FSLN, en que las organizaciones debían mantenerse al frente de las reivindicaciones de sus representados, pero haciéndoles ver a éstos la precedencia de los objetivos anteriores. En otras palabras: las organizaciones debían convencer a la gente que tenían que trabajar duro, integrarse a las movilizaciones militares y bajar el tono de las reivindicaciones específicas.

En estas circunstancias el FSLN postergó el tratamiento de las demandas particulares e inmediatas de la gente apelando a un discurso donde el eje central era la agresión bélica de los Estados Unidos. Con el argumento de la guerra y la necesidad de priorizar todos los esfuerzos para hacerle frente, se bloquearon críticas, postergaron demandas y se agudizó la exigencia de disciplina. A la vez, se adoptó una retórica según la cual la Contrarrevolución no tenía otro origen, ni expresaba otros intereses que los de la política antisandinista del gobierno norteamericano y que ésta — la Contra — obedecía a causas esencialmente externas. Este argumento, aunque fue eficaz para mantener una amplia solidaridad internacional y para combatir la pretensión de la administración de Reagan de aislar a Nicaragua, hizo más difícil el reconocimiento de otros factores de carácter interno relacionados con la manera y el estilo con que el proyecto sandinista se estaba llevando a cabo. Este discurso limitó la capacidad de rectificación del régimen respecto a ciertas políti-

cas y violentó a determinados sectores de la sociedad que, en un principio, sin ser simpatizantes del proyecto sandinista, no se le habían enfrentado⁽⁴⁾.

En este contexto, caracterizado por frágiles lealtades y alianzas, el FSLN recurrió más tempranamente de lo previsto a la convocatoria de elecciones. La apertura de espacios de disensión dentro del marco de las instituciones surgidas de la insurrección podría suponer, creyeron los sandinistas, un valioso recurso en el proceso de hegemonía del espacio político. Sobre la base de ellas, el FSLN pretendía integrar en el proyecto revolucionario a los diferentes partidos políticos opositores.

Con la convocatoria de un proceso electoral y la modificación de la institucionalidad vigente, el FSLN intentó, por un lado, canalizar las demandas de los partidos opositores y, por otro, otorgar al proyecto sandinista una nueva fuente de legitimidad más allá de la originaria basada en la insurrección.

Como anotamos en el capítulo anterior, la cuestión de las elecciones fue un tema recurrente, en todos los actores políticos, desde los inicios del proceso revolucionario. En agosto de 1980, los sandinistas anunciaron la convocatoria de un proceso electoral en un plazo de cinco años. Con todo, el FSLN mantuvo siempre ambigüedades en su discurso sobre el sistema político que pretendía construir. En el programa de gobierno de 1979 se garantizaba «el derecho de todos los nicaragüenses a la participación política y al sufragio universal, así como la organización y funcionamiento de los partidos políticos» (*Encuentro*, 1980: 32). Pero cuando, por primera vez, el FSLN hizo declaraciones públicas sobre este tema, el comandante Humberto Ortega puntualizó (Ortega en Pozas, 1988: 174):

Las elecciones de las que nosotros hablamos, son muy distintas de las elecciones que quieren los oligarcas y traidores, conservadores y liberales, los reaccionarios y los imperialistas... Recuerden que son elecciones para mejorar el poder revolucionario, pero no para rifar quién tiene el poder, porque el poder lo tiene el pueblo a través de su Vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y su Dirección Nacional.

Los dos primeros anteproyectos de ley de partidos políticos que presentó el FSLN en el Consejo de Estado, en 1981 y 1982, no planteaban que los partidos políticos pudieran conquistar el poder. Sin embargo, el 17 de julio de 1983, en un contexto de guerra y crisis económica manifiesta, el Consejo de Estado aprobó una

4) En el próximo epígrafe haremos referencia a los diferentes colectivos sociales que, con el tiempo, irían adhiriéndose al proyecto antisandinista propugnado por la Contra.

ley de partidos políticos donde se establecía que el objetivo de estos era la obtención del poder del Estado⁽⁵⁾.

El porqué de la creación de una ley de semejantes características ha sido objeto de múltiples cavilaciones. Hay quien ha expresado la triple funcionalidad de dicha ley. Por un lado se trataba de mostrar la voluntad de continuar el proceso revolucionario en un marco de pluralismo político, despejando cualquier duda sobre su intención de establecer un régimen de partido único. En segundo lugar, se pretendía establecer un instrumento capaz de recomponer el *frágil* consenso interno. Y finalmente, porque dicha ley podría utilizarse como instrumento de presión política para obligar a que los opositores se definieran sobre su lealtad hacia la legalidad vigente (González, 1992: 363-362).

La anticipación de la convocatoria electoral y el carácter exclusivamente partidario de ésta —hay que tener en cuenta que, hasta entonces, en el Consejo de Estado había representación partidaria y corporativa— puede explicarse a partir de un complejo entramado de razones y circunstancias.

En las sociedades pequeñas y atrasadas, muy abiertas al sistema internacional, como son las centroamericanas, la gravitación de los factores externos es muy fuerte e indica, por definición, fuertes constricciones a sus actores políticos. En este contexto, «la articulación entre *lo interno* y *lo externo* es, por lo tanto, intensa y compleja: nada es totalmente interno y nada es exclusivamente externo» (Vilas, 1991a: 2). En dicho sentido, el ascenso de la agresividad del gobierno norteamericano y sus esfuerzos diplomáticos por aislar internacionalmente a Nicaragua llevaron al sandinismo a reforzar una estrategia de amplias alianzas externas y, en este marco, a modificar su forma de encarar la cuestión electoral⁽⁶⁾.

El discurso de los sandinistas respecto a esta decisión fue ambiguo e irregular. Ciertos líderes declararon la naturaleza estratégica de las elecciones mientras que otros se refirieron a ellas como parte sustancial y preconcebida, como un rasgo definitorio y original, del proyecto revolucionario.

Sobre el acontecimiento electoral, el comandante Tomás Borge declaró (Borge en Molero, 1988: 102-103):

5) La ley fue aprobada en sesión plenaria por el Consejo de Estado el 17 de agosto de 1983 y publicada en la *Gaceta, Diario Oficial*, n. 210, decreto n. 1312 de la JGRN del 13 de septiembre (GONZÁLEZ, 1992: 400).

6) Era evidente que para un grupo grande de gobiernos latinoamericanos y europeos, y organismos no gubernamentales, que no compartían la estrategia norteamericana, la legitimidad insurreccional reclamada por el FSLN era indiscutible pero insuficiente, y solo convocando unos comicios electorales plurales y limpios el gobierno sandinista podría legitimarse.

Para una parte del Frente las elecciones de corte occidental que se celebran en Nicaragua suponen realmente una concesión, necesaria en aras de la paz, pero una concesión al fin [...] Existe un consenso básico: a nivel estratégico, los intereses de la burguesía deben estar subordinados a los del proyecto revolucionario en su conjunto, y a nivel táctico, las elecciones son una decisión necesaria en función de la paz, y éstas desde luego, no ponen en juego el poder sandinista.

En una entrevista realizada, poco antes de las elecciones, a tres miembros de la Dirección Nacional del FSLN —Bayardo Arce, Humberto Ortega y Jaime Wheelock—, publicada en 1986, se hizo también referencia a la naturaleza del proceso electoral y al porqué de su anticipación (Arce en Invernizzi *et al.*, 1986: 83-89):

— *¿Pueden las elecciones obligar al FSLN a abandonar el poder?* — Jurídicamente sí. Las leyes que hemos promulgado establecen que en las elecciones se pone en juego el poder político. Si no recibimos, como dicen los políticos tradicionales, el favor popular de las urnas, pues perdemos el poder. Desde el punto de vista de la realidad no creemos que el FSLN pueda perder ahora el poder, porque se ve claramente que somos una fuerza arrolladora. Basta ver que el pueblo se enfrenta a la agresión bajo las banderas del FSLN.

— *¿Por qué se adelantaron las elecciones al mes de noviembre?* — Fue una forma de enfrentar la agenda justificadora de la agresión norteamericana. Ellos han hablado de nuestras relaciones con países comunistas, del desarrollo de nuestra capacidad defensiva, del supuesto uso de Nicaragua como plataforma de desestabilización de Centroamérica y de la falta de democratización interna. Sobre los tres primeros puntos hemos presentado propuestas muy concretas [...] El único elemento que dejaba espacio a la política norteamericana era el electoral. Por eso decidimos hacerlas en noviembre.

El anuncio, el cuatro de diciembre de 1983, de la celebración de elecciones —anticipándolas un año a la fecha prevista— para noviembre de 1984 intensificó y agitó, por primera vez, la vida partidaria y, con ella, se redefinieron las líneas y estrategias de cada partido. Sin embargo las posturas de las diferentes fuerzas fue la evolución natural de sus trayectorias anteriores.

La campaña electoral, que se extendió de agosto a noviembre de 1984, se con-

virtió en un catalizador excepcional para amplificar las posturas de los diferentes actores políticos ante el proceso revolucionario.

La dualización de los escenarios de enfrentamiento político —el cívico y el militar— y la debilidad organizativa de los partidos opositores provocó una inestable articulación del sistema de actores políticos. Una importante fracción de la derecha fue rápidamente absorbida por la dinámica agresora y se alineó con la Contra. Otros sectores, la llamada «oposición patriótica», mantuvieron una posición autónoma, institucional y cívica.

La «oposición patriótica» abarcaba partidos de adscripción política diversa. Un grupo de ella, la izquierda radical, abogaba por un modelo político de carácter ortodoxo donde no hubiera cabida para las fuerzas políticas burguesas ni para el capital privado. Entre estas fuerzas, a la izquierda del FSLN, aparecían el Partido Comunista de Nicaragua (PCdeN), el Partido Socialista de Nicaragua (PSN), el Movimiento Marxista-Leninista de Acción Popular (MAP-ML) y el partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

En el espectro del centro-derecha, compuesto por las fracciones más progresistas de las corrientes políticas históricas, estaban dos partidos con los que —junto con el PSN y el FSLN— establecieron la coalición Frente Patriótico Revolucionario (FPR). Estos eran el Partido Popular Social Cristiano (PPSC) y el Partido Liberal Independiente (PLI). Finalmente, el Partido Conservador Democrático (PCD), si bien nunca perteneció a la coalición del FPR, compartió una perspectiva política semejante. Los miembros del FPR y el PCD tenían diferencias programáticas sustanciales con el FSLN, pero, aun así, apoyaban el proceso político en que el FSLN tenía una posición hegemónica y siempre se opusieron a la política agresiva de la administración norteamericana. Dichos partidos compartieron con los sandinistas carteras ministeriales, embajadas y magistraturas en la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, entre 1979 y 1983, la oposición patriótica, tuvo poca capacidad, ni tampoco oportunidad, de ejercer una firme influencia política. La institucionalización, por parte de los sandinistas, de canales de participación popular a través de las organizaciones de masas y su priorización de «la lógica de la mayoría» redujo el margen de maniobra de la oposición partidaria (Barnes & Weaver, 1991: 124).

Las fuerzas políticas que rápidamente se alinearon con la estrategia belicista y deslegitimadora de la administración Reagan crearon la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN). En la CDN estaban el Partido Conservador Nicaragüense (PCN), no reconocido legalmente como partido, el Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). La gran patronal nicaragüense, el COSEP, fue otra de las organizaciones que cooperó con la CDN. «Este bloque operó como la caja de resonancia interna para la

estrategia de los Estados Unidos hacia Nicaragua» (Font y Gomà, 1991: 55). Su objetivo fue el de propiciar las condiciones políticas para ampliar la base social de la Contrarrevolución.

La CDN y el COSEP, quienes habían exigido con más insistencia la convocatoria de elecciones, expusieron, en diciembre de 1983, nueve puntos como condición para su participación en los comicios. Entre las demandas de la CDN se contemplaba la existencia de ciertas condiciones para el desarrollo de unas «elecciones limpias»: el cambio de política, por parte del FSLN, en referencia a la legislación de la propiedad privada, a las Fuerzas Armadas y a las organizaciones de masas, y el establecimiento de negociaciones entre el gobierno y representantes de la Contra.

El 21 de julio de 1984 la CDN presentó a Arturo Cruz, funcionario del Banco de Desarrollo Inter-Americano en Washington, ex-miembro de la JGRN y ex-embajador de los Estados Unidos hasta 1982, como *posible* candidato presidencial; sin embargo, el 25 del mismo mes Cruz anunció, en Managua, que la CDN boicotearía las elecciones. Por otro lado, las negociaciones entre el FSLN y la CDN se prolongaron hasta octubre. En septiembre se reabrió el diálogo siendo el Presidente de Colombia, Belisario Betancur, el mediador. El último intento negociador se realizó en Rio de Janeiro, en el marco del encuentro de la Internacional Socialista —donde Willy Brandt ejerció de mediador. De este encuentro, entre Arturo Cruz y Bayardo Arce, no surgió ningún acuerdo.

El 3 de noviembre, cuando Arturo Cruz —quien pretendía otorgar a la CDN la representatividad exclusiva de la oposición al sandinismo— regresó a Washington declaró a la prensa que las elecciones nicaragüenses eran «*totally ridiculous and illegitimate... a farce*» (LASA⁷⁾, 1984: 19).

Sobre la estrategia de la CDN, Robert McCartney, corresponsal de *Washington Post*, expuso (Barnes & Weaver, 1991: 125):

Opposition leaders admitted in interviews that they never seriously considered running in the November 4 elections but debated only whether to campaign for two months and then withdraw.

En la misma dirección, un diplomático norteamericano que pertenecía a la delegación de la *Latin American Studies Association* para el seguimiento de los comicios, concluyó (LASA, 1984: 19):

7) Las siglas LASA se refieren al grupo de investigación de la *Latin American Studies Association*, asociación de carácter académico con sede en Pittsburg.

When the Coordinadora issued their nine-point statement (in December, 1983), the content of that statement showed that they had already decided not to participate. These were things that the Sandinistas would never accept... Cruz himself wasn't even on scene at that point.

El otro bloque electoral estaba compuesto por los partidos políticos agrupados en la coalición FPR —el PPSC, el PLI y el PSN. Los tres partidos sostuvieron posturas nacionalistas y opuestas a la actitud de la administración Reagan. El PCD, quien nunca se integró en el FPR, concurrió en las elecciones con una actitud nacionalista y anti-abstencionista —«abstenerse es dar el voto al FSLN», expuso Clemente Guido, su candidato presidencial.

El PPSC, el PLI y el PSN participaron activamente en la campaña electoral. En el transcurso de ésta se observó un progresivo distanciamiento entre dichos partidos y el sandinismo, siendo el caso más emblemático el del PLI. En su convención Nacional, celebrada poco antes de las elecciones, la mayoría de sus delegados votaron a favor de la retirada de la candidatura liberal de los comicios. Virgilio Godoy, candidato presidencial del PLI y ex-ministro de Trabajo hasta la convocatoria de la campaña, anunció la retirada del PLI del registro electoral. En contra de esta postura Constantino Pereira, el candidato a la vice-presidencia, rechazó tal decisión y convocó a la militancia liberal a votar.

A la izquierda del FSLN, el PCdeN y el MAP-ML continuaron exponiendo su visión de aquello que tenía que ser la revolución, a la vez que acusaban al FSLN de pequeño-burgués. El MAP-ML, inicialmente opuesto a participar en las elecciones argumentando que éstas ofrecerían demasiado espacio a las fuerzas políticas burguesas, finalmente concurrió. El PRT no participó en ellas.

El FSLN participó en la campaña electoral bajo el lema de consolidar el «poder popular». El Frente Sandinista, convencido de su superioridad y ascendencia no hizo abuso de los resortes del poder (LASA, 1984: 18-26). La frase de Daniel Ortega al anunciar el proceso electoral: «Nunca hemos sido tan fuertes como hoy... Nunca el poder del pueblo podrá ser derrotado, ni con balas ni con votos» (Ortega en *Envío*, 1984: 19b), resumía el estado de ánimo de esta formación a quien los sondeos le otorgaban más de un 75% del sufragio.

Según las delegaciones observadoras, el desarrollo de la campaña y la jornada electoral se desarrollaron con una corrección poco propia en los comicios centro-americanos⁽⁸⁾.

8) Además de delegaciones extranjeras en representación de organizaciones internacionales y orga-

Con todo, fracasó la pretensión de los sandinistas de que los comicios sirvieran como herramienta legitimadora del proceso político iniciado en 1979 ante la administración norteamericana. A diferencia de los casos salvadoreño y guatemalteco, la administración Reagan desacreditó las elecciones nicaragüenses, haciendo solo referencia a la postura expresada por la CDN, el COSEP y la jerarquía católica⁹⁾. También siguieron la misma dirección diversas publicaciones periódicas norteamericanas de gran audiencia. La revista *Time* expuso: «No han sido unas elecciones demasiado válidas. Sólo han sido una representación electoral de los sandinistas [...] Los sandinistas ganaron como era de prever, el resultado nunca estuvo en duda, en cierta manera, fue un anticlímax» (*Time* en Chomsky y Herman, 1990: 202).

Fue precisamente durante la semana en que se desarrollaba la recta final de la campaña cuando apareció en una agencia informativa norteamericana la noticia de que un buque de carga con dirección a Nicaragua transportaba aviones soviéticos MIG. Se creó un ambiente de crispación entre la opinión pública estadounidense respecto a la hipotética amenaza que suponían los sandinistas. Este acontecimiento, y no las elecciones, ocupó la atención de los medios de comunicación¹⁰⁾. Las elecciones nicaragüenses pasaron desapercibidas (Chomsky y Herman, 1990: 229). En referencia al tratamiento que las autoridades norteamericanas dieron a éstas, un alto oficial estadounidense expuso (LASA, 1984: 32):

The Unites States is not obliged to apply the same standard of judgement to a country whose government is avowedly hostile to the US as a country, like El Salvador, where it is not. These people (the sandinistas) could bring about a situation in Central America which could pose a threat to US security. That allows us to change our yardstick.

nizaciones no gubernamentales, fue significativa la presencia de las misiones de observación de los Parlamentos holandés, irlandés, británico, y una delegación de la Internacional Socialista. Sobre el desarrollo del proceso electoral y su análisis cabe remitirse a LASA, 1984. En referencia a la legislación y reglamentación del proceso, dirigirse a CLOSE, 1985; GONZÁLEZ, 1992: 358-452.

9) Sobre la propaganda realizada y los medios utilizados por la administración Reagan respecto a las elecciones nicaragüenses y su tratamiento diferenciado en comparación a los casos salvadoreño y guatemalteco, recurrir a CHOMSKY y HERMAN, 1990: 154-234.

10) Evidentemente, la administración norteamericana desvió la atención de las elecciones hacia la «posible capacidad agresora» de los sandinistas. Que los aviones existieran o no daba igual. Respecto a esta forma de actuar, posteriormente, el antiguo editor del *New York Times*, John B. Oakes, sentenció (CHOMSKY y HERMAN, 1990: 228): «The most fraudulent thing about the Nicaraguan elections was the part that the Reagan administration played in it».

Las consecuencias de los resultados del proceso electoral y de la campaña desestabilizadora de la administración Reagan en el interior de Nicaragua fueron diversas. Las declaraciones del gobierno norteamericano crearon una situación de gran tensión: se promulgó el estado de alerta el día 7 de noviembre —apenas setenta y dos horas después de las elecciones. Se activaron las estructuras de defensa civil y las movilizaciones masivas de estudiantes hacia las zonas cafetaleras, en el momento en que se iniciaba la recolección del grano, fueron canceladas. Se realizaron ejercicios militares en preparación de una posible invasión, cuya inminencia denunció el gobierno nicaragüense ante el consejo de Seguridad de la ONU. Al mismo tiempo, la Contra recrudeció sus operaciones de acoso sobre objetivos civiles. «La guerra volvió a convertirse en el centro del debate político» (González, 1992: 442).

En lo que atañe a los resultados electorales, el FSLN recibió un amplio consenso político en torno a su proyecto político, aunque no con la amplitud que pensaba obtener. Por otro lado, el PCD, PLI y PPSC obtuvieron el 27% de los sufragios, hecho que ponía de manifiesto la relevancia que tenía el pluralismo político en el proceso revolucionario y la relativamente sólida presencia de las afiliaciones políticas tradicionales. De esta forma, la derecha y el centro no abstencionistas se situaron en posición de intervenir en la toma de decisiones del proceso constituyente.

Sin embargo, el proceso electoral no supuso el final de la situación conflictiva en que estaba inmerso el país. La intensa ofensiva de la Contra en octubre de 1984 ahondó la centralidad política del escenario militar. En dicho marco, la baja combatividad de los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional —quienes, junto al FSLN, estaban gestando el proceso constituyente—, la negación de personalidad jurídica a los partidos que componían la CDN⁽¹¹⁾, y la obstrucción de los espacios políticos abiertos en el período del proceso electoral fruto de la promulgación del Estado de Emergencia —a partir de septiembre de 1985— emplazó a la oposición fuera de los canales institucionales que pretendió ofrecer el régimen con los comicios de 1984.

Los esfuerzos de la CDN se centraron en deslegitimar el sistema político nicaragüense, en demandar a la administración norteamericana apoyo para la Contrarrevolución y en presionar a aquellos sectores sociales que nunca mostraron un apoyo explícito al proyecto sandinista. El 2 de marzo de 1985, la CDN y el Frente Democrático Nicaragüense (FDN) —una de las organizaciones más significativas

11) En función de la legislación entonces vigente, la inscripción a las elecciones de 1984 era requisito para la obtención de personalidad jurídica.

de la Contra— redactaron y expusieron en San José de Costa Rica el «Documento de la Resistencia Nicaragüense para el Diálogo Nacional» donde se cuestionaba la legitimidad de las elecciones realizadas en 1984, se reclamaba una nueva ley electoral, unos nuevos comicios y la creación de un gobierno de transición donde figuraran miembros de la CDN y del FDN (Barnes & Weaver, 1991; LeoGrande, 1992). Este documento, junto con las declaraciones de los dirigentes de la CDN y de los representantes alineados con la Contrarrevolución, tuvieron gran cobertura en el periódico *La Prensa* y en los comunicados de la Conferencia Episcopal.

A poco tiempo del proceso electoral, la dinámica de confrontación incrementó el nivel de polarización. Si bien las elecciones de 1984 constituyeron un punto de inflexión en el proceso democratizador iniciado en 1979 —por cuanto se prefiguraron las bases pluralistas y representativas del nuevo diseño político que, posteriormente, había de plasmarse en la nueva Constitución de la República—, éstas no supusieron la desaparición de la arena militar ni la pérdida de centralidad de la oposición antisistema. La guerra se recrudeció y con ella perdió peso la vida partidaria.

La arena militar permanecía abierta y activa, y en ella se dirimía la misma existencia del proceso revolucionario. La importancia de ésta hace que en el próximo epígrafe analicemos el otro actor preeminente en la conducción política del proceso: la Contrarrevolución.

4.2. LA CONTRARREVOLUCIÓN

El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. Es fácil pensar que en política existe un principio semejante entre las fuerzas sociales que se desplazan al *statu quo* en un momento dado y quienes quieren mantener sus privilegios.

Hemos observado la forma en que la guerra contrarrevolucionaria impactó en la organización partidaria del FSLN y en la evolución y la estrategia del proyecto revolucionario. Otras cuestiones de gran interés —y que analizaremos en este epígrafe— son las cambiantes fórmulas organizativas de la *Contra* (en función de sus integrantes y de su capacidad de cooptación de heterogéneos colectivos) y sus objetivos (también diversos según la fuerza y la capacidad estratégica en cada momento).

Las fuerzas contrarrevolucionarias, desde 1979 hasta 1982, no plantearon nunca un reto real para la estabilidad política del proyecto sandinista. Éstas se componían de algunos miles de soldados y oficiales de la antigua Guardia Nacional que huyeron de Nicaragua para refugiarse en Honduras o Miami y que, periódicamente,

hacían incursiones militares en las regiones nicaragüenses limítrofes donde, preferentemente, atacaban a objetivos civiles de carácter estratégico⁽¹²⁾.

Fue a partir de 1982, cuando la mayoría de organizaciones contrarrevolucionarias, encabezadas por ex-militares somocistas integrados en el Estado Mayor del FDN y connotados civiles antisandinistas, pretendieron crear un proyecto político-militar alternativo al régimen sandinista. El apoyo financiero y logístico brindado por la CIA y por los Departamentos de Estado y de Seguridad de la administración Reagan, junto con la aquiescencia de las autoridades hondureñas en «prestar» zonas de su territorio como campamentos y bases logísticas a las fuerzas contrarrevolucionarias, conllevaron la existencia de una amenaza factible para el proceso revolucionario⁽¹³⁾.

En este sentido, las «fuerzas insurgentes» nicaragüenses —la Contra— tuvieron, durante la mayor parte de su existencia, unos caracteres completamente diferentes a las fuerzas insurgentes salvadoreñas y guatemaltecas. A diferencia del resto de fuerzas insurgentes centroamericanas, las bases logísticas y los centros de decisión de la Contra estaban fuera del territorio nicaragüense. En lo que se refiere al financiamiento, siempre dependió de los Estados Unidos. En sus filas estuvieron ex-guardias somocistas dirigidos por miembros relevantes del régimen somocista. El objetivo de la Contra era —tal como vimos anteriormente— la reversión del proyecto transformador propuesto por los sandinistas⁽¹⁴⁾.

Por aquel entonces, en 1982, si bien las fuerzas contrarrevolucionarias no lograron consolidarse en ninguna región nicaragüense sí tenían, por primera vez, cierta capacidad de maniobra en las zonas fronterizas de Nicaragua y un notable

12) Después del derrocamiento del régimen somocista, en la frontera hondureña se asentaron cerca de 8.000 ex-guardias. Un buen porcentaje de ellos, al poco tiempo de su llegada, empezaron a reorganizarse. A mediados de 1981 ya era pública la preparación y el entrenamiento militar de ex-guardias nacionales por parte de ex-boinas verdes en centros de adiestramiento en California, Lousiana, Florida y Carolina del Norte (LOZANO, 1989: 291).

13) Sobre las relaciones secretas entre la administración Reagan, la CIA y el Consejo Nacional de Seguridad con las fuerzas de la Contra, cabe dirigirse a LAFEBER, 1993: 294-338; YEVES, 1990.

14) Tal como expuso la editorial de una revista nicaragüense, la diferencia básica, a inicios de los años ochenta, entre los diversos conflictos armados en Centroamérica era que (*Envío* en IBARRA, 1991: 101) en el Salvador y en Guatemala las raíces de la guerra están dentro. Se trata de un conflicto que surge de una profunda injusticia estructural. En Nicaragua las raíces de la guerra están fuera. Se trata de un conflicto que surge contra el reordenamiento de la sociedad hacia una mayor justicia. Este es un elemento básico que indica la asimetría de estas dos guerras.

Posteriormente —como observaremos—, con el desarrollo del conflicto, la guerra contrarrevolucionaria irá adquiriendo un carácter donde las variables internas tendrían un papel de gran relevancia. Es cierto que en su inicio la guerra contrarrevolucionaria respondió a factores externos, con el paso del tiempo y, debido a ciertos errores del sandinismo, se irían involucrando ciertos colectivos sociales nicaragüenses.

apoyo exterior. La estrategia que éstas realizarían sería, por un lado, la presentación de una imagen moderada y pluralista —con el objetivo de obtener sólidos apoyos en la administración Reagan y en el Congreso estadounidense— y, por otro, la unificación del máximo de grupos antisandinistas bajo una misma organización —en aras de aumentar la credibilidad de la amenaza y consolidar un bloque alternativo al gobierno sandinista.

En la dirección expuesta, el 7 de diciembre de 1982, en una conferencia de prensa realizada en el *Hilton Convention Center* de Florida, se presentó el directorio político del FDN —organización bajo cuyas siglas la CIA había logrado reunir a la mayor parte de bandas armadas antisandinistas surgidas de la desintegración de la Guardia Nacional que actuaban en las zonas fronterizas del norte del país⁽¹⁵⁾ y a las que, posteriormente, se irían integrando otras organizaciones antisandinistas de carácter militar que actuaban en otras regiones (en la zona de la costa del Caribe y en la frontera costarricense⁽¹⁶⁾).

Con el anuncio de que el directorio del FDN estaría compuesto exclusivamente por civiles, dicha organización pretendía dar una «nueva»⁽¹⁷⁾. Sobre la base de esta imagen moderada, la administración norteamericana pudo canalizar ayuda finan-

15) El espectro de organizaciones armadas antisandinistas, en su inicio, fue amplio y confuso. Los primeros grupos en constituirse, a finales de 1980 e inicios de 1981, fueron la *Legión 15 de septiembre*, el *Ejército de Liberación Nacional* y la *Alianza Democrática Revolucionaria Nicaragüense*, conformados en su mayor parte por oficiales y soldados de la desaparecida Guardia Nacional asentados en Honduras. Por esas fechas también se estructuró la *Organización 11 de Noviembre*, antecedente de la *Unión Democrática Nicaragüense* —creada por elementos que se opusieron a Somoza y que pocas semanas después del triunfo revolucionario adoptaron posiciones antisandinistas— y cuyo brazo armado fueron las *Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragüenses*. Mediante la fusión de las tres primeras organizaciones, a finales de 1982 se creó la *Fuerza Democrática Nicaragüense* (FDN), asentada en la frontera hondureña-nicaragüense y, sin duda, la más importante y numerosa.

16) A inicios de la década de los ochenta existían tres frentes militares: 1) la zona fronteriza con Honduras, donde actuaba la FDN; 2) la zona de la Costa Atlántica, donde actuaban organizaciones militares lideradas por líderes locales; y 3) la zona sur, donde actuaba la organización *Alianza Revolucionaria Democrática* (ARDE) capitaneada por el ex-comandante sandinista Edén Pastora y por el antiguo miembro de la JGRN Alfonso Robelo. Con el tiempo, las organizaciones que actuaban en los frentes de la Costa Atlántica y sur, o se integrarían al armazón orgánico y estratégico de la FDN o se desactivarían militarmente debido a su derrota militar o al entablamiento de negociaciones con el gobierno sandinista. Por esta razón, a lo largo del presente epígrafe haremos referencia a la estrategia y organización de la FDN y a sus periódicas mutaciones.

17) Si bien la composición del directorio político de la Contra era formado por seis civiles sobre siete miembros, el Estado Mayor lo integraban en su totalidad antiguos oficiales de la Guardia Nacional. El carácter básicamente ex-somocista de los dirigentes militares de la Contra se mantendría durante casi toda su existencia, así, por ejemplo, a principios de 1985, 46 de los 48 jefes militares más importantes de la FDN provenían de la Guardia Nacional.

ciera y logística hacia dicha organización. A partir de entonces, ciertos medios informativos norteamericanos ofrecieron una imagen democrática y civil de la Contra (*Washington Inquirer* en VV. AA., 1984: 62):

Contras are democratic. The democratic commitment of the Contras seems clear. Of its seven-man Directorate, only one member, Enrique Bermúdez, was a follower of Somoza —and even was exiled by Somoza in the final days of his regime. Most of the leaders are members of the former Conservative Party, established by assassinated anti-Somoza editor, Pedro Joaquín Chamorro.

A partir de entonces, la pretensión de la Contra —pretensión coincidente con la de la administración Reagan— se basó en la creación de una «estructura político-militar alternativa» al régimen sandinista. Una organización armada que (sin la necesidad de una intervención directa de los Estados Unidos en territorio nicaragüense) fuese capaz de vencer, de manera progresiva y sistemática, en el campo militar. Se trataba de constituir una organización político-miliar capaz de presentarse como una fuerza «liberadora y democrática» que ofreciera un proyecto político alternativo (Ibarra, 1991: 106-107). La meta era el derrocamiento del gobierno sandinista y el establecimiento de un sistema político con una institucionalidad de corte liberal al estilo de los regímenes «constitucionales» que los Estados Unidos estaban promoviendo en El Salvador, Guatemala y Honduras.

En esas fechas, las fuerzas antisandinistas no solo habían incrementado considerablemente el número de sus efectivos (algunas fuentes señalaban la existencia de más de 4.000 miembros enrolados), sino que las actividades de la CIA y su participación en las acciones encubiertas contra Nicaragua eran cada vez más comprometedoras⁽¹⁸⁾. De esta forma, el ejército contrarrevolucionario pasó a la ofensiva lanzando varias embestidas de gran relevancia entre 1982 y 1984.

La contundencia de los ataques no dejó de sorprender a las autoridades sandinistas. En 1983, por primera vez, los contras consiguieron penetrar y asentarse en

18) Durante ese año, oficiales de la CIA habían confirmado al comité de inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que la voladura de los puentes de Río Negro y Ocotol, en el mes de marzo, había sido ejecutada por equipos de expertos en demolición entrenados por dicha agencia (LOZANO, 1989: 293). A inicios de 1983, dicha agencia destinó 50 millones de dólares en actividades de inteligencia en la región centroamericana que involucraban 150 agentes y técnicos. Posteriormente también se supo que el ataque a los depósitos de combustible del puerto de Corinto, el 11 de octubre de 1983, se llevó a cabo por agentes latinos de la CIA —conocidos en inglés por las siglas UCLA (*Unilateral Controlled Latino Assets*).

varias extensiones del norte y centro de Nicaragua, desarrollando tácticas de lucha irregular que les permitieron durante algún tiempo ganar la iniciativa del ejército regular¹⁹⁾. La situación «defensiva» del régimen sandinista no comenzó a revertirse hasta finales de 1984, cuando, al año de la implantación del servicio militar obligatorio, el ejército nicaragüense mejoró su capacidad ofensiva, adoptando también tácticas de guerra irregular (Pozas, 1988: 112).

Los factores que contribuyeron a que las fuerzas contrarrevolucionarias pudiesen en *jaque* al régimen sandinista fueron diversos. Entre ellos, cabe observar variables de carácter militar y logístico —como la mejor organización del ejército contrarrevolucionario debido al asesoramiento externo (básicamente estadounidense, israelí, salvadoreño y, en un inicio, argentino)—, el mejoramiento de su sistema de comunicación y el abastecimiento aéreo desde El Salvador y Honduras. Sin embargo, a mediados de la década de los ochenta, las variables de tipo «interno» fueron las más relevantes. En este sentido, con el tiempo, el proyecto contrarrevolucionario fue ganando cierta base social.

La base social con la que se nutrió la Contra procedió de un conjunto de colectivos que reaccionaron en contra de las medidas realizadas por el FSLN durante los primeros años del proceso revolucionario.

Entre estos colectivos cabe señalar, por un lado, a la jerarquía de la Iglesia Católica y a los profesionales y empresarios reunidos en el COSEP —quienes ofrecieron a la Contra un discurso, espacios de expresión y ciertos espacios políticos. Por otro lado, estuvieron diversos sectores del campesinado del interior del país y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica —quienes aportaron a la Contra

19) Las ofensivas de mayor envergadura que realizó la Contra, en esa época, fueron cinco: 1) en diciembre de 1982 fuerzas de la FDN intentaron tomarse la ciudad norteña de Jalapa, a la vez que MISURA —organización supeditada a la FDN que operaba en la Costa Atlántica— intentó apoderarse de Puerto Cabezas. En ambas operaciones, en caso de haber resultado exitosas, se habría instalado un gobierno provisional contrarrevolucionario; 2) en enero y febrero de 1983 la FDN consiguió infiltrar dos mil hombres en la franja norte de Nicaragua; 3) en septiembre de 1983 la FDN y ARDE atacaron objetivos económicos y estratégicos entre los que destacaron el bombardeo del aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua, las terminales de descarga de petróleo en Puerto Sandino y los depósitos de combustible de Corinto; 4) a inicios de 1984 se minaron los tres puertos más importantes del país, Corinto, Puerto Sandino y El Bluff —donde se descubrió la complicidad directa de la CIA—; y 5) en abril y mayo de 1984 la FDN consiguió la mayor penetración de fuerzas contrarrevolucionarias en el país introduciendo casi seis mil hombres hasta el centro del país, donde, por primera vez, consiguieron permanecer varios meses. Para una información más extensa de dichos ataques: POZAS, 1988: 110-117. Hasta el año 1984 la contrarrevolución llevó la iniciativa en la arena militar, suponiendo un reto real a la existencia misma del régimen. A partir de entonces, aquella perdió terreno e iniciativa frente a las fuerzas sandinistas.

efectivos humanos con que nutrir sus filas y la posibilidad de que ésta se implantara en un medio hostil a las fuerzas sandinistas ⁽²⁰⁾.

La implicación de dichos colectivos en el «proyecto contrarrevolucionario» fue desigual, tanto en lo que atañe a sus intereses como a la secuencia temporal de su enrolamiento. La jerarquía de la Iglesia Católica fue, desde los inicios de la revolución, portavoz de los sectores más conservadores, a la vez que dio cierta legitimidad a la Contra y nutrió de discurso, valores y argumentos a colectivos que iban distanciándose del proyecto sandinista. El COSEP se implicó con la Contrarrevolución en la medida en que ésta le proporcionó espacios de presión donde hacer sentir sus intereses. Las comunidades campesinas del interior y de la Costa Atlántica se integraron en la Contrarrevolución una vez que «entraron en contacto» (o *tropezaron*) con el proyecto sandinista. Éstas recurrieron al discurso tradicional que les ofreció la jerarquía eclesiástica y lucharon —con las armas— por la preservación de un medio de vida, una articulación social y un haz de valores de corte tradicional que el sandinismo les violentó. La Contra les ofreció el espacio y los medios con qué luchar.

La *cuestión religiosa* fue uno de los aspectos que contribuyó a la polarización de la sociedad nicaragüense. Aunque las relaciones entre el sandinismo y la Iglesia Católica han de observarse desde la heterogeneidad de los dos colectivos, el proyecto sandinista tuvo la hostilidad de la jerarquía eclesiástica y de buena parte de la población que asumía como propios los valores religiosos tradicionales ⁽²¹⁾. Serían las jerarquías religiosas las primeras en denunciar, anticipándose incluso a las fuerzas políticas de la oposición, las tendencias hegemónicas de los sandinistas.

En los inicios del período revolucionario, la confrontación entre la Iglesia Católica y el FSLN se expresó en torno a la promoción y apoyo de los sandinistas a la

20) Creemos que por la singular dinámica y naturaleza que adquirió el conflicto político en la Costa Atlántica, dicha cuestión, aunque sea importante tenerla presente, no nos corresponde analizar con profundidad en el presente estudio. Con la pretensión de trazar las líneas básicas de lo que supuso el conflicto acaecido en la Costa Atlántica, cabe enunciar que, en dicha zona, hasta la fecha, pervivieron redes de articulación social de tipo muy primario. El contacto de esta región con el resto del país era casi nulo —cabe observar que los costeños se refieren al resto de los nicaragüenses como «los españoles». Con la llegada, en 1979 de la «Revolución sandinista», y con ella un conjunto de transformaciones sociales y políticas, los costeños reaccionaron con la precaución con que se recibe un proyecto ajeno. La mutua incomprensión y los celos acabó generando una dinámica de hostilidad. Posteriormente, la utilización de dicho conflicto por la administración norteamericana desencadenó un enfrentamiento abierto que no cesaría hasta mediados de la década, con el establecimiento de negociaciones a partir de las cuales se dictaría el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica.

21) Sobre el enraizamiento y la polarización del conflicto religioso durante el período sandinista hay una extensa literatura: DODSON, 1991; CABESTERO, FORCANO Y VIGIL, 1986; LEVINE, 1990b; RIEKE, 1990.

Teología de la Liberación. La jerarquía católica acusó al FSLN de pretender subordinar la Iglesia Católica a sus objetivos políticos. Posteriormente, las acusaciones de ésta contra el gobierno giraron alrededor de la violación de los derechos humanos y de la falta de libertades de la población⁽²²⁾. Con el tiempo, las acusaciones de la Conferencia Episcopal se agudizaron, siendo su lenguaje más áspero para con el régimen y, al tiempo, más favorable a los opositores, incluyendo, entre ellos, a la Contrarrevolución⁽²³⁾ (González, 1992: 288).

El COSEP, por su parte, se convertiría en una de las organizaciones vertebradoras de la oposición interior al sandinismo⁽²⁴⁾. Los ejes básicos del enfrentamiento con el FSLN fueron: las confiscaciones y expropiaciones llevadas a cabo por el régimen bajo la ambigua fórmula de «propiedades próximas al somocismo», la cuestión de la «falta de clima político» para la realización de inversiones privadas, la demanda de la celebración de elecciones, la desconfianza hacia la amplia red de organizaciones sandinistas, la acusación de «sandinización» de las instituciones estatales y el temor frente a la fuerte retórica antiimperialista (Coraggio y Torres, 1987: 69-70).

22) La Iglesia Católica argumentó sus discrepancias con el proceso político revolucionario con gran profusión. De entre los medios de que ésta dispuso cabe resaltar su constante aparición en el diario *La Prensa*. Mensajes de tipo similar también fueron transmitidos por radios cuyas señales llegaban desde Honduras y Costa Rica.

23) La jerarquía eclesiástica realizó durante todo el período sandinista declaraciones oficiales que acusaban y combatían al gobierno. Entre estas cabe destacar cuatro que tuvieron gran repercusión. La primera, el 18 de febrero de 1982, en la que daban cuenta de «graves violaciones de los derechos humanos del pueblo miskito». Una segunda, en agosto de 1983, mediante la cual rechazaban el servicio militar obligatorio, cuyo proyecto de ley estaba, en esos momentos, en el Consejo de Estado, por considerar que el ejército de Nicaragua era de carácter partidista. La tercera se refería a los comicios de 1984, ante los cuales la Conferencia Episcopal les dio el mismo trato que a los últimos realizados bajo el somocismo. La última de las cuatro, realizada en Miami, en enero de 1986, por el Cardenal Obando y por el obispo Vega, donde se descalificaba el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que culpaba a los Estados Unidos de intervenir en Nicaragua (CORAGGIO Y TORRES, 1987: 230). Junto a declaraciones de este tipo, «se silenciaron las operaciones de la contrarrevolución, las cuales solían ir acompañadas de pasquines en los que se afirmaba que Miguel Obando, el Papa y Dios, compartían sus acciones. Generalmente los obispos se negaron a officiar servicios religiosos a las víctimas de los contras. Desde 1984 las jerarquías católicas demandaron un diálogo con los contrarrevolucionarios, calificados como *alzados en armas*» (GONZÁLEZ, 1992: 289).

24) Desde principios de los ochenta, la sucesión de enfrentamientos y acusaciones convirtieron al COSEP en el eje articulador de las fuerzas opositoras —no es casualidad que una buena proporción de los partidos opositores tuvieran como líderes a directivos de esta organización. En el fondo, debido a la débil estructuración asociativa y partidaria de Nicaragua, la mayor parte de profesionales no simpatizantes con el sandinismo se agruparon en esta confederación de carácter gremial. De las diferentes organizaciones agrupadas en el COSEP surgieron buena parte de los dirigentes, el financiamiento, el apoyo, los contactos internacionales y la infraestructura para, posteriormente, crear una oposición cívica real al FSLN.

Finalmente, cabe señalar la repercusión de la revolución en los medios rurales del interior del país y en los colectivos étnicos de la Costa Atlántica. Como ya señalamos, la insurrección tuvo un eminente carácter urbano y el proyecto sandinista posterior se nutrió, en gran medida, de una cultura urbana, estatista y, hasta cierto punto, jacobina. El choque entre la cultura urbana y la rural, la propaganda y las movilizaciones desplegadas desde los medios sandinistas, y el desprecio hacia los hábitos y valores tradicionales que compartía el campesinado de las regiones centrales, engendraron la reticencia de estos colectivos hacia el proyecto revolucionario⁽²⁵⁾.

La violenta sustitución de las autoridades tradicionales, articuladas a partir de relaciones de carácter personal y clientelar, por unas nuevas basadas en formas y simbologías diferentes, fue otro de los factores a partir de los cuales ciertos colectivos se distanciaron del proyecto transformador propugnado por el FSLN. En este marco, el incremento del control sobre la vida política y sobre las formas de producción y distribución del excedente crearon malestar en ese medio. Las acusaciones que recibieron estos sectores por parte de la dirigencia sandinista —que en su gran mayoría no era natural de esas zonas—, junto con la promulgación del Estado de Emergencia y el establecimiento del Servicio Militar de carácter obligatorio, hicieron del campesinado un colectivo propicio a un posterior enrolamiento en las filas de la Contra (Bendaña, 1991; Núñez *et al.*, 1991). A mediados de los ochenta, la continua penetración y notable presencia de efectivos de la Contra, en áreas rurales del interior no fue ajena a la existencia de una base social que simpatizaba con ella.

Frente a las importantes ofensivas de la Contra, el gobierno sandinista —como vimos anteriormente— rearticuló sus prioridades y objetivos. A nivel interior, las Fuerzas Armadas readecuaron su estrategia militar, se redefinió la organización del FSLN y de las organizaciones de masas, y se rediseñó la administración del Estado con el objetivo de combatir la agresión. A nivel externo, el gobierno sandinista reaccionó con una intensa actividad diplomática, tanto bilateral como en diversos foros y tribunales internacionales⁽²⁶⁾ —entre ellos cabe destacar la importancia que

25) Los valores tradicionales y la retórica anticomunistas fueron, para los colectivos campesinos, dos referentes en la lucha contra el sandinismo. En esta dirección, la frase, tantas veces repetida, de «¡Con Dios y patriotismo derrocaremos al comunismo!» es una pequeña muestra.

26) En lo que se refiere a actividad diplomática, el gobierno sandinista no se limitó a las negociaciones promovidas por el *Grupo Contadora* (marco negociador creado, en enero de 1983, por México, Venezuela, Colombia y Panamá), sino que en varias ocasiones convocó al Consejo de Seguridad de la ONU. Los proyectos de resolución propuestos por el gobierno nicaragüense en el marco de la ONU siempre fueron vetados por los representantes norteamericanos. Cabe señalar, finalmente, que también se recurrió a foros partidarios de carácter internacional como la Internacional Socialista o

tuvo la demanda, el 10 de mayo de 1984, contra la administración norteamericana en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

Hasta 1986 la intensidad de la agresión fue incrementándose⁽²⁷⁾. Pese a ello, las reformas militares llevadas a cabo por el gobierno y el establecimiento de negociaciones con diversos colectivos en armas —mayoritariamente en la Costa Atlántica— empezaron a debilitar la capacidad estratégica de la Contra⁽²⁸⁾. En esta situación de «estancamiento de perspectivas», los dirigentes contrarrevolucionarios decidieron refundar la organización. Calero, Robelo y Cruz, los dirigentes civiles de la Contra, refundaron, el 12 de junio de 1985, en Panamá, la FDN con el nombre de Unidad Nicaragüense Opositora⁽²⁹⁾ (UNO). La UNO se definió como el «organismo conductor de los esfuerzos de los nicaragüenses en todos los frentes de lucha» (Coraggio y Torres, 1988: 221). La refundación obedeció a la pretensión de ofrecer una «renovada» imagen pluralista y civil a la organización contrarrevolucionaria. La utilización sistemática, por parte del FDN, de métodos violentos y el carácter terrorista de estos (sobre todo debido a los ataques a objetivos civiles) dio a esta organización poco crédito ante los organismos internacionales.

Entre 1986 y 1987 se observó el fracaso de las pretensiones militares de la Contra. La derrota militar del gobierno de Managua empezó a percibirse como una tarea imposible. La capacidad de penetración militar de la Contra se estancó al empezar a perder parte de sus apoyos originales (a partir del replanteamiento de la Reforma Agraria, del establecimiento de negociaciones con las comunidades de la Costa Atlántica y de la práctica derrota de los frentes del sur). Estos hechos —junto con la legitimación internacional del gobierno sandinista y los acontecimientos que surgieron en la escena internacional⁽³⁰⁾— hicieron replantear —a la dirección

la COPPAL.

27) La estrategia belicista de la administración Reagan se agudizó desde finales de 1984. A mediados de 1985 el presidente Reagan realizó discursos en el Congreso donde calificó a los contrarrevolucionarios como *los paladines de la libertad*. En marzo de 1986, al entrevistarse con los tres líderes más relevantes de la Contra —Calero, Robelo y Cruz— Reagan afirmó: «Yo también soy un contra» (POZAS, 1988: 216).

28) Sobre la recuperación de la iniciativa del gobierno sandinista en la arena militar ver: NÚÑEZ *et al.*, 1991: 271-293; POZAS, 1988: 229-253. Respecto a la capacidad del gobierno sandinista para entablar negociaciones con ciertos colectivos enfrentados y a la rectificación de ciertas políticas —sobre todo en lo que se refiere a la Costa Atlántica y la Reforma Agraria—, ver: CORAGGIO Y TORRES, 1987: 94-110.

29) Cabe distinguir esta organización de la coalición electoral que, con las mismas siglas, se presentó a los comicios de 1990.

30) Entre los acontecimientos que marcan un hito en el escenario centroamericano cabe destacar: 1) el entablamiento, por primera vez, de negociaciones de pacificación entre los presidentes centroame-

política y la militar de la Contra y a la misma administración norteamericana— la naturaleza y los fines de la actividad armada.

Esta nueva coyuntura abría, a la Contra y a la administración norteamericana, tres alternativas. La primera, consistía en acabar, con una victoria rápida y contundente. Ello hubiera significado *inevitablemente* la intervención directa de las Fuerzas Armadas estadounidenses; opción que hubiera conllevado un indudable riesgo para el prestigio de la administración de los Estados Unidos —dado el estado de la opinión pública norteamericana ante el «conflicto» centroamericano— y malestar entre los países latinoamericanos —que, mayoritariamente, apoyaban una salida negociada⁽³¹⁾.

La otra alternativa era la «continuista». Se trataba de mantener a la Contra e intentar minar, a través de los efectos de una guerra prolongada, la legitimidad del régimen. Esta opción, si bien era posible, ofrecía pocas posibilidades de éxito dada la correlación de fuerzas existentes. En esta dirección, el agregado de defensa de la embajada norteamericana en Managua, A. Cunningham, expuso (Cunningham en Ibarra, 1988: 107):

Desde mi punto de vista, las guerras de larga duración tienden a favorecer a las fuerzas marxistas, ya sea que éstas se encuentren en la insurgencia o en el poder. Los marxistas tienen altos compromisos ideológicos, organizaciones muy fuertes y numerosas y efectivas formas para movilizar al pueblo.

La tercera y última, era la de desplazar el centro de la ofensiva política del terreno militar al civil y, por tanto, impulsar la oposición civil interna y el directorio político de la Contra. No se trataba de la desaparición de la arena militar ni de disminuir la presencia y hostigamiento por parte de la Contra, sino de un cambio de estrategia. En esta nueva etapa, la presencia militar tendría como objetivo ejercer la presión necesaria para que los sandinistas hicieran concesiones sucesivas a la oposición.

ricos (Esquipulas I y II); 2) la resolución de la demanda del gobierno nicaragüense que presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya; y 3) la *relevancia* que tomó el *escándalo Irán-Contra* y su impacto en la administración Reagan.

31) No debemos olvidar que el conflicto centroamericano provocó grandes divisiones entre la opinión pública norteamericana y que no siempre las ayudas solicitadas por la administración Reagan fueron aprobadas por el legislativo. A la vez, un estudio realizado por la *Rand Corporation* (un *think-tank* asociado al Pentágono) concluyó que una invasión de tropas estadounidenses a Nicaragua requeriría unos 100.000 efectivos, que se trataría de una guerra relativamente larga e intensa, y que supondría una gran movilización —en las ciudades norteamericanas— de los colectivos pacifistas (Gutman en LAFEVER, 1993: 300).

En esta dirección, después de diversas pugnas internas provocadas por divergencias sobre los puestos de responsabilidad y el control de los recursos económicos provenientes de la administración norteamericana, los miembros de la Contra refundaron, por segunda vez, su organización. Dieron un nuevo nombre y una renovada estructura organizativa a la Contra con el fin de ganar espacios militares, políticos y diplomáticos (*Envío*, 1987: 1). Así, el 8 de mayo de 1987, la organización político-militar contrarrevolucionaria UNO se reunió en Miami y se transformó en otra organización: la Resistencia Nicaragüense (RN). Otra vez se puso énfasis en el carácter plural y civil de su dirección.

La RN se presentó como una organización pluralista y, sobre esta base, anunció la incorporación de nuevas figuras civiles en su seno. La estructura de la RN se compuso de 54 miembros (6 conservadores, 6 liberales, 6 socialcristianos, 6 socialdemócratas, 6 de la Costa Atlántica, 6 de la empresa privada, 6 del sector laboral y 6 del sector agrario). La máxima autoridad era el Directorio Político. Éste se componía de siete miembros. El 13 de mayo, fueron elegidos seis: Adolfo Calero, Alfredo César, Pedro Joaquín Chamorro —hijo—, Alfonso Robelo, Arístides Sánchez y Azucena Ferrey. En realidad había pocas novedades con respecto a la UNO⁽³²⁾.

La novedad pasaba por el cambio de estrategia, tanto de la Contra como de los sandinistas, acerca de la necesidad de entablar negociaciones para acabar con el conflicto armado. En esta dirección, la Contrarrevolución, aunque no tenía perspectivas de un desenlace militar a su favor, era consciente de que su existencia suponía la constante erosión del gobierno sandinista.

Por primera vez, en 1987, el gobierno sandinista expresó públicamente su voluntad de negociar con la Contra. El discurso realizado hasta entonces por las autoridades sandinistas, según el cual «la Contra no podía ser un interlocutor válido para el gobierno porque ni existía por sí misma ni tenía capacidad de decisión, y de que ésta sólo era el brazo ejecutor de las decisiones que se adoptaban en Washington»⁽³³⁾, dejaba de ser totalmente cierto. En este sentido, poco antes del establecimiento de negociaciones con la RN, el comandante Tomás Borge expuso (Borge en González, 1992):

32) Solo Alfredo César, empresario que colaboró con el gobierno sandinista hasta 1982, y Azucena Ferrey, miembro del PSC y de la CDN, eran nuevos en la dirección. Los cuatro miembros restantes habían figurado ya en anteriores organizaciones contrarrevolucionarias.

33) El entrecomillado pertenece a unas declaraciones que realizó la portavoz de la cancillería del gobierno sandinista extraídas del periódico *La Vanguardia* (7-5-1985).

La propaganda reaccionaria ha logrado que un sector no mayoritario, pero sí importante de la población, considere positivo entablar un diálogo con la contrarrevolución.

En realidad, la Contra llegó a constituir algo más que un pertrechado ejército enclavado en Nicaragua por los norteamericanos. La Contra fue, además, «un ejército compuesto por campesinos de las zonas del interior que luchaban contra un régimen que amenazaba su identidad mercantil y su axiología tradicional, un régimen que cometió la osadía de desautorizar a sus líderes y que coartó su libertad de movimiento, un régimen que, al imponer el servicio militar, les quitó a los jóvenes —su bien máspreciado y su principal fuerza de trabajo—» (Núñez *et al.*, 1991: 44).

De esta forma, en la segunda mitad de la década, el proyecto gestado desde las élites somocistas y la administración norteamericana, si bien no triunfó en la pretensión de derrocar al gobierno sandinista —quien mantuvo, a lo largo de la década, un notable apoyo y una gran capacidad de movilización entre las masas urbanas y campesinas de la zona Oeste—, sí pudo captar a aquellos colectivos a los que el FSLN no tuvo la suficiente capacidad de integrar en su proyecto. De esta forma, en Nicaragua, a la sangría económica producida por el bloqueo comercial de los Estados Unidos y a la guerra contrarrevolucionaria, se le sumó la presencia de colectivos opositores notablemente articulados.

CAPÍTULO 5

**LA INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA REVOLUCIÓN**



5.1. LA BÚSQUEDA DE LA PAZ

Una maestra increpó a Daniel Ortega, en un *cara al pueblo*, con una pregunta reveladora: «Presidente, usted nos prometió en noviembre de 1984 *gallo pinto* y dignidad. Voté por el FSLN. He comido seis años de dignidad, ¿dónde está el *gallo pinto*?»⁽¹⁾.

Según Eduardo Galeano, a mediados de la década de los ochenta, uno de los jefes de la Contra definió Nicaragua como el *país del no hay*; y en esto —constató el escritor— tuvo razón⁽²⁾. En la misma dirección, aunque seguramente con perspectivas diferentes, otro novelista, el peruano Mario Vargas Llosa, expuso⁽³⁾:

Todo el mundo protesta y a viva voz. Las penurias económicas continuas provocan el desaliento y dilapidan energías. Cada día funciona una cosa menos, de manera que la degradación de la situación alcanza ya a todos los campos. Lo doloroso para los que creen en la revolución es la constatación de un deterioro progresivo, que alcanza tanto a las personas, como a las máquinas y a los servicios. Y no deja de ser desmoralizador el convencimiento de que quizá hoy es mejor que mañana.

La economía nicaragüense depende básicamente de las importaciones. Nicaragua no produce ni cristal, ni papel, ni metal y, por tanto, se vio altamente vulnerada por el bloqueo comercial estadounidense y por los ataques a objetivos económicos de carácter estratégico (Rushdie, 1987: 37):

1) Párrafo extraído del artículo de Xabier Gorostiaga en *El País* (1-4-1990).

2) Referencia extraída de un artículo de Eduardo Galeano: *El País* (24-10-1986).

3) Párrafo extraído de un artículo de Vargas Llosa en *La Vanguardia* (11-5-1985). Dicho escritor publicó once artículos sobre la realidad política nicaragüense en *La Vanguardia*, durante los meses de abril, mayo, junio y agosto de 1985.

El economista Paul Oquist me describió su economía diciendo que tiene *una cosa de todo*: un puerto de gran calado, una refinería petrolífera, un aeropuerto internacional. Los *golpes quirúrgicos* de la Contra y de los Estados Unidos tendrían pocas dificultades en paralizar el país.

El impacto de la guerra contrarrevolucionaria fue múltiple. A nivel político, tal como hemos expuesto anteriormente, polarizó posiciones y tensionó a cada uno de los sectores sociales, abriendo espacios de enfrentamiento antisistema. A nivel económico, golpeó las conquistas económicas que la revolución proyectó en sus inicios.

Las políticas realizadas en el campo de los servicios sociales, en el campo de la salud y de la educación, la implementación de políticas económicas de expansión de la demanda, la realización de la reforma agraria y la promulgación de leyes sobre arrendamiento urbano, supusieron, durante los primeros años de la revolución, la satisfacción de demandas de grandes colectivos a los que anteriormente nadie había atendido. Las políticas de desarrollo económico que el gobierno llevó a cabo en sus primeros años pusieron énfasis en la promoción de las necesidades básicas de la mayoría de la población (Williams, 1991: 188).

Los objetivos y prioridades de las políticas de desarrollo cambiaron a lo largo del período revolucionario. De la insurrección hasta finales de 1980, el gobierno sandinista centró sus esfuerzos en la reorganización de la economía. Hasta finales de 1982 se realizaron grandes inversiones en proyectos para la construcción de infraestructura productiva y se intentaron sentar las bases de una *posterior* expansión económica. A partir de 1983, con el impacto de la *guerra de baja intensidad* —y del bloqueo económico decretado por los Estados Unidos en 1985—, se desbarataron buena parte de los ambiciosos proyectos anteriormente diseñados. La mayoría de los recursos económicos se trasladaron para hacer frente a la Contrarrevolución⁽⁴⁾.

La guerra, en lo que se refiere a la economía y a la producción, no solo significó cuantiosas pérdidas, sino la suspensión de buena parte de los proyectos de desarrollo económico y social que el gobierno sandinista consideró prioritarios para el avance del proceso revolucionario. Henry Ruiz, miembro de la Dirección Nacional del FSLN y ministro de Cooperación Externa, indicó, en octubre de 1987, que la guerra y las sanciones impuestas por los Estados Unidos desde 1981 habían significado pérdidas de 4.000 millones de dólares. De ese monto, 2.800

4) Existe una amplia bibliografía sobre la situación económica de Nicaragua y las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno sandinista. De ésta cabe destacar los siguientes trabajos: BULMER-THOMAS, 1987, 1991; SPALDING, 1987, 1991; STAHLER-SHOLK, 1991.

correspondían a daños directos e indirectos y los restantes los atribuía al lucro cesante y a ganancias que dejaron de producirse en ese período (Lozano, 1989: 297). Respecto a los recursos directos que se dedicaron a la defensa, en términos presupuestarios, el capítulo de gastos militares supuso, en 1985, un 34,1% del total. Dos años más tarde se incrementó hasta el 46,3%. En 1988, el porcentaje se elevó de nuevo hasta el 62%. La guerra, pese a revestir una tendencia militar favorable al régimen sandinista, produjo una sangría económica imparable (González, 1992: 539).

Después de ocho años de gobierno sandinista, el índice de la inflación pasó del 70,3%, en 1979, al 1.347,2% en 1987. La deuda externa, en el mismo año, tenía un volumen casi cuatro veces mayor que el que se heredó del somocismo. El poder adquisitivo (tomando como índice los salarios reales con base 100 en 1980) era de 6'7 en 1987. En lo que se refiere al Producto Interior Bruto, exceptuando los tres primeros años del proceso revolucionario, durante el resto del período se registraron índices negativos. Sin embargo, lo peor para la población aún estaba por llegar. Tal como veremos posteriormente, el escenario económico del último bienio de la época sandinista, 1988-1989, fue el peor de la historia nicaragüense⁽⁵⁾.

Las consecuencias sociales de la guerra y del descalabro económico fueron evidentes. El FSLN debió abandonar cualquier política económica destinada a un desarrollo que beneficiara a las mayorías y tuvo que concentrarse en su misma supervivencia. En este sentido, César Jerez, el entonces rector de la Universidad Centroamericana de Managua, al referirse a la agresión y al acoso desarrollado por la Contra y los Estados Unidos, puntualizó (Jerez en Smith, 1993: 251):

La guerra fue de *baja intensidad* solamente para los ciudadanos estadounidenses... En Nicaragua ésta supuso una *guerra total*, a todos los niveles.

Como hemos visto en el capítulo anterior, la estrategia contrainsurgente de la Contra y de la administración Reagan fracasó en su pretensión de derrocar al régimen sandinista en la arena militar. Pero el desgaste que sufrió el gobierno nicaragüense, aunque no le impidió continuar técnicamente con la guerra, sí le exigió buscar otras vías para su finalización.

La economía de guerra y su efecto autoritario en la política del gobierno provocaron efectos de descontento entre la población. En este contexto la oposición

5) Sobre el contexto socioeconómico en que se desarrollaron los comicios de febrero de 1990 dirigirse a VILAS, 1990a: 261-262.

interna al sandinismo capitalizó el descontento e incrementó su legitimación (Ibarrá, 1992: 107).

Si bien puede afirmarse que la Contra ya no era capaz de recuperarse estratégicamente, el gobierno sandinista tampoco tenía la capacidad de alcanzar una victoria militar definitiva. Sobre este aspecto, un año después de haber terminado la guerra, Luis Carrión, el entonces vice-ministro del Interior, afirmó (Carrión en Núñez *et al.*, 1991: 411):

Nosotros no podíamos tomar el control militar ni político de grandes zonas del campo donde ellos tenían sólidas bases sociales... pero ellos, por su parte, tampoco podían avanzar. Para mí en la guerra hubo un empate, si la vemos como un fenómeno global. Es decir, ellos no lograron su propósito. Derrotamos la voluntad de los *yankees* de destruirnos militarmente, la Contra no logró avanzar de determinado territorio, pero nosotros tampoco logramos extirpar a la Contra de sus zonas de influencia.

La salida para el gobierno era lograr, por la vía negociadora, el cese definitivo del conflicto armado. En esa coyuntura, el FSLN inició, en 1987, la búsqueda de una situación política que impidiese la supervivencia de la Contra y exigiese su desarme. Los instrumentos, a partir de los cuales el Frente Sandinista pretendía llegar a ese fin, eran cuatro: 1) las negociaciones políticas de carácter regional llevadas a cabo por los presidentes centroamericanos a partir del Plan Arias (posteriormente conocido con el nombre de *los Acuerdos de Esquipulas*); 2) el establecimiento de acuerdos con la RN para acordar un «alto el fuego» en las zonas de guerra; 3) la negociación de la apertura de espacios políticos para la oposición antisandinista en la llamada «Comisión Nacional de Reconciliación»; y 4) el anuncio de una nueva convocatoria electoral en el marco de la nueva legalidad emanada de la Constitución de 1987.

En esos términos se negoció el desenlace de un proyecto político cansado y asediado. Tal como expuso Orlando Núñez, miembro de la Asamblea Sandinista (Núñez *et al.*, 1991: 418):

En aquellos momentos, el FSLN estaba entre dos fuegos: por un lado sus bases sociales, que pedían mano dura para con la derecha y la Contrarrevolución y, por otro, los sectores de la derecha, la base social de la Contra y la administración norteamericana que pedían el desmantelamiento de la revolución [...] El tiempo corría en contra de la revolución que estaba prácticamente exhausta. La economía apenas palpitaba, el estrangulamiento norteamericano se agudizaba y los abastecimientos del bloque

soviético mermaban a la velocidad de una hemorragia. La búsqueda de la paz parecía la única estrategia de supervivencia posible y a ella se aferró la revolución, con sus últimas fuerzas y con todas sus consecuencias.

Fue en ese contexto, rechazando las presiones de la diplomacia norteamericana y aprovechando la crisis de legitimidad que sufría, en esos momentos, la administración Reagan ⁽⁶⁾, que los cinco presidentes centroamericanos, el 7 de agosto de 1987, firmaron el acuerdo llamado «Procedimiento para establecer una paz firme y duradera en Centroamérica» —conocido posteriormente bajo el nombre de los Acuerdos de Esquipulas II.

La centralidad de dichos acuerdos, para el desenlace político de los conflictos en la región, era evidente. Tal como expuso, el 9 de septiembre de 1987, el rector de la Universidad Centroamericana de San Salvador, Ignacio Ellacuría, en una conferencia (Ellacuría en Tinoco ed., 1989: 29-41):

Estos acuerdos de paz no tienen precedentes en la historia centroamericana. El Acuerdo de Esquipulas refleja una primera actitud de independencia nacional y de contradicción con el interés hegemónico de los Estados Unidos en Centroamérica [...] Dicho Acuerdo se centra en cinco compromisos simultáneos e inmediatos: 1) los compromisos simultáneos de amnistía; 2) el cese al fuego; 3) la democratización interna; 4) el cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o insurreccionales; y 5) la prohibición

6) La diplomacia norteamericana intentó sabotear varias veces la iniciativa de pacificación propuesta por los presidentes centroamericanos —ver, en referencia a dicha actitud: DUNKERLEY, 1993: 40. La razón de fondo era, simplemente, que la única solución aceptada para la administración Reagan era la desaparición del régimen sandinista (LEOGRANDE, 1990: 559):

Reagan's minimum and maximum objectives in Nicaragua were the same. The continued existence of the Sandinista government was simply unacceptable.

Respecto al escándalo Irán-Contra, que estalló a finales de 1986, significó la descalificación de la administración Reagan en materia de política interamericana. Sobre la base de dicho escándalo, se descubrió la extralimitación de los poderes del presidente Reagan, ignorando los controles del poder legislativo. Desde 1982 hasta 1987, se llevaron a cabo —utilizando miembros de la CIA y del Consejo Nacional de Seguridad (NSC)— actividades de compra y venta de armas a países teóricamente enemigos —como Irán— y de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, con el fin de obtener recursos para la Contra. De entre los nombres directamente involucrados en el escándalo figuraban figuras que tenían gran proximidad con la Casa Blanca —cabe destacar miembros que dirigían el NSC, como el Coronel Oliver North, Robert McFarlane y John Poindexter, así como altos funcionarios de la CIA como William Casey, Elliot Abrams y Alan Fiers. El escándalo Irán-Contra está expuesto con detalle en: LAFEVER, 1993: 300-368.

de utilizar el territorio nacional para agredir a otros Estados. Estos acuerdos, por consiguiente, sólo tienen sentido en el *marco regional* y en la *simultaneidad* de su cumplimiento.

Esquipulas II significó el *turning point* del proyecto propugnado por el FSLN (González, 1992: 546). A partir de entonces, el gobierno sandinista no solo asumió como propios cada uno de los puntos de los acuerdos, sino que fue más allá y más rápido de lo exigido⁽⁷⁾. El desarrollo de ellos supuso, en su gran mayoría, la concesión de casi todas las demandas que la oposición le planteó —tanto en la Comisión Nacional de Reconciliación, donde figuraban los partidos de la oposición, como en las negociaciones directas con el directorio político de la Contra⁽⁸⁾.

A raíz de las continuas demandas de la comunidad internacional para con el gobierno sandinista en el proceso negociador y del incumplimiento —por parte de la oposición y de los demás regímenes centroamericanos— de la cláusula de simultaneidad que aparecía en los acuerdos, el escritor mexicano Carlos Fuentes, escribió⁽⁹⁾:

El proceso de intenciones contra Nicaragua no tiene fin. A Nicaragua se le pide la luna, y cuando la entrega, pues se le pide el sol. A ninguna otra nación centroamericana se le exige tanto. Las demás rehúyen de sus obligaciones.

En poco tiempo, el legislativo nicaragüense modificó muchos aspectos de la legalidad vigente⁽¹⁰⁾. En septiembre de 1988 se aprobó la ley de Autonomía Regional de los grupos étnicos de la Costa Atlántica. En octubre se modificó la ley de

7) De inmediato fueron reabiertos *La Prensa* y *Radio Católica* y, progresivamente, todos los medios que habían sido afectados por el Estado de Emergencia. Los grupos de la oposición desleal pudieron celebrar manifestaciones y reuniones públicas. El 5 de noviembre de 1987, Daniel Ortega anunció que se levantaría el Estado de Emergencia si se verificaba el fin de la ayuda externa a los contrarrevolucionarios y de sus acciones —tal como exigía Esquipulas II. En enero de 1988 se suspendió el Estado de Emergencia. Por otra parte, como ya es sabido, la asistencia norteamericana a la Contra y su desmovilización no se llevó a cabo hasta unos meses después de las elecciones de febrero de 1990.

8) Es importante señalar que en 1988 hubo recambio presidencial en los Estados Unidos. El republicano George Bush era el nuevo presidente, y éste, debido a la nueva coyuntura y a una visión más pragmática de la realidad centroamericana, reforzó la estrategia de la priorización política de la oposición civil nicaragüense —sin renunciar, sin embargo, a la presión militar que suponía la existencia de la Contra. Sobre los cambios que comportó el recambio presidencial en la estrategia norteamericana en Centroamérica, ver: AGUILERA et al., 1991.

9) Párrafo extraído de la revista semanal *Cambio* 16 (8-2-1988, n. 845).

10) En GONZÁLEZ (1992: 523-593) se analizan y enumeran de forma detallada los cambios realizados en la legislación nicaragüense en dicho período.

partidos políticos —acogiéndose a muchas iniciativas de los partidos opositores. En febrero de 1989 el gobierno decidió anticipar la fecha de las elecciones de noviembre de 1990 a febrero del mismo año. En abril de 1989 la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley electoral —ampliando garantías de competitividad, el acceso igualitario a los medios de comunicación, la aceptación de financiamiento externo y la invitación de misiones de observadores internacionales— y una ley de medios de comunicación social que ampliaba la garantía del acceso de los medios a las fuerzas de la oposición. La contrapartida que el gobierno sandinista pretendía obtener era la aceptación —por parte de la oposición sandinista y de la administración norteamericana— de la institucionalidad surgida de la victoria insurreccional de julio de 1979. Es decir, la legitimación definitiva de sus instituciones y de la legalidad que emanaba de la Constitución de 1987⁽¹¹⁾.

De las rondas negociadoras con la Contra se firmaría, el 23 de marzo de 1988, el «Acuerdo de Sapoa para el Cese al Fuego definitivo» —aunque después fue unilateralmente violado por la RN. En la reunión de Costa del Sol (El Salvador), en febrero de 1989, los cinco presidentes acordaron un plan de desmovilización de la Contrarrevolución que debía culminar el 5 de diciembre de 1989. Dicho acuerdo se ratificó en otro encuentro de los cinco presidentes celebrado en Tela (Honduras), el 7 de agosto, donde se expuso que el proceso de desmovilización se supervisaría por comisiones de la ONU y que debería finalizar el 5 de diciembre —día en que daba inicio la campaña electoral en Nicaragua.

La desmovilización de la Contra no se llevó a cabo. A consecuencia de ello, en diciembre, durante la reunión de presidentes centroamericanos de San Isidoro Coronado (Costa Rica), Daniel Ortega se sumó a sus homólogos en la condena de la ofensiva militar que el FMLN había desencadenado en San Salvador con la intención de que, posteriormente, los demás presidentes exigieran que los efectivos de la Contra concluyeran el proceso de desmovilización antes del 5 de febrero de 1990. Dicha demanda —realizada por los cinco presidentes centroamericanos—, no fue observada ni por los contrarrevolucionarios ni por la administración norteamericana (Vilas, 1990a: 260-261).

Desde la perspectiva del sandinismo, la ampliación de los espacios institucionales para la actividad política opositora fue considerada como una contribución a la desmovilización de la Contra, al desmantelamiento de los campamentos ubicados en Honduras y al cese del apoyo económico del gobierno de los Estados Unidos a

11) Sobre la cronología de los acuerdos (y desacuerdos) entre la oposición antisandinista y el gobierno, desarrolladas a partir de 1987, dirigirse a IBARRA, 1991: 108-129.

ésta. Esta política aperturista y negociadora iba dirigida a que los actores políticos opositores aceptaran definitivamente la institucionalidad del régimen sandinista.

Con todo, la ampliación del espacio institucional para la oposición, no significó, en ningún caso, un cambio o flexibilización de las estructuras partidarias del FSLN, ni una mayor autonomización de las organizaciones de masas sandinistas. Como hemos observado, el único espacio que el Frente Sandinista abrió en este período fue el de las fuerzas opositoras. La priorización de las negociaciones como espacio de lucha política no significó ni la desaparición de la arena militar ni el mejoramiento de las condiciones de vida de la población⁽¹²⁾. Sin embargo, las demandas y discrepancias de los militantes sandinistas fueron silenciadas por la dirigencia. Hasta mediados de 1988, la cúpula sandinista utilizó —para acallar las demandas y las críticas internas— el argumento de que aún persistía el clima de agresión; después, con el inicio del proceso electoral, se silenciaron las controversias con el objetivo de dar una imagen sólida y monolítica. Una vez celebrados los comicios y *renovada la confianza del pueblo hacia el Frente Sandinista* —tal como expuso la dirigencia—, la Dirección Nacional prometió a la militancia la celebración de un Congreso Nacional con el objetivo de democratizar internamente el FSLN y otorgar una mayor autonomía a las organizaciones de masas.

Esta situación hace preguntarse qué tipo de partido (en relación al sistema de partidos) fue el FSLN durante la década en que detentó el poder. La cuestión nos remite necesariamente a dos conceptos⁽¹³⁾: ¿fue un partido *hegemónico* o un partido *predominante*?

En el marco de ese debate, la oposición siempre observó al Frente como un partido *hegemónico* donde el monopolio del poder, por parte de los sandinistas, se disimulaba por la existencia de una constelación periférica de pequeños partidos. La oposición nunca creyó en una competencia real por el poder. El FSLN, sin embargo, partía de una lógica diferente y siempre se autoconcibió como un partido inevitablemente *predominante*. Un partido es *predominante* en la medida en que se ve apoyado de forma constante por la mayoría de los votantes, con independencia de la existencia de otros partidos que compiten por el poder. Un

12) En el último trienio del gobierno sandinista el PIB acumuló una caída del 11,7% y el PIB per cápita de 21,5%. La balanza comercial tuvo un saldo negativo de 1'2 mil millones de dólares. La escasez de divisas frescas era más que dramática. En ese contexto, el gobierno sandinista realizó un drástico Programa de Ajuste —que la CEPAL calificó de draconiano— que redujo, en un año, la inflación de 33.000% a 1.700% y el déficit fiscal del 25% del PIB a casi el 5%. Entre los costos de dicho Plan de Ajuste figuraron una fuerte retracción productiva, iliquidez, un gran deterioro de los servicios sociales y la caída del consumo popular (CEPAL, 1989).

13) Usamos dichos conceptos en el sentido que les otorgó Sartori en la obra: SARTORI, 1980.

sistema de partidos, donde uno es predominante, no supone la restricción de pluralismo partidario ni está excluida la alternancia. Se trata, simplemente, de que la permanencia prolongada de una fuerza política en el poder se debe al apoyo continuado que recibe por parte de la ciudadanía en sucesivos comicios limpios y libres (Sartori, 1980: 247-258). El FSLN, en tanto que se autopercibía un partido de carácter popular, en defensa de los intereses de las mayorías y constructor de un proyecto político de carácter nacional, nunca tuvo presente la posibilidad de perder un contencioso electoral, menos después de haber superado retos, en teoría mucho más difíciles, como la reversión del aislamiento diplomático de los Estados Unidos, la derrota estratégica de la Contra o el derrocamiento del régimen somocista. Solo en esta dirección se comprenden las declaraciones hechas, el 20 de abril de 1989, por Tomás Borge ⁽¹⁴⁾:

Después de haber fracasado en la vía militar, a Estados Unidos sólo le queda la opción de derrotar al FSLN en las elecciones [...] Sin embargo, el gobierno no concibe la posibilidad de una derrota [...] Hay un sector muy estable de apoyo al Frente que se aproxima al 50% y que puede arrastrar a otros sectores. El conjunto del resto de los partidos constituye una fuerza considerable, pero cada uno de ellos, por separado, tiene porcentajes irrisorios.

Con todo, a lo largo de una década, se llevó a cabo una inevitable transformación interna del FSLN. Los diez años en el poder no pasaron en balde para el Frente Sandinista. Su intensa interacción con la sociedad nicaragüense y su constante relación con la comunidad política —interior y exterior— transformaron al FSLN que un día accedió al poder por la vía armada.

Así, si antes de la toma del poder, podríamos calificar al FSLN como un actor político que respondía mayoritariamente a las características del modelo organizativo que responde al concepto de *sistema de solidaridad*, después de ejercer el poder durante una década incorporó caracteres propios del modelo de *sistema de intereses* ⁽¹⁵⁾ (sin llegar a ser, en ningún caso, el paradigma).

14) Declaraciones extraídas del periódico *El País* (20-4-1989).

15) Alessandro Pizzorno, en la obra *Introduzione allo studio della partecipazione politica* analiza el desarrollo de la participación y organización política a partir de la distinción entre los conceptos de *sistema de solidaridad* y *sistemas de intereses*. El primero de ellos se caracteriza por su condición de «comunidad» de iguales, donde los fines son la variable independiente de la organización, y donde todos los componentes coinciden en ellos. El *sistema de intereses* se refiere a organizaciones donde

Nos atrevemos a exponer, pues, que a lo largo de la década de gobierno sandinista, el FSLN fue adquiriendo algunos de los rasgos que corresponden al modelo organizativo de *sistema de intereses* (Panebianco, 1990: 27-57), en tanto que:

1) La antigua articulación de la organización donde los fines eran la variable independiente, en función de los cuales podíamos analizar y describir apriorísticamente el actor, con el tiempo, dio paso a un modelo donde la organización no solo se observa como un instrumento de realización de ciertos fines, sino que su estructura también se adaptaba y respondía a una multitud de demandas provenientes de diferentes sectores internos. En este sentido, el FSLN, fue adoptando características de una organización institucionalizada, donde las actividades destinadas a asegurar su supervivencia se equilibran e interactúan con aquellas relacionadas con la búsqueda de los fines por los cuales surgió.

2) El mantenimiento en el poder durante una década comportó, inevitablemente, la creación interna de dinámicas burocráticas y jerárquicas. De este hecho surgió la necesidad de que la organización, además de ofrecer *incentivos colectivos* —necesarios para el mantenimiento de vínculos de identidad, solidaridad y de cohesión ideológica—, suministrara *incentivos selectivos* —estímulos materiales, de poder o de estatus— para la satisfacción de demandas individuales de determinados miembros.

3) La libertad de acción que anteriormente dispusieron los líderes dentro de la estrategia del partido fue relativizándose a partir de las crecientes constricciones organizativas y contextuales. De esta forma, con el tiempo, las decisiones fueron, cada vez más, el producto de negociaciones en el interior de la organización. El *management* organizativo fue adquiriendo un papel de mediador entre las diferentes demandas y estrategias posi-

la acción no se realiza solo sobre la base de los fines organizativos, sino también en función de los intereses individuales de los actores que lo componen. Según Pizzorno, con el paso del tiempo, un partido va dejando características propias del *sistema de solidaridad* y va adquiriéndolas del *sistema de intereses* —con la implicación progresiva en la rutina cotidiana la organización se burocratiza y diversifica, creando nuevas desigualdades, jerarquías, intereses y pretensiones. El concepto utilizado por el autor para llamar la transición desde el primer estado hacia el segundo es el de *institucionalización de la organización* (Pizzorno en PANEBIANCO, 1990: 55-56).

bles. La complejidad del proyecto político sandinista y las constricciones en que éste se vio inmerso tuvieron un notable impacto en esa dirección.

4) La estrategia sandinista de *dominio* sobre el ambiente fue con la intención de realizar una transformación radical de la realidad (pretensión de la que participaron buena parte de las organizaciones revolucionarias que nacieron y se desarrollaron en la década de los sesenta y setenta en América Latina). Luego, esta estrategia fue dando paso a otra de progresiva adaptación al medio y las decisiones unilaterales se transformaron progresivamente en pactos, negociaciones y concesiones. La adopción de dicha táctica no solo tiene que percibirse como una simple adaptación al medio, también cabe observarla como la opción de una estrategia más lenta de transformación de la realidad.

Ciertamente, esta progresiva transformación del modelo organizativo partidario del Frente Sandinista no fue ajena al desenlace electoral que se produjo en febrero de 1990.

En esta coyuntura, entre la profunda crisis económica y la percepción, por parte de algunos sectores, del incipiente corporativismo partidario del FSLN, la decisión de la dirigencia sandinista de organizar una campaña electoral festiva —con apelaciones que en los años iniciales de la revolución se habrían juzgado como «burguesas» y con una generosa distribución de regalos (prendas de vestir, juguetes, artículos de uso personal)— chocó con el estado de ánimo de buena parte de la población (Vickers, 1990; Vilas, 1990a). La consigna coreada por los militantes del Frente de que *¡Todo será mejor!* planteó, a la mayoría de los nicaragüenses, una cuestión: *¿Pueden ir las cosas aún peor?*

5.2. DE LA ATOMIZACIÓN A LA CREACIÓN DE LA UNO

Los últimos diez años en la historia de Nicaragua parecen un teatro de varios escenarios donde los mismos actores vuelven con diferentes papeles. Violeta Chamorro, Jimmy Carter, Alfonso Robelo y Daniel Ortega están en la cartelera principal. El suplente de Reagan parece más pragmático pero acaba jugando el mismo papel de siempre. Sube el telón para otra escena: el proceso electoral de 1990⁽¹⁶⁾.

16) Párrafo extraído de: O'KANE Y KUAN, 1989: 37.

La «derrota estratégica» de la Contra en 1987 supuso no solo la apertura de un nuevo ámbito de confrontación, sino que agrandó las desavenencias entre los dirigentes de la RN. La pérdida de centralidad de la Contra en el escenario político nicaragüense planteó el salto de alguno de sus miembros de la dirección política —los más relevantes fueron Alfonso Robelo y Alfredo César— a la escena partidaria. Las declaraciones de Robelo, en referencia a su distanciamiento de la RN, fueron⁽¹⁷⁾:

No quisiera contribuir a debilitar la *resistencia* y, si vuelvo a Nicaragua, quiero hacerlo sin desvincularme de ella, pero nadie puede negar que aquí se ha abierto un juego donde lo político cobra más importancia [...] Además, se ha demostrado que es imposible derrotar por las armas al gobierno nicaragüense, por lo que se hace necesario robustecer el aparato político... aunque se mantenga una cierta presión militar.

En esa coyuntura, empezaron a percibirse discrepancias de fondo, entre los dirigentes, respecto a cuál era el papel de la Contra. No solo se trataba de la centralidad de la arena civil en el conflicto político, sino de la misma existencia de las fuerzas contrarrevolucionarias afincadas en la frontera hondureña. «Todo se acabó a menos de que tengamos ayuda militar en los próximos dos meses», dijo un comandante de campo de la Contra a reporteros norteamericanos (*The New York Times* [(Sojo, 1991: 75)]).

A pesar de los viajes y de las declaraciones de Adolfo Calero —uno de los fundadores y máximos responsables de la Contrarrevolución— en Washington, el protagonismo, por aquel entonces, ya correspondía a otros. En este sentido, queda abierta la pregunta de *¿quién utilizó a quién en el «affaire» de Nicaragua?* ¿Fue la Contrarrevolución quien utilizó a los Estados Unidos, o viceversa?

Durante los últimos años de la década de los ochenta, Calero acusó —en repetidas ocasiones— al gobierno norteamericano de traición y reprochó a la administración Bush por presionar a sus compañeros de organización (la RN) para abandonar la lucha armada e incorporarse a la actividad política. Según Calero⁽¹⁸⁾:

De la noche a la mañana, los norteamericanos nos dijeron: abandonen a esa gente —los combatientes—, díganles *good bye* y regresen a la lucha política en Nicaragua [...]. Pero yo no acepto la decisión de los Estados Unidos de que ahora la

17) Declaraciones expuestas en el periódico *El País* (17-2-1988).

18) Declaraciones expuestas en *El País* (14-6-1989).

lucha es en Nicaragua, yo no acepto presiones [...] Además, no se puede comparar el grado de compromiso con la lucha armada de quienes ahora se han integrado en la política civil nicaragüense —como César— y nosotros. Él entró hace tres años, yo he estado desde el principio; él visitó las tropas una vez, yo los conozco por su nombre.

Estaba claro que, a partir de finales de 1987, la apuesta de la administración norteamericana —sin desatender la estrategia de presión militar por intermedio de la presencia de la Contra⁽¹⁹⁾— pasaba por otorgar mayor centralidad a la arena política civil.

Con la llegada del embajador norteamericano Richard Melton en Managua, el 12 de abril de 1988 —presentando sus credenciales el 4 de mayo—, empezó la tarea de agrupar el mayor número posible de partidos de la oposición, junto con destacadas personalidades del mundo de los negocios, en una misma organización política. El objetivo de Melton —después de declarar que «con el sandinismo no había acuerdo posible»⁽²⁰⁾— era el de agitar y movilizar la oposición interna.

Dicho objetivo, sin embargo, partía de un hecho revelador: la incipiente coincidencia de los partidos opositores en las diversas rondas de negociaciones con el FSLN. Siguiendo el mandato de Esquipulas II, el Frente Sandinista inició rondas de diálogo con los partidos de la oposición. Sobre la base de ellas, como indicamos, se llevaron a cabo diversas reformas de la legislación.

El acontecimiento más destacable de dichas rondas —aparte de las reformas legales acaecidas— fue que todos los partidos legalizados, excepto el MAP-ML, presentaron —aunque con serias diferencias— un frente común contra el régimen organizado en torno a una alianza llamada «el Grupo de los 14». En ese contexto, se fueron diluyendo las fronteras, que, hasta entonces habíamos diferenciado, entre los partidos de la *oposición leal* (o «patriótica») y *desleal* (o «antisistema»).

La mayor capacidad de movilización y de expresión —fruto de los acuerdos de Esquipulas II—, junto con la consciencia de que era posible disputar el poder a un FSLN desgastado —por varios factores, pero, sobre todo, por la guerra contrarrevolucionaria y el caos económico— revitalizaron y radicalizaron a las fuerzas opositoras internas que, con el tiempo, fueron convergiendo con las que, hasta

19) La atención del gobierno de Washington para con la Contrarrevolución se mantuvo mientras el sandinismo estuvo en el poder. Una vez fuera del cargo, Elliot Abrams, el ex-Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, expuso que (*The New York Times* [Solo, 1991: 103]):

La resistencia es el único mecanismo de presión que los sandinistas toman en serio. Sin la Contra, simplemente no existirían sanciones efectivas a los sandinistas.

20) Declaración pronunciada en el periódico *The New York Times* (13-7-1988).

entonces, habían actuado en el exterior. Parecía que cada vez era más factible la confección de un bloque unitario antisandinista.

Sin embargo, los acontecimientos no siguieron una trayectoria gradual. En más de una ocasión pareció que el frágil consenso hasta entonces logrado, entre la oposición y el sandinismo, estuvo a punto de romperse. Durante la primera mitad de 1988 hubo manifestaciones y enfrentamientos en diferentes localidades de Nicaragua. El caso más relevante, sin embargo, fue el violento altercado producido, entre manifestantes y policía, en la localidad de Nandaime (*Envío*, 1988/86). Fruto de ese clima de crispación, el 11 de julio de 1988, el gobierno sandinista ordenó la expulsión de Nicaragua del embajador de los Estados Unidos, Richard Melton, y de otros siete funcionarios de la embajada, acusándoles de incitar revueltas contra las autoridades sandinistas. El gobierno de Managua argumentó que «tenía un nivel limitado de tolerancia» hacia la oposición interna y la estrategia desestabilizadora de la administración norteamericana⁽²¹⁾.

Todo parecía indicar la reversión del clima negociador iniciado en el marco de los acuerdos de Esquipulas II y la revitalización de la dinámica de enfrentamiento. Con todo, la línea iniciada en el proceso de negociación se mantuvo. En esa dirección, desde la perspectiva de la administración de los Estados Unidos, el factor más importante fue el *acuerdo bipartidario* —entre republicanos y demócratas— sobre la priorización de la opción negociadora respecto al «problema» nicaragüense.

El avance de la fecha para la celebración de las elecciones, de noviembre de 1990 a febrero del mismo año, aceleró el proceso de articulación de las fuerzas políticas antisandinistas. El avance de los comicios fue producto de las negociaciones realizadas por la diplomacia sandinista en el encuentro de Costa del Sol. En ese encuentro los congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos presionaron para que se avanzara el proceso electoral con el fin de que las elecciones nicaragüenses no se solaparan con las de la renovación de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos. Las razones que esgrimieron fueron que, de esta manera y una vez los sandinistas hubieran sido reelegidos, al Partido Demócrata le resultaría más fácil presionar a la administración para el desmantelamiento de la

21) Poco después de estos acontecimientos, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Jim Wright, declaró (Sojo, 1991: 81):

Hemos recibido claros testimonios de la CIA, de que se llevaron a cabo, deliberadamente, acciones tendientes a provocar una sobre-reacción por parte del gobierno de Nicaragua.

Tales declaraciones provocaron un profundo escándalo por considerarse violatorias del secreto con que las «operaciones encubiertas» deben ser manejadas por los miembros del Congreso. Las revelaciones se llevaron a cabo sobre la base del argumento de la «moralidad» de la denuncia. Ningún funcionario de la administración demostró la falsedad de éstas.

Contra y oponerse a la renovación del embargo comercial. Los congresistas añadieron que «de todas formas los sandinistas ganarían fácilmente» (Vilas, 1990a).

En abril de 1989 se llegó a un acuerdo entre diferentes formaciones políticas para crear la coalición antisandinista llamada Unión Nacional Opositora⁽²²⁾ (UNO). Dicha coalición no fue ajena a la tradición de las alianzas tácticas de la derecha nicaragüense para enfrentarse política o electoralmente al FSLN. La UNO relevó *de facto* al «Grupo de los 14» como principal instrumento político interno de la oposición anti-sandinista. Sin embargo, la no integración en la coalición, o el abandono posterior de ésta por parte de cuatro partidos del ala centrista del «Grupo de los 14», le imprimió a la nueva alianza un carácter más derechista y subordinado a los intereses de la administración norteamericana y de la gran patronal (Font y Gomá, 1991: 33-34).

El hecho de que la UNO estuviera ya presente como fuerza política unitaria en las rondas negociadoras de agosto de 1989 supuso la existencia de un acercamiento previo de posiciones entre los diversos componentes de la coalición. Todo ello, sin embargo, no logró disipar las discrepancias internas entre los socios. El proceso de elección del *tándem presidencial* puso en relieve el conflicto interno en su verdadera dimensión. Los sectores más reaccionarios propugnaron la candidatura del presidente de la patronal (el COSEP), acompañado de Godoy, líder del PLI como candidato a vice-presidente. Ello significaba una evidente subordinación a la gran patronal y un claro alineamiento con los sectores más reaccionarios de la Contra, tal como sucedió a la coalición derechista CDN en las elecciones de 1984.

Frente a la mencionada hipótesis, la administración Bush, junto con los sectores modernizantes del capital nicaragüense —cuya máxima expresión eran los tecnócratas formados en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y en la Comisión para la Recuperación y Desarrollo de Nicaragua (CODERNIC)— lanzaron la candidatura de Violeta Barrios de Chamorro, máxima accionista del periódico *La Prensa* y viuda de Pedro Joaquín Chamorro. La necesidad de una figura que aglutinara a la heterogénea coalición, que no tuviera vinculaciones directas con la Contrarrevolución y que no despertara recelos ante la población nicaragüense, centró las miradas de sectores menos radicales de la UNO hacia Violeta Chamorro, a quien la prensa internacional calificó rápidamente como la «Cory Aquino de Nicaragua».

22) La UNO era una coalición electoral estructurada orgánicamente solo a partir de un Consejo Político donde cada uno de los partidos que la componía tenía derecho a un voto y a un representante, independiente de su tamaño o representatividad.

La elección de la fórmula electoral, en el seno de la coalición el 2 de septiembre de 1989, fue larga y conflictiva (*Envío*, 1989d/97: 11-15). La candidatura de Chamorro contó con seis de los catorce votos. Los ocho votos restantes estaban divididos entre la candidatura de Godoy, con cuatro, y la de Bolaños, también con cuatro. El posterior acuerdo para atraer a la figura de Godoy como candidato a la vice-presidencia se interpretó como la voluntad de restar protagonismo a los sectores más reaccionarios de la coalición y otorgar mayor peso a los tecnócratas que conformaban el círculo de asesores de Violeta Chamorro.

Las numerosas discrepancias existentes en el seno de la coalición se resolvieron en la embajada norteamericana. Uno de los argumentos de peso fue que el gobierno norteamericano solamente les aseguraba financiamiento, si la coalición participaba en el proceso electoral con una candidatura unitaria (Vargas, 1990). La UNO se formó sobre la base de la unión de diferentes organizaciones partidarias cuyo único punto en común era su heterogeneidad. Con todo, podemos diferenciarlas en tres grupos:

- 1) Las fuerzas que integraban la Coordinadora Democrática Nicaragüense, que se abstuvo de participar en los comicios de 1984: el PNC, la APC, el PLC, el PDCN y el PAN. Estas formaciones mantenían una íntima relación con la gran patronal y representaban el sector más duro de la oposición sandinista.
- 2) Cuatro partidos cuyo único rasgo en común era su concurrencia en las anteriores elecciones y su progresiva derechización y antisandinismo: el PLI, el PPSC, el PSN y el PCdeN. La razón de su incorporación en la coalición de la UNO cabe buscarla en su creciente beligerancia con el régimen y la búsqueda de mayores cuotas de poder en la futura Asamblea Nacional.
- 3) Cinco organizaciones caracterizadas por su reducido tamaño y por su reciente creación. Por un lado, cabe mencionar dos partidos de derecha, cuya presencia en la UNO era la única posibilidad de obtener representación institucional: el Partido Integracionista de América Central (PIAC) y la Acción Nacional Conservadora (ANC). Por otro lado, figuraban tres formaciones anteriormente vinculadas a la constelación de organizaciones integrantes de la Contrarrevolución: el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN) —donde figuraba Alfonso Robelo—, el Partido Liberal Auténtico (PALI) —donde se aglutinaban personalidades anteriormente ligadas al somocismo—, y el Partido Social Demócrata —donde militaba Alfredo César.

En cada uno de los tres grupos aquí expuestos, a la vez, podrían observarse las cinco corrientes políticas tradicionales presentes en la historia política nicaragüense: la conservadora, la liberal, la socialcristiana, la socialdemócrata y la «marxista». Con todo, debido a la atípica situación política de Nicaragua, el nombre y la adscripción de las diferentes fuerzas políticas poco tenían que ver con su forma de actuar. Las personalidades, en este caso, eran quienes definían las directrices políticas de cada partido.

El proyecto electoral presentado por la UNO, llamado *Plan Azul y Blanco*, fue elaborado por miembros del COSEP y de los partidos que antes componían la CDN y fue dado a conocer a inicios de 1989 —antes de la creación de la misma coalición. Los puntos clave del programa eran la disolución del Ejército Popular Sandinista, la abolición del Servicio Militar Patriótico, la reprivatización general de la economía, la desregulación del sistema nacional de salarios, la «revisión» de la reforma agraria y la «reforma» de la legalidad vigente (*Envío*, 1989c/95, 1989e/99). En definitiva, la proposición programática de la UNO no distaba demasiado de las pretensiones de la Contrarrevolución y de la administración norteamericana, se trataba de revertir el proceso político gestado por los sandinistas. La diferencia era, sin embargo, que el espacio de lucha política era el marco legal, fruto del mismo proyecto al que combatían.

A lo largo del proceso electoral, la coalición opositora realizó esfuerzos para polarizar la contienda en un sentido bipolar: o el sandinismo o ellos. Tras el sencillo mensaje de «*¡Tuvieron diez años y no pudieron, UNO sí puede!*», la UNO proyectó la imagen de ser la única alternativa posible al FSLN. Intentó recabar para sí el apoyo de sectores populares diversos perjudicados por las consecuencias económicas de la agresión. De esta forma, la UNO llevó a cabo un doble objetivo: erosionar el posible espacio electoral de los partidos ubicados en el centro, y evitar una identificación estricta con el espacio político de extrema derecha (Font y Gomà, 1990: 35).

El discurso y los mensajes realizados por los diferentes líderes de la coalición, aunque con divergencias en el tono y en la visceralidad de las críticas al sandinismo, se caracterizó por una lógica simplista y acusatoria para con los sandinistas. Violeta Chamorro, en una entrevista, expuso su visión sobre el futuro de su gestión⁽²³⁾:

— *¿Qué opina de la heterogeneidad de la UNO? ¿Cuál es su programa de gobierno?* —Todo va a ser perfecto. Tenemos que solucionar los

23) Párrafo extraído de una entrevista realizada por Vintró y Molins durante la campaña electoral: MOLINS y VINTRÓ, 1990: 8.

problemas con rapidez porque eso es lo que hemos ofrecido y tenemos que cumplirlo. En primer lugar, el servicio militar será abolido. Después, vean cuánto se gasta en este país en mantener esa cantidad de militares... los vamos a reducir al mínimo, eso es un ahorro económico enorme [...] Además, yo, hace cuatro meses visité cinco países de Europa y los Estados Unidos, y les dije que esperaba cooperación de ellos para la reconstrucción del país...

Los sandinistas sabían, sin embargo, que su mayor reto era la supervivencia del régimen nacido de la insurrección de 1979 y esa supervivencia pasaba por la realización de un proceso electoral claro, limpio y con supervisión internacional. Los comicios eran, tal como dijo Tomás Borge, necesarios⁽²⁴⁾:

El proceso electoral se llevará adelante pase lo que pase, haya o no guerra, haya acuerdo o no. Es la prioridad [...] Nos hemos apuntado a un proceso totalmente democrático y, si gana cualquier de los grupos opositores, el gobierno sandinista no tendrá otra alternativa que reconocer esa victoria [...] El primer objetivo es consolidar la paz y acabar con esta guerra que tanta pobreza nos ha traído. Y el paso siguiente será retomar los programas sociales y económicos para la reconstrucción económica del país.

El proceso electoral estaba llegando a su etapa final. La campaña electoral se desarrollaría con *toda normalidad* dentro de la tremenda anormalidad de una nación agredida militarmente por un ejército que se movilizaba en las zonas campesinas del interior, de las declaraciones agresivas de los altos funcionarios de la administración norteamericana sobre el futuro de Nicaragua en caso de ganar los sandinistas, y de una crisis económica acentuada por el bloqueo financiero y comercial de los Estados Unidos. Quedaba preguntarse, tal como hizo el senador demócrata Christopher Dodd⁽²⁵⁾:

¿Qué pasó con la política norteamericana de *carrots and sticks*? Hasta ahora, en Nicaragua, sólo he visto un *big stick*... y aún no se han recibido *carrots*.

24) Párrafo extraído del periódico *El País* (15-12-1988).

25) Párrafo perteneciente al Informe de International Policy, agosto, 1989: 2, publicado en *The Carter Center for International Policy*, Washington D.C.; en MOLINS y VINTRÓ, 1990: 12.

CAPÍTULO 6

**EL DESENLACE ELECTORAL
DE 1990 Y EL NUEVO
REALINEAMIENTO POLÍTICO**



6.1. LA DERROTA SANDINISTA Y EL PTPE ⁽¹⁾

Inmediatamente después del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, el 19 de julio de 1979, se acuñó en Nicaragua una expresión, entre jocosa e irónica: los *sandinistas del 20 de julio*. Ella hacía referencia burlona a las personas que optaron por sumarse al sandinismo cuando ya estaba claro quién había ganado y quién había perdido en la lucha insurreccional [...] Con las elecciones del 25 de febrero ocurrió algo equivalente, y los medios de comunicación de América Latina se vieron progresivamente poblados por las contribuciones a una explicación de la derrota sandinista, formuladas por los que llamo *los profetas del 26 de febrero*... Es decir, una catarata creciente de denuncias a las limitaciones, ambigüedades, pequeñeces, debilidades personales, comportamientos corruptos, de la revolución y sus dirigentes... ahora que también sabemos quiénes ganaron y quiénes perdieron... ⁽²⁾.

A las seis de la mañana del 26 de febrero, Daniel Ortega, el candidato a la presidencia del FSLN, expuso la tendencia que ofrecían los resultados electorales sobre la base de un escrutinio del 50% de los votos. Al mediodía, el Consejo Supremo Electoral dio a conocer su último informe: sobre un total de 1.101.397 votos, el 54% correspondían a la coalición opositora de la UNO y el 44% al FSLN. Faltaba el recuento de 500.000 sufragios y las tendencias observadas eran irreversibles.

El resultado electoral sorprendió tanto a los analistas y observadores internacionales como a las fuerzas políticas que concurrieron a los comicios. La mayoría de las previsiones y encuestas electorales realizadas durante el año anterior otorga-

1) Las siglas PTPE se refieren al Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo.

2) Párrafo extraído de un artículo de VILAS en Barricada (24-4-1991).

ron una notable ventaja a los sandinistas⁽³⁾. Los meses anteriores a las elecciones, varios estudiosos de asuntos interamericanos expusieron a la administración Bush —en diversas editoriales de periódicos norteamericanos (como el *Boston Globe*, el *Miami Herald* o el *New York Times*)— la necesidad de replantear las relaciones políticas entre los Estados Unidos y Nicaragua después del desenlace electoral en el que, supuestamente, ganarían los sandinistas.

La derrota electoral de los sandinistas por una diferencia de casi 14 puntos fue inesperada, y así lo expuso el candidato sandinista a la vice-presidencia (Ramírez, 1991: 29-32):

Por muchas que fueran las dificultades provocadas por la guerra, las limitaciones, las penumbras, la inseguridad de la población..., creímos que los votantes no darían nunca la espalda al Frente Sandinista. Era una convicción intelectual y sentimental. La revolución había echado raíces suficientes como para no ser disminuida en unas elecciones. Por eso no teníamos planes alternativos frente a la derrota, ni contemplábamos la posibilidad de perder en unos comicios...

El 26 de febrero, a las seis de la mañana, debía juntarme con Daniel en el Centro de Convenciones *Olof Palme* para acompañarle en su comparecencia pública. Al salir de la casa me encontré a Ernesto Cardenal, mi vecino de calle de por medio, que siempre madruga, y se había acostado confiado en la victoria... —¿Es cierto que perdimos las votaciones? —me preguntó asombrado.

Contra la mayoría de los pronósticos, el FSLN perdió las elecciones. Otra cuestión es la de cómo interpretar el resultado de éstas⁽⁴⁾... «Antes de los comicios, cuando todos los observadores y la administración norteamericana, anticipaban la victoria del FSLN, los enfoques se centraban en los preparativos, en el margen de competitividad entre los contendientes, en la igualdad de los partidos en el acceso de los medios de comunicación... Ahora que las elecciones se llevaron a cabo y triunfó la principal opción opositora, los analistas intentan identificar las causas de

3) Sobre esta cuestión es interesante el trabajo de BISCHOPING & SCHUMAN, 1992: 331-350. En éste se realiza un estudio exhaustivo de las encuestas de intención de voto realizadas durante el año anterior a las elecciones.

4) Son muchos los trabajos que pretenden analizar la derrota electoral del FSLN, el comportamiento electoral de los nicaragüenses y su implicación en la futura dinámica política. Entre ellos cabe destacar: DORE & WEEKS, 1991; DUNKERLEY, 1992; FONT Y GOMÀ, 1990; LASA, 1990; NOHLEN Y LÓPEZ-PINTOR, 1994; ROITMAN Y ZILUAGA, 1990; TORRES DEL MORAL, 1991; VICKERS, 1990; VILAS, 1990a, 1990d.

la derrota del FSLN dando por sentado que los comicios eran honestos y que las causas obedecían a las debilidades del sandinismo» (Vilas, 1990a: 255).

Si bien en este trabajo no nos corresponde analizar los resultados electorales del 25 de febrero, es necesario señalar cuatro elementos —que hemos ido observado anteriormente— a partir de los cuales cabe enmarcar el desenlace electoral: 1) la situación de profunda crisis económica fruto de la agresión de la Contra y de algunos errores ejecutados por el FSLN; 2) la permanencia del conflicto bélico; 3) el impacto de las políticas de ajuste en amplios colectivos de la población; y 4) el comportamiento prepotente de ciertos dirigentes sandinistas y la reaparición de dinámicas clientelares que —a partir de las circunstancias concretas y específicas— irritaron a los ciudadanos.

Tabla 8. Resultados electorales de las elecciones presidenciales y legislativas de 1990

Partidos	Presidenciales votos	Presidenciales porcentajes	Legislativas votos	Legislativas porcentajes
UNO	777.552	54,7	764.748	53,9
FSLN	579.886	40,8	579.673	40,9
MUR	16.751	1,2	13.995	1
PSC	11.136	0,8	22.218	1,6
PRT	8.950	0,6	10.586	0,7
MAP-ML	8.160	0,6	7.643	0,5
PSOC	5.843	0,4	6.299	0,4
PUCA	5.165	0,4	5.565	0,4
PCDN	4.500	0,3	4.683	0,3
PLIUN	3.151	0,3	3.515	0,2
Total	1.429.034	100	1.411.925	100

Fuente: Consejo Supremo Electoral, 1990

Como consecuencia de los resultados electorales, la presidencia correspondió a Violeta Barrios de Chamorro y la vice-presidencia al político liberal Virgilio Godoy. En lo que respecta a la Asamblea Nacional, la proporcionalidad del sistema electo-

ral hizo que la cámara legislativa reflejara de forma fidedigna los resultados de las urnas: la coalición de partidos que concurren bajo las siglas de la UNO consiguió la mayoría absoluta con 51 escaños sobre 92, y el FSLN 39. Solo dos partidos —el Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR) y el Partido Social Cristiano (PSC)— del resto de contendientes lograron colocar un escaño en la Asamblea⁵⁾.

Los comicios de febrero tuvieron cuatro consecuencias inmediatas: el fortalecimiento del pluralismo en Nicaragua; el encauzamiento de la actividad de las fuerzas políticas partidarias en el marco ofrecido por las reglas de juego establecidas en la Constitución de 1987; la modificación de la correlación de fuerzas en el plano político, social y económico; y, finalmente, la resituación de los actores políticos en relación a su capacidad de control de los resortes del Estado (Font y Gomà, 1991: 67).

De este nuevo escenario político surgirían diversos retos a los que tendrían que hacer frente los diferentes actores; estos pueden resumirse en dos: por un lado, la definición del marco institucional en el que canalizar la vida política y, por otro, la desaparición de la arena militar. En dicha coyuntura, sin embargo, los actores se verían condicionados a actuar sobre la base de métodos, perspectivas y estilos diferentes a los hasta entonces utilizados: el instrumento central tendría que ser el *pacto*. La necesidad de redefinir el escenario político suponía también un cambio en la misma naturaleza de los actores. Es en este sentido, en el que cabe analizar el comportamiento del FSLN y el de la heterogénea coalición de partidos que componían la UNO.

En referencia al marco institucional, en primer lugar es necesario destacar que el proceso electoral constituía en sí mismo un factor de consolidación de los mecanismos provenientes del proceso político gestado en 1979. La oposición al FSLN obtuvo el poder en el marco constitucional producto de la revolución y no como consecuencia de la derrota del gobierno sandinista en el escenario militar —tal como se propuso originalmente la administración norteamericana. Sin embargo, la existencia de ciertos sectores de la coalición política vencedora que mantuvieron un discurso visceralmente antisandinista y que anunciaron su llegada al gobierno como el punto de partida hacia la liquidación de todo aquello construido en el período anterior, ponía seriamente en duda la institucionalidad que les ofreció el espacio político a partir del cual consiguieron hacerse con el poder.

5) El MUR consiguió un diputado por haber alcanzado el cociente electoral a escala nacional y el PSC debido a la obtención de un diputado en la Costa Atlántica, fruto de su alianza con la formación política costeña YATAMA (FONT Y GOMÀ, 1990).

Utilizando los conceptos generados por la literatura que se ha dedicado a analizar los procesos de cambio de gobierno en el marco de elecciones competitivas, el proceso electoral nicaragüense ofreció un claro ejemplo de *pacto institucional*, a partir del cual los diferentes actores establecieron acuerdos, reglas de juego y garantías suficientes como para concurrir en unos comicios y asumir la *incertidumbre* que estos comportaban (McCoy, 1991; O'Donnell *et al.*, 1986; Przeworski, 1985). Los orígenes de este pacto se remontan a la promulgación de la Constitución de 1987 —y a la legislación subsiguiente—, a los acuerdos regionales que se desarrollaron a partir de Esquipulas II, y al *Diálogo Nacional* llevado a cabo en las rondas negociadoras que ofreció la Comisión Nacional de Reconciliación.

En este sentido, la *clave* de la cita de Przeworski de que la *democracia* (nosotros cambiaríamos ese término por el de *elecciones competitivas*⁽⁶⁾) es «el proceso de institucionalización de la incertidumbre, de la sujeción de todos los intereses a la incertidumbre, donde ningún grupo puede intervenir ni distorsionar los resultados electorales una vez realizados los comicios» (Przeworski, 1985: 58) está en *por qué*—en virtud de qué— los diferentes actores están dispuestos a aceptar la incertidumbre que supone participar en unas elecciones competitivas. La respuesta es que los diferentes actores que participan en los comicios han establecido previamente pactos y garantías según los cuales se atenúan los riesgos que provienen del desconocimiento del resultado. La cuestión radica, pues, en la existencia de un acuerdo sobre las reglas del juego y en las que todos los que juegan tienen la seguridad de que sus intereses vitales serán respetados.

Sin embargo, en Nicaragua, dicho *pacto institucional* no estaba cerrado. El respeto hacia la institucionalidad surgida de la Constitución de 1987 y la desaparición del escenario militar, eran las cuestiones pendientes.

Si bien hubo acuerdo en referencia al marco legal en que se desarrolló el proceso electoral, no existía la seguridad de cuál sería la institucionalidad en que la UNO desarrollaría su actividad de gobierno. La asunción como propia de la legalidad surgida de la Constitución de 1987, el respeto e integridad de las fuerzas armadas y de orden público, y la seguridad jurídica de las propiedades urbanas y rurales asignadas en el período en que el FSLN estuvo en el poder, eran una parte de las cuestiones a debatir para la consecución «definitiva» del *pacto institucional*.

6) Para nosotros el concepto *democracia* tiene un contenido que trasciende al de elecciones competitivas. Con todo, las «elecciones competitivas» forman parte sustancial del proceso de democratización.

El otro gran escollo para la «normalización» de la vida política era la *desmovilización de la Contra*. La derrota electoral del FSLN constituía la coyuntura política que permitía el desarme del ejército Contrarrevolucionario. La permanencia de los efectivos de la Contra en territorio nicaragüense durante los dos meses posteriores a la celebración de los comicios constituía uno de los mayores peligros para la estabilidad política.

El FSLN consideraba la desmovilización incondicional de la Contra como la condición *sine qua non* para preservar el proceso democrático y su institucionalidad. Con esa pretensión, en una asamblea de cuadros sandinistas, realizada en Managua pocos días después de la derrota electoral, se propuso la «exigencia del inmediato desmantelamiento y desarme de la Contrarrevolución» (*Barricada* [28-2-90]). La posible pervivencia de fuerzas irregulares (según diversas fuentes existían aún entre 10.000 y 14.000 efectivos en el interior del país) sin control hacía temer a los sandinistas un desenlace de revanchas y «ajustes de cuentas» semejantes a los acaecidos en Guatemala en 1954, en Chile en 1972, o el surgimiento de actividades paramilitares que pudieran recordar a los *escuadrones de la muerte* salvadoreños.

A lo largo del proceso negociador post-electoral, ciertos sectores de la UNO, sobre todo los sectores presentes en el Consejo Político, pretendieron condicionar el desarrollo de los acuerdos a un desmantelamiento bilateral de la Contra y del ejército regular. Esto es lo que el secretario de defensa estadounidense, Dick Cheney, formuló como el «desarme simétrico de la RN y las fuerzas armadas sandinistas». Aunque el proyecto político-militar de la Contra hubiera sido derrotado estratégicamente, el hecho de que un sector de su directorio asumiera la victoria electoral de la UNO como un subproducto de la agresión armada, le situaba en posición de presionar al nuevo gobierno (*Barricada Internacional*, en Font y Gomà, 1991: 68-69).

El escenario político en que se zanjaron las dos grandes cuestiones arriba expuestas, es decir, donde se pretendió cerrar el *pacto institucional*, se restringió a dos de los actores políticos principales —la dirección sandinista y el núcleo de asesores de la nueva Presidenta. Dicho *pacto*, como la mayoría de ellos en las coyunturas de cambio de gobierno o de transformación de regímenes, fue de naturaleza intra-elitaria (Agüero y Torca, 1993; Gunter & Higley, 1992; Karl, 1990). Fruto de un largo período de negociaciones surgió el Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo (PTPE), firmado el 27 de marzo⁽⁷⁾.

7) Dos días después de las elecciones, un grupo confeccionado por asesores de la Presidenta electa, encabezados por Antonio Lacayo —marginando los cuadros políticos del Consejo Político de la

Dicho acuerdo cabe considerarse como un elemento central de apoyo al proceso de consolidación democrática, a la vez que reforzaba las posiciones mantenidas por las tendencias más conciliadoras de los diferentes actores políticos. Los ejes centrales del PTPE eran diez (Barry y Castro, 1990: 20):

- 1) El reconocimiento de las pasadas elecciones como una base para el fortalecimiento del proceso democrático y para alcanzar una paz justa y definitiva.
- 2) El respeto hacia las transformaciones alcanzadas y garantizadas en la Constitución.
- 3) La desmovilización de la RN antes del 25 de abril, en tanto que elemento esencial para la transferencia de gobierno en un clima de paz.
- 4) La subordinación de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad al Presidente de la República, y su redimensión de acuerdo con la capacidad económica y necesidades sociales. Dichas fuerzas tendrían un carácter profesional y no partidario. El respeto de la integridad del ejército regular (EPS) y de las fuerzas de orden público, así como sus rangos, escalafones y mandos según la Constitución.
- 5) El fortalecimiento de la integridad e independencia de los poderes del Estado.
- 6) Garantizar jurídicamente a todas las familias beneficiarias de las propiedades urbanas y rurales asignadas antes del 25 de febrero de 1990.
- 7) El traspaso ordenado del Poder Ejecutivo en un marco de mutua seguridad y confianza. El mantenimiento de las armas y equipos de combate en manos de las instituciones armadas de la república. El respeto hacia los gremios, organizaciones sindicales y comunales de adscripción sandinista.

UNO—, y por altos cargos del gobierno sandinista —liderados por Humberto Ortega— se reunieron con el objetivo de elaborar los ejes a partir de los cuáles llevar a cabo la transición del poder ejecutivo.

- 8) La permanencia en su trabajo de los funcionarios y empleados del gobierno.
- 9) La voluntad de aunar esfuerzos en la gestión de recursos internacionales en beneficio de la estabilidad y del crecimiento de la economía.
- 10) La organización del Ministerio del Exterior, en consulta con el gobierno entrante, de los actos protocolarios y diplomáticos de la presidencia.

El PTPE supuso, en primer lugar, el establecimiento de disposiciones a partir de las cuáles fortalecer el *Estado de Derecho* y, en este sentido, significaba apostar por la estabilidad del sistema político construido a lo largo del proceso revolucionario. Sin embargo, también reflejaba la existencia de un espacio de intereses comunes entre un sector del FSLN y otro de la UNO. Desde esta perspectiva, el PTPE tiene que observarse insertado en un contexto político más amplio donde se interrelacionaron cuestiones de carácter ideológico, político, económico, social y, cómo no, familiar.

Durante los diez años en que el sandinismo estuvo en el poder se realizaron grandes transformaciones en el seno de la sociedad. Sin embargo, cabe señalar que junto a esos elementos de cambio pervivieron también dinámicas y formas de proceder profundamente arraigados en la historia nicaragüense. A pesar del *descubrimiento* sandinista de la sociedad civil, el Estado fue el centro neurálgico de la política. La política oficial se siguió haciendo desde los despachos, pasillos y recepciones. Las negociaciones relevantes se llevaron a cabo desde o con el Ejecutivo. Junto con la primacía del Estado, nunca fue erradicado del todo un estilo prebendarista del ejercicio del poder; un estilo que dependía más de las características de una sociedad pequeña y periférica que de la subjetividad de los actores: la vulnerabilidad del mercado, el atraso productivo y la marginalidad en la economía internacional tiene mucho que ver con ello (Vilas, 1991a).

En la dirección expuesta, y en relación con la forma en que se desarrolló tanto el ejercicio del poder como la coalición a partir de la cuál el sandinismo se convirtió en una alternativa política real⁽⁸⁾, buena parte de los apellidos que poblaron

8) Como señalamos al inicio del presente trabajo, el carácter del régimen somocista provocó una profunda fractura política e ideológica en los grupos dominantes. Importantes segmentos de la burguesía conservadora abandonaron el régimen, apoyaron la convocatoria del sandinismo, e incluso se incorporaron al gobierno revolucionario y al FSLN. El régimen revolucionario reprodujo esa fractura; la estrategia de economía mixta y unidad nacional mantuvo la presencia de una parte de las

los elencos gubernamentales en la década de los ochenta coincidieron con los que estuvieron presentes a lo largo de la historia política anterior. Sobre esta realidad, el humor popular nicaragüense acuñó, no sin razón, la frase de que «en la Revolución, León puso los muertos y Granada los ministros»⁹⁾; la contradicción entre el protagonismo de las masas populares en el proceso insurreccional y las figuras presentes en el gobierno sandinista fue percatada con agudeza por los sectores populares. La incorporación de sectores tradicionales al gobierno revolucionario fue debido tanto el carácter multclasista del sandinismo y de su política de alianzas con determinadas clases propietarias —en una sociedad con una burguesía basada en estructuras familiares fuertes y cerradas—, como por causas vinculadas a factores coyunturales: los técnicos y profesionales que el Estado demandaba provenían, predominantemente, de estos sectores sociales (Vilas, 1992b).

La gravitación de las familias y los grupos de linaje en la configuración de la estructura socioeconómica de América Central ha sido destacada por varios autores (Balmori *et al.*, 1990; Casaús, 1992; Stone, 1990; Touraine, 1989; Vilas, 1992b). Desde esta óptica, en el gobierno posterior a las elecciones de febrero de 1990 el elemento que más destacó en la configuración fue el del mantenimiento de los patrones de interconexión familiar —por encima de las posiciones políticas explícitas¹⁰⁾ (Vargas, 1990: 69-71).

élites tradicionales en el seno del proyecto sandinista. Otro sector, sin embargo, no toleró la intensa movilización ni el protagonismo de las masas, la organización popular, el cuestionamiento del principio de autoridad en las empresas y el intenso conflicto con los Estados Unidos. Las grandes familias tradicionales se dividieron en función de razones ideológicas, y parte de sus miembros estuvieron en puestos de dirección política del sandinismo o de la Contra. En este sentido, los pactos intra-elitarios llevados a cabo a partir del desenlace electoral podrían entenderse también como la reunificación de ciertos sectores con intereses comunes.

9) Cuando estuve en la Universidad Nacional Autónoma de León mis compañeros me explicitaron repetidamente la centralidad de dicha ciudad en la vida política nicaragüense. Cuando, en Managua, conversando con Balbino Suazo, un profesor de la Universidad Centroamericana y original del departamento de Chontales, le hablé de la importancia de León en los acontecimientos políticos, él, con aire socarrón me dijo que sí, pero no de la forma que exponía... pues, después de recordarme la procedencia geográfica y familiar de los ministros del gobierno sandinista, concluyó que «León puso los muertos y Granada puso los ministros».

10) Sobre la tupida relación familiar existente entre los altos cargos del gobierno entrante en 1990 —y, cómo no, sus ramificaciones con la cúpula sandinista—, ver los excelentes artículos de: VARGAS, 1990; VILAS, 1992b. Como botón de muestra cabe señalar que «el industrial Antonio Lacayo Oyaguren, Ministro de la Presidencia y yerno de doña Violeta, es sobrino de don Joaquín Cuadra Chamorro; primo del general y jefe del Estado Mayor Joaquín Cuadra Lacayo, del coronel y segundo jefe del Estado Mayor Osvaldo Lacayo Gabuardi, de la esposa del Comandante de la Revolución Luis Carrión Cruz y del presidente del Consejo Supremo Electoral Mariano Fiallos Oyaguren; cuñado de ex-dirigente sandinista y ex-dirigente contra y anteriormente uno de los más influyentes asesores de la

Así pues, las redes familiares demostraron su eficacia para subsistir al período de gran inestabilidad política y social que supuso el proceso revolucionario (Casaús, 1992). La presencia de familias notables a ambos lados de las profundas fracturas políticas de la sociedad nicaragüense, parecen haber elaborado un margen de moderación a las presiones políticas externas —en particular del antisandinismo visceral de algunos elementos del gobierno de los Estados Unidos. Si bien tres de las figuras que más poder reunieron en sus manos durante la pasada década —los hermanos Ortega y Tomás Borge— fueron ajenas a estas redes⁽¹¹⁾, las *tradicionales* redes familiares tejieron un velo protector hacia sus parientes sandinistas y hacia sus esferas institucionales. Del mismo modo, connotados sandinistas fueron prestando progresivamente sus servicios al mantenimiento de la frágil estabilidad del gobierno de doña Violeta Chamorro (Vilas, 1992b: 27-29).

Este espacio de intereses comunes entre las élites políticas *salientes* y *entrantes*, y su estilo consociativo, parece conllevar una progresiva reunificación política de los sectores tradicionalmente dominantes, con relativa independencia del conflicto ideológico-partidario que cercenó la sociedad nicaragüense durante algo más de una década.

Tal como hemos venido observado, tras el triunfo de la UNO, el conflicto político nicaragüense tiende a definirse desde una doble dimensión: *sistémica* y *sustantiva*. En la primera, el Ejecutivo Chamorro-Lacayo necesita tejer acuerdos inter-partidarios con el grupo parlamentario sandinista con el fin de preservar la institucionalidad y la estabilidad política del país; en la segunda, se observan pactos de clase con preeminencia de los intereses de los sectores económicos dominantes. Este esquema cruzado de alianzas, presenta ciertas pautas evolutivas y, en cierta medida, paradójicas (Gomà, 1994). En primer lugar, la clara apuesta del gobierno por una salida socio-económica neoliberal reincide en el conflicto *sustantivo* y supone el estallido de tensiones inter-partidarias en el FSLN, quien mantiene un entramado de apoyos con el ejecutivo en pos de una estabilidad institucional. En segundo lugar, el conflicto *sistémico*, mantiene un debate polarizado entre los sectores de la UNO no integrados en el ejecutivo, que disienten tanto de la presencia de cuadros sandinistas en ciertas instituciones como de la legalidad emanada de la Constitución de 1987, y los sectores asentados en el ejecutivo y el

presidenta, Alfredo César...» (VARGAS, 1990).

11) Sobre la ascendencia familiar de los hermanos Ortega existen discrepancias. En la obra STONE, 1990: 37-40 se anuncia la vinculación de los Ortega con las élites tradicionales de América Central; en cambio, en VILAS, 1992b: 29 se niega tal afirmación. Por los datos presentados y los argumentos de dichas obras compartimos la tesis de Vilas.

FSLN quienes apuestan por mantener el entramado institucional fruto del proceso revolucionario. Dicha dinámica, a la vez, no es ajena al debate, rearticulación y crisis de los actores políticos que parecieron monolíticos durante el período anterior. En el próximo epígrafe intentaremos analizar brevemente el profundo debate en que se han visto inmersos los diversos actores políticos con el inicio de la década de los noventa.

6.2. LA RECOMPOSICIÓN DE LAS ALIANZAS

Había una chica nicaragüense
 Que cabalgaba sonriendo sobre un jaguar.
 Volvieron de paseo
 La chica dentro
 Y la sonrisa en el rostro del jaguar⁽¹²⁾.

El desenlace electoral, junto con el acuerdo al que llegó la dirección sandinista con el gobierno entrante, revolviéron las aguas del paisaje político nicaragüense. Dichos acontecimientos se constituyeron en el detonante de los conflictos intrapartidarios en los —hasta entonces— principales actores políticos nicaragüenses.

El resultado de las elecciones impactó profundamente en la cohesión interna del FSLN. Las reacciones y la forma en que los diversos colectivos integrados en él percibieron la derrota electoral y su nuevo rol en la escena política generaron un profundo debate en el seno del sandinismo⁽¹³⁾. Por otro lado, en la ya de por sí frágil coalición de partidos que concurrieron en los comicios bajo las siglas de la UNO, la firma del PTPE y la creación de un Ejecutivo donde tenían más peso las lealtades personales que la adscripción partidaria, generaron un progresivo distanciamiento entre las diversas formaciones partidarias que, con el tiempo, se irían convirtiendo en un enfrentamiento abierto.

Como veremos, el cambio de escenario político producto de las elecciones impactó directamente sobre los actores políticos que, durante más de una década, con-

12) Verso extraído de: Anon, en RUSHDIE, 1987: i.

13) Son muchas las declaraciones, artículos y reflexiones generadas en torno al sandinismo en los meses posteriores a la derrota electoral. En este trabajo no nos corresponde mostrar la relación exhaustiva de dicha literatura. Con todo, vale decir que en la prensa nicaragüense y en las revistas periódicas de debate e información general publicadas durante el año 1990 se observan muchos artículos al respecto.

formaron una sólida articulación de lealtades, elaboraron un discurso y generaron un proyecto (o contra-proyecto) cohesionado.

La pretensión de este epígrafe es observar el debate generado y las líneas de fractura observadas en el interior de cada uno de estos actores en la tarea de replantear su naturaleza, sus objetivos y sus lealtades con el fin de mantener su centralidad política durante los años venideros. En primer lugar, observaremos las dinámicas centrífugas que se desarrollaron en el seno de la UNO. Posteriormente, analizaremos el debate y los interrogantes a los que tuvo (y tiene) que enfrentarse el sandinismo en su nuevo rol de *formación política opositora*.

Desde el mismo día en que la coalición de la UNO ganó las elecciones empezó a gestarse el conflicto en su interior. El proceso electoral forzó la convergencia de diferentes formaciones y de proyectos políticos dispares en torno a un objetivo común: derrotar al FSLN. El problema residía en que dentro de dicha coalición se agrupaban pretensiones, personalidades y estilos muy diferentes, y al intentar llevar a cabo un programa común, afloraron inmediatamente contradicciones. Con el inicio de dichos conflictos se desvaneció el, ya de por sí, frágil consenso.

Con los primeros contactos entre la comisión negociadora de los asesores de la presidenta y la del gobierno sandinista empezaron a vislumbrarse discrepancias de fondo en la opinión de diferentes personalidades que lideraban la coalición. En un titular del periódico *La Prensa*, el 28 de febrero de 1990, se leían las declaraciones del ex-líder de la Contra, Adolfo Calero, que decían que «todo el ejecutivo debe ser asumido por la UNO». A este respecto, Calero —quien se identificó como un militante de la UNO— declaró que todas las instancias del Poder Ejecutivo deben estar bajo la potestad de la coalición vencedora. En referencia a las negociaciones entabladas con el objetivo de desarrollar la transición del ejecutivo, el Consejo Político de la UNO declaró en el mismo rotativo que «la transición a la democracia no tiene que comportar pactos ni prebendas» y continuó diciendo que «es inaceptable que miembros vinculados con el sandinismo continúen ocupando altos cargos dentro del ejército, de los ministerios u otras instancias del Estado [...] En el caso de que el Ejecutivo mantenga esta posición, el Consejo Político de la UNO no lo apoyará ni se hará responsable de las consecuencias políticas que ello comporte».

El descontento de la clase política de la UNO se manifestó en la ausencia de ocho de los 14 partidos de la coalición en la toma de posesión del nuevo gobierno. Jaime Bonilla, un cercano colaborador del vice-presidente Virgilio Godoy, confirmó, en diversos medios de comunicación, dos meses después de la celebración de los comicios, la ruptura de hecho de la UNO, diciendo que «no tiene ningún sentido seguir aparentando una unión que no existe» (Monjárrez, 1992: 1-6).

Por otro lado, la Presidenta de la República declaró, poco después de conocer su victoria electoral, que el nuevo Ministro de la Presidencia, el ingeniero Antonio Lacayo —su yerno—, «no haría un gobierno partidario, sino un gobierno para todos los nicaragüenses». Tras la firma del PTPE, la mayoría de los partidos presentes en el Consejo Político de la UNO, articulados inicialmente en torno a la figura del vice-presidente Virgilio Godoy, se mostraron indignados por la voluntad negociadora mostrada por el Ejecutivo.

Es ya conocida la profunda división existente entre las élites políticas que en su día crearon la UNO (*Envío*, 1990c/107: 1-17; IEN, 1991; Vilas, 1990c, 1991c). Las diferencias dentro de la formación vencedora son profundas. Por un lado, se observa el «sector duro» —o *Grupo del Estadio*, en alusión a las convocatorias de sus militantes en el estadio de *baseball* de Managua (IEN, 1991: 2)— formado por el COSEP, el vice-presidente de la República, el alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, y los sectores ligados al somocismo y a la comunidad cubana de Miami. Su objetivo es la *desandinización* de la sociedad nicaragüense, la reforma radical de la Constitución de 1987, la desarticulación de las organizaciones políticas sandinistas y la disolución de las instituciones armadas creadas durante el período anterior. Dicho colectivo controla el Consejo Político de la UNO, la mayor parte de alcaldías del país y tiene el apoyo de la jerarquía de la Iglesia católica, cierta base social de que se nutrió la Contra, y de los sectores más conservadores del Congreso y el Senado norteamericano. Su discurso mantiene un tono beligerante para con las instituciones del Estado y excluyente para aquellos colectivos vinculados al sandinismo.

Por el otro lado, está el grupo de asesores de la presidenta —el llamado «*Grupo de las Palmas*», en alusión al barrio en que vive doña Violeta. Este grupo se apoya en los sectores más modernizantes del capital nicaragüense, cuyas instituciones son CODERNIC (Comisión para el Desarrollo de Nicaragua) e INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas) —organizaciones creadas (en el caso de CODERNIC) o potenciadas por las políticas norteamericanas de modernización del capital centroamericano, en el marco de la política económica interamericana confeccionada por la administración norteamericana durante los ochenta, la llamada *reaganomics*⁽¹⁴⁾. Este colectivo se compone básicamente de profesionales sin integración orgánica en la estructura partidaria de la UNO, siendo los vínculos existentes mayoritariamente de naturaleza familiar —tal como indicamos— o la-

14) Para mayor información sobre la transformación y modernización de los empresarios durante la década de los ochenta e inicios de los noventa en Centroamérica: AGUILERA et al., 1991; VILAS, 1992a: 111-120.

boral. Dicho grupo, de carácter tecnocrático, se autopresenta como el centro equidistante entre el sandinismo radical y la derecha revanchista, y percibe la necesidad de convivir políticamente con el sandinismo (por ser la mayor fuerza política del país y la mejor organizada) y que, sin el entablamiento de pactos y acuerdos con su dirigencia, muchos de los proyectos del nuevo gobierno quedarían bloqueados.

La singularidad que distingue al «Grupo de las Palmas» es, sin duda, la comprensión de la delicada situación política del país y la necesidad de conducir el conflicto político por el estrecho camino de los pactos intra-elitarios. Sin embargo, en materia de política económica y social, las decisiones tomadas por el nuevo gobierno dejan poco espacio para la duda, respecto a los valores que las fundamentan y a los intereses que responden: la formulación de un plan inicial de estabilización ignorando la realidad de un país que salía de una guerra con altísimos costos económicos; la reducción drástica de los presupuestos de educación, salud y servicios sociales; la aprobación de los decretos 10-90 y 11-90 atentando contra las bases de la estructura de la propiedad urbana y agraria gestada durante la década anterior; la suspensión de la Ley del Servicio Civil, con el consiguiente despido masivo de trabajadores del sector público... suponen el progresivo dismantelamiento de buena parte de los programas socio-económicos producto del período anterior⁽¹⁵⁾.

Los titulares de la mencionada propuesta, afincados en el Ejecutivo, probablemente pretendan realizar el primer proyecto político tolerante (para con los dirigentes de las formaciones políticas adversarias) y modernizador, desde la derecha, en la historia de Nicaragua⁽¹⁶⁾ —propuesta frontalmente atacada por sus antiguos homólogos acostumbrados a ejercer el poder sobre la base de otros procedimientos y estilos. Con todo, las políticas ejercidas por el Ejecutivo durante este período han tenido un profundo impacto entre grandes colectivos de la sociedad. Entre aquellos sectores que más han sufrido las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno figuran no solo las bases simpatizantes del FSLN, sino también sectores que, en su día, formaron parte del grueso social que apoyó la propuesta propugnada por la Contrarrevolución.

Es útil observar cómo incidió el nuevo escenario político en los sectores sociales que, a finales de la década de los ochenta, conformaron la base social de la que se

15) Existe cierta bibliografía sobre las políticas económicas realizadas por el Ejecutivo nicaragüense a partir de 1990 y su impacto social, entre ella cabe destacar: BATAILLÓN, 1993; ENRIQUEZ et al., 1991; GOMÁ, 1994.

16) El único proyecto, en dicha dirección, digno de mención fue el proyecto modernizador propuesto por el dirigente liberal José Santos Zelaya, iniciado en 1893 y que fue abortado por la administración norteamericana —con una intervención— en 1912.

nutrió la Contra. En primer lugar, cabe señalar que, una vez celebrados los comicios, los efectivos de la RN estaban casi intactos; sin embargo, la mayoría de su dirección política —que no los *comandantes de campo*— se había ya integrado al proceso político civil y estaba dispuesta a ocupar cargos en el nuevo gobierno o en el Consejo Político de la UNO. Es decir, el ejército contrarrevolucionario estaba descabezado y no gozaba de autonomía política alguna. De esta realidad se deducía que el «ejército campesino» había sido abandonado por sus creadores —la administración de los Estados Unidos— y por su dirigencia —quien, en la nueva coyuntura, percibió mayores probabilidades de satisfacer sus intereses en la arena civil. Sobre esta situación, Israel Galeano, dirigente de la RN, declaró (*Envío*, en Núñez *et al.*, 1991: 477):

Toda la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de la burguesía nicaragüense se rigieron en función de sus intereses. Siempre recibimos dinero con condiciones. Les fuimos necesarios en algún momento, pero una vez que ya no, perdimos sentido para ellos. Con la UNO en el poder no podemos esperar más ayuda.

En ese contexto, se firmó el *Acuerdo de Toncontín* —el 23 de marzo de 1990, dos días antes de la firma del PTPE— entre la RN y la delegación de la presidenta electa, integrada, entre otros, por el Cardenal Obando. Dicho acuerdo contemplaba compromisos de ambas partes, los más importantes eran: 1) que la RN se comprometiera a iniciar el proceso de desarme de sus tropas antes del 20 de abril; 2) que éstas se concentraran en unas determinadas zonas llamadas *polos de desarrollo*⁽¹⁷⁾, zonas que estaban vigiladas por organismos internacionales. El nuevo gobierno, por su parte, se comprometía a amparar a las víctimas del conflicto y a asegurar la rehabilitación y readaptación social de los desmovilizados. Con todo, la desmovilización final de la Contra no se realizó hasta el 27 de junio de 1990, durante ese período el nuevo gabinete y las fuerzas contrarrevolucionarias reabrieron las negociaciones en aras de la satisfacción de demandas de la Contra (entre las que figuraban la creación de una Policía Rural en los *polos de desarrollo*, la delimitación específica de dichos *polos* y la cesión de créditos e insumos para cultivar), que aún permanecía armada (Orlando Núñez *et al.*, 1991: 458-463).

El desarme y la desmovilización de la Contra, sin embargo, no eliminaron los conflictos cultivados a lo largo de una década. Poco tiempo después del desarme

17) Sobre la naturaleza y características de los polos de desarrollo, las zonas donde tendrían que ubicarse los desalzados de la Contra, ver: *Crítica*, 1990a: 5-9, NÚÑEZ *et al.*, 1991: 471-475.

y de la desmovilización formal, resurgieron los primeros conflictos en el campo como consecuencia del retraso del gobierno en el cumplimiento de los acuerdos. Tomas de fincas, empresas estatales y cooperativas, fueron el inicio de un proceso que desencadenó una gran agitación en las áreas rurales del interior.

En el marco del malestar creciente entre las bases de la ex-RN, dirigentes del citado colectivo decidieron crear su propio partido político con la aspiración de reclutar adherentes en los ex-componentes de la Contra e incluso entre los desmovilizados del ejército. Si bien el proyecto de crear un nuevo partido con notable implantación en el ámbito nacional parecía improbable, no fueron ficticias las demandas coincidentes de grandes colectivos que, desde uno u otro bando, lucharon durante la década pasada a las órdenes de unas élites que dirigieron la guerra desde Managua y desde Miami. En esta dirección, fueron notorias las tensiones y conflictos entre los comandantes de campo que pelearon en la guerra, y que ahora han asumido la conducción política de estos colectivos desalzados, y los ex-dirigentes políticos de la RN, como Alfredo César, Adolfo Calero, o Alfonso Robelo. Los primeros acusaron a los segundos de haberlos abandonado entregándolos a un «gobierno de la burguesía» (Vilas, 1990c: 9-11).

El incumplimiento de promesas por parte del gobierno, junto con el contexto de una economía en crisis que ofrecía limitadas posibilidades de inserción laboral, solo pudieron alimentar el descontento de este colectivo. Un ejército desmovilizado en las zonas rurales — si se agudiza el contexto de crisis — puede suponer un grave factor de desestabilización política y social (*Envío*, 1990c/107).

Por lo que respecta al FSLN, la nueva correlación de fuerzas que supuso el desenlace electoral produjo en el seno de esta formación una fuerte sacudida. La primera e inmediata consecuencia de los resultados electorales fue el desconcierto. A partir de ese momento empezó a desarrollarse una fuerte corriente a favor de la reestructuración del partido sobre la base de la redefinición ideológica y de una renovada estructura organizativa (Castro y Barry, 1992). Durante la década de los ochenta, la organización partidaria fue coincidiendo y solapándose con la estructura administrativa del Estado. La pérdida del gobierno supuso la desaparición de gran parte del aparato partidario y la desvertebración de las líneas de autoridad, hecho que se tradujo en la dispersión de la militancia.

Hasta entonces, en el FSLN, por su propia naturaleza, las directrices y el consenso se habían generado en el interior de la Dirección Nacional (Díaz-Lacayo, 1992: 34). La derrota electoral quebró esa dinámica. De la perplejidad y la frustración de la derrota, los miembros sandinistas pasaron a ventilar públicamente los errores y abusos que el FSLN realizó durante los diez años que estuvo en el poder. En esta erupción expresiva, se mezclaron consideraciones de tipo personal,

político y económico (*Envío*, 1990a/103; 1992/134; Vilas, 1991c). La consigna «¡Dirección Nacional, ordene!» que acompañó once años de gobierno sandinista cedió paso a un calidoscopio de puntos de vista que constituyeron lo que se llamó el *debate interno sandinista*; debate que tenía como síntesis la frase acuñada por el popular cantante nicaragüense Luis Enrique Mejía: «¡Dirección Nacional, escuche!»⁽¹⁸⁾.

En su inicio, la discusión tomó connotaciones violentas y personales que polarizaron el debate. La explicación del por qué se perdieron los comicios se mezcló con discusiones sobre, no solo los factores que desvincularon al FSLN de la sociedad, sino también aquellos por los cuales la dirigencia sandinista fue distanciándose de sus bases. Tampoco dejó de mencionarse la forma rápida, desordenada —y algunas veces abusiva— en que el gobierno sandinista adjudicó propiedades y recursos estatales en sus últimas semanas de gestión⁽¹⁹⁾.

La primera expresión abierta y ordenada del debate fue durante la Asamblea Nacional de Militantes realizada en la localidad de El Crucero. Ésta fue la culminación de reuniones de base, locales y departamentales, espontáneamente convocadas por la militancia sandinista frente a la pasividad de la dirigencia. Las conclusiones de la Asamblea mencionaron, con un notable acento crítico, las causas de la derrota electoral⁽²⁰⁾. En referencia al partido, se reconoció el bloqueo a la crítica, los estilos burocráticos de la conducción, el verticalismo, el poco espacio que tuvieron las organizaciones de masas para desarrollarse y los estilos de vida de algunos dirigentes (*Envío*, 1990b/105). Muchas de estas críticas, que ya se venían denunciando dentro del partido antes de las elecciones, fueron sistemáticamente desestimadas en pro de la cohesión (Vilas, 1991c).

Los retos a que se enfrentó el FSLN fueron varios. Por un lado, estaba la renovación organizativa y, por otro, redefinir su perfil social y su proyecto político. En referencia a la renovación orgánica, el punto de partida fue la redacción de los nuevos estatutos partidarios y su aprobación en el Congreso Nacional de agosto de 1991⁽²¹⁾. El *nuevo perfil social* y el *proyecto político* que debía propugnar el FSLN en el futuro fueron los temas que generaron más tensiones y debate. Las propuestas desarrolladas en relación a dichos puntos no fueron —ni serán— ajenas a la correlación de fuerzas existente en el seno del partido y a su traslación en la sociedad.

18) Expresión extraída de: Crítica, 1990b: 48.

19) Hecho que trascendió a los medios de comunicación como «la piñata».

20) El documento redactado en dicho Congreso se editó posteriormente en: *Envío*, 1990b/105: 36-48.

21) Sobre la renovación organizativa que supuso el Congreso Nacional de agosto de 1991, su nuevo marco estatutario y la correlación de fuerzas en él existente, ver: MARTÍ, 1992: 136-147.

Una vez en la oposición, el FSLN proyectó una imagen ambivalente, tensionando una doble posibilidad: optar por un perfil negociador, adoptando el rol de interlocutor —en nombre de la nación y de la democracia— o recurrir a una posición combativa frente al carácter antipopular de las medidas adoptadas por el gobierno. Tal como indicamos, dicha ambigüedad dio cuenta de la coexistencia de enfoques, intereses y tendencias heterogéneas en el seno de la formación sandinista.

Si bien el Congreso de agosto de 1991 evitó la confrontación interna entre los diversos sectores del FSLN, las huelgas masivas que paralizaron el país en verano de 1990 fueron el inicio de controversias dentro del Frente Sandinista⁽²²⁾. La agitación popular, promovida por el Frente Nacional de Trabajadores (FNT)⁽²³⁾, ilustró el estado de ánimo de amplios sectores de la población ante las medidas que golpeaban directamente a las conquistas del período revolucionario —la estabilidad laboral, la canasta básica, el acceso a la tierra y a los insumos para cultivarla... La protesta de los sindicatos confluyó en las demandas de los pobladores de barrios pobres contra el encarecimiento del nivel de vida, los desalojos y los aumentos de tarifas de los servicios públicos, en un contexto donde la gente aún mantiene experiencia organizativa y combativa (Vilas, 1990c: 5-6).

A partir de entonces, empezó a explicitarse un debate sobre cuál tenía que ser la *propuesta política*, en el ámbito socio-económico, del FSLN para los años venideros. Un sector del sandinismo, articulado a partir de la bancada parlamentaria y de instancias institucionales donde el sandinismo aún mantenía notables cuotas de poder, expresó su deseo de realizar un proyecto de carácter *nacional y pluriclasista*. En esta dirección, el 21 de febrero de 1992, dieciocho parlamentarios sandinistas publicaron en el periódico *Barricada* un conjunto de directrices políticas bajo el título de «Desde el sandinismo, propuestas para un proyecto nacional». En éstas se anunciaba⁽²⁴⁾:

Por primera vez en toda su historia, Nicaragua ha alcanzado la posibilidad real de organizarse como una sociedad moderna, plural, donde los inevitables conflictos y las naturales contradicciones se resuelvan por medios pacíficos y legales [...] Consideramos necesario el estable-

22) A partir de entonces, la agitación popular, la conflictividad social y la inestabilidad han sido notas constantes en la realidad social nicaragüense. En BATAILLÓN (1993) se observa una relación de las huelgas convocadas desde 1990 hasta inicios de 1993.

23) El FNT es una instancia de coordinación sindical de los gremios de adscripción sandinista creada después de la derrota electoral.

24) Texto extraído de Barricada (21-2-1992).

cimiento de un espacio de reflexión y aún más, de acción, que tome distancia de los extremos polarizados, y lo decimos precisamente en estos momentos en que nuestro partido, el Frente Sandinista atraviesa su crisis más profunda desde 1975, crisis que debe abrir las puertas a lo interno del partido sobre el rumbo que éste debe tomar. Llamamos a formular y hacer realidad un PROYECTO NACIONAL que represente los intereses de todos los sectores, que ponga los intereses de la Patria por encima de los intereses partidistas que sean excluyentes, que comprenda que los intereses de la Patria pasan siempre por soluciones negociadas y no por el enfrentamiento y la confrontación. *Proponemos la paz, la reconciliación, la libertad, la democracia, el progreso, la justicia social, y la defensa de los intereses nacionales como proyectos propios de gobernantes y gobernados.*

En la misma sintonía, diferentes líderes sandinistas se manifestaron aduciendo que:

El FSLN tiene que ser un aglutinador de distintas corrientes sociales, en donde haya un espacio para todos los que piensen en términos nacionales y de desarrollo con justicia social [...]. El sandinismo tiene que continuar poniendo como eje central la defensa de los humildes, pero desde una perspectiva pluralista y pluriclasista⁽²⁵⁾.

Hay que construir un FSLN que convoque a todos aquellos que tienen bien puesto el corazón de patriotas; un FSLN capaz de abrirse a todos los sectores sociales de la Nación⁽²⁶⁾.

El FSLN tiene que ser claramente pluriclasista. Nunca fue sólo de obreros y campesinos, sino también de pequeños burgueses y burgueses que coincidieron en derrocar a Somoza [...] La única posibilidad que tiene el sandinismo de regresar al poder es que tenga ese carácter, eso no significa que no se va a defender a los más desposeídos, pero ya no tiene sentido plantear la lucha de clases en Nicaragua

25) Declaraciones efectuadas por el ex-Ministro sandinista Alejandro Martínez Cuenca, en Martínez Cuenca en VILAS, 1991c: 6-7. En la misma línea Martínez Cuenca publicó un libro sobre los retos socio-económicos de Nicaragua en la actualidad: MARTÍNEZ CUENCA, 1990. En relación a dicha problemática —el carácter nacional o clasista del FSLN— existen gran cantidad de citas y declaraciones, entre los estudios realizados, aunque muy recientes y por lo tanto sin demasiada perspectiva cronológica; cabe citar: Envío, 1991a/116; 1991b/118; VILAS, 1991b, 1991c.

26) Párrafo extraído del texto de Sergio RAMÍREZ en Barricada (8-8-1990).

[...] Tenemos que levantar la economía a través de relaciones armoniosas entre el Capital y el Trabajo⁽²⁷⁾.

Sin embargo, otros sectores del FSLN directamente vinculados al sector sindical agrupado en la FNT, al aparato partidario y a los líderes que mantienen cierta ascendencia con las bases populares (campesinos, proletarizados, sub-empleados, cesantes...), apoyaron las reivindicaciones sobre la base de las cuales se llevaron a cabo las huelgas y la movilización popular. Fueron diversas las declaraciones que reclamaron un mayor compromiso de la dirección del FSLN con las demandas presentadas por dichos colectivos. Entre dicha comunidad hubo quien denunció el comportamiento de la dirigencia sandinista —que optó principalmente por la negociación con el ejecutivo, intentando acallar el resurgir del movimiento popular. Dámaso Vargas, un dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) —integrada a la FNT— denunció que las huelgas de mayo de 1990 no tuvieron el respaldo de la dirección del FSLN declarando⁽²⁸⁾:

Hubo acciones sindicales en Managua que la comisión departamental del FSLN no apoyó. Y debo decir que inclusive trataron de desmontarla [...] Esto nos demuestra lo incorrecto de una política donde la acción de las masas es neutralizada por el partido...

En la misma línea, cuadros medios de las organizaciones de masas de adscripción sandinista —a la vez que estas organizaciones empezaban a retomar importantes márgenes de autonomía respecto a las directrices emanadas de la dirigencia (O’Kane, 1990b; 1991)—, exigieron a las autoridades del Frente Sandinista una mayor definición para con las políticas neoliberales que golpeaban sus intereses:

Como militante y dirigente nacional de trabajadores, yo exijo al Frente Sandinista una posición clara y firme... y una actitud consecuente con los intereses populares... No se puede estar con posiciones gallo-gallinas. Una cosa es estabilidad para el pueblo y otra estabilidad para la burguesía⁽²⁹⁾.

27) Párrafo extraído de las declaraciones realizadas en Barricada por Rafael SOLÍS, ex-secretario de la Asamblea Nacional, diputado sandinista y uno de los máximos impulsores de la corriente «centrista» del FSLN —articulada bajo la calificación de Grupo de Centro o Convergencia Democrática— (SOLÍS en Dossier Ambrosio Mogorrón, 1992).

28) Párrafo extraído de Vargas en VILAS, 1991c: 9.

29) Declaraciones del secretario general de la Unión Nacional de Empleados y dirigente del FNT (Bermúdez en VILAS, 1991c: 1).

Hasta el momento la diferencia más palpable entre un sandinista y otro es que unos sobreviven a bordo de un yate y otros aferrados en un pedazo de poroplast⁽³⁰⁾.

Más extrema, pero no sin fundamento, fue la declaración de un dirigente departamental del FSLN de que «el FSLN tiene que levantar la bandera de los pobres y no hacer diferencia entre los desalzados contras y sandinistas». Núñez, uno de los dirigentes sandinistas que más ha trabajado el tema del campesinado en Nicaragua, señaló la coincidencia de muchas demandas de los campesinos pertenecientes a la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) —gremio de adscripción sandinista— y los campesinos que pertenecieron a la RN.

Parece que, con el tiempo, el proceso de progresiva reunificación política de las clases dominantes —con relativa autonomía de las ideologías partidarias que polarizaron y enfrentaron a los nicaragüenses durante más de una década— tiene su correlato entre las bases, aunque dicho proceso se encuentra mucho menos avanzado que el que se está desarrollando en las esferas intra-elitarias. Este estado de cosas nos sugiere la hipótesis de una recomposición de los actores políticos basada en una convocatoria que apela a las *identidades sociales básicas*.

Con todo, si este es el punto final de nuestro recorrido, no significa que en función de esto tengamos que hacer el balance del proceso político acaecido en Nicaragua. En el ejercicio de interpretación de la realidad, *el acto del desplazarse siempre ha sido más importante que el punto o momento de llegada*. Cabe afirmar, pues, que es en el *camino* donde está la *meta*, y sea en esa dirección en la que tengamos que realizar el balance del proceso político acaecido en Nicaragua durante la pasada década. Este balance, sin embargo, no nos corresponde realizarlo aquí, sino en el siguiente apartado.

30) Párrafo extraído de una comunicación —con el título de «El partido que estamos perdiendo»— de un militante sandinista en el periódico Barricada (VILAS, 1991c: 1).

CAPÍTULO 7

**DESMANTELAMIENTO DEL
ESTADO REVOLUCIONARIO
Y LA REACCIÓN POPULAR**



7.1. EL DESEMBARCO NEOLIBERAL

«Ya nadie quiere a nadie,
Se acabó el querer»⁽¹⁾.

Las primeras decisiones tomadas por la administración Chamorro revelaron tempranamente qué tipo de modelo económico perseguía el Ejecutivo y quiénes eran sus beneficiarios —y todo ello llevado a cabo a la par (y a pesar) de la retórica civilista, pactista y dialogante del nuevo gobierno.

De esta forma, con la entrada de la Administración Chamorro se produjo en Nicaragua un *policy change* en materia social, económica y discursiva hacia contenidos netamente *fondomonetaristas*, siguiendo las ya famosas directrices del *Washington Consensus*⁽²⁾. Por una parte, las nuevas políticas se basaron en la captación de recursos externos para la importación masiva de bienes de consumo y para el pago de la deuda externa, sobre la base de la cual el gobierno transfirió un monto de 250 millones de dólares anuales —frente a los 75 destinados a la educación y sanidad. Por otro lado, se definieron estrategias privatizadoras y desreguladoras que confiaban a las fuerzas del mercado la reactivación interna, con algunas políticas de oferta y protección, pero sin programas integrales de apoyo al tejido productivo nacional. Finalmente, se redujo de forma drástica el gasto social en una ya contras-

1) Verso de un bolero del cantante cubano Formell.

2) Sobre ello cabe señalar que en el plano sustantivo el nuevo gobierno ya se encontró con el antecedente del plan de ajuste económico implementado por el sandinismo durante su último bienio en el poder. Con todo, el gobierno entrante se diferenció de la administración sandinista por su desinterés en aplicar medidas compensatorias para la protección de los sectores más desfavorecidos, así como por la exclusión de los agentes económicos locales en el diseño de las políticas económicas.

tada combinación de valores ideológicos y argumentos técnicos: la necesidad de poner fin a las tensiones monetarias y reducir drásticamente los índices de inflación (Butler *et al.*, 1995; Goma, 1994: 12-13).

Las dinámicas y los resultados que tales políticas generaron pueden sintetizarse, a nivel macroeconómico, en un acelerado ensanchamiento de la brecha comercial, una fuerte caída del sector exportador y la incapacidad para generar crecimiento. Para los ciudadanos nicaragüenses los efectos de estas políticas significaron la pérdida de empleo, la informalización del trabajo, la contracción de la renta familiar disponible y el incremento de la población en condiciones de pobreza³⁾, tal como lo han reflejado diversos indicadores sobre desnutrición, mortalidad infantil, alfabetización o acceso a la vivienda (USAID, 1995).

En este contexto, uno de los rubros más significativos de la economía nicaragüense durante este último lustro —al igual que en el resto de países centroamericanos— ha sido el de las remesas de dólares de los emigrantes a sus familiares (Vilas, 1994). Este doloroso mecanismo se ha convertido en uno de los más recurridos en pos de la supervivencia. En esta dirección se ha acuñado la sarcástica expresión de aquellos que *tienen fe* —es decir, aquellos que viven (o sobreviven) gracias a las remesas que les envían sus *familiares* en el *extranjero* (*f. e.*).

De esta forma, el gobierno de Violeta Chamorro representó el golpe de gracia definitivo al erosionado proyecto económico sandinista. En la configuración de la política macroeconómica éste se apresuró en diseñar e implementar un programa ortodoxo de estabilización y ajuste estructural que obtendría el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Americana de Desarrollo (USAID). Esta política se llevó a cabo en dos etapas diferenciadas: la primera, con un proyecto estrictamente ortodoxo —el Plan Mayorga o *Mayorgazo*—, y el segundo, con el mismo contenido pero más gradualista, el llamado *Plan Lacayo* (Stahler-Sholk, 1995).

El *Plan Mayorga* —que tomó el nombre del entonces presidente del Banco Central, Francisco (*Panchito*) Mayorga— se inició en abril de 1990 y tomó como

3) Tal como han expuestos muchos economistas, académicos y políticos, la recuperación del crecimiento de los rubros macroeconómicos se ha realizado en América Latina a costa del deterioro de la mayoría de la población. Con el objetivo de lograr una mejor eficiencia en la asignación de recursos, las reformas económicas a menudo han enfatizado el equilibrio presupuestario de las instituciones, el control de la inflación, la estabilización monetaria, el dismantelamiento arancelario y la optimización de la fuerza de trabajo. Ante la situación creada por estas medidas se ha ido acrecentando una opinión pública contraria a los regímenes (que mayoritariamente han sido fruto de elecciones libres) que han implementado dichas reformas.

ejes centrales las propuestas presentadas en el programa político de la UNO durante la campaña electoral (UNO, 1990; Nicaragua, 1990). El primer objetivo del Plan fue reducir la inflación a cero en cien días a través de un duro programa de austeridad, combinado con la acuñación de una nueva moneda fuerte —el *córdoba oro*— fijada a la par del dólar. A la vez, se elaboró un programa de ajuste estructural y de privatizaciones que tenía como objetivo generar las bases para la rearticulación de una economía de agroexportación con unos índices de crecimiento estimados en 10% anuales durante el siguiente lustro (UNO, 1990: 8).

Si bien dicho Plan prometió compensaciones sociales (como la donación de créditos de emergencia, la creación de empleo y la ejecución de programas de seguridad social), en realidad se observó una erosión inmediata de los salarios, así como despidos masivos de trabajadores pertenecientes al sector público con la intención de desarticular uno de los bastiones de la base social sandinista: las centrales sindicales (Neira & Acevedo, 1992: 4-6). Las medidas de dicho plan impactaron gravemente en el tejido social al suponer una notable subida de los impuestos directos y de las tarifas de transporte público, fuertes recortes al crédito y el inicio de la devolución de tierras afectadas por la Reforma Agraria.

A finales de 1990 —una vez presentada la dimisión del presidente del Banco Central, Francisco Mayorga, debido al rechazo que generaron sus medidas (tal como veremos en el epígrafe 8.2.)— fue preparado un nuevo paquete de medidas económicas por parte de los tecnócratas del entorno del Ministro de la Presidencia —Antonio Lacayo. Las nuevas medidas (conocidas como el *Plan Lacayo*) fueron anunciadas el 3 de marzo de 1991. Éstas eran una continuación de las medidas neoliberales implementadas anteriormente, pero mantenían un carácter menos confrontativo, posibilitando un mayor espacio de negociación para con los actores sociales y económicos domésticos. Con todo, en marzo de 1991 se realizó una devaluación del 400%, se retomó el programa de privatizaciones y se restringió nuevamente la capacidad de demanda.

Frente este nuevo embate neoliberal, las centrales sindicales realizaron nuevas movilizaciones, tal como veremos posteriormente, y obligaron a la apertura de nuevas rondas de negociaciones con el gobierno. No obstante, en 1992, la administración consiguió un notable flujo de financiamiento exterior con el que pudo reducir la inflación al 3,5% y contener el déficit fiscal. El precio de este éxito, sin embargo, fue el aumento acelerado y progresivo del desempleo⁽⁴⁾.

4) Los programas de creación de empleo y de emergencia social creados por el gobierno —la mayoría incluidos bajo el programa llamado Fondo de Inversión de Emergencia Social (FISE)— tuvieron un

El impacto de dichas políticas en la economía productiva también fue desolador. La combinación de las restricciones de crédito, las devaluaciones y el dismantelamiento de las tarifas arancelarias (que pasaron del 43% en 1990 al 15% en 1992) devastaron el sector industrial, generando una pérdida del 26% del empleo en 1991 (Neira & Acevedo, 1992: 93). En cuanto al sector agrario, la restricción del crédito agrícola y la confusión sobre los títulos de propiedad —tal como observaremos posteriormente— inhibieron la inversión. Al mismo tiempo, la supresión del monopolio estatal de granos básicos y la depreciación de estos productos conllevaron el desaliento y, posteriormente, la quiebra de numerosos pequeños productores (Spoor, 1944: 527-529; PNUD, 1994: 15).

Contra lo esperado, estas políticas económicas no solo sacudieron a los estratos económicamente más débiles, sino también a buena parte de la élite económica tradicional que, por boca del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Nicaragua, Alberto Chamorro, criticó los efectos de las nuevas medidas aduciendo que «si bien los resultados del programa de ajuste fueron excelentes en términos de abatir la hiperinflación, no dieron resultado alguno en términos de estimular la reactivación de los sectores productivos [...] Este programa ha conllevado consecuencias indeseables como el estancamiento económico y el aumento de la pobreza, y ello a pesar de los elevados niveles de asistencia financiera exterior» (Chamorro en Everingham & Roig, 1995: 11).

En cuanto a las políticas sociales (en congruencia con las medidas macroeconómicas descritas), también cambiaron radicalmente de orientación respecto a la administración sandinista. Como muestra de ello observaremos brevemente las tres áreas más significativas: los servicios sociales, la educación y la sanidad. En todas estas áreas se observaron recortes en los presupuestos y cambios sustanciales en el diseño de los programas. En consecuencia, durante el primer lustro de la década de los noventa fue observándose una progresiva desprotección de los sectores más vulnerables de la sociedad, en especial los niños, la gente mayor, las mujeres y los colectivos con menos recursos.

El área que más cambios sufrió fue la de los servicios sociales: el ministerio que hasta entonces los proveía y administraba fue reduciendo sus prestaciones

impacto muy limitado, y los programas auspiciados por las municipalidades fueron de pequeña envergadura, y la mayoría tuvieron un carácter clientelar debido a la discrecionalidad de los gobiernos locales (mayoritariamente en manos del sector radical de la UNO) en la adjudicación de las plazas (ENRÍQUEZ *et al.*, 1991; VICKERS & SPENCE, 1992). A consecuencia de estas políticas, la infrautilización de la fuerza de trabajo (el subempleo y el desempleo abierto) se incrementó del 32,5% de la población económicamente activa en 1988, al 53,6% en 1994 y al 65% en 1995 (STAHLER-SHOLK, 1995: 4).

hasta desaparecer en enero de 1995, para ser reemplazado por diversas agencias. Si bien a inicios del período gubernamental se anunció un cierto continuismo, en 1992, con la sustitución de Silviano Matamoros por Silviano Rizo al frente del Ministerio se rechazó el legado de la década sandinista. El ministro entrante justificó las nuevas directrices aduciendo⁽⁵⁾:

En los ochenta la Seguridad Social fue diseñada para una sociedad totalitaria [...] en la que las diferencias y características de los individuos se olvidaban y, en su lugar, se utilizaba el concepto de clase [...] la Seguridad Social se diseñó para un Estado paternalista que pretendía cubrir y dar respuesta a todo.

De esta forma, en sustitución del antiguo ministerio y del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar (INSSBI) se creó el Ministerio de Acción Social (MAS) y el Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia (FONIF). Dicho cambio no solo tuvo naturaleza administrativa, sino también una notable trascendencia política, ya que el Estado pasó a percibir de forma restrictiva las políticas de prestación de servicios sociales. La temporalidad de los nuevos proyectos y su débil dotación presupuestaria transformaron las instituciones de prestación de servicios en agencias de emergencia social sin interés ni compromiso en articular estrategias para la creación de un *Estado de Bienestar* (Kampwirth, 1995).

Respecto a la educación —uno de los sectores prioritarios durante la administración sandinista— se observó un cambio dramático en lo que se refiere a los valores. En primer lugar, se sustituyeron todos los libros de texto de primaria y secundaria⁽⁶⁾; los nuevos textos —si bien tenían un carácter menos partisano que en la década anterior— retomaron valores tradicionales y conformistas respecto a las cuestiones generacionales, de clase y de género, a la vez que mantenían una línea educativa confesional (Arrove, 1995: 99-119). También cambió el énfasis que anteriormente se había otorgado a la participación de los docentes en la elaboración de programas y diseños curriculares. El nuevo Ministerio de Educación (MED) rechazó la posibilidad de que los docentes, representados en el sindicato Asociación Nacional de Docentes de Nicaragua (ANDEN), tomaran parte en la selección de

5) Extraído del texto «Exigencias y posibilidades de una reforma al sistema de Seguridad Social en Nicaragua», en KAMPWIRTH, 1995: 2-3.

6) Los nuevos libros de la asignatura *Cívica y Moral* fueron escritos, publicados y llegaron a las manos de los niños en el período de un año de la llegada de la UNO al poder gracias a una donación de 15 millones de dólares de la Agencia Americana de Desarrollo (USAID) (ARROVE, 1995).

los contenidos de los nuevos programas. En 1993, cuando el MED desarrolló una estructura administrativa regional y local para que la sociedad civil participara en las decisiones educativas, marginó la representación de la central sindical de docentes e incorporó a representantes de la Iglesia Católica.

Otro aspecto de la nueva política educativa fue la fuerte reducción de las partidas presupuestarias. El recorte presupuestario de los centros de primaria y secundaria se realizó con el fin de otorgarles *autonomía* —hecho que supuso la financiación parcial de aquéllos y el aumento de las cuotas de matrícula. En cuanto a la educación universitaria se generó un cruento debate por la exigencia de los estudiantes al cumplimiento de la cláusula constitucional que dice otorgar el 6% del PIB a la educación superior. Las propuestas para anularla o incumplirla conllevaron múltiples manifestaciones y enfrentamientos entre los estudiantes y los cuerpos de seguridad —entre las que destacaron las realizadas en junio y julio de 1992 y en diciembre de 1995 (los choques entre este colectivo y la Policía Nacional se cobraron la vida de un estudiante y varios heridos).

Finalmente, en cuanto a la política sanitaria, los cambios empezaron a inicios de 1991 con la subida de los precios de las prestaciones y con la descentralización de los servicios (con la creación de los Sistemas Locales de Atención Integral de la Salud y los consejos de administración de los hospitales). La nueva política, si bien teóricamente pretendía acercar los servicios al usuario, en realidad, simplemente redujo la dotación económica de los centros⁽⁷⁾. Consecuencia de ello, en los últimos años, los servicios de salud se han ido deteriorando progresivamente obviando la incapacidad de atender a una población en aumento. De esta forma, en los noventa, la mortalidad infantil creció —contrariamente a la década pasada— y se expandieron enfermedades como la malaria, el dengue, el tifus, la fiebre amarilla y el cólera, que anteriormente habían sido prácticamente erradicadas (*Envío*, 1993/12: 15).

Por otro lado, el otro gran tema de la administración Chamorro fue la *cuestión de la propiedad*. Con la derrota electoral de los sandinistas, muchos de los antiguos propietarios percibieron la posibilidad de obtener nuevamente sus tierras,

7) El factor más importante en política sanitaria ha sido la reducción del presupuesto. Es difícil hacer comparaciones a través del tiempo debido a la inconvertibilidad de la moneda nicaragüense en los años ochenta. No obstante, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que, en dólares constantes de 1988, el gasto público en salud pasó de 70 millones en 1980 a 132 en 1983; disminuyó a alrededor de 100 millones en el período 1984-1987; y a partir de 1989 cayó de nuevo para llegar a 72 millones en 1992. Posteriormente el presupuesto de salud ha ido decreciendo (Espinoza en EVANS, 1995: 232).

a la vez que los beneficiarios de la Reforma Agraria —sandinistas o no— mantenían la determinación de quedarse en las tierras que trabajaron por casi una década. Para complicar el ya enredado paisaje, el gobierno entrante prometió tierra a los antiguos combatientes de ambos frentes —del Ejército Popular Sandinista y de la Resistencia Nicaragüense, creando así nuevas expectativas (*Envío*, 1992/133).

Este choque de pretensiones sobre la propiedad de la tierra supuso uno de los conflictos más complejos de la Nicaragua contemporánea. Según diversos cálculos, en 1990, alrededor del 40% de las tierras de Nicaragua estaban en litigio. Dicho conflicto enfrentó a gente de todos los estratos sociales y políticos: gente de bajos recursos contra acaudalados terratenientes; colectivos pobres de diferentes sensibilidades políticas; y élites tradicionales contra *nomenklatura* nacida al calor del régimen sandinista. Así pues, la extensa red de actores sociales y políticos presentes en el conflicto de la tierra en Nicaragua supuso un nudo gordiano donde todo el mundo estaba implicado: las centrales sindicales sandinistas (ATC y CST —posteriormente organizadas en el Frente Nacional de Trabajadores, la FNT—), diversos gremios de agricultores y ganaderos (UNAG, UPANIC), el Movimiento Comunal (MC), las organizaciones de desmovilizados del Ejército Popular Sandinista y de la Resistencia Nicaragüense, la patronal (COSEP), y las élites nicaragüenses afincadas en Nicaragua y en Miami.

En el contexto mencionado, a nivel internacional, merece la pena mencionar el rol ejercido por el Congreso, el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos⁽⁸⁾ y por las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). De esta forma, el *conflicto de la propiedad* significó una batalla en la que desfilaron todos los actores nacionales y un notable número de actores internacionales. La resolución de dicho conflicto, sin embargo, también estuvo condicionada por las políticas económicas implementadas desde el ejecutivo, conllevando muchas veces la venta de tierras por parte

8) En septiembre de 1994, el entonces embajador de los Estados Unidos en Managua, John Maisto, declaró delante de la comunidad de empresarios y banqueros nicaragüenses exiliados en Miami (EVERINGHAM & ROIG, 1995: 7): «La comunidad financiera internacional y los países donantes perciben la resolución de los litigios de propiedades confiscadas como el problema más importante de Nicaragua. En base a ello vamos a estimular o a estancar la inversión privada». Por otro lado, el Departamento de Estado, el congresista demócrata Robert Torricelli y el senador republicano Jesse Helms presionaron en diversos momentos al gobierno de Violeta Chamorro en pos de la satisfacción de las demandas de los ciudadanos norteamericanos bajo la amenaza de bloquear la ayuda financiera oficial (*New York Times* [8-12-1994]).

de antiguos beneficiarios, debido a la incapacidad de hacer frente a sus efectos (Butler *et al.*, 1995: 20-21).

Este conflicto supuso la permanente inestabilidad económica y socio-política del país. Con todo, su desenlace pareció irse tejiendo sobre la base del compromiso — producto de la incapacidad de cualquier actor de imponer su voluntad sobre el resto. A pesar de ello, el resultado parcial induce a pensar que los antiguos propietarios recibieron una significativa parte de sus antiguas propiedades a través de privatizaciones, negociaciones, invasiones y, en algunos casos, por el fallo de los tribunales. Entre éstos, los nacionalizados norteamericanos (en el transcurso de la década de los ochenta) resolvieron mayoritariamente sus litigios de forma favorable —debido, en parte, a la presión ejercida por la embajada norteamericana.

Por otro lado, los sectores populares beneficiarios de la Reforma Agraria fueron perdiendo entre un 14% y un 20% de sus propiedades mediante devoluciones, privatizaciones y, en algunos casos, debido a ventas forzadas. El proceso de titulación de propiedades, sin embargo, está aún en sus inicios⁽⁹⁾ y muchos pequeños y humildes propietarios están bajo peligro de perder su tierra a menos que los bancos privados otorguen más crédito y en mejores condiciones. Con todo (tal como se observa en las tablas nº 9 y nº 10) sí es posible afirmar un sensible aumento de los latifundios, el notable incremento de la pequeña propiedad, la progresiva desaparición de las cooperativas y de las empresas estatales, así como la reaparición de los «antiguos dueños» y la emergencia de *nuevos sujetos económicos* —dícese de los trabajadores que optaron por la propiedad del 25% de las ex-empresas del Estado cuando éstas fueron privatizadas o de los desmovilizados del EPS y la RN⁽¹⁰⁾.

9) A mediados de 1995, menos de un 1% de las propiedades estaban jurídicamente aseguradas; en la misma fecha, los antiguos propietarios solo habían cerrado negociaciones sobre la compensación de expropiaciones en 460 casos sobre 3.961; a la vez que 2.358 haciendas transferidas durante el período de transición estaban aún bajo investigación.

10) Desde 1990 han ido apareciendo estudios sobre el «problema de la propiedad» en Nicaragua y las «tendencias» que ha ido tomando su «resolución». Entre ellos cabe destacar: DUMAZET, 1995; JONAKIN, 1995.

Tabla 9. Transformación de la distribución de tierras, 1990-1993

Forma de propiedad	1990	1993
Fincas de menos de 50 manzanas	22%	37%
F. de 50 a 200 mz.	32%	32%
F. de 200 a 500 mz.	16%	16%
F. de más de 500 mz.	8%	10%
Cooperativas de producción	11%	2%
Empresas de Reforma Agraria	6%	-
Área de Propiedad de los Trabajadores	-	2%
Comunidades indígenas	2%	2%

Fuente: Nitlapán en *Barricada* (1-10-1995).

Tabla 10. Resultados del proceso de privatización de la tierra, 1990-1994

Beneficiario	# Fincas	% Fincas	Área en hac.	% Del área
Antiguos dueños	279	56	101.137	40
Trabajadores	122	24	77.577	31
Ex-EPS	61	12	36.156	14
Ex-RN	37	7	38.054	15
Total	499	100	252.935	100

Fuente: Butler *et al.*, 1995: 32.

Como es común en estas circunstancias caracterizadas por la confusión, diversos colectivos con acceso al poder cometieron abusos. Frente a ello, la administración Chamorro no realizó ningún tipo de fiscalización. Así, no se llevó a cabo ninguna revisión a la forma desordenada y abusiva en que los sandinistas adjudicaron la propiedad de tierras y recursos en el Proceso de Transición del Poder Ejecutivo en el *interregno* de febrero-abril de 1990 (lo que se calificó como la *piñata sandinista*), y menos aún sobre cómo ciertos sectores vinculados al ejecutivo utilizaron

el proceso de privatizaciones iniciado en mayo de 1990 —implementado a través de la Corporación Nacional de Privatizaciones, CORNAP— para enriquecerse (fenómeno al que algunos sectores calificaron como la *piñata de los lacayos*).

Después de este breve análisis de las políticas socioeconómicas del ejecutivo Chamorro y del conflicto sobre la propiedad, podemos sostener la clara disposición de la administración postsandinista de redefinir en profundidad los roles del Estado en los procesos de acumulación y redistribución del excedente. La remercantilización de las parcelas de producción pública y de los procesos de consumo de bienes y servicios básicos prefiguraron un nuevo tipo de Estado que residualiza sus funciones de bienestar y se convierte en habilitador de nuevos beneficios para los sectores económicos dominantes (Gomà, 1994), siendo las grandes firmas comerciales y financieras los beneficiarios netos del nuevo modelo económico implementado en Nicaragua.

Tabla 11. Indicadores económicos básicos. 1990-1994

	1990	1991	1992	1993	1994
Porcentajes					
Crecimiento PIB	-0,1	-0,1	0,4	-0,4	3,2
Crec. PIB x cápita	-3,4	-3,3	-2,8	-3,5	0
Inflación	13.490,3	865,6	3,5	19,5	12,4
Paro	44,3	52,3	50,3	50,1	53,6
Índices (1980=100)					
PIB	86,1	85,9	86,3	85,9	88,7
PIB x cápita	65,7	63,3	61,5	59,4	59,4
Salario real	12,6	13	15,5	15	15,3
Millones de \$ US					
Balanza de pagos	-260	-486	-610	-449	-428
Deuda externa	10.616	10.806	10.9877	10.987	11.695

Fuente: CEPAL, 1992.

De esta manera, con la llegada del gobierno Chamorro empezó a vislumbrarse un *nuevo proyecto político de las élites* que, después de 1990, tomaron las riendas de la administración postrevolucionaria. Dicho proyecto no es, en ningún caso, ajeno al contexto internacional donde las propuestas neoliberales como el TLC o el CAFTA cobran una renovada centralidad.

7.2. LA REACTIVACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN POPULAR URBANA

«No ganamos oro,
No pagamos oro»⁽¹¹⁾.

Ya es un lugar común de los estudios sobre transiciones democráticas señalar la centralidad de los acuerdos intraelitarios en los procesos de reforma institucional y en el diseño e implementación de políticas económicas de cuño fondomonetarista. A la par de ello, sin embargo, también cabe anotar el impacto que han generado dichas políticas sobre los colectivos más desprotegidos de la población. Es precisamente en esta última dirección en la que queremos enfocar este epígrafe. Así, en primer lugar, observaremos la reactivación —y rearticulación— de la movilización sindical para con las políticas ejecutadas por el gobierno. Posteriormente, aunque sin pretensión de exhaustividad, visualizaremos cómo acaeció una rearticulación —a partir de muy diversas plataformas e instancias— de la movilización y del activismo popular urbano, creando nuevos espacios de vida colectiva.

Inmediatamente después de la pérdida electoral del FSLN y de que el nuevo gobierno empezara a llevar a cabo su programa (con la implementación de políticas fondomonetaristas y con la suspensión de la Ley de Administración del Estado sobre la base del Decreto Presidencial 8-90 del 10 de mayo de 1990), las centrales sindicales —de diversa adscripción política, pero sobre todo las sandinistas— tuvieron que enfrentarse a nuevos retos, a la vez que adquirirían un renovado protagonismo. Después de casi once años de relación paternalista con el Estado, de un día para el otro, los sindicatos tuvieron que modificar su papel y enfrentar a las políticas del nuevo ejecutivo. Además, necesitaron conquistar nuevos espacios de autonomía frente al aparato partidario que otrora, tal como se desprende del presente testimonio, terminó satelizándolos:⁽¹²⁾

11) Pintada que apareció en las calles de Managua durante la ejecución del Plan Mayorga.

12) Declaración de una entrevista realizada a un líder sindical.

Durante la Revolución nunca necesitamos luchar por reivindicaciones sociales como comedores, transportes, ropa, medicina. Éstos eran regalos del Frente Sandinista. A cambio, nosotros apoyábamos la política del gobierno: organizábamos trabajadores en brigadas para ir a cortar café, para alfabetizar, para enrolarse en el Servicio Militar... Por eso antes, muchos trabajadores, consideraron la CST como un sindicato en manos de la administración y no un instrumento para la lucha de sus intereses. Ahora todo ha cambiado. De ahora en adelante no conseguimos nada si no luchamos... Tenemos que crear nuestro propio perfil con las luchas diarias [...] Antes los dirigentes andábamos apagando fuegos por todos lados, resolviendo todo. Ahora llamamos a nuestros trabajadores a la verdadera lucha.

Respecto al proceso de adquisición de mayores espacios de autonomía, como muchas otras organizaciones vinculadas al FSLN, los sindicatos nunca pensaron que el Frente pudiera perder las elecciones y, por lo tanto, no se preocuparon de asegurarse su futuro legal ni financiero. Para sobrevivir al terremoto que supuso la derrota del FSLN, al cabo de un mes, todas las organizaciones sindicales afines al sandinismo se organizaron en el Frente Nacional de Trabajadores (FNT) con el objetivo de crear un bloque sindical sólido frente a los demás actores sociales y políticos. A partir de entonces las relaciones con el FSLN se hicieron más complejas y, a veces, más tensas. El verticalismo, los estilos de dirección burocrática, la imposición de dirigentes y formas organizativas, y otras prácticas afines dentro del sandinismo fueron, rápidamente, objeto de crítica por parte de dirigentes sindicales. Con todo, la primera prioridad de la FNT fue, como veremos, enfrentar a las políticas de la nueva administración.

Así, después que la Presidente Chamorro asumiera el poder, los sindicatos sandinistas fueron los principales opositores a las políticas económicas del nuevo gobierno. En cuanto a las centrales sindicales no sandinistas (agrupadas en torno a la organización llamada Congreso Permanente de los Trabajadores, CPT), si bien en un primer momento apoyaron al Ejecutivo, posteriormente irían distanciándose de él.

Las manifestaciones más importantes e inmediatas de la beligerancia sindical fueron las huelgas nacionales de mayo (de 11 al 16) y de junio-julio (del 27 de junio al 12 de julio) de 1990. En ambas los sindicatos no sabían exactamente cuáles eran las medidas del nuevo gobierno, pero temiendo la implementación de políticas regresivas movilizaron a todas sus fuerzas con el objetivo de mostrar al ejecutivo los límites de su espacio de acción.

La primera huelga fue convocada por los empleados públicos a iniciativa de la UNE — confederación de trabajadores de la administración pública — en demanda

de ajustes salariales y en contra de la suspensión de la Ley del Servicio Civil. La segunda se originó entre los obreros de la industria textil y de la construcción y progresivamente se unieron diversos sectores. En un inicio, la huelga fue secundada por 6.200 trabajadores de empresas textiles y constructoras del Estado en protesta por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos suscritos con los sindicatos en mayo del mismo año; pero, al poco tiempo se sumaron los trabajadores de los ministerios de Relaciones Exteriores, Transporte y Construcción, Cooperación Externa, del Banco Central, de la Casa Presidencial y del Sistema Nacional de Televisión. Más tarde se adhirieron los estudiantes universitarios y de secundaria, y los trabajadores del Aeropuerto y de los principales puestos aduaneros. De esta forma, a inicios de julio, el país —y sobre todo Managua— quedó totalmente paralizado.

Lo que comenzó como un conflicto laboral casi terminó en una insurrección e incluso, en algún momento, amenazó en convertirse en un conflicto civil, al generalizarse los choques violentos entre manifestantes y grupos armados anti-sandinistas que intentaban desalojar por la fuerza a huelguistas en varias empresas. Ante dicha situación, la necesidad de buscar una salida negociada se hizo patente y, en ese marco, los dirigentes del FSLN desempeñaron un activo papel en la búsqueda de un acuerdo para poner fin a la convulsión social que reinaba en las calles. Finalmente se firmó un convenio donde el gobierno se comprometió a asumir 11 de las 18 demandas de la FNT. El acuerdo fue celebrado por los sindicatos como una gran victoria. Sin embargo, para diversos líderes del movimiento obrero lo más importante fue, tal como declararon, la reactivación de la movilización sindical, la capacidad de enfrentarse a las políticas neoliberales y de forzar a negociar al gobierno⁽¹³⁾:

Lo más importante es que, conocida la fuerza y la madurez del movimiento sindical, debe establecerse un nuevo tipo de relación entre el gobierno y los trabajadores.

De esta forma, las huelgas de mayo y julio de 1990 fueron importantes recordatorios de la capacidad movilizadora que aún mantenían las centrales sindicales y las organizaciones populares. A consecuencia de ello, la política gubernamental tuvo que dar un viraje hacia un plan de estabilización un poco más gradual y con mayores compensaciones sociales (Montealegre *et al.*, 1990).

Efectivamente, a partir de la amenaza de nuevos disturbios, huelgas y movilizaciones con las cuales sabotear el plan de estabilización diseñado por el gobierno, las

13) Ídem.

centrales sindicales obtuvieron diversas concesiones del ejecutivo (Stahler-Sholk, 1994, 1995). Sobre la base de ello, el gobierno y los sindicatos establecieron la apertura de negociaciones en el marco de un proceso denominado la *Concertación*. La primera fase de éste se llevó a cabo en septiembre-octubre de 1990. Se llegó a una serie de acuerdos entre los que se reconocía la necesidad de reducir el déficit fiscal; de priorizar los presupuestos de educación y sanidad. El gobierno se comprometía a reactivar la producción, a reducir el desempleo, a establecer un salario mínimo en virtud de un porcentaje de la canasta básica de 53 productos, y a tasar, para los servicios públicos, tarifas preferenciales para los sectores de menores ingresos.

Al cabo de medio año, en marzo de 1991, ante la amenaza del FNT de una nueva ola de huelgas —como consecuencia de la implementación de un nuevo plan de estabilización económica por parte del gobierno—, se inició otro proceso de negociación entre representantes del Ejecutivo y de los sindicatos, bajo el nombre de *Concertación II*. En esta segunda fase, realizada en julio-agosto de 1991, se sellaron dos compromisos, uno en el campo de la estabilización, donde los sindicatos aceptaron el principio de austeridad fiscal en tanto que el gobierno prometía vincular los salarios con los costos de una canasta básica para el consumidor. Otro acuerdo fue en el ámbito de la política de privatizaciones, donde las centrales sindicales aceptaron el plan de privatizaciones diseñado por el gobierno a condición de la cesión del 25% de las empresas estatales privatizadas para los trabajadores organizados en los diversos sindicatos, dando a luz a una nueva forma de propiedad: la llamada Área de Propiedad de los Trabajadores (APT).

En este contexto —la negociación sobre las privatizaciones de empresas a favor de los trabajadores—, uno de los fenómenos más destacados fue que las centrales sindicales, que años atrás habían estado divididas por sus relaciones con el régimen sandinista, entonces se encontraron sentadas en el mismo lado de la mesa de negociaciones defendiendo intereses análogos; mientras que los ex-administradores del Estado revolucionario y los *yuppies* del nuevo Ejecutivo se convertían en empresarios (Stahler-Sholk, 1994: 77). Por ello se observó cómo, en el proceso de conflicto y negociación desarrollado a raíz de las privatizaciones, aumentaba la autonomía de los sindicatos, poniendo de manifiesto diferencias de clase, más allá de las adscripciones partidarias. Sobre esto, por ejemplo, un activista de la Central Sandinista de Trabajadores expresó las contradicciones existentes entre la afiliación partidaria y las relaciones de producción (*Envío*, 1993/141):

Ha sido difícil para nosotros organizar sindicatos en las compañías que seguían en las manos de simpatizantes del Frente Sandinista, como el caso de la estación Radio Ya y la Pastelería Plaza España [...] Nadie res-

peta los derechos de los trabajadores; y el secretario de Trabajo en vez de cumplir su papel de mediador automáticamente se pone al lado de los propietarios.

Con todo, la lucha por lograr la participación de los trabajadores en la privatización no garantizó automáticamente la representación de sus intereses. Por un lado, porque el modo de privatización terminó por definirse a partir de la dinámica de conflicto-negociación y, por otro, por la existencia de múltiples dificultades a que se enfrentaban los trabajadores en la gestión directa de la propiedad. En esta última dirección, cabe destacar peligros que van desde el amplio potencial de cooptación por parte de los capitalistas mayoritarios; pasando por el hecho de que la gestión de tales empresas quede en manos de una burocracia sindical; hasta la simple quiebra económica de las unidades de producción —fruto de la inexperiencia y/o de la restrictiva política crediticia del gobierno.

Sin embargo, a pesar del alto perfil del proceso de Concertación I y II cabe señalar que los acuerdos se cumplieron solo de forma parcial. Sobre la base de ello, durante toda la administración Chamorro las relaciones entre la administración y los sindicatos siempre fue tensa, y la preservación de algunas «conquistas sociales» originarias del proceso revolucionario o la obtención de nuevas demandas solo fueron posibles a partir de un largo rosario de movilizaciones.

Fue en este nuevo contexto caracterizado por la redefinición de los roles del Estado y del resquebrajamiento de las lealtades y adscripciones partidarias que algunos líderes sindicales se percataron de la importancia de articular un movimiento sindical capaz de hacer frente al capital y a las políticas del Ejecutivo. Y así lo expresó el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) en una entrevista (Stahler-Sholk, 1994: 83):

No podemos quedarnos como si nada pasara [...] La privatización está llevándose a cabo. Tenemos que aprovechar los espacios ganados; no podemos desconectarnos. De este modo estaremos estableciendo una red, preparando las condiciones para cuando el modelo neoliberal se agote [...] Tenemos que actuar, presionar al gobierno, obligarle a negociar.

Ante ello, sin embargo, los voceros del Ejecutivo fueron expresando su disconformidad frente a las reivindicaciones de los sectores populares organizados en centrales sindicales, ejemplo de ello fue la declaración del entonces (1991) viceministro de la Presidencia de Nicaragua, Antonio Ibarra:

Los sindicatos están compuestos por terroristas. Viven del desmán, están desbocados, funcionan como turbas, como lumpen... son rumberos, changueros y revoltosos [...] No son una contraparte leal, tienen una enorme capacidad destructiva y ponen en peligro el interés de todos [...] Las huelgas pasadas frenaron la recuperación económica, quebraron el impulso de la cooperación internacional y se nos fue la plata [...] Pero no nos interesa tanto lo que se piensen afuera. La policía está aprendiendo a obedecer al gobierno, para defender el interés nacional.

En otro orden de cosas, frente a la precarización de los servicios sociales y a la degradación de las condiciones materiales diversos movimientos se organizaron para mostrar su rechazo a las políticas neoliberales implementadas. Así, a parte del sector sindical, otros actores sociales también se manifestaron y cobraron protagonismo. Entre ellos destacaron las tareas de las comunidades de vecinos articuladas en diversas plataformas que iban desde las Comunidades Eclesiales de Base hasta la militancia política del Movimiento Comunal (MC). El objetivo era protegerse de la irrupción de la sociedad del «sálvese quien pueda».

Fue, sin duda, esta capacidad organizativa de la sociedad nicaragüense lo que nos da una de las claves para comprender la resistencia de la buena parte de la población frente a las drásticas políticas de ajuste y la ascendente precarización económica y social. Y así lo expuso un informe de las Naciones Unidas (*Envío*, 1994/155):

El 75% de las familias nicaragüenses viven por debajo del nivel de pobreza y el 44% están en la extrema pobreza [...] Frente a esta creciente depauperación social resulta significativo que no se hayan dado más explosiones sociales [...] Probablemente, un factor determinante de esta resistencia sea la arraigada tradición de organización, disciplina social y solidaridad de los nicaragüenses.

Tal como hemos expuesto, el recrudescimiento de la vida cotidiana fue quebrando —sobre todo desde finales de la década de los ochenta— las esferas que separaban lo privado de lo público. La profunda crisis económica, los despidos masivos de empleados públicos y los drásticos recortes de los servicios sociales supuso que las decisiones tomadas en las esferas públicas irrumpieran con fuerza en el ámbito de lo doméstico, suponiendo una activación de actores sociales que anteriormente se habían manifestado de forma subordinada.

Esta «politización» de la vida privada implicó una redefinición de las relaciones entre la esfera de lo público y lo privado, creando una renovada capacidad de

expresión de ciertos sujetos sociales —los llamados *nuevos sujetos sociales*— que anteriormente habían permanecido subordinados a lógicas políticas partidarias (Vilas, 1994c).

En la década anterior, con la Revolución Sandinista, el conflicto político dio a esos actores visibilidad social por primera vez en la historia. Durante ese período, la movilización se hizo casi siempre de forma dependiente o canalizada. Con todo, ésta dio como fruto un incremento de su sentimiento de eficacia política; aumentando su confianza en la organización y dándoles conocimiento de las ventajas derivadas de trabajar y presionar unidos.

Es precisamente desde esta perspectiva que cabe introducir en Nicaragua una variante clave en la vida política: una cultura política combativa fruto del período revolucionario. Y es que ese período, a pesar de sus limitaciones y errores, impactó en el imaginario de numerosos colectivos sociales que ahora no se resignan a la pasividad ante los embates neoliberales dictados desde el Ejecutivo por las élites encaramadas en la cúpula de la nueva institucionalidad.

En dicho sentido cabe observar que los procesos de apertura, democratización y modernización institucional acaecidos en Nicaragua presentan notables claroscuros. Muestra de ello es que los discursos a favor de la libre competencia y de la desregulación coexisten con el mantenimiento de prácticas corporativas y estilos clientelares; que la retórica de la reforma del Estado convive con la manipulación de los presupuestos gubernamentales que alimentan lealtades políticas; y que, a la vez que se exaltan las virtudes del mercado, se perpetúan comportamientos rentistas y especulativos (Vilas, 1994c).

En este marco, a pesar de la titularidad abstracta de derechos y capacidades individuales rubricadas en los textos legislativos y en la Carta Magna (a partir de los cuales la democracia basa su legitimidad), en Nicaragua, contar con parientes, conocer a alguien en el gobierno, tener buenos amigos, ser de buena familia, continúan constituyendo los activos más importantes para progresar en la esfera pública y privada. De esta manera, si bien existen múltiples *think-tanks* que difunden «modernas» ideologías que exaltan valores como los de ciudadanía, democracia representativa y mercado libre, en la vida cotidiana persiste la reproducción de pautas clientelares y dinámicas de solidaridades primarias basadas en la renta, la familia, el compadrazgo, la amistad o el color de la piel (Vilas, 1995: 26).

Es difícil observar la eficacia de las instituciones democrático-representativas en la mejora de las condiciones de vida de amplias mayorías. Y es este tipo de reduccionismo democrático el que no solo pone en cuestión la competitividad efectiva de los procesos electorales y la confección de la agenda que se discute en ellos, sino que también perpetúa situaciones —entre elección y elección— donde

imperan la impunidad, la corrupción pública, la opacidad administrativa y la subordinación del poder judicial al ejecutivo. Efectivamente, la democratización es muy difícil si no va acompañada de una democratización de la sociedad y de una reducción de las profundas fracturas económicas y culturales que hoy cruzan muchos países latinoamericanos (en las que se sitúa Nicaragua). La democracia es un régimen de integración en torno a valores y actitudes compartidas; y éste es una quimera cuando el mercado margina y la cultura discrimina.

Es una trágica ironía —a la que la política es muy proclive— que en Nicaragua (al igual que ocurre con sus vecinos centroamericanos) el proceso de democratización recientemente acaecido (posible, en gran medida, gracias a las movilizaciones populares, a los embates revolucionarios —¿y contrarrevolucionarios?—) haya devuelto el gobierno a los representantes de la oligarquía; al tiempo que los condicionantes fijados por los organismos financieros internacionales acentúan el sesgo de clase en la economía, y consolidan las posiciones de poder de aquellas élites modernizadas en cuanto a su integración en el mercado —aunque no respecto a sus actitudes para con los demás sectores de la sociedad (Vilas, 1994c).

Sin embargo, cabe puntualizar que la evolución de este panorama dependerá también de la capacidad de las fuerzas populares para plantear mejores estrategias de desarrollo que compatibilicen el crecimiento, la democracia y la equidad; así como de la creación de formas organizadas de acción colectiva que se orienten al ejercicio directo e indirecto del poder. Así, el paisaje político venidero estará en función de la efectividad del movimiento popular y sus expresiones políticas en encontrar fórmulas que impulsen mayor justicia social y una mayor representatividad. Y ello, inevitablemente, tiene que ver con la lucha, pero también con la creatividad y la imaginación.

En este sentido, la activación de la sociedad civil observada en este último epígrafe puede interpretarse como una respuesta a la rigidez del sistema político y de los partidos para hacerse cargo de demandas —generadas por actores de adscripción popular— en pos de una democratización efectiva y un cambio social. Así, cabe percibir el resurgimiento de ciertos colectivos organizados en demanda de intereses que afectan a sus derechos más elementales. Fenómeno que no es ajeno —creemos— a la experiencia revolucionaria (y contrarrevolucionaria) acaecida durante la década de los ochenta. Pues, si bien a veces el accionar de estos grupos se ha caracterizado por la agitación y la violencia, cabe preguntares también cuál fue el tipo de «acción social» que se les enseñó (y a la que se les empujó) durante dicha década por parte de las élites de uno y otro bando.

Paradójicamente, son estas mismas élites (antes radicadas entre Managua y Miami) las que desde inicios de la década de los noventa claman en pos del estable-

cimiento de un clima de orden y estabilidad. En ese razonamiento las élites figuran como las portadoras del progreso —cuya meta es la inserción de Nicaragua en una economía globalizada—, en oposición a la plebe que, con sus manifestaciones, huelgas y asonadas, representan la barbarie. Ante este discurso —que casualmente coincide con el de sus homólogos que, hace siglo y medio implementaron las reformas liberales que insertaron el país al mercado internacional del café— cabría preguntarse si la barbarie que ellos denuncian es la constatación de la miseria en que está sumida buena parte de la población y el despertar de la conciencia de quienes la padecen.

CAPÍTULO 8

**EL SANDINISMO
DESPUÉS DE LA DERROTA**



8.1. EL LABERINTO SANDINISTA: EL DEBATE INTERNO

«Al saber de la derrota electoral me sentí como una mierda. Me pregunté qué había hecho para que nos pasara esto. Sentí que lo que había hecho era poco, y me cuestioné las bacanales [...] Me puse helado; pensaba que esto se iba a convertir en una carnicería... Luego apareció Juan Rivas, el pintor, y quisimos formar un comando. Nos montamos en su carro, fuimos para arriba y para abajo [...] Terminamos borrachos y llorando. Después nos reímos de todo»⁽¹⁾.

Desde el mismo día en que ganó las elecciones, la UNO empezó a resquebrajarse. El proceso electoral forzó la convergencia de diferentes formaciones y de proyectos políticos dispares en torno a un objetivo común: derrotar al FSLN. El problema residía en que dentro de dicha coalición se agrupaban pretensiones, personalidades y estilos muy diferentes, y cuando intentaron llevar a cabo un programa común, afloraron inmediatamente las contradicciones. Así, con el inicio de dichos conflictos se desvaneció el frágil consenso pre-electoral que mantuvo unida a dicha coalición.

Posteriormente, el descontento de la clase política de la UNO se manifestó en la ausencia de ocho de los 14 partidos de la coalición en la toma de posesión del nuevo gobierno. En esos momentos, un dirigente de la UNO expuso: «No tiene ningún sentido seguir aparentando una unión que no existe» (Monjárez, 1992: 1-6). Pronto se observó la profunda división existente entre las élites políticas que, en su día crearon la UNO, pudiéndose diferenciar a quienes coparon los lugares de responsabilidad en el Ejecutivo optando por una postura conciliadora frente a

1) Párrafo extraído de *Barricada Internacional* (3-1994: 40).

las élites salientes, de quienes, desde su exclusión de los cargos gubernamentales, mantuvieron posiciones confrontativas tanto con el nuevo Ejecutivo como con el sandinismo.

Sin embargo, en este capítulo final nos interesa el impacto que tuvo para el FSLN la inesperada derrota en las elecciones. Una derrota que, sin duda, le produjo una fuerte sacudida. La primera e inmediata consecuencia de los resultados electorales fue el desconcierto. Así empezó el llamado *debate interno sandinista*. En principio, este debate tuvo connotaciones violentas y personales.

En esta discusión los militantes no solo se preguntaban por qué se perdieron los comicios, sino que este interrogante se mezcló con controversias sobre los factores que desvincularon al FSLN de la sociedad y las razones por las cuales la dirigencia sandinista fue distanciándose de sus bases. Tampoco dejó de mencionarse la forma rápida, desordenada y algunas veces abusiva (recordándonos la pervivencia del *spoils system*) en que el gobierno sandinista adjudicó propiedades y recursos estatales en sus últimas semanas de gestión (mientras se negociaba el PTPE). Lo que popularmente se llamó *la piñata*.

Posteriormente, la primera expresión abierta y ordenada del *debate* acaeció en una Asamblea Nacional de Militantes del FSLN, realizada en la pequeña localidad del Crucero, como culminación de reuniones de base, locales y departamentales, espontáneamente convocadas por la militancia sandinista frente a la pasividad de la antes omnipresente Dirección Nacional. En las conclusiones de esta Asamblea mencionaron, con un notable acento crítico, las causas de la derrota electoral⁽²⁾. También se reprobó la poca receptividad que el aparato partidario del FSLN mostró, durante la década de los ochenta, a las críticas; los estilos burocráticos y verticalistas del funcionamiento partidario; la poca autonomía de la que gozaron las Organizaciones de Masas sandinistas; y los estilos de vida de algunos dirigentes que contrastaban con la situación de la mayoría de la población. Sobre este último punto, cabe exponer el poema del irreverente escritor, ex diputado sandinista y ex funcionario del ministerio de Cultura durante la Revolución, Alejandro (el Negro) Bravo, titulado *fotografía borrosa*, donde se expresa con fidelidad la sensación y el estado de ánimo de muchos militantes sandinistas al recordar la Revolución⁽³⁾:

2) El documento fruto de dicha Asamblea está reproducido en su integridad en *Envío*, 1990/105.

3) Extraído del poemario de Alejandro BRAVO (1996) llamado *Merecido Tributo*.

I

Hace diez años
mis hijos estaban pequeñitos
y me costaba mucho
conseguir leche para ellos.

Hace diez años
el paisaje era el mismo
pero desde los autobuses atestados
sentíamos
que nos pertenecía.

Hace diez años
Reagan tronaba
contra Nicaragua
y los estudiantes
recogían las cosechas.

Hace diez años
las cosas estaban jodidas,
se hacía fila para todo
menos para la esperanza.

II

La Esperanza,
la mujer del cuadro intermedio,
la que compraba en la *Diplo*⁽⁴⁾.

Lo peor del caso, sin embargo, era que muchas de estas críticas ya se habían venido enunciando dentro del partido antes de las elecciones, pero éstas fueron

4) El término *Diplo* se refiere al establecimiento comercial de Managua llamado *Diplotienda*, donde, ante la escasez de productos y las colas que reinaban en los establecimientos de todo el país durante la década de los ochenta, allí era posible obtener todo tipo de artículos. Los usuarios debían pagar en dólares y, generalmente, eran diplomáticos o la *nomenklatura* sandinista.

sistemáticamente desestimadas en pro de la cohesión (Vilas, 1991e).

De esta forma, los retos a los que se enfrentó el FSLN fueron varios. Por un lado, figuraba la renovación organizativa y, por otro, la redefinición de su perfil social y de su proyecto político. En referencia a la renovación organizativa el tema no era baladí ya que con la pérdida del gobierno la estructura de partido-Estado que se estableció durante una década se vino abajo. De aquí que la derrota provocó que el FSLN pasara a ser un partido con un pequeño y debilitado aparato. La llegada al poder de la nueva administración dejó así, de un día para otro, a miles de cuadros político-profesionales sin empleo. De tener 5.000 miembros profesionales pagados por el partido, el Frente Sandinista pasó a tener en tan solo unos meses alrededor de 500 (Martí y Santiuste, 2006). El sandinismo, como destaca Díaz Lacayo (1994: 122) «había perdido el gobierno y los sandinistas su trabajo». Y para dar respuesta a este problema el punto de partida fue la redacción de los nuevos estatutos partidarios y su aprobación en el Congreso Nacional de agosto de 1991 ⁽⁵⁾. Un congreso que, al no cerrar definitivamente los conflictos internos, tuvo que reeditarse en 1994 a través de una convocatoria extraordinaria.

8.2. EL NUEVO ROL DE PARTIDO OPOSITOR

«Quien se mueva,
no sale en la foto» ⁽⁶⁾.

Los retos a los que se enfrentó el FSLN fueron varios. Por un lado, figuraba la renovación organizativa y, por otro, la redefinición de su perfil social y de su proyecto político. En referencia a la renovación organizativa, el punto de partida fue la redacción de los nuevos estatutos partidarios y su aprobación en el Congreso Nacional de agosto de 1991. En relación al segundo aspecto, la dinámica no fue ajena a la variedad de sensibilidades, intereses y posiciones presentes en el seno del partido, siendo el resultado último una cierta indefinición.

5) Para un análisis detallado de la renovación organizativa que supuso el Congreso Nacional de 1991, y la correlación de fuerzas presentes en su seno, véase: MARTÍ, 1992: 136-147.

6) Extraído de: «Mito de los indios Makiritare», en GALEANO, 1986.

A nivel organizativo cabe señalar que la privación del poder gubernamental determinó la pérdida de unas estructuras partidarias que habían ido coincidiendo con la estructura del Estado. Este fenómeno se tradujo, casi de manera automática, en una fuerte crisis orgánica. Crisis que, también de forma inmediata, comenzó a afectar a la vieja capacidad del liderazgo para mantener controlado al anteriormente hermético partido sandinista. Y es que la derrota sufrida no solo desmontaba el formato de partido-Estado construido en los ochenta, sino que también ponía «patas arriba» el carácter monolítico y vertical de una organización anclada todavía en muchos aspectos a su pasado político-militar.

Para atajar esta dinámica se celebró, en julio de 1991, el primer congreso del FSLN en toda su historia. El objetivo central del congreso consistía en dotar al partido de los estatutos básicos para redefinir su estructura interna, su programa político y los principios fundamentales del partido. Se planteaba, por tanto, un cambio organizativo profundo que afectaba tanto a la fisonomía del partido como a aquellos que ostentaban el poder de la organización. Pero contrariamente a estos objetivos, el congreso no respondió a las enormes expectativas de renovación que se habían gestado desde la admisión de la derrota. De ello se ocupó directamente la Dirección Nacional del FSLN, todavía suficientemente fuerte como para controlar el congreso y limitar las reformas enunciadas.

Así las cosas, los resultados del congreso fueron los resultados preliminares de una crisis interna en donde la correlación de fuerzas favorecía el control vertical del partido y, por ende, el mantenimiento de la antigua jerarquía de poder. Esto no impidió que el congreso reflejara una brecha entre aquellos que postulaban la continuidad y la ortodoxia, y los que propugnaban abiertamente la renovación. El hecho de que la Dirección Nacional del FSLN pudiera frenar el cambio y la renovación del liderazgo del partido en el Congreso de 1991, no significó el fin de la crisis interna del sandinismo, solo un aplazamiento. En efecto, las discrepancias internas se agudizaron en los meses siguientes hasta tal punto que el FSLN se vio forzado a realizar un nuevo congreso, esta vez de carácter extraordinario, con el objetivo de zanjar las graves disputas que dividían a sus miembros pero, sobre todo, a sus dirigentes.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió después de la derrota, entrada la década de los noventa el foco del debate se centró en el rol que el FSLN debía desempeñar como partido de la oposición. En esta tesitura había dos posiciones opuestas dentro del FSLN. La primera fue denominada como «socialdemócrata» o «pragmática», estaba a favor de la concertación y la negociación con el gobierno y se nutría principalmente de los miembros de la formación que tenían cargos de representación en el Estado. Tenía como principales dirigentes a los diputados del

grupo parlamentario. La segunda, denominada «basista» o «principista», se inclinaba hacia un tipo de oposición beligerante que no renunciara a las formas clásicas de lucha del sandinismo. Sus miembros eran mayoritariamente aquellos colectivos del FSLN vinculados al sindicalismo y tenían como dirigentes a los militantes que controlaban el aparato central del partido.

Esta disparidad de criterios se hizo visible en toda su magnitud en la práctica opositora que desplegó el FSLN durante esos años, y que fue ambivalente y contradictoria. Así, mientras que por un lado el FSLN practicaba, principalmente desde el Parlamento, una política de concertación con el gobierno —hasta el punto de hablarse, en determinadas coyunturas, de «co-gobierno» (Spalding, 1996: 12)—, por otro lado, un segmento distinto del partido apoyaba y promovía parcial o totalmente episodios de resistencia popular (huelgas, toma de edificios, tranques, violencia callejera, etc.), así como manifestaciones contrarias a la generación de un consenso nacional.

El desarrollo de una oposición fundamentada en el dualismo «acoso-negociación» generó el caldo de cultivo necesario para que finalmente nacieran facciones plenamente organizadas al interior del FSLN. Lo que ejemplificó, una vez más, el fin de la vieja unidad que había existido en la organización sandinista alrededor de su cúpula dirigente. Pues es un hecho que para aquel momento, la Dirección Nacional carecía ya de los instrumentos de control que sobre el conjunto del FSLN tuvo en otro tiempo.

Así, con el Congreso extraordinario de mayo de 1994, se expuso públicamente la batalla abierta entre las dos facciones. Una que pedía «una mayor combatividad del FSLN en la defensa de los pobres, su vocación revolucionaria y su naturaleza vanguardista» y que se autodenominó *Izquierda Democrática*, y cuyos líderes eran Daniel Ortega y Tomás Borge. Y la otra, encabezada por Sergio Ramírez y Dora María Téllez —entonces líderes de la bancada sandinista— y con el apoyo del Comandante de la Revolución Henry Ruiz, que optaba por crear una formación política de naturaleza pluriclasista que buscara un amplio consenso social. Las dos facciones contenían, en principio, dos ideales de partido: uno de tipo «continuista», basado en el carácter revolucionario de la organización y en la idea del antagonismo de clases; y otro de carácter «renovador», fundado en la conformación de un partido amplio de izquierdas que buscara volver al poder por medio del apoyo electoral de todos los sectores de la sociedad.

El Congreso extraordinario dio el triunfo a la *Izquierda Democrática* —la correlación en la votación para secretario general del FSLN fue de 287 a favor de Daniel Ortega contra 147 a favor de Henry Ruiz. Sin embargo, en la nueva Dirección Nacional permanecerían miembros del sector renovador. Por lo tanto, aunque el cambio en la estructura de poder era significativo, éste no implicaba ni la uni-

ficación del poder dentro del partido alrededor de un único grupo ni, por ende, la obtención de la deseada estabilidad organizativa. De aquí que se agudizara más la crisis tras el Congreso (Martí y Santiuste, 2006).

Esta crisis que estallaría cuando el grupo parlamentario sandinista —del cual Sergio Ramírez era el jefe desde 1990 decidió apoyar en la Asamblea Nacional el proyecto de reformas a la Constitución que se venía gestando en el parlamento, contraviniendo de esta forma la postura de la Asamblea Sandinista y del propio Daniel Ortega. A raíz de esta decisión del grupo parlamentario sandinista la Asamblea Sandinista destituyó a Ramírez como jefe de la fracción parlamentaria el 9 de septiembre de 1994.

Con la destitución de Sergio Ramírez muchos militantes hicieron saber su descontento. Así un amplio sector de militantes del partido, entre los que se encontraban algunos líderes históricos del sandinismo, rechazaron la línea que estaba tomando la dirección del partido. Un caso célebre fue la toma de posición de Ernesto Cardenal, poeta y Ministro de Cultura durante la revolución, quien declaró:

Continúo siendo sandinista y revolucionario con los idearios de sandino y la revolución de antes, y también siendo marxista y cristiano [...] mi renuncia al actual FSLN es debido al secuestro del partido que ha hecho Daniel Ortega y el grupo que él encabeza...

Inmerso el sandinismo en una dinámica de división y acusaciones mutuas, en octubre del mismo año la Asamblea Sandinista, con un quórum de 67 sobre 130 relevó del Consejo de Dirección del periódico *Barricada* —órgano oficial del FSLN— a su veterano director Carlos Fernando Chamorro por haber apoyado al sector de Sergio Ramírez. En su puesto nombraron a un Lumberto Campbell, nuevo miembro de la Dirección Nacional y, a los pocos días, a Tomás Borge. Con ello, 18 de los 22 periodistas de plantilla se fueron del rotativo. Posteriormente, cuatro miembros de la Dirección Nacional —Henry Ruiz, Dora María Téllez, Luis Carrión y Mirna Cunningham— manifestaron su rechazo a la medida adoptada y la calificaron de precipitada.

La división formal del sandinismo, sin embargo, se consumó el 8 de enero de 1995 cuando Sergio Ramírez renunció formalmente a su membresía del FSLN a raíz de diversas acusaciones que se lanzaron contra su persona por parte de la emisora radiofónica *Radio Ya*. Con él también renunciaron al FSLN un nutrido número de personalidades del FSLN. Cinco meses más tarde, el 21 de mayo, se celebraría la constitución formal del partido político del llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

En el MRS se integrarían un nutrido colectivo de militantes que abandonaron el FSLN. Con ello se sellaba poco la ruptura del sandinismo, si bien los magros resultados del MRS en las elecciones de 1996 (con un porcentaje del 0,44% en los comicios para Presidente y de un 1,33% en las elecciones para la Asamblea Nacional) volvieron a dar, a nivel partidario, la casi totalidad del patrimonio simbólico del sandinismo al FSLN.

8.3. SANDINISMO: EL FSLN Y MÁS ALLÁ

Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre.
Y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente.
Nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán.
Y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira⁽⁷⁾.

De la ruptura de 1995 se inauguró una nueva etapa en el sandinismo. Por un lado el FSLN fue creando un formato de partido político similar al de otros muchos partidos de la región, a saber, un partido de corte «electoralista» y con una organización fundamentalmente «personalista». Electoralista, en tanto que el FSLN orientó su estructura organizativa hacia la actividad electoral, conformándose de esta manera como un partido cercano al modelo partidista que Panebianco (1995) denomina como «profesional-electoral». Y personalista, puesto que el FSLN pasó a gravitar en torno al liderazgo de su Secretario General, Daniel Ortega, reforzando la cultura política nicaragüense vinculada a la idea del «hombre fuerte» (Martí y Santiuste, 2006).

Además, el modo personalista de articulación del FSLN también impuso determinadas características a su organización. Así, en el partido desaparecerían los mecanismos existentes de control interno, y se concentraría progresivamente el poder en las manos de Daniel Ortega y su «anillo de hierro», reduciendo drásticamente la influencia de los activistas.

A resultas de lo expuesto, si bien es necesario apuntar que aún hoy en muchos barrios populares y en bastantes zonas rurales el entorno organizativo del sandinismo (muchas veces sin vínculos orgánicos con el partido) es uno de los pocos tejidos comunitarios articulados y solidarios que existen, es posible caracterizar al Frente Sandinista actual como un partido esencialmente electoral y personalista. Este

7) Extraído de: «Mito de los indios Makiritare», en GALEANO, 1986.

hecho plantea un debate sobre el enorme trecho que se ha abierto entre el Frente Sandinista que antes apostaba por la revolución y la movilización, y el que ahora prioriza la maximización de votos y su consecuente traducción en cargos y recursos públicos. Del mismo modo, cabe cuestionarse cómo este proceso de transformación ha sido posible sin que se haya dado un relevo generacional en su liderazgo. Sin duda, no hay respuestas absolutas, pero a la luz de los cambios observados cabe pensar en —y siguiendo las tesis de Panebianco (1990)— la transformación del FSLN como un proceso acelerado de «institucionalización» e innovación organizacional que ha dejado de lado los objetivos originarios para adaptarse a las nuevas exigencias nacidas de un renovado entorno político.

Así el FSLN se ha transformado en un partido político cuyo objetivo es la obtención del poder político a través de procesos electorales y a través de la negociación en las diversas arenas políticas —pactando muchas veces con quienes verbalmente son sus más repudiados adversarios. Esta actividad ha significado una incesante dinámica de negociaciones y compromisos con otros partidos y actores que han desembocado, casi siempre, en una dualidad: por un lado el pragmatismo negociador y, por otro, el mantenimiento de la radicalidad propositiva y dialéctica.

Esta doble naturaleza del FSLN, junto con la eclosión de turbulentos enfrentamientos intestinos que casi siempre se han zanjado con escisiones, abandonos, expulsiones y peleas de cuadros y militantes, han sido los fenómenos que más han golpeado a la credibilidad y al capital político de la formación. Lo expuesto ha supuesto mayor desgaste que su incapacidad para hacerse con victorias electorales en las elecciones de primer orden, es decir, elecciones Presidenciales —si bien sí ha tenido numerosos éxitos en comicios locales y una notable representación en los legislativos. Y es que el discurso de aceptación de la democracia como sistema político, ha coexistido siempre con una reservada disposición a aplicarla dentro del mismo FSLN y con una presencia todavía activa de un liderazgo fuerte heredado de la época de la clandestinidad.

Por ello es difícil exponer que, a más de tres lustros de la pérdida del poder, el sandinismo sea un atributo que gestiona en régimen de monopolio el FSLN. Ciertamente el FSLN representa un sector del sandinismo, pero no a todo el sandinismo que ya no es patrimonio de una organización ni de unas siglas, sino de amplios colectivos del pueblo nicaragüense: de movimientos de mujeres, de pobladores, de estudiantes, de intelectuales y de todos aquellos grupos que, muchas veces sin ningún vínculo partidario, reclaman y exigen dignidad. En ese sentido cabría pensar que en la Nicaragua de inicios del siglo XXI es más acertado hablar de «sandinismos» en plural.

CAPÍTULO 9
CONCLUSIONES



Dos días transcurrieron en hablar de revoluciones, asombrándose Sofía de lo apasionante que le resultaba el nuevo tema de conversación. Hablar de revoluciones, imaginar revoluciones, situarse mentalmente en el seno de una revolución, es hacerse un poco dueño del mundo⁽¹⁾.

A la hora de realizar un balance del contenido del presente trabajo, en primer lugar, cabe destacar que el objeto de este estudio —el análisis de la dinámica de los actores políticos presentes en el proceso revolucionario acaecido en Nicaragua— tiene como punto de partida la ruptura política y socio-económica respecto al período anterior (el régimen somocista). La revolución nicaragüense, como toda revolución social, supuso una dinámica inicial de *no pacto* y, en ese sentido, el objetivo principal de la fuerza vencedora fue la *transformación* y no la *transacción*.

Las revoluciones sociales se caracterizan, entre otros elementos, por ser el producto de la irrupción de las masas en el escenario político. De esta forma, el poder se disputa tanto en los «pasillos» como en las «calles» y, con ello, la ascendencia política de las élites es efectiva en tanto que responde a las demandas de grandes sectores de la población —sectores que, en ese contexto, tienen una elevada capacidad de presión. Por lo tanto, en los primeros pasos de estos procesos, tanto el discurso como la actitud de las élites que componen la *fuerza política vencedora* responde a una lógica de «vencedor-vencido», «nuevo orden-viejo orden», «revolucionario-contrarrevolucionario».

1) Párrafo extraído de CARPENTIER, 1982: 148.

De ello se desprenden ciertas observaciones en cuanto a las herramientas analíticas a utilizar en el estudio de estos procesos. Durante la pasada década, buena parte de la literatura que incidió en los temas de democratización y transformaciones de regímenes centró la atención en la actuación de las élites —sus pretensiones e intereses, su capacidad de negociación, y el establecimiento de pactos, alianzas y normativas sobre la base de las cuales se desmantelaba o se daba a luz un nuevo régimen⁽²⁾. A partir de dicha literatura se han realizado trabajos de análisis del proceso político acaecido en Nicaragua durante la pasada década. Estos trabajos, si bien tienen gran interés, a nuestro parecer, dejan de tratar dos cuestiones de notable relevancia: 1) la creación de la *coalición* en virtud de la cual la convocatoria revolucionaria triunfa y la dinámica que ésta adquiere a través del tiempo, y 2) el carácter *inclusivo* —en oposición a la gran mayoría de procesos de transición y cambio de régimen— del proceso político revolucionario nicaragüense (Cerdas, 1986; González, 1992; Seligson, 1987; Stahler-Sholk, 1987).

En referencia a la naturaleza de la *coalición de fuerzas* que hizo posible el triunfo de la convocatoria rupturista y revolucionaria propugnada por el FSLN, ésta no se diferenció demasiado de la que se configuró en torno del *Movimiento Nacional Revolucionario* (MNR) en Bolivia o en torno al *Movimiento 26 de Julio* en Cuba. Sobre este punto, cabe hacer la reflexión de que toda convocatoria revolucionaria triunfante se confecciona en torno a una *gran coalición* articulada sobre la base de intereses diversos e, incluso, contradictorios.

En este sentido, la capacidad de un actor de aglutinar sectores heterogéneos y de confeccionar un discurso con el que todos ellos puedan sentirse identificados, es lo que lo convierte en actor hegemónico. Otra cuestión es que, una vez en el poder —y por lo tanto con el dominio de los resortes del Estado (tanto desde el punto de vista de redistribuidor de incentivos como de coacción)—, el actor hegemónico tenga la habilidad de mantenerlos integrados o que, con el paso del tiempo, tenga que sacrificar el apoyo de alguno de ellos en aras de la priorización de determinados sectores.

Respecto al carácter *inclusivo* del proceso iniciado en Nicaragua en 1979, cabe puntualizar, en primer lugar, que tiene su origen en la *exclusión* de las fuerzas políticas que detentaban el poder en el régimen anterior; de ello se derivan dos consecuencias, una, de ruptura con las fuerzas del antiguo régimen, y otra,

2) Existe una amplia bibliografía sobre los procesos de transición en América Latina, entre ella, cabe destacar las obras: DIAMOND, LINZ & LIPSET eds., 1989; KARL & SCHMITTER, 1988; LÓPEZ & STOHL, 1987; MAINWARING, 1989; MALLOY & SELIGSON eds., 1987; MORLINO, 1985; O'DONELL, SCHMITTER & WHITEHEAD, 1986; PRZEWORSKI, 1988.

de integración de grandes sectores sociales antes marginados y, consiguientemente, la realización de una profunda transformación de las estructuras socio-económicas.

Llegados a este punto —anunciadas las dos cuestiones que consideramos centrales para el análisis del proceso revolucionario acaecido en Nicaragua—, pasamos a exponer los cuatro ejes a partir de los cuáles, según nuestra interpretación, se vertebró la dinámica política nicaragüense durante el proceso revolucionario:

1) El proyecto propugnado por los sandinistas, durante el período en que estuvieron en el poder, pretendió realizar —por primera vez en la historia de Nicaragua— la *construcción de un Estado nacional*.

Analizando el discurso elaborado por los sandinistas y las medidas llevadas a cabo desde el gobierno, se desprende que uno de los ejes centrales del proyecto revolucionario era la conversión del país en un *Estado soberano* —en oposición a lo que fue la «finca de los Somoza» y a la dependencia histórica respecto a los Estados Unidos. En esta dirección, el proyecto revolucionario aglutinó diversas pretensiones e intereses; en él cabían sectores que comulgaban con ideologías nacionalistas, nacional-populares, desarrollistas, socialdemócratas y marxistas. Ello fue, obviamente, una de las razones por las cuales el FSLN mantuvo cohesionados ciertos sectores que en su momento formaron parte de esa «gran coalición» que permitió la victoria de la convocatoria revolucionaria. Respecto a este tema, la revolución nicaragüense tuvo tanto de «revolución mexicana» —en tanto que constructora de un estado nacional— como de «cubana».

En la pretensión de crear un espacio nacional, el proyecto sandinista realizó políticas sociales y económicas de carácter transformador tendientes a integrar a las masas populares —excluidas del modelo socioeconómico y político anterior— en la comunidad política. Dicho proceso fue, en ese sentido, un proceso de construcción de un estado nacional-popular en una época en que este tipo de proyectos habían entrado en crisis en el resto de América Latina y en un marco internacional que —con la oleada del neoliberalismo— atentaba contra tal empresa. Por otro lado, el nuevo gobierno trazó una política exterior autónoma a las directrices de los Estados Unidos, desmarcándose de los intereses geoestratégicos de la administración norteamericana.

Estos dos objetivos: la construcción de un *estado nacional* y la recuperación de la *soberanía* —en tanto que autonomización de la política exterior del estado—, fueron la causa de la hostil reacción del gobierno norteamericano hacia el proceso revolucionario nicaragüense, y ésta supuso, a la vez, la progresiva erosión de la «gran coalición».

2) El gran adversario del proceso revolucionario liderado por el FSLN fue, sin duda, la administración norteamericana. La creación de un proyecto político transformador sobre la base de un discurso, lógica e intereses ajenos a la «tradición norteamericana» y autónomo en cuanto a su capacidad de establecer relaciones en el concierto internacional de estados, produjo la reacción de los Estados Unidos.

Una vez más, la administración norteamericana utilizó la *doctrina Monroe* y, so pretexto de que el gobierno de Managua obedecía a intereses *extracontinentales*, orquestó una contundente agresión hacia el proceso político revolucionario. Similar argumento —y su política consiguiente— no eran ninguna novedad, se utilizó el mismo contra la revolución mexicana, aduciendo que obedecía a los intereses del *kaiser*; contra la Argentina de Perón y el proyecto político liderado por el MNR en Bolivia, bajo la acusación de ser cómplices del *eje*; y contra Guatemala en 1954, Cuba en 1959 y Chile en 1972, con el argumento de que estaban bajo las directrices del *comunismo internacional*.

En el caso nicaragüense, los Estados Unidos trataron de «demostrar» el fracaso a que estaba predestinado un proyecto de cariz transformador y autónomo en su «patio trasero». El objetivo de la administración norteamericana era el colapso del régimen sandinista y su sustitución por otro afín a sus intereses. Sobre la base de ello, el gobierno de Washington intervino directamente en el proceso político nicaragüense creando una guerra contrarrevolucionaria en su propio territorio y articulando la oposición civil interna. La prioridad para Washington siempre fue el ejército de la Contra, sin embargo, a consecuencia de la capacidad defensiva del régimen sandinista —la Contra jamás ganó una batalla en Nicaragua— y de su habilidad negociadora en el contexto internacional, la administración norteamericana terminó priorizando la arena política civil.

Si observamos la actividad opositora y el comportamiento de los Estados Unidos para con ella, se deduce fácilmente quién era el artífice real del proyecto político opositor al gobierno sandinista y quiénes los «instrumentos».

La contundente agresión a que se vio sometido el proceso revolucionario no solo afectó al nuevo proyecto político en términos económicos y humanos, sino que también incidió directamente en el desarrollo de la dinámica política. Este hecho es uno de los elementos centrales para comprender cómo y por qué la «gran coalición» —que, en sus inicios, colaboró con el FSLN— fue erosionándose.

3) El desenlace de la insurrección dio como actor hegemónico del nuevo proceso político al FSLN. Junto a él, sin embargo, coexistían actores de muy diversa naturaleza. La capacidad del sandinismo de tejer alianzas con sectores de carácter heterogéneo —con intereses y pretensiones diversas, e incluso, contradictorias— le otorgó

una legitimidad interna e internacional incuestionable. En virtud de esto, durante el primer período del proceso gestado en 1979, las medidas económicas y sociales — que no políticas — tendieron a satisfacer a todos los colectivos presentes en la «gran coalición» (las expropiaciones se realizaron sobre la base de las propiedades de Somoza y la política de expansión de la demanda benefició al sector privado).

Pero, como en todo proceso revolucionario, el gobierno sandinista, con el paso del tiempo —y junto a él, la necesidad de llevar a cabo políticas que suponen priorizar unos intereses y no otros—, tuvo que «sacrificar» la alianza con un determinado sector en aras de la explicitación de un proyecto político. En ese momento, el FSLN se enfrentó a ciertos actores cuyos intereses eran antitéticos a su proyecto revolucionario —entre ellos destacaron la gran patronal (el COSEP) y parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Sin embargo, fue la pronta y contundente agresión de la administración Reagan lo que supuso la progresiva erosión de la «coalición» y la posterior polarización de la dinámica política.

Si bien la política pública de los Estados Unidos afianzó el posicionamiento de ciertos sectores sociales y políticos que, por su naturaleza, discrepaban con el proyecto sandinista, ésta también comportó un cambio de actitud del FSLN hacia la oposición, así como la reordenación de las prioridades del gobierno de Managua.

A partir de 1982, la prioridad fue combatir la agresión y, de acuerdo con ello, se rearticulaban las instituciones del Estado y cambió el estilo de conducción política —se jerarquizaron las instancias políticas y aumentó el control social. A raíz de estas políticas, el proyecto sandinista enajenó determinados sectores sociales que, en un principio —y en orden a sus intereses objetivos—, habrían tenido que serle próximos (ese fue el caso de determinados colectivos campesinos del interior, algún sector de la clase media, y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica).

Posteriormente, en plena crisis económica, a partir de 1987 —fruto del desgaste económico que supuso la guerra, el bloqueo comercial decretado por los Estados Unidos a partir de 1985 y de algunos errores en la conducción de las finanzas del estado— el gobierno sandinista tuvo que recurrir a *planes de ajuste económico* de corte *fondomonetarista* que, inevitablemente, golpearon aquellos colectivos populares que siempre le fueron fieles y que, en los peores momentos de la guerra, contribuyeron en él luchando en el frente o llevando a sus hijos.

Con ello, podemos deducir que la dinámica pública, con sus costes económicos y su efecto polarizador, supuso la imposibilidad de completar la creación de un Estado nacional-popular (como lo hicieron muchos países latinoamericanos a partir del primer tercio del presente siglo) que integrara tanto a las masas populares como a buena parte de las élites políticas del país —la situación política posterior a las elecciones de 1990, caracterizada por una frágil estabilidad y por súbitos enfren-

tamientos, no es ajena a la política de acoso patrocinada desde la administración norteamericana en la década anterior.

Sin embargo, a pesar de la agresión a que se vio sometido el proceso revolucionario y su constante manipulación por parte de la oposición, el gobierno sandinista —a diferencia del resto de gobiernos revolucionarios— no solo no maniató a la oposición, sino que dejó que jugara políticamente, con igualdad de condiciones en su campo, pensando que así tampoco le ganaría. La revolución sandinista nunca utilizó el terror ni la eliminación de sus adversarios políticos porque siempre creyó en su indiscutible legitimidad. En esa dirección, a partir de las negociaciones de Esquipulas II, la revolución sandinista creó su propio *thermidor*; un *thermidor* que dio el acceso a la televisión a sus adversarios en vez de guillotinas.

La revolución nicaragüense fue la primera revolución que no se empachó devorando a sus propios hijos y, posiblemente por eso ésta, posteriormente, se conformó mandando a sus artífices a la oposición, en el marco de unas instituciones creadas por ellos mismos. Posiblemente, esas mismas instituciones posibiliten una progresiva integración de las élites políticas que anteriormente se enfrentaron en el escenario militar. El establecimiento de pautas de consenso supondría un primer paso hacia la integración de todos los colectivos políticos en una arena política civil de carácter nacional.

4) En último lugar, aunque no con menor importancia, el proceso revolucionario supuso, por primera vez, la integración de las masas populares en la vida política nicaragüense. Si se hubiera tratado de un proceso de transición de un régimen hacia otro, la actividad política se hubiera reducido a negociaciones y/o luchas entre determinadas élites en aras de la consecución de determinadas cuotas de poder o del establecimiento de una determinada institucionalidad. El caso que nos ocupa, sin embargo, supuso una contundente irrupción de todos los colectivos sociales en el escenario político.

Históricamente, de los tres millones de nicaragüenses, solo unos 10.000 o 15.000 configuraban el *país real*; y éstos, a la vez, se agolpaban en una madeja de relaciones personales, muchas veces consanguíneas y siempre sociales y políticas. Nicaragua siempre —y aún hoy mantiene mucho de ello— fue un país de familias, de prolongadas dinastías, que se desparramaban en una red de interrelaciones. Los Chamorro, Pellas, Sacasa, Debayle, Coronel, Cardenal, Cuadra, Lacayo, Pasos, Argüello, Agüero confeccionaban un entramado impermeable en donde se gestionaba lo público.

Con la insurrección y el posterior proceso revolucionario, las masas populares se organizaron, debatieron y participaron en un proyecto donde ellos tenían

su espacio. El surgimiento y desarrollo de organizaciones sociales, la experiencia de la gente de trabajar juntos y discutir juntos los problemas que les aquejaban, marcaron un corte profundo en la historia del país. Grandes colectivos tuvieron la sensación de formar parte de un *sujeto social* que pretendía construir algo mejor para el futuro.

La mayor parte de lo conseguido durante la pasada década — la alfabetización, la educación de adultos, las campañas de vacunación, las mejoras en el trabajo... — fue producto de la organización colectiva y de la participación de la gente *de a pie*. Esta experiencia fue, sin embargo, erosionada, poco a poco, por una guerra que exigió esfuerzos cada vez mayores y que desvió buena parte de los recursos hacia la defensa. De la participación voluntaria se pasó al cumplimiento de un servicio militar obligatorio que implicaba enfrentarse a un ejército bien pertrechado. De la espontaneidad se pasó a la verticalización. Como indicamos a lo largo del trabajo, la guerra supuso la reversión de muchas dinámicas y, entre otras, la del entusiasmo de grandes colectivos. En esta dirección, el verso acuñado por Roque Dalton — en referencia, seguramente, a El Salvador —, también ilustra el estado de ánimo de un amplio sector de la sociedad nicaragüense respecto al desarrollo del proyecto revolucionario:

pensando en lo bonita que habría sido la vida
y todo lo demás
si la lucha no hubiera sido tan dura
en el país más enano que le vino uno a tocar.

El recurso a la revolución no permitió la instauración de las demandas populares de transformación económica y justicia social, pero la contundente agresión de la administración norteamericana y de los sectores más reaccionarios de la sociedad nicaragüenses no consiguieron tampoco acallar esas demandas ni revertir la institucionalización gestada en tal proceso. Es cierto que después de diez años de guerra y seis de políticas neoliberales, el nivel de vida de dichos sectores es inferior al de las décadas pasadas y que muchas de las conquistas socio-económicas, fruto de la lucha anterior, están desapareciendo o se encuentran en peligro. Sin embargo, la gente perdió el miedo y ganó experiencia en la organización y en la participación.

Es una constante, en las ciencias sociales, corroborar que en los períodos inmediatamente posteriores a procesos revolucionarios, los niveles de vida de quienes fueron sujetos y protagonistas son inferiores a los que hubo anteriormente. Con todo, dicho fenómeno no se reduce a este hecho. La percepción de ser sujetos conscientes de derechos — entre los que figuran algunos tan elementales como el dere-

cho a la vida y a la integridad física—, y de la posibilidad de organizarse de acuerdo con sus *identidades sociales básicas* para formular demandas, son elementos que antes no existían. Una modificación en el *mundo de lo subjetivo* no fue aquello que muchos nicaragienses buscaron durante casi dos décadas de luchas, sin embargo, éste fue el resultado. Un resultado —nada desdeñable— que introduce un nuevo elemento al complejo paisaje político centroamericano que emerge en medio de innumerables contradicciones. Quizás, y aunque parezca paradójico, podamos concluir este trabajo parafraseando a Saint-Exupéry cuando dice (1946, 1992: 87):

He aquí mi secreto. Es muy sencillo:

—Aquello que es esencial es invisible a los ojos...



PARTE 2

LA CONTRARREVOLUCIÓN

**UN ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS
SANDINISTAS EN LAS ZONAS RURALES
DEL INTERIOR DE NICARAGUA
Y LA REACCIÓN CAMPESINA, 1979-1987**



INTRODUCCIÓN

Liberados del corsé que imponía la guerra fría al análisis de algunas cuestiones vinculadas a los procesos de transformación social en países del tercer mundo, es hora de preguntarnos cuestiones que puedan darnos nuevas pistas para interpretar la totalidad de lo acontecido.

Es en esta dirección que en el presente trabajo nos cuestionamos un fenómeno vital para interpretar el desarrollo de la *Revolución Popular Sandinista*, a saber: ¿por qué la Contrarrevolución —orquestrada y financiada por la administración norteamericana, legitimada por los sectores más conservadores de la jerarquía eclesíástica y representada por la burguesía allegada al somocismo— tuvo su base social entre el campesinado de las zonas rurales del interior de Nicaragua? En otras palabras: ¿por qué la única revolución triunfante en América Latina durante el último tercio del presente siglo fue combatida por un *ejército campesino*? Así, el presente trabajo pretende examinar las reacciones de un cierto sector del campesinado ante las políticas agrarias del sandinismo, así como la organización política de la Contra (posteriormente llamada Resistencia Nicaragüense) y el apoyo que obtuvo en las zonas rurales del interior del país. En este sentido, esta investigación pretende ofrecer una contribución más al debate sobre lo acontecido durante el proceso revolucionario nicaragüense. Y es que, ciertamente, a partir de los años noventa,

han ido apareciendo múltiples trabajos que nos han ayudado a interpretar la compleja realidad de la revolución sandinista⁽¹⁾.

En cuanto al contenido, el trabajo se ordena se la siguiente forma. En el primer epígrafe se analizan las políticas agrarias elaboradas por la administración sandinista —la transformación de la propiedad de la tierra, las políticas de inversión, crédito, comercialización—, así como su proceso de implementación desde una perspectiva de análisis «macro». Posteriormente, se expone cuál fue el debate interno —y su desenlace— sobre la realidad agraria que se mantuvo en el seno del equipo que tuvo por tarea definir la transformación del agro nicaragüense. El tercer epígrafe analiza el impacto que tuvieron las políticas arriba analizadas en las zonas rurales del interior. El cuarto pretende analizar el impacto de las políticas agrarias —y políticas— en las zonas de frontera agrícola, así como la percepción que tuvo de ellas el campesinado. El quinto se centra en la «doble agresión» que sufrió este colectivo por parte de las tropas de la Contra y de los cuerpos armados vinculados a la revolución —el Ejército Popular Sandinista y la Seguridad del Estado— y cómo (y por qué), en un momento determinado, una buena parte de las comunidades rurales optó por colaborar —y, en algunos casos, integrarse— en la Contra. Finalmente, en las conclusiones, se analizará críticamente el impacto que tuvo la implementación de políticas intensivas en inversión y tecnología en sociedades rurales tradicionales, con la voluntad

1) En esta dirección cabe citar la aportación de obras que provienen de dos contextos relativamente diferentes. En primer lugar están las contribuciones generadas por cuadros técnicos y políticos que estuvieron comprometidos en las políticas agrarias desarrolladas por la administración sandinista y que, con una cierta distancia temporal han efectuado un esfuerzo crítico sobre aquello que realizaron, con sus esperanzas, errores y velos. En éstas destacan las obras de Alejandro BENDAÑA (1991), Orlando NÚÑEZ (1991, 1995); Eduardo BAUMEISTER (1991, 1998); Mario RIZO (1999) Peter MARCHETTI (1989); Luis SERRA (1990, 1993); Calos M. VILAS (1991); y muchos otros —sobre proyectos de desarrollo rural encargados por las ONG y oficinas técnicas del MIDINRA— que permanecen anónimos y que tuve acceso a ellos gracias a la disposición de los responsables de Nitlapán y al IHNCA. En segundo lugar, cabe señalar determinados trabajos de cuño académico focalizados en casos particulares y que, de ellos, se extraen hipótesis sobre determinados aspectos de la Revolución. De entre estos es preciso citar el trabajo de Lynn HORTON (1998) sobre el impacto de la guerra de la Contra en las comarcas de Quilalí; el de François HOUTARD y Genoviève LEMERCIER (1992) sobre la cooperativización de las comunidades campesinas en el Comején; los estudios de Laura ENRÍQUEZ (1992) sobre las cooperativas en el Pacífico; el detallado análisis de Jeffrey GOULD (1990) sobre la aparición de la consciencia de los trabajadores del campo en Chinandega; o de Frank KELLER (1986) en Wiwilí, así como los trabajos de investigación elaborados en el marco de la tesis de licenciatura de los egresados de las licenciaturas de ciencias sociales de la UNAN, UNA y UCA.

de debatir la profunda complejidad que encierran los procesos de cambio en los países en vías de desarrollo.

Con todo, antes de adentrarnos en el contenido del texto, cabe exponer que en el empeño de escribir una interpretación que otorgue un poco de claridad a lo acontecido tenemos que partir de dos premisas esenciales. En primer lugar, la necesidad de conocer las condiciones materiales en que se desenvuelve la sociedad objeto de estudio y, en segundo lugar, la comprensión de los procesos ideológicos a través de los cuales los diversos estratos y actores interpretan esas condiciones y orientaron su comportamiento.

Para la descripción y aprehensión de las condiciones materiales en que hasta 1979 se había desenvuelto la sociedad donde aconteció la *revuelta campesina* (la franja oriental de las regiones I, V y VI de Nicaragua ⁽²⁾), nos basamos en diversos trabajos y publicaciones confeccionadas a lo largo de la segunda mitad de la década de los ochenta, de informes realizados por diversas instituciones dedicadas a la investigación del agro nicaragüense, y del trabajo de campo que realizamos directamente para la confección del presente artículo. Sobre la base del material que disponemos, en la elaboración de la presente investigación partiremos de que en las sociedades agrarias tradicionales (como la sociedad de «frontera agrícola» que constituye nuestro objeto de estudio) el hogar del campesino supone la unidad básica de producción, de consumo y de reproducción —representando así la base de su poder económico, social y político. En este sistema el proceso social se asemeja a una «sociedad parcial», de tal manera que la distribución y redistribución de los recursos permanecen unidos al engranaje compuesto por el ciclo familiar y los parentescos, así como al matrimonio y las diferentes estrategias de compadrazgo o reciprocidad (Kriedte, 1985). A partir de ello se articula una sociedad basada en un sistema propio de principios, de producción, de consumo y de reproducción de la unidad familiar campesina que termina por determinar el comportamiento y las actitudes de los sujetos sociales de que se compone. Sujetos sociales que, a la vez, generalmente deben su origen y desarrollo al fenómeno del «trabajo marginal» y la «autoexplotación» —tal como señaló Chayanov ([1927] 1966, 1967)— y según el cual construyen su particular *cosmovisión*, a la que tanto E. P. Thompson (1979) como James Scott (1976) califican como la *economía moral* del campesino.

2) Zonas que se inscriben en los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa, Boaco y Chontales.

Por otro lado, en cuanto a la comprensión de los procesos ideológicos a través de los cuales los diversos estratos y actores interpretaron las condiciones en que estuvieron inmersos, cabe señalar que compartimos los planteamientos de E. P. Thompson (1979) de que «las gentes se encuentran en una sociedad estructurada de una determinada manera (crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producción), experimentan diversas formas de explotación, identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y, en ese proceso de lucha, *se descubren* a través de la *autoconciencia colectiva* como actores sociales». Precisamente por ello ningún modelo puede proporcionarnos lo que debe ser la «verdadera» formación de los actores, de las clases o de las conciencias; y menos si ciertos fenómenos deben ocurrir de una forma determinada o a través de «estadios» previamente concebidos.

Tal como hemos señalado, nuestro interés, a diferencia de la literatura gestada durante las dos décadas anteriores —donde se intentaba responder a la pregunta formulada por Skocpol (1982) de «*What makes peasant revolutionary?*»⁽³⁾— está en dar respuesta a la *ecuación inversa* formulando la pregunta de: *¿Por qué los campesinos de las zonas rurales del interior de Nicaragua constituyeron la base social de la contrarrevolución?*

Para responder la cuestión planteada es importante exponer que la insurrección sandinista —que atrajo la atención de los científicos sociales por la intensa participación social que supuso— movilizó, sobre todo, a unos grupos sociales muy definidos. Entre los sujetos sociales presentes en la euforia insurreccional destacó la participación de los estudiantes, con una representación del 30%, seguidos por las llamadas *gentes de oficio* —una categoría en la que se engloban artesanos, obreros manuales y autoempleados (con un 22%) (Vilas, 1984: 151). El resto de colectivos era un conglomerado heterogéneo que tenían en común la subordinación en el mercado de trabajo urbano y la preocupación por un futuro lleno de precariedad e incertidumbre. Finalmente, cabe destacar la reducida participación de campesinos y ganaderos, enfatizando la naturaleza eminentemente urbana de la insurrección.

Es fácil observar cómo la insurrección supuso una explosión social donde se percibió la angustia y la rabia de numerosos colectivos urbanos —de nuevo

3) Existe un notable volumen de literatura sobre la planificación agropecuaria en Nicaragua y el modelo de acumulación basado en el Estado. En cuanto a los trabajos que analizan la planificación económica y su impacto en la transformación agraria destacan: BIONDI-MORRA, 1990; FITZGERALD, 1985; KAIMOWITZ, 1986; KLEITERP, 1988. Y sobre la reforma agraria y su impacto en la estructura de la tenencia de la tierra: BAUMEISTER, 1985, 1987, 1987, 1989; ENRÍQUEZ, 1992.

cuño— que visualizaron cómo el acelerado proceso de «modernización» acontecido desde los sesenta conllevó un crecimiento desigual y la polarización del ingreso (Dunkerley, 1988: 169-220). Por ello estos colectivos lucharon contra un futuro precario sin perspectivas y contra un régimen que, a través de su quehacer despótico, terminó por encarnar la arbitrariedad, la corrupción y la exclusión política y social.

Fue en esta dirección en que el FSLN movilizó y empoderó a un *pueblo* que, después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, perdió toda confianza en la posible reforma del sistema. Pero el somocismo no solo cayó por su carácter *patrimonial* y *despótico* o debido a los «errores del imperialismo» — tal como indican obras como las de Wickham-Crowley (1992)—, sino que es preciso señalar la habilidad de las fuerzas populares en encontrar estrategias y medios a partir de los cuales canalizar de forma efectiva la lucha (Vilas, 1984).

El *Frente* dio al *pueblo* el espacio y los medios a partir de los cuales hacer efectivas sus demandas y, con ello, el sandinismo se hizo con el poder. Pero «este *pueblo*» una vez tomó las calles, también dio al FSLN y a la *revolución* una determinada base social, un determinado discurso político, un tipo de demandas y —sobre todo— un rostro eminentemente urbano. Fue de este colectivo del que se nutrió la revolución sandinista. Y la dirección le «adaptó» el discurso, lo incorporó en las instituciones y diseñó unas políticas públicas con un fuerte sesgo urbano. La otra cara de la moneda serían los colectivos campesinos de las zonas rurales del interior, quienes —a pesar de compartir la subordinación, la precariedad y la pobreza— diferían de sus «homólogos urbanos» en sus actitudes, simbología y demandas.

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es, por un lado, analizar cómo la forma y el contenido de las políticas de transformación patrocinadas por el proyecto revolucionario tuvieron un efecto negativo entre esos colectivos campesinos y ganaderos de las zonas de frontera agrícola —colectivos para quienes la insurrección y la «simbología revolucionaria» eran una realidad lejana. Y, por otro, cómo con el tiempo éstos generaron determinadas dinámicas colectivas de resistencia —y finalmente confrontación— hacia el proyecto revolucionario. De ello es importante observar las razones por las que se rebelaron los campesinos de las zonas rurales del interior, así como las formas en que se manifestó el descontento. Para esto utilizaremos diversos conceptos acuñados por James Scott (1985, 1989, 1990), en los que nos presenta las formas en que las clases subordinadas expresan sus quejas y su malestar, es decir, las formas de *resistencia cotidiana de los débiles*.

Finalmente, aunque en otro orden de cosas, cabe señalar que este trabajo pretende incidir y dar cuenta de los fenómenos ocurridos a nivel local —micro—, más que de las dinámicas acontecidas en el marco estructural —o macro. Para ello, en

el análisis de la movilización de colectivos campesinos y su integración en la *Contra*, utilizaremos la literatura que hace referencia a las *agencias movilizadoras* y al *repertorio teórico* sobre las respuestas (y protestas) campesinas. A la vez, haremos referencia a la problemática relación existente entre las comunidades locales y el proceso de construcción —¿más que consolidación?— del *estado-nación* en los países en vías de desarrollo. Fruto de la última cuestión plantearemos la necesidad de analizar la realidad de Nicaragua (así como otros países de la región) concibiéndola como un país heterogéneo en su composición geográfica, demográfica y social; incidiendo en la necesidad de aunar esfuerzos en la creación y desarrollo de una historia local y regional que nos ayude a comprender mejor fenómenos como los del impacto de la revolución sandinista y su pretensión de articular un marco nacional homogéneo.

Por último, es menester señalar que buena parte del material utilizado para la confección del presente trabajo se ha obtenido a partir de tres fuentes. Por un lado, del trabajo de campo realizado en las zonas rurales del interior —particularmente en las municipalidades de Condega y Matiguás— durante mi estancia como investigador invitado en el *Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica* (1996). Por otro, a través de entrevistas a personas —principalmente activistas sandinistas y campesinos vinculados con la *Contra*, y cuadros de las instituciones de la administración revolucionaria— que participaron directamente en el proceso y, finalmente, a un notable número de trabajos y documentos internos elaborados por instituciones vinculadas a la reforma agraria (CIERA, MIDINRA, UNAG) y a la administración sandinista (MINT, DGSE).

CAPÍTULO 10

**LA REFORMA AGRARIA
SANDINISTA O EL RETO
DE LA MODERNIZACIÓN**

1.1. LA TRANSFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

El compromiso de los sandinistas en transformar de forma radical la estructura social y las relaciones sociales en el campo en beneficio de los campesinos estaba ya explicitado desde la redacción, en 1969, del *Programa Histórico del FSLN*. Dicho documento exponía la inmediata y masiva entrega de tierras al campesinado; la eliminación del latifundio; un plan de desarrollo para diversificar e intensificar la producción agrícola; compensaciones a la *burguesía patriótica* afectada por la reforma agraria; la organización de los productores en cooperativas; y la creación de fuentes de trabajo para la población campesina, eliminando el paro temporal (FSLN, 1969: 9-10).

Muchos de los puntos anunciados se desarrollaron ampliamente en el diseño de la reforma agraria emprendida a partir de 1979. Con todo, es importante observar el sesgo que rápidamente tomó la redistribución de la tierra y la asignación de los recursos (Utting, 1988: 3). La tendencia fue, en sus inicios, clara: priorizar el Área de Propiedad del Pueblo (APP) en manos del Estado a partir de la cual pivotaría la formulación de la política alimentaria⁽¹⁾. Y así lo resumió un informe del Ministerio

1) Existe un notable volumen de literatura sobre la planificación agropecuaria en Nicaragua y el modelo de acumulación basado en el Estado. En cuanto a los trabajos que analizan la planificación económica y su impacto en la transformación agraria destacan: BIONDI-MORRA, 1990; FITZGERALD, 1985; KAIMOWITZ, 1986; KLEITERP, 1988. Y sobre la reforma agraria y su impacto en la estructura de

de Planificación (MIPLAN) donde se exponía que «la estrategia no es simplemente aumentar la capacidad productiva de las empresas estatales a corto y medio plazo; es también convertirlas en el *sector estratégico* de la *Nueva Economía*» (MIPLAN, 1980: 45).

Sin embargo, antes de entrar a profundizar los aspectos mencionados, es importante señalar la relevancia que el gobierno revolucionario otorgó al proyecto de reforma agraria. Como ejemplo de ello, el documento *Estrategia de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria* elaborado por la División General de Planificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, declaraba que (MIDINRA, 1982a: 4-5):

La Reforma Agraria es la punta de lanza que rompe las trabas al desarrollo de las fuerzas productivas, impulsa la cooperativización y la participación de los trabajadores en las Empresas [...] La Reforma Agraria es el instrumento principal de transformación social y económica de la Revolución Popular Sandinista. El proceso de transformación de las relaciones sociales de producción en el agro sentará las bases para un nuevo modelo de acumulación y determinará el desarrollo de la *Nueva Economía* nicaragüense [...] Todo ello apuntando hacia la industrialización de los recursos naturales.

Así, del sector agropecuario los objetivos en el contexto revolucionario eran tres: el autoabastecimiento alimentario, la generación de divisas a través del sector agroexportador, y la organización social (y política) de la producción. Y así lo expuso la Junta de Gobierno poco después de la insurrección (JGRN en Wheelock, 1983):

[Se trata de] transformar la estructura de tenencia de la tierra eliminando el latifundismo ocioso y garantizar su acceso al campesino pobre, fomentando las relaciones de producción de carácter asociativo y crear un sector estatal como eje del desarrollo agropecuario [...] Elevar los niveles de producción mediante la difusión de tecnología y el uso racional e intensivo de recursos naturales, a fin de lograr un autoabastecimiento alimentario nacional y un aumento de la agroexportación [...] Promover el desarrollo agroindustrial para generar mayor valor agregado a la producción agropecuaria, mejorando así la inserción en el mercado internacional

la tenencia de la tierra: BAUMEISTER, 1985, 1987, 1987, 1989; ENRÍQUEZ, 1992.

y la vinculación entre los sectores primario y secundario de la economía nacional.

Para tal tarea, en 1979, se fusionaron el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Reforma Agraria (INRA) para crear el MIDINRA, en tanto que institución responsable de atender el sector agropecuario formado por las nuevas empresas de la APP, las cooperativas que se irían creando y los productores individuales. Así, el MIDINRA se expandió rápidamente creando delegaciones regionales, departamentales y locales, multiplicando todas sus instituciones administrativas, llegando a constituir un *súper-ministerio* («un Estado dentro del Estado», como lo calificaron muchos) que contaría con su propio *think-tank*, el Centro de Investigaciones para la Reforma Agraria (CIERA), dirigido por Orlando Núñez.

El primer objetivo de la Junta de Gobierno fue la creación de un amplio sector estatal a través de la confiscación de las fincas de Somoza y sus allegados. Sin embargo, muchas de esas fincas ya habían sido tomadas por campesinos pobres que se alzaron durante la insurrección, formando cooperativas o dividiéndolas en parcelas (Serra, 1990: 78). A pesar de ello, a finales de 1979, el gobierno decidió tomar el control de esas fincas para la creación de unidades de producción gestionadas directamente por la administración estatal aduciendo la necesidad de mantener y aprovechar las economías de escala, de canalizar las ganancias hacia el Estado para inversiones de desarrollo, y de convertir al proletariado en la «clase mayoritaria» que necesitaba el proyecto revolucionario —evitando así la *recampesinización* del semi-proletariado— (Deere, Marchetti & Reinhart, 1985).

El rechazo del movimiento campesino a esta medida no se hizo esperar, y ya en febrero de 1980, miles de campesinos —organizados a través de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC)— realizaron movilizaciones en diversos puntos del área Pacífico reclamando tierra, la no devolución de las fincas intervenidas, rebajas crediticias y la condonación de la deuda campesina (Kaimowitz, 1986: 140; Serra, 1990: 79). A pesar de ello, el gobierno no solo no abordó la demanda fundamental —la tierra— (aunque prometió hacerlo en una próxima ley de reforma agraria) sino que también prohibió las tomas de tierras y las huelgas a fin de preservar la alianza con la burguesía y mantener las relaciones con el mercado económico internacional.

De acuerdo con lo prometido, a dos años del triunfo de la Revolución, se aprobó la *Ley de Reforma Agraria* abriéndose *otra etapa* en la transformación de la propiedad y usufructo de la tierra. La nueva ley permitía «la afectación

del latifundio ocioso, deficientemente explotado o arrendado», a la vez que garantizaba la propiedad eficientemente trabajada. Los beneficiarios de dicha ley (con el usufructo de una extensión que debía asegurar, al menos, un ingreso equivalente al salario mínimo) fueron, mayoritariamente, las unidades de producción estatal —llamadas Empresas de Reforma Agraria (ERA)— y los campesinos sin tierra organizados en cooperativas y, en menor medida, algunos productores individuales.

Al MIDINRA le correspondió entregar el *título de reforma agraria*. *Título* que «no podía ser enajenado en forma alguna, pudiendo ser transmitido únicamente por herencia en forma indivisa» a fin de evitar tanto el minifundismo como el acaparamiento de esas parcelas a través de la compra-venta. El carácter del *título* fue rápidamente contestado por el campesinado, quien demandó insistentemente «la propiedad verdadera» de las tierras. Sin embargo, el MIDINRA ya tenía sus propios planes. Y así lo demostró con la elaboración del *Marco Estratégico del Desarrollo Agropecuario* (MIDINRA, 1983) donde se establecieron las «metas precisas» de distribución de la tierra entre los diversos sectores productivos hasta el año 2.000. Según este Ministerio, al «terminar» la reforma agraria el APP contaría con un 27,4% del área total agropecuaria, el sector cooperativo con un 48,4% (un 25,1% para las cooperativas de producción, llamadas Cooperativas Agrarias Sandinistas —las CAS— y un 23,3% para las cooperativas de crédito y servicio —las CCS—), los pequeños y medianos productores con un 18,2%, y los grandes productores un 6% (MIDINRA, 1983b, 1983c).

En esa dirección, a partir de la promulgación de la *ley de reforma agraria* de 1981 se desarrolló un rápido proceso de «afectaciones». Entre 1981 y 1984 se expropiaron 349 latifundios con una extensión de 467.228 manzanas, siendo los principales beneficiarios las empresas estatales y las cooperativas CAS (Cardenal, 1987), tal como se refleja en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1. Distribución de la tierra afectada por la reforma agraria

Fechas	APP	Coops.	Camp. Individual
Oct.81/Dic.82	70%	25%	5%
Enero/Dic.83	65%	33%	2%
Enero/Dic.84	57%	40%	3%

Fuente: Serra, 1990: 80.

Tabla 2. Evolución de la estructura de propiedad de la tierra por sector, 1978-1984 (en miles de manzanas)

Sector	1978 Área	1978 %	1984 Área	1984 %
-Individual	8.073'0	100	5.125'2	64
+ de 500 mzs.	2.920'0	36	1.025'7	13
200 a 500 mzs.	1.311'0	16	1.021'0	13
50 a 200 mzs.	2.431'0	30	2.391'0	30
10 a 50 mzs.	1.241'0	16	560'5	7
menos de 10 mzs.	170'0	2	127'0	1
-Cooperativo	-	-	2.947'8	17
CCS	-	-	804'3	10
CAS	-	-	626'6	7
-Estatal (APP)	-	-	1.516'9	19
Total	8.073'0	100	8.073'0	100

Fuente: Dirección General de Reforma Agraria, en: Wheelock, 1986b: 119.

Desde 1983 también se inició la *titulación* de las tierras en posesión precaria en las regiones del interior y la Costa Atlántica ⁽²⁾ con el fin de atraer parte del sector campesino al «campo revolucionario» y restar peso al «movimiento contrarrevolucionario». Dicho objetivo, sin embargo, fue escasamente alcanzado debido a la notable implantación que tenía, ya por aquel entonces, la *Contra* y porque el carácter no negociable del título era percibido por muchos campesinos como la negación al acceso de propiedad. En este sentido, en diversas entrevistas realizadas a campesinos, éstos, al referirse a la política agraria sandinista, solían exclamar: «¡El gobierno solo nos prestaba las tierras!».

Posteriormente, con la agudización de la guerra en las zonas rurales del interior (correspondientes a la parte oriental de las regiones de Nuevas Segovias,

2) Existen pocos trabajos que analicen el impacto de la reforma agraria en la Costa Atlántica, sobre todo debido a la complejidad que supuso la gestión de tierras comunales y la importancia que tenían las reivindicaciones históricas de los *pueblos originarios* de la región. Con todo cabe anotar el trabajo de BULLOVEN (1989).

Matagalpa y Chontales) se llevarían a cabo desplazamientos de población, abriendo un *nuevo período* de la reforma agraria (con la *Reforma a la Ley de Reforma Agraria* de 1986³⁾, donde se eliminarían los criterios de tamaño y eficiencia de la regulación anterior en cuanto a la posibilidad de afectación y expropiación de fincas; y otorgaría mayor capacidad de maniobra al gobierno a la hora de realizar asentamientos y cooperativas en las zonas fronterizas y de guerra. A consecuencia de ello se observó que, a partir de la segunda mitad de la década, la administración pasaba a priorizar el rol político y defensivo en la transformación de la estructura de la propiedad.

1.2. LAS POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN SANDINISTA: LA INVERSIÓN PÚBLICA, EL CRÉDITO Y LA COMERCIALIZACIÓN

Una vez expuesto el proceso y la lógica de la transformación del uso y tenencia de la tierra, cabe señalar también cuáles fueron las políticas de la administración sandinista en cuanto a la inversión pública, el crédito y la comercialización de los productos agrícolas. Respecto a la inversión pública en el sector agropecuario, ésta tuvo mucha importancia durante toda la década de los ochenta, alcanzando un 40% de la inversión global y un 7,5% del PIB nacional. Cabe destacar, sin embargo, que si bien en un primer período el gobierno supo balancear adecuadamente las inversiones entre la industria y el agro, y entre la exportación y el consumo —evitando desequilibrios ocurridos en otros procesos de desarrollo implementados en pequeñas economías periféricas—, pronto se observó un sesgo «acumulacionista» que subordinó el consumo a la inversión productiva y un sesgo «modernizante» al favorecer el sector moderno frente al tradicional (Kleiterp, 1988).

Según el *Marco Estratégico de Desarrollo Agropecuario* (MIDINRA, 1983c) los objetivos del proceso de transformación agraria (planeados hasta el año 2.000) eran lograr el autoabastecimiento alimentario, el desarrollo agroindustrial y la máxima generación de divisas. De acuerdo con ello se estableció la necesidad de realizar un gran esfuerzo en el plano de las inversiones públicas. Cabe señalar, sin embargo, que ese esfuerzo inversor se concentró en el sector estatal, el cual absorbió el 70% de las inversiones; frente al 25% y 5% correspondientes al sector cooperativo y privado, respectivamente. Este sesgo *estatista* aumentaría a partir de 1983, cuando el grueso de la inversión pública se dirigió hacia grandes proyectos agroindustriales (los llamados *Proyectos del Programa de Inversiones Públicas*),

3) Ley número 14 del 11 de enero de 1986, publicada íntegramente en: CIERA, 1989h: 97-110.

ocho de los cuales absorberían en 1985 el 56,4% del total invertido, con una maduración promedio de 6,6 años (Serra, 1990: 84; Utting, 1988: 13). La opción de invertir en proyectos de alta tecnología concentrados territorialmente fue defendida por el Ministro del MIDINRA como la vía más rápida y eficiente para aumentar el rendimiento y la producción agropecuaria, exponiéndolo de la siguiente forma (Wheelock, 1986b: 48):

Teníamos dos alternativas [para aumentar la producción lechera] o trabajar con el hato de dos millones —total nacional— que están distribuidas de la manera más anárquica y en manos no siempre receptivas a métodos modernos... lo cual significaría hacer un esfuerzo parecido a la Cruzada de Alfabetización... o nos decidíamos por métodos intensivos [...] Para el caso del maíz y frijol... nuevamente se nos presentaba la misma alternativa... la única respuesta viable es la producción de granos básicos bajo riego y tecnología intensiva de cultivos.

La citada estrategia, que enfatizó la mecanización, la quimización y el riego supuso una inversión en importaciones de bienes de capital e insumos sin parangón en Centroamérica (Baumeister, 1987, 1989) —supuso el paso de 2.850 tractores y un área de 63.882 hectáreas de riego en 1978 a 5.484 tractores y 96.025 hectáreas de riego en 1987. El mayor beneficiario de esta política fue, sin duda, el APP que, en 1987, tenía el 42% de los tractores, el 60% de las cosechadoras y el 39% de los implementos agrícolas del país; comparado con el 13%, 2% y 17%, respectivamente, que tenía el sector cooperativo (MIDINRA, 1987c). A pesar de ello, el incremento de la productividad fue menor del esperado debido a la creciente actividad bélica, al uso irracional de los insumos y bienes de capital abaratados por una tasa de cambio subsidiada, y por las múltiples limitaciones técnico-organizativas de gran parte de las empresas del APP. En la segunda mitad de la década, cuando empezaron a ejecutarse programas de ajuste y políticas que pretendían optimizar los recursos, la profunda crisis económica y la guerra amortiguaron sus efectos racionalizadores.

En cuanto a la política de crédito, una vez nacionalizada la banca, se conformó un *Sistema Financiero Nacional* capaz de dirigir la política crediticia y el flujo de divisas. Basándose en ello, el financiamiento bancario amplió su cobertura de un tercio de la superficie agrícola (en 1979) a un 75% en 1988. La ampliación del crédito hacia amplios sectores del campesinado permitió liberarlos de los usureros, y la adquisición de insumos y herramientas. En

1978 solo 28.000 campesinos recibían el 4% del crédito, mientras que para 1982 87.600 campesinos usufructuaban un 31% del crédito agropecuario a corto plazo. Con todo, si comparamos el sector estatal, los grandes y medianos productores, y los campesinos —en cuanto a las áreas de cultivo financiado con crédito— veremos que el campesinado tuvo una proporción muy inferior a los otros dos sectores; y, dentro de los campesinos, los cooperativizados retuvieron la mayoría del crédito (Serra, 1990: 143). Sin embargo, el crédito también constituyó un importante mecanismo de control en manos del MIDINRA sobre el sector cooperativizado, integrándolo —a partir del condicionante del crédito— en los planes y metas productivas diseñadas por la administración. En esta dirección, los planes de producción e inversiones de las cooperativas debían estar aprobados por los técnicos del Banco Nacional de Desarrollo (BND), el abastecimiento de insumos debía hacerse en las agencias estatales y, como veremos, la comercialización tenía que realizarse a través de los canales estatales de la Empresa Nacional de Granos Básicos (ENABAS), agencia que descontaba automáticamente el cobro del crédito al comprar los productos a los agricultores.

Y si bien a partir de 1985 se trató de racionalizar la asignación y el acceso al crédito (que había terminado por constituir un subsidio a los productores al tener tasas de interés inferiores al ritmo inflacionario), ya en 1987, debido a la profunda crisis económica, el crédito a largo plazo se restringió y se canalizó exclusivamente a través de 20 programas de desarrollo productivo. Posteriormente, durante el último bienio de la década de los ochenta, las políticas antiinflacionistas redujeron drásticamente el crédito, tratando de recuperar el valor del dinero, fomentar la agroexportación y la reinversión del excedente.

Respecto a la política de comercialización, el gobierno nacionalizó el comercio exterior —adquiriendo el control de la agroexportación a través de distintas empresas para cada uno de los distintos rubros— y ejerció (hasta la segunda mitad de la década) un estricto control del comercio interno. El objetivo de esas medidas, según expuso Orlando Núñez en *Barricada* (9-12-1979) y en la revista *Poder Sandinista* (8-11-1979) era:

La desaparición de todos los intermediarios, usureros y comerciantes, que antes se enriquecían comprando barato y vendiendo caro [...] Todos los recursos que hoy están en manos del Estado servirán para aumentar la producción agrícola e industrial de nuestra economía, vendiéndose al extranjero lo que se necesite vender y comprándose lo que se necesite comprar. Nuestro objetivo es la independencia económica.

De acuerdo con ello, las autoridades encargadas del Ministerio de Comercio Interior (MICOIN) fijaron precios de compra al productor agropecuario —tratando de cubrir costos y dejar un margen de ganancia— y precios de venta al consumidor, subsidiando los productos alimenticios distribuidos con tarjetas de uso por familia (las llamadas *cartillas*). Sobre la base de dicha política (que se apoyaba en el objetivo de la *seguridad alimentaria*) también se incrementaron las importaciones de productos de consumo popular básico, duplicándose entre 1979 y 1986 (Biondi-Morra, 1990).

Así ENABAS, bajo la dirección de MICOIN, realizó el acopio y la distribución de productos de consumo básico según una red nacional de bodegas, silos y puestos de venta, y el establecimiento de cuotas de productos que podían obtenerse por distrito y por familia a partir de tarjetas de control. Esta red, tal como afirmaba Núñez en *Barricada*, desarticuló el comercio privado tradicional en el campo. El problema fue, como veremos en el último epígrafe del presente artículo, que este comercio tradicional ligaba el campesinado al mercado urbano y regional, cumpliendo múltiples funciones de abastecimiento-crédito-comercialización; basándose éste en relaciones personales y en un conocimiento de la demanda campesina que nunca pudo reemplazar la red estatal de instituciones especializadas para cada función (red ubicada en lugares alejados de la residencia campesina y atendida por funcionarios urbanos que no conocían la realidad ni las inquietudes de sus usuarios).

A pesar de ello, se estableció la obligación de vender los granos básicos a ENABAS —con el fin de combatir la especulación— y se prohibió el traslado de alimentos fuera de una misma región. Estas medidas generaron el rápido rechazo de la mayoría del campesinado, implicando la caída de la producción a partir de 1981 y el desarrollo de un *mercado negro* (con precios muy superiores a los oficiales) que competía con la escasez que sufría la red estatal (Dore, 1990: 109-112).

En ese contexto, a lo largo de casi toda la década, los términos de intercambio campo/ciudad sufrieron un deterioro progresivo en perjuicio del campesinado. Así, por ejemplo, un pantalón y una camisa, que en 1978 equivalían a 49 y 22 libras de maíz, respectivamente, en 1985 la relación era de 230 y 140 (CIERA, 1989i: 373-380). Pero no solo los precios afectaron negativamente a los colectivos rurales, sino que la red estatal de comercialización privilegió el abastecimiento de las ciudades —reflejando una mayor organización y poder de los colectivos urbanos— a la vez que era incapaz de abastecer a la población campesina de insumos, herramientas y bienes de consumo

necesarios, generando, a mediados de la década, situaciones de aguda escasez en las zonas rurales (MIDINRA, 1987d).

A causa de las múltiples manifestaciones de malestar en las áreas rurales, a partir de 1985, las políticas de comercialización interior empezaron a cambiar, liberándose gradualmente la compra-venta de granos básicos hasta la completa liberación del mercado en 1987. Sin embargo, a partir de 1987 —con las políticas de ajuste emprendidas por el gobierno y el abandono del racionamiento—, si bien los artículos de consumo empezaron a llenar los estantes de los almacenes, éstos ya no estaban al alcance de los bolsillos de la mayoría de los campesinos.

1.3. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN

El otro gran aspecto de la Reforma Agraria fue la transformación de la *organización social de la producción* y la consiguiente *vinculación política* de los actores productivos a través de organizaciones gremiales. En cuanto a la organización social de la producción destacó la creación de centros estatales de producción —las Empresas de Reforma Agraria (ERA)— y la conformación del movimiento cooperativo, donde se distinguían diversas modalidades: las cooperativas de producción llamadas Cooperativas Agrarias Sandinistas (CAS), las de crédito y servicios, calificadas como Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS), y las Cooperativas Agrarias de Defensa (CAD) ubicadas en las zonas fronterizas del norte y cuya función, además de producir, era responder a los ataques de la Contra. En cuanto a la organización gremial y política, los colectivos sociales vinculados al mundo agrario se articularon a través de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), creada antes de la insurrección, y la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), fundada en abril de 1981.

Las ERA, desde su establecimiento, se convirtieron rápidamente en un elemento omnipresente de sistema económico nacional, y en un elemento clave del sistema alimentario, con una presencia significativa en cada una de sus etapas, incluyendo la distribución de insumos, la producción y el procesamiento. Estas empresas, por ser extensiones directas de la administración del gobierno, fueron vistas desde su inicio como un instrumento político fiable a partir del cual generar una respuesta rápida y leal a los nuevos objetivos de la política económica y alimentaria.

Sin embargo, un estudio elaborado durante los primeros años del proceso revolucionario expuso que «el complejo económico estatal y sus gestores encontraron muchas dificultades para llevar a cabo sus objetivos, pero [que] también se cometieron muchos errores» (Austin & Fox, 1985: 339). Poco después, en 1985,

las dificultades del sector estatal parecían haber aumentado, tal como indicó el *Plan Económico de 1985*. Dicho informe citaba entre las causas del deterioro de las ERA la guerra en curso —con sus múltiples efectos directos e indirectos—; el embargo comercial norteamericano de 1985; el deterioro de los términos de intercambio; y la gradual desintegración del Mercado Común Centroamericano. Pero no todas las causas tenían origen externo, también figuraban importantes errores políticos y de gestión, destacando las persistentes pérdidas que generaban dichas empresas, su incapacidad de cumplir con el servicio de sus pesadas y crecidas deudas; la subutilización de sus plantas y equipos de procesamiento; y el desinterés que caracterizó a buena parte de su mano de obra que, ya que se les había negado la propiedad individual de la tierra, afirmaba su situación de *liberada* trabajando *al suave*, tomándose —tal como irónicamente se llamó— *la vacación histórica* (Biondi-Morra, 1990: 75-85).

De esta forma, si bien Henry Ruiz, comandante y ministro de Planificación, expuso que el papel que debían desempeñar las ERA era «la satisfacción creciente de las necesidades de nuestro pueblo [...] ser la médula de la nueva acumulación, y por ende de la *economía sandinista*, generando fondos de inversión social que permitieran un proceso de acumulación autónomo [...] generando los excedentes económicos que fortalecieran su consolidación y expansión, permitiendo que el pueblo compartiera la riqueza», éstas casi nunca generaron excedentes⁽⁴⁾.

En cuanto al sector cooperativo, cabe anotar que su nacimiento tuvo origen a la par de la caída de Somoza, cuando se llevaron a cabo ocupaciones espontáneas de haciendas (tal como se venía haciendo desde antes del 19 de julio en las *zonas liberadas* de León, Estelí y Chinandega). Y si bien en esos primeros meses ni el FSLN ni el Estado tuvieron capacidad para atender este movimiento —y más bien lo frenaron—, ya en julio de 1980 (debido a las políticas desarrolladas posteriormente) existirían 2.647 cooperativas con 77.358 miembros; dándose las bases para el asentamiento de lo que se llamaría el *movimiento cooperativo*⁽⁵⁾.

Posteriormente, con la *Ley de Reforma Agraria*, se institucionalizaría e impulsaría el *movimiento cooperativo* definiéndolo como «una forma superior de organización del trabajo, que impulsa el espíritu de solidaridad y cooperación y facilita la participación activa y organizada del campesinado, el aumento de la producción y de los servicios de educación, salud, vivienda y cultura». Según dicha ley, cualquier

4) Un estudio financiero hecho por el MIDINRA en 1981 indicó que de las 49 empresas que disponían de balances recientes, 38 ya operaban con pérdidas (MIDINRA, en BIONDI-MORRA, 1990: 103-104).

5) Para un análisis amplio y profundo del movimiento cooperativo nicaragüense desde 1979 hasta 1990 ver el trabajo de SERRA (1990), quien durante años trabajó con la UNAG.

organización de cooperativas agropecuarias debía contar con la autorización de la agencia estatal PROCAMPO. Este severo control por parte de la administración era debido tanto a las pretensiones hegemónicas del FSLN, como a la concepción ministerial de que el movimiento cooperativo debía estar subordinado a la planificación nacional y que éste dependía de los servicios ofrecidos por el Estado. Así, el rol económico que se le asignó fue el de producir granos básicos y perecederos, y el de la reproducción de fuerza de trabajo para las grandes empresas estatales destinadas a la agroexportación (MIDINRA, 1982a). En cuanto al rol social, el movimiento cooperativo debía significar la *superación* del *atraso* que —según los responsables de la política agraria— suponían las unidades tradicionales de producción campesina; conformando así CCS o CAS, en tanto que «*formas superiores de organización social*» (Caballero, 1982).

En esta dirección —y a pesar de la actitud de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG⁶)—, hasta 1985, la estrategia del MIDINRA fue la de condicionar la entrega de tierras de la reforma agraria a la formación de cooperativas, violando los principios de *voluntariedad* y *gradualidad* expuestos en la ley. En cuanto a la estructura institucional de las cooperativas, cabe señalar que también abundó la injerencia de *agentes externos* (técnicos, profesionales, cuadros políticos...) que limitaron la democracia interna y la autonomía de dichas organizaciones; y así lo expresó en 1987 un cooperativista de una CAS ubicada en Comalapa (Serra, 1990: 146):

El movimiento cooperativo ha estado sin cara, sin alguien que hablara por él. Llegaba alguien de *Reforma Agraria* y hacía lo que quería, el hombre del batallón también, el hombre del Frente también se imponía como *mandador*.

En 1982 se hizo el primer censo de cooperativas agropecuarias y, en esas fechas, este sector representaba ya el 50% del campesinado nacional y usufructuaba el 22% de la superficie cultivable del país. Del censo se extrajo que la motivación principal del campesinado cooperativizado era la posibilidad de mejorar el nivel de vida del núcleo familiar a través del acceso de tierras, créditos, insumos y equipos

6) La UNAG se distinguió del resto de organizaciones administrativas y políticas sandinistas por su postura beligerante en aras de preservar cierta autonomía del movimiento cooperativo y de defender los intereses de los colectivos campesinos. De esta manera, con el paso del tiempo, esta organización fue adquiriendo una personalidad propia que, muchas veces, le supuso enfrentamientos con la administración. Existen diversos trabajos que detallan con exactitud la evolución de la UNAG y sus postulados, entre ellos destaca el de BLOOKLAND (1992).

que les permitiera elevar su capacidad productiva; así como apropiarse parte de los excedentes y ofrecer empleo estable. También percibían que la organización en cooperativas les otorgaba mayor capacidad de satisfacer sus intereses y que el Estado les brindaba un tratamiento preferencial (Cerrato, 1988).

La mayor parte de las cooperativas existentes eran CCS (45%) formadas por campesinos medios de la región interior, con tierra propia o alquilada a privados, con un promedio de 32,6 socios por cooperativa. Las CAS (20%) eran pequeñas, con 14 socios de promedio y fueron formadas, en su mayoría, por campesinos pobres o proletarios agrícolas en tierras asignadas por la reforma agraria en la región Pacífico. La producción principal de las cooperativas eran los granos básicos (78%), que comercializaban en gran parte (53%), especialmente las CAS (Serra, 1990: 141).

La organización gremial y política de estos colectivos se vertebró a partir de la ATC y, posteriormente, también de la UNAG. La ATC promovía y representaba a los obreros agrícolas (mayoritariamente de las ERA) en distintas instancias creadas en 1980 por el gobierno —como el Consejo de Estado, y diversos comités sectoriales de producción. En su primera Asamblea Nacional, celebrada en diciembre de 1979, la ATC aprobó su reglamento organizativo y expuso sus prioridades y tareas. Pese a su amplia composición, un notable colectivo de campesinos —sobre todo en la macroregión Central del país— no se sintieron identificados con dicha organización, tanto por su composición e intereses, como por su discurso politizado que apelaba a los proletarios agrícolas y a los trabajadores del campo en detrimento de quienes tenían (y querían conservar) algún pedazo de tierra que trabajar.

La situación expuesta fue aprovechada por un sector de la burguesía agraria no simpatizante con la revolución para captar campesinos para sus organizaciones gremiales, como fue el caso de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC) que creó una cooperativa de cafetaleros de Matagalpa que pronto tuvo una notable implantación. A consecuencia de ello, desde el gobierno surgió la inquietud de crear una organización vinculada al sandinismo que (además del movimiento cooperativo) representara a pequeños y medianos productores con el propósito de restar espacio a UPANIC. De esta forma, en un proceso asambleario de campesinos de diversas regiones se fundó, en abril de 1981, la UNAG. Y ésta, bajo el lema de «Patria Unidad y Producción» se definió como una organización de pequeños y medianos productores, de carácter amplio y pluralista —aunque también proclamó el «reconocimiento del FSLN como la Vanguardia de nuestro pueblo» (UNAG, 1981).

Con todo, buena parte del campesinado pobre no cooperativizado quedó al margen de la ATC (organización que concentró su atención en el sector de

los asalariados permanentes y, especialmente, el de las ERA) y de la UNAG (que desde sus inicios priorizó el mediano campesino y el movimiento cooperativo). Ante ello, desde inicios de los ochenta hubo fuertes debates en el seno de la ATC y la UNAG sobre quién debía organizar, representar y proteger los intereses de ese campesinado pobre de las zonas rurales del interior. La UNAG sostuvo que dicho sector no podía integrarse en la misma organización que el campesinado medio y cooperativizado; y la ATC argumentó que la *alianza obrero-campesina* no debía incluir a los pequeños campesinos, quienes generalmente mantenían una visión tradicional de la política y la sociedad y que, en los círculos pro-revolucionarios eran tildados de *kulaks*. De esta forma, en la práctica, ambas organizaciones abandonaron este amplio sector que, con el tiempo, se convertiría en la base social de la *Contra* (Serra, 1990: 138).

Los dirigentes de base de la ATC y la UNAG eran generalmente líderes naturales de la zona que lograban aglutinar, con su carisma, a un grupo de campesinos ligados por redes de parentesco, y cuyo reconocimiento suplía, muchas veces, la elección formal. Estos líderes gestionaban voluntariamente las demandas de sus bases en los organismos municipales, y transmitían a los miembros de las cooperativas las *orientaciones* y la *línea política* de las instancias superiores, movilizándolos cuando «era necesario». Los cuadros intermedios casi siempre los nombraba el FSLN entre sus miembros, y los dirigentes nacionales eran designados por la Dirección Nacional del Frente Sandinista. Evidentemente, ello condicionó y socavó la representatividad y la democracia interna de estas organizaciones, sobre todo porque los planes de trabajo eran adaptaciones de líneas estratégicas adoptadas por el MIDINRA a nivel regional y nacional. A pesar de ello, la tendencia hacia la burocratización y concentración de poder en la dirección de las *organizaciones campesinas* fue contrarrestada por la libre expresión floreciente en las bases a partir de los múltiples canales de comunicación y por la necesidad que siempre tuvieron la UNAG y la ATC del trabajo voluntario. Así, a pesar de todas las limitaciones, la UNAG casi duplicó sus miembros entre 1981 y 1985 pasando de 45.498 a 75.000, y la ATC mantuvo unos 40.000 afiliados a lo largo de toda la década (CIERA, 1989f: 376).

De esta forma, se observa con claridad que, con todas sus limitaciones, la Revolución supuso la irrupción de la participación y la organización política de buena parte del sector campesino. A pesar de todo, dicho proceso no fue lineal, sino que tuvo altibajos, contradicciones y limitaciones provocadas por la reproducción de las estructuras sociales del pasado y por la incomprensión de determinadas realidades del campo.

Desde la perspectiva campesina, la *reproducción* de las viejas estructuras corrió paralela a la *creación* de una nueva sociedad. Así, si bien por un lado se dismanteló el aparato represivo del somocismo, por el otro aumentaron las directrices políticas emanadas desde el FSLN. También, y por primera vez, llegó el crédito, la tecnología y la capacitación, pero las instituciones de la administración incrementaron el control y los condicionantes. Y si bien se organizaron cooperativas y se crearon organizaciones para representar los intereses de los colectivos rurales, también es necesario señalar que muchos campesinos aún siguieron luchando por la obtención de lotes de tierra y por el acceso de los recursos que se concentraban en las haciendas estatales y privadas. Todo ello en un sistema político orquestado por el FSLN y basado en una concepción *vanguardista* que poseía rasgos corporativos, ofreciendo bienes materiales y simbólicos a cambio del control de los líderes locales —reproduciendo las seculares relaciones clientelares entre quienes detentaban el poder y quienes lo padecían.

Ciertamente, parte del movimiento cooperativo y gremial —especialmente la UNAG— mostró ser un medio eficaz para transmitir las demandas e inquietudes de algunos sectores; pero también se hizo evidente que las instituciones estatales responsables de implementar y gestionar las políticas agrarias tuvieron grandes dificultades para comprender tanto las características elementales de la estructura agraria del país como la naturaleza de los principales actores productivos, su peso en la producción, y sus limitaciones y potencialidades (Baumeister, 1988a, 1988c, 1989). Así las cosas, en las políticas agrarias de la administración sandinista persistieron diversos errores de diagnóstico entre los que destacaron la sobrevaloración del peso productivo de las fincas heredadas por el somocismo (con las que conformaron el grueso del sector estatal); la exageración del peso económico de la burguesía agraria; y la subvaloración del rol productivo de los medianos y pequeños agricultores y ganaderos.

¿A qué atribuir estos errores y concepciones prevalecientes en los diagnósticos y en las actividades inversionistas del sector estatal? Según Baumeister (1988a) éstos pueden resumirse en tres puntos. En primer lugar, cabe señalar el peso que obtuvieron los sectores de la élite agraria que formaron parte de la «alianza sandinista» y que luego ocuparon espacios de gran responsabilidad dentro del sector público; a saber, se trataba de la capa de profesionales vinculada familiar o laboralmente al sector más moderno de la agricultura anterior a 1979 y que, a consecuencia de su apoyo a la *coalición revolucionaria* durante el proceso insurreccional pasó a ocupar puestos de alta responsabilidad

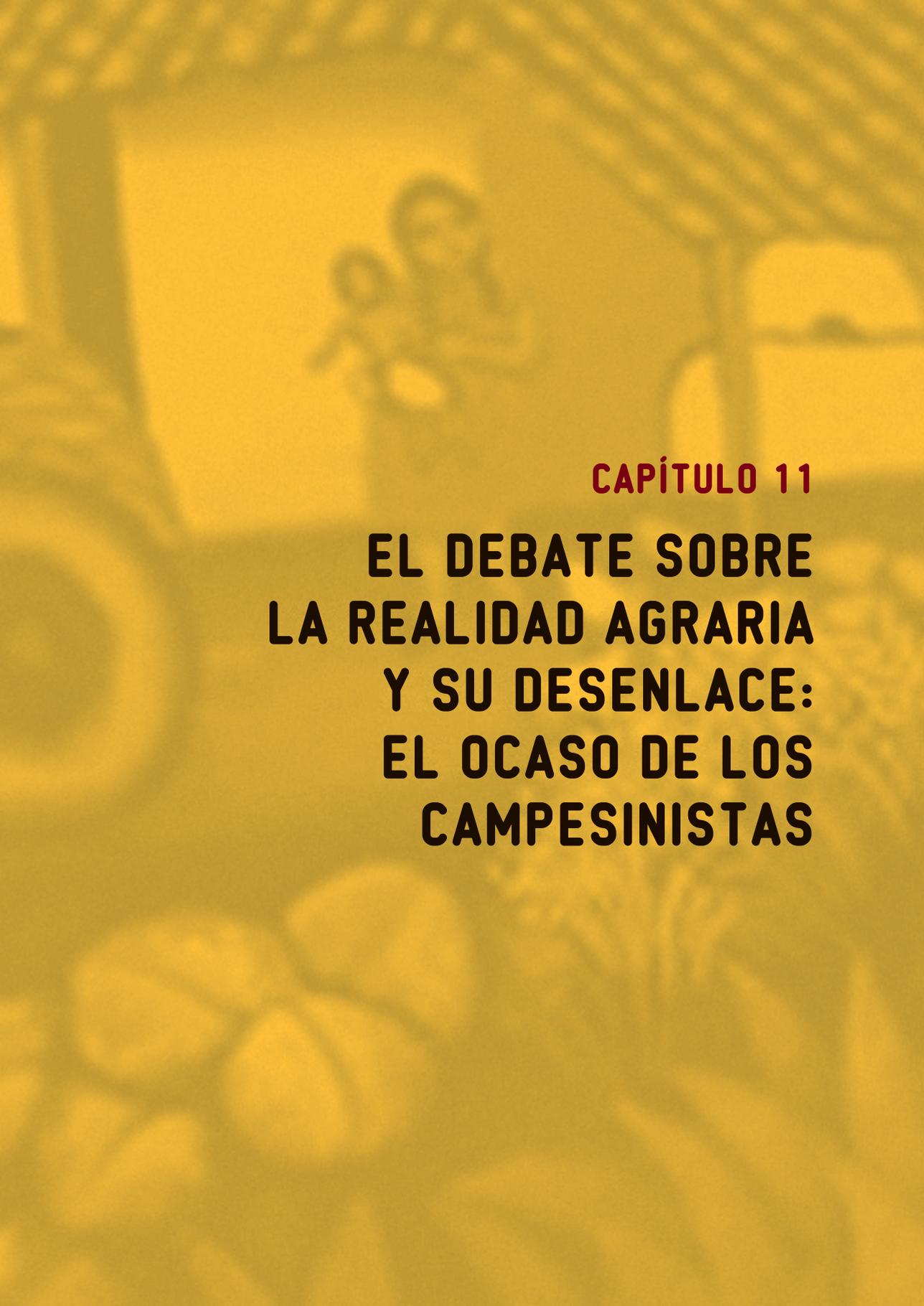
en el sector público ⁽⁷⁾. En esos puestos confluyeron profesionales liberales formados en centros universitarios norteamericanos y cuadros provenientes del antiguo *Bloque del Este*, de donde fluyó gran parte del financiamiento y asesoría para los grandes proyectos agroindustriales. En segundo lugar, figuraron razones de *naturaleza ideológica*, donde prevalecería la adopción de cierta interpretación del marxismo —relacionada con la Teoría de la Dependencia— respecto a temas como el *subdesarrollo*, el desarrollo de las fuerzas productivas, o la creación de los *sectores sociales deseables*. Y en tercer y último lugar, cabe citar la *sobrepolitización* de los análisis realizados al interpretar la coyuntura económica y las alianzas con determinados sectores sociales; visión que supuso, muchas veces, una percepción distorsionada de la realidad, sobre todo en cuanto al peso productivo de los distintos sectores.

Así, desde inicios de la Revolución, la formulación de políticas públicas fue prácticamente monopolio de profesionales y técnicos. Éstos impulsaron un proceso de *modernización acelerada* basado en la idea de que el *atraso* de la economía tradicional en el agro nicaragüense solo podría superarse creando un gran sector estatal que, de forma progresiva, la absorbiese, proletarizando al campesinado en grandes empresas públicas y dejando al resto de unidades productivas (sobre todo las privadas) en una situación marginal.

De esta forma, se desconoció el potencial del pequeño agricultor autónomo de las zonas rurales. Este pequeño agricultor, calificado en Nicaragua de *chapio-llo* (que puede entenderse como sinónimo de plebeyo, de origen campesino, indio y mestizo) nunca fue percibido por los técnicos *cheles* ⁽⁸⁾ y capitalinos como elemento de progreso o modernización. Estos agricultores, sin embargo, nunca rechazaron *lo moderno*, aunque sí eran mucho más cautelosos en su incorporación. Este colectivo, caracterizado política y socialmente por su conservadurismo, hubiera sido más proclive a las políticas que estimulaban el uso intensivo del suelo, ampliando la superficie cultivada, y a una acumulación de ganado y plantaciones a partir de la promoción de sus pequeñas unidades de producción.

7) En esta dirección, entre los vice-ministros y delegados regionales del MIDINRA siempre figuraron apellidos vinculados a las grandes familias nicaragüenses como Coronel, Kautz, Lacayo, Barrios, Holmann, Portocarrero, Cuadra, Schulz, Chamorro, Escorcía o Castillo. Muchos de ellos, antes del triunfo de la Revolución, tenían vínculos —en tanto que directivos, accionistas o técnicos— con el *Ingenio San Antonio* (perteneciente al *Grupo Pellas*), que era la planta azucarera más importante y moderna de Centroamérica.

8) Adjetivo que se utiliza para designar a la gente de piel blanca y que tiene connotaciones sociales, ya que el sector de la población blanca en Nicaragua es muy reducido (7-9%) y proviene, en su mayoría, de las élites económicas tradicionales —la llamada *pigmentocracia*.



CAPÍTULO 11

**EL DEBATE SOBRE
LA REALIDAD AGRARIA
Y SU DESENLACE:
EL OCASO DE LOS
CAMPESINISTAS**

Es obvia la afirmación de que si una de las metas principales de la Revolución Popular Sandinista era la transformación de la estructura de clases en el campo, el diseño de políticas para tal fin dependía tanto de la percepción de la realidad en el campo como de la información existente de la estructura social agraria.

Desde los primeros años de la Revolución, diversos equipos de técnicos y especialistas vinculados activamente en el proceso revolucionario polemizaron, dentro del CIERA y del MIDINRA, sobre la estructura social presente en el agro nicaragüense y sobre qué estrategias de desarrollo seguir. De esta forma, se enfrentaron dos concepciones sobre el desarrollo agropecuario; una sostenida desde la tecnocracia estatal (llamada *industrialista* o *descampesinista*) y otra, tildada de *campesinista*, mayoritariamente vinculada al mundo de las ONG, que defendía los intereses de los colectivos campesinos sobre los que durante varias décadas había reposado la producción de los alimentos destinados al mercado interno⁽¹⁾.

1) El debate sobre el futuro del campesinado entre *campesinistas* e *industrialistas* (o *descampesinistas*) resurgió en México en la década de los setenta ante la presencia de una gran masa campesina marginal. En dicho debate destacaron, entre los *campesinistas*, Gustavo Esteva, Ángel Palerm y Eduardo Warman, quienes expusieron que, ante todo, los campesinos habían mantenido una lucha «para ser lo que son en mejores condiciones» (WARMAN, 1980: 10) y que en muchos casos los campesinos habían desarrollado estrategias para reconquistar sus derechos históricos sobre la tierra perdida ante el avance del capitalismo. Entre los *descampesinistas* destacaron Roger Bartra, Luisa Paré y Feder, quienes compartían la tesis de que de la expansión capitalista y el desarrollo de la agricultura

La concepción *industrialista* planteaba que la proletarización sería el futuro del campesinado, de acuerdo a la ortodoxia socialista inspirada en Marx, Lenin y Preobrazhensky —ya que el proceso de desarrollo económico conllevaría la desaparición del campesinado como forma de producción. Esta concepción se sostenía, implícita o explícitamente, a partir de una interpretación de la realidad agraria latinoamericana inspirada en el modelo teórico del «dualismo funcional» desarrollado por De Janvry (1981). Esta perspectiva —encabezada en Nicaragua por Jaime Wheelock, ministro del MIDINRA y Orlando Núñez, director del CIERA— abogaba por un acelerado desarrollo agroindustrial destinado a la exportación y que gravitara alrededor de las empresas estatales. Para ello sostenían que la mejor estrategia de modernización era el fomento de inversiones intensivas en capital (proveniente de fuentes externas) concentradas en pocas y modernas unidades de producción; y el establecimiento de un control estatal del abastecimiento y de la comercialización. Todo ello desde una planificación centralizada y vertical.

Este colectivo tenía una visión polarizada de la estructura agraria de Nicaragua que se resumía en la presencia de dos sectores: un sector moderno y capitalizado de tamaño muy reducido, y otro amplio de semi-proletarizado o proletarizado; fruto de un proceso de modernización tipo *Junker*. Así, éstos interpretaban que el campo nicaragüense se caracterizaba por una estructura social altamente diferenciada entre grandes capitalistas agrícolas y una masa diseminada de proletarios. Este modelo, que fue consistente con los planes iniciales de la administración sandinista de transformación y producción basados en las grandes empresas estatales del APP, pretendía una inserción fuerte y directa del campesinado en el mercado, convirtiéndolo en el pilar de la fuerza de trabajo con que se sustentaría la estatización de las formas de propiedad.

Por otro lado, quienes defendían la vía *campesinista* insistían —basados en las teorías de Chayanov— en la permanencia, estabilidad y viabilidad del modo de producción campesino. Dicha línea, defendida en Nicaragua por Eduardo Baumeister, Peter Marchetti y Daniel Kaimowitz —y que a finales

resultaría la eliminación gradual del campesinado. Con todo, a dos décadas de este debate, los datos sobre la realidad agraria del Tercer Mundo revelan que el campesinado «está para quedarse» (SAITH, 1986: 16). Así las cosas, en la actualidad, a nivel mundial todavía más del 40% de la población económicamente activa está empleada en el sector primario, y el número de «campesinos» aumenta en más del 2% anual. En cuanto a la traslación de este debate en la realidad nicaragüense, ver el trabajo del técnico de una ONG holandesa y colaborador de la UNAG, BLOKLAND (1992).

de la década adoptaría un sector de la UNAG—, planteaba la promoción de las pequeñas y medianas unidades de producción campesina y de las cooperativas, así como un impulso a la producción destinada al mercado interno; la ejecución de proyectos a partir de una planificación descentralizada; la implementación de una vía extensiva en capital e intensiva en fuerza de trabajo y en el uso del suelo que aprovechara el conocimiento y los valores campesinos. Todo ello, a la vez, con el objetivo de disminuir la dependencia externa.

Los *campesinistas* sostenían que en amplias zonas del territorio de Nicaragua había acontecido una *vía* de desarrollo hacia el capitalismo más parecido a la *vía kulak* (o al «modelo capitalista campesino»), debido a ciertas especificidades de la economía nicaragüense —como la poca densidad de población, la enorme frontera agrícola disponible, o el hecho de que la integración vertical de las unidades de producción nunca tuvieron la presencia ni el desarrollo existente en sus países vecinos (específicamente El Salvador y Guatemala), dejando a los productores nicaragüenses una mayor autonomía que la de sus homólogos del norte (Bastiansen, 1991: 139). Dicho «modelo capitalista campesino» no negaba el avance del capitalismo en el agro nicaragüense, pero sostenía la existencia —a la par de los grandes capitalistas agrícolas— de un amplio sector de medios y pequeños capitalistas agrícolas, vinculados a la producción del café, ganado y granos básicos, y ubicados en las zonas rurales del interior.

A pesar de la discrepancias existentes en el seno de las instituciones involucradas en la política agraria, la percepción de los *industrialistas* se impuso sobre el resto. Y ésta se plasmó en el procesamiento y manipulación de los datos obtenidos en la *Encuesta a los Trabajadores del Campo* (ETC) (un estudio masivo de los brigadistas de la Cruzada Nacional de Alfabetización), sobre la que un equipo del CIERA elaboró en 1981 una interpretación de la estructura social del campo nicaragüense a partir de la cual se diseñarían las políticas agrarias del MIDINRA. Posteriormente, en 1987-1988, los datos de la ETC fueron reinterpretados (desde una perspectiva más próxima a los *campesinistas*) por Zalkin (1988) con unos resultados notablemente diferentes, y que también posteriormente se juzgaron más ajustados a la configuración real de la sociedad rural nicaragüense anterior a la insurrección.

De los resultados de la última investigación citada (Zalkin, 1988) se deducía o que el campo nicaragüense en 1980 estaba lleno de *campesinos pobres*, o lleno de *campesinos medios*, y a nuestro juicio, esta lectura indica que en ese entorno tanto las relaciones mercantiles como la llamada *pequeña producción mercantil simple* (PPMS) tenían mucha importancia y estaban

presentes en todas las zonas rurales —aunque de forma diferenciada en el Pacífico y en el interior. Del mismo estudio también se desprendía la desigual implantación del capitalismo en los diversos departamentos del país; y ello debido a muchos factores —como la concentración de tierra, el grado de expansión del latifundio capitalista, las características ecológicas—, pero, en cualquier caso, sí es preciso señalar que el modelo «capitalista agroexportador» se acercaba más a la situación presente en la macroregión Pacífico y el modelo «capitalista campesino» a la de los departamentos del interior y de la frontera agrícola. Con todo, las políticas implementadas desde 1979 concibieron la realidad agraria nicaragüense como relativamente homogénea, percibiéndola como si el modelo «capitalista agroexportador» fuera el dominante en todas las regiones.

De esta forma, a partir de 1980 el debate sobre la estructura del agro en Nicaragua se cerró hasta finales de la década de los ochenta, cuando desde diversas instancias se empezaría a visualizar la poca eficacia y los crasos errores de las costosas políticas de desarrollo agrario ejecutadas por el MIDINRA. Así, diversos técnicos, asesores y gestores volverían a enzarzarse en un nuevo debate de donde saldrían, entre otros productos, las propuestas de desarrollo campesino impulsadas por la UNAG y otras ONG, así como un notable volumen de trabajos, ensayos y artículos⁽²⁾ (Bastiansen, 1991; Blokland, 1992; Serra, 1990) —entre los cuales destaca la reelaboración de los datos que ofrecía la ETC.

En este debate —que se asemejaba a la polémica acontecida entre Preobrazhenski y Bujarin en la URSS de los años 20 (Marchetti, 1989)— no solo se debatía sobre dos modelos de políticas a implementar, sino también sobre el rol político, económico y social de una parte del campesinado nicaragüense en el proceso revolucionario.

El desenlace de esta polémica, como es sabido, se saldó —en un primer momento— con la preeminencia del sector *industrialista* y su correspondiente hegemonía en la administración sandinista; y en un *segundo acto* —alrededor de 1985-1986— (cuando los *campesinistas* tomaron la ofensiva) la situación económica y política estaba tan degradada que poco se pudo hacer —y menos cuando, en breve, se impusieron los rigores de las políticas de

2) Existe bastante material elaborado en la línea indicada, sin embargo, cabe destacar los trabajos —algunos de ellos tesis doctorales— de: BASTIANSEN, 1991; BAUMEISTER, 1987, 1988a, 1988b, 1988c, 1989; BLOKLAND, 1992; KAIMOWITZ, 1986; MARTCHETTI, 1986; SERRA, 1990.

ajuste ejecutadas durante el último bienio sandinista. De esta forma, durante buena parte del proceso revolucionario se implementaron las políticas analizadas en epígrafe anterior; políticas que (tal como analizaremos en el epígrafe siguiente) destruyeron el andamiaje socioeconómico del *país campesino* y terminaron por excluirlo económica e institucionalmente del *proyecto revolucionario*; haciendo honor a la cita —y a la *demanda*— de Palerm (1980: 159) al exponer que:

Si bien el marxismo carece de una teoría del campesinado, posee en cambio una teoría de su desaparición, además de una *praxis* bien experimentada —aunque infructuosa— de su eliminación [...] Resulta evidente que en lugar de las hipótesis y prácticas de su desaparición, se necesita una teoría sobre su continuidad y una *praxis* derivada de su permanencia histórica.



CAPÍTULO 12

EL PAÍS CAMPESINO



Tal como expusieron dos expertos en cuestiones agrarias vinculados a la administración sandinista, Ortega y Marchetti (1986), fue necesario que triunfara la Revolución Popular Sandinista para que por primera vez los hombres y mujeres de la *comarca campesina* se pudieran reunir para hablar sobre una organización que no fuera la del *politiquero* somocista, del terrateniente, o del sacerdote que venía a rescatarlos de sus borracheras. Por primera vez surgió la posibilidad de colaborar en un proyecto propio que no fuera ni de los propietarios ni del cura. Y con el primer impulso de la Revolución también llegaron los muchachos de las ciudades con la cartilla de la alfabetización, la escuela para los *chavalos*, las jornadas de salud, el sindicato, la cooperativa, el crédito, la tierra...

Sin embargo, esta gran oportunidad fue, muchas veces, desaprovechada e incluso, a menudo, mal interpretada. Y ello porque, en gran medida, la administración sandinista desatendió dos factores básicos de la vida campesina: la comarca como base de la sociedad civil campesina y la red de intermediación que articulaba el mundo rural.

La comarca es la cuna de la sociedad civil campesina donde se funde la tierra, la producción, la familia, la persona y la comunidad (o sociedad civil). En este sentido, la tradición ideológica heredera de Marx subestimó el potencial revolucionario del campesinado en su aspecto individual y colectivo —la comarca. En el *18 Brumario de Luis Bonaparte* Marx utilizó, para describir el hábitat campesino, la imagen de un saco de patatas que no tiene relación vital con los tubérculos que encierra (Marx, [1869] 1985):

Los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos individuos viven en idéntica situación, pero sin que entre ellos existan muchas relaciones. Su modo de producción los aísla unos a otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos [...] Su campo de producción, la parcela, no admite en su cultivo división alguna del trabajo ni aplicación de ninguna ciencia; no admite, por tanto, multiplicidad de desarrollo, ni diversidad de talentos, ni riqueza de relaciones sociales. Cada familia campesina se basta a sí misma, produce directamente la mayor parte de lo que consume [...] La parcela, el campesino y su familia; y al lado, otra parcela, otra familia, otro campesino y otra familia. Unas cuantas unidades de estas forman una aldea, y unas cuantas aldeas, un departamento. Así se forma la gran masa de la nación [*campesina*], por la simple suma de unidades, al modo como, por ejemplo, las patatas de un saco forman un saco de patatas [...] y la identidad de intereses no engendra entre ellos ninguna organización política, no forman una clase.

Sin embargo, existe una larga tradición de estudios rurales que, contradiciendo la cita anterior, reafirman la intensa vida económica, social y política del campesinado, así como la centralidad que ocupa su marco espacial, la comarca⁽¹⁾. Contrariamente a la visión de que el campesino se mantiene aislado y marginado, en el *espacio comarcal* se articula una tupida red de relaciones familiares extendidas, de espacios gremiales, de vínculos de colaboración económica y de solidaridad política. Precisamente por ello, el aislamiento —fruto del retraso y abandono— no es para el campesino un obstáculo para la vida comunitaria, sino una restricción que le obliga a construir una sociedad civil aún más cohesionada y solidaria a través de redes de intermediación⁽²⁾.

1) Existe una extensa literatura de calidad sobre el fenómeno campesino y su rol en las actividades económicas, sociales y políticas. Evidentemente existen diversos enfoques de acuerdo con la «definición previa» del concepto *campesino*; concepto que en ningún caso se reduce al de «una patata dentro de un saco». Como trabajos de referencia cabe nombrar la compilación de uno de los más influyentes sociólogos rurales, Teodor SHANIN (1987), donde participan Wolf, Pearse, Redfield, Feder, George, Nash, Scott, Huzier, Hobsbawm, Tilly, Moore, de Janvry, Fanon, Popkin, Preobrazhensky, entre otros; y que analiza las sociedades campesinas, su relación con la economía, la cultura, así como su «condición de clase» y sus relaciones —y reacciones— para con diversos tipos de políticas públicas. En referencia al debate sobre diversas formas de concebir el campesino y su relación con el mercado cabe dirigirse a: AYMAND, 1983; CALVA, 1982.

2) Con todo, es necesario explicitar que el concepto de campesino conlleva el elemento de la «dualidad». Este elemento, tal como expuso Teodor Shanin, tiene su eje fundamental en la posición *dual* del campesino en la sociedad ya que, por un lado, pertenece a una clase social subordinada y, por

En Nicaragua el *país campesino* se creó con la expansión hacia al este de las regiones de Nueva Segovia, Matagalpa y Chontales —y también en los enclaves de Nueva Guinea— a partir de dos dinámicas: la penetración de las haciendas tradicionales en zonas antes habitadas por campesinos pobres que pasaban a ser colonos; y la llegada de olas de campesinos migrantes que conquistaban tierras marginales y montaña virgen para convertirse en pequeños —y posteriormente medianos— productores de granos, café, cacao o ganado.

De ambas dinámicas surgió un tipo de explotación extensiva que avanzó progresivamente sobre la frontera agrícola creando un nuevo sujeto social: el *finquero* de origen campesino (o *chapiollo*). Así, a partir de los años cincuenta, una corriente compuesta por campesinos pobres expulsados —debido al avance del latifundismo— de las ciudades de Boaco, Juigalpa, Darío, Terrabona, se adentraron en la montaña rompiendo la frontera agrícola a partir de su propio esfuerzo y «a costa del hambre de su familia, de levantar su choza, de vender su fuerza de trabajo en alguna finca, de iniciar una huerta y de criar cerdos, terminaron ahorrando hasta llegar a convertirse en *finqueros* en un período de 15 a 20 años». Otra forma de ascensión social se desarrolló a través del acarreo de productos de la ciudad a la comarca como *mulero*, comprando con los ahorros el derecho a la posesión de tierras y ganado, hasta convertirse en ganadero —figura caracterizada por articular el mercado local con el regional.

Estos campesinos que se transformaron en *finqueros* o ganaderos, sin embargo, tenían su residencia en el campo y vivían entre la población campesina, se levantaban de madrugada para trabajar de sol a sol a la par de los mozos y comían bajo el mismo techo. De esta manera, su importancia no se limitaba a su papel de mediador en la esfera de lo económico, sino que también (debido a su historia personal) era el «modelo a seguir» (el líder) de la comarca. También es importante señalar que, generalmente, estas figuras no se ligaron al régimen somocista —como sí lo hicieron los grandes terratenientes— y que sus vínculos con el régimen se limitaron al ejercicio de funciones administrativas que formalizaban su liderazgo local. Por todo lo expuesto, este *finquero* —que en el «lenguaje oficial» de los informes sociológicos se denominó «burguesía rural»— era quien jugaba un papel fundamental en el funcionamiento de la estructura agraria local.

otro, pertenece a «un mundo cerrado con códigos y relaciones sociales autónomas». Es precisamente por ello que el fenómeno social campesino tiende a concebirse a partir de dicotomías como la de «hermandad *versus* competición económica», en Maine; «sociedades de matriz familiar *versus* sociedades de matriz individual», en Coulange; «*Gemeinschaft versus Gesellchaft*», en Tönnies; o «sociedades mecánicas (segmentarias) *versus* sociedades orgánicas», en Durkheim (BASTIANSEN, 1991: 49).

En cuanto al estrato subordinado mayoritario presente en el *país campesino* era, a diferencia de otras regiones del país, el *colono*, es decir, el campesino sin tierra propia, sin casa propia, que vivía *posando* de finca en finca para poder sembrar su huerta para el autoconsumo. En términos generales la estructura del colonato era inestable y su supervivencia dependía casi totalmente del *finquero*, con quien el colono se vinculaba con una fuerte dosis de paternalismo —esperando el *favor* del patrón con la esperanza de que algún día le quisiera vender a plazos un *pedacito* de tierra para tener su parcela y convertirse en propietario. Generalmente el colono tenía asegurada la *ayuda* del patrono debido a la escasez de fuerza de trabajo —reforzándose así los mecanismos de compadrazgo y los vínculos clientelares. En este sentido, el «proletariado agrícola» y las «masas de campesinos semiproletarizadas» a las que apelaría la Revolución, simplemente no existían o, en su caso, eran una ínfima minoría.

A partir de lo expuesto, el *país campesino* terminaría por constituir una sociedad basada en relaciones de *compadrazgo* donde el *poder* residía en quien poseía más tierra y ganado, y un mayor acceso al mercado. El origen de este *poder* se basaba en la percepción de que el esfuerzo era el elemento central del progreso personal y donde los golpes de suerte y las desgracias se explicaban a partir de la apelación «al destino» y «la justicia divina». De esta forma se establecería una sociedad donde la estructura *hacendal* configuraría un amplio y complejo sistema de *mediaciones* a partir de las cuales dependía el éxito o el fracaso de la gestión económica campesina, y donde el *favor* del patrón resolvía *los clavos* de los colonos (como la cesión de tierras, el reparto de beneficios, o la posibilidad de acceder al mercado) mediatizando así las relaciones del campesino con el mundo urbano. En definitiva, se trataba de una sociedad organizada social y políticamente sobre un eje, a saber, la *mediación*.

El intermediario era quien aglutinaba el poder sobre la base del control que tenía sobre uno o varios recursos y sus vinculaciones con el exterior. En este sentido, existían tres instituciones que controlan casi la totalidad de recursos: el patrón, el mercado y la Iglesia. Cada una de estas instituciones ejercía su poder a través de un sistema de mediaciones, pero el control tenía un carácter fundamentalmente personal: era el comerciante, el *finquero*, el *santo* o el cura (y posteriormente el delegado de la palabra) a quienes se dirigía el colono. Se trataba de relaciones de subordinación que no se percibían antagónicas, sino basadas sobre un sistema de lealtades personales y de respeto al más fuerte; lealtades que se plasmaban en un código tácito —pero preciso— donde destacaban las *relaciones horizontales* de compadrazgo y ayuda mutua, y las *verticales* de respeto a los más fuertes y paternalismo para con los débiles; y el elemento base —el valor de cambio de estas relaciones— solía ser *el favor*. Precisamente por ello, el imaginario que configuraba

la conciencia de los sujetos sociales del *país campesino* era la *identidad de oficio*, en oposición a la *identidad de clase* —tal como señala E. P. Thompson (1979) al caracterizar la «lucha de clases» en sociedades precapitalistas.

Cabe señalar, a la vez, que también se trataba de una sociedad cerrada y aislada, mal dotada de servicios básicos y desatendida por los servicios institucionales³⁾. Una sociedad violenta, en que las deslealtades personales, las rencillas, los *pleitos* se ahogaban en alcohol y se pagaban, muchas veces, con la muerte.

Es en este contexto en el que se desarrolló un proceso de «resistencia campesina» hacia cualquier intento de *descampesinización* (proceso que se manifestó por primera vez con la lucha de las comunidades indígenas por la tierra; y posteriormente con la persistencia del campesino sin tierra en ganar espacio a la frontera agrícola para hacer su huerta, o con la lucha del parcelero por defender su *tuquito* de tierra frente el avance de la hacienda). Así, el campesino pobre de la zona (el mal llamado *semi-proletario*) reivindicaba fundamentalmente su derecho a ser campesino a pesar de su asalarización parcial o estacional —situación que había sido consecuencia de malas cosechas y que se esperaba, o creía, transitoria. Y esta resistencia también se hacía extensiva al *finquero*, quien se resistía a contratar asalarados, y prefería integrar mozos o parceleros en sus posesiones.

De esta forma, los diferentes ejes de acumulación en torno a los cuales se desarrolló el *país campesino* terminarían por definir el carácter de la estructura agraria. Estructura que podría resumirse a partir de cuatro rasgos específicos: el aislamiento; el surgimiento y presencia de un estrato dominante (compuesto por ganaderos o *finqueros* de origen campesino que ejercían de intermediarios); la presencia del «colono» como estrato subordinado mayoritario; y la conformación de la comarca como espacio de referencia económico y social en el cual se desarrolla la vida colectiva.

En cuanto al imaginario que articulaba el mundo simbólico del *país campesino*, éste tenía su raíz en la misma matriz histórica de donde surgían y conformaban los diversos actores sociales, a saber, el *individualismo* basado en la percepción de que las propias fuerzas son el elemento central del progreso personal, y el valor de la *neutralidad* para con los elementos ajenos al mundo rural. Y así lo expresaba la comunidad al decir: «lo que tiene uno se lo ha ganado con su trabajo, con su esfuerzo... nadie se lo ha dado»; o: «nosotros no nos metemos ni con unos ni con otros, porque nadie le mantiene en este mundo, sino sólo Dios».

3) En Matiguás/Muy Muy, un municipio del departamento de Matagalpa con 47.104 habitantes y con una superficie de 2.008 Km², por ejemplo, en 1976, no se disponía de teléfono, telégrafo, correo, luz eléctrica, agua potable, hospitales ni servicios institucionales; y solo tenía 18 escuelas y 20 maestros.

En *el país campesino*, generalmente, la única institución *exterior* con presencia continuada y regular fue la Iglesia Católica. Ésta, ya presente desde la época de la colonia, inició nuevamente un incesante trabajo de penetración territorial a partir de la segunda mitad de este siglo con el objetivo de implantar sus estructuras en las diferentes comarcas; pudiéndose distinguir diversas fases de desarrollo organizativo: la construcción de capillas, la introducción de la organización Acción Católica, y la posterior movilización de los campesinos en tareas de desarrollo con la creación de organizaciones de delegados de la palabra⁽⁴⁾. Así, casi siempre, fue el párroco quien —generalmente desde una perspectiva paternalista y asistencialista— empezó a impulsar proyectos de desarrollo comunal, valorando la comarca, construyendo puentes, caminos, escuelas, llevando maestros y salud. Y por ello *pegó* en la comunidad ya que el campesino vio que *el padre* era un hombre que valoraba el trabajo, que vencía dificultades, y que representaba un poco su realidad y su sueño de llegar a ser *finquero*.

Uno de los frutos más significativos de la Iglesia en ese período fue, sin duda, favorecer con su trabajo organizativo el surgimiento de líderes comarcales. Aparecieron así los *delegados de la palabra*, nacidos del seno mismo de la comunidad, y con la aprobación de ésta. Y a partir de entonces, cuando cualquier organización o instancia quería entrar en la comunidad tenía que dirigirse al delegado (persona a quien la misma comunidad se dirigía en caso de dificultad) creándose así otra red de intermediación aceptada a nivel comunal, renovando y ampliando el sistema de mediaciones. Fue precisamente a partir de estas redes que, durante los años sesenta y setenta, la guerrilla del FSLN pudo sobrevivir y permanecer en determinadas áreas rurales.

La respuesta a la cuestión de cómo pudo el FSLN conseguir una base de apoyo rural en una sociedad como la descrita, reside en el hecho de que el objetivo del FSLN (con su estrategia *foquista*) era el de crear una red de apoyo y colaboración y no la articulación de un movimiento social. Precisamente por ello la guerrilla supo percibir y respetar las leyes de funcionamiento de esta sociedad. Y aunque los guerrilleros llegaran de afuera (eran *los muchachos* de la ciudad) su relación siempre fue respetuosa: se relacionaban con los campesinos, hablaban, pedían ayuda, vivían en sus casas, respetaban su forma de vida, hablaban de sus problemas... y establecían relaciones con un fuerte contenido afectivo.

4) Sobre este proceso —el cual varía según cada municipio— existe poca información sistematizada y detallada; sin embargo, el trabajo realizado por encargo del CIERA (1985) sobre el movimiento campesino en Matiguás expone de forma clara y precisa dicho proceso. Otra forma de obtener información es, simplemente, desarrollar trabajo de campo en las áreas rurales a través de la tupida red de contactos que tienen como matriz las parroquias.

En términos generales puede señalarse que la guerrilla supo captar el móvil específico en cada tipo de colaborador. Y a pesar de que los guerrilleros nunca prometieron ganancias materiales a los *colaboradores*, tácitamente éstos soñaron que si algún día triunfaba la Revolución tendrían una mayor cuota de poder —tal como posteriormente manifestaron muchos de ellos (CIERA, 1985: 105):

Yo me incorporé sin esperar nada... pero un día me dijo el comandante Víctor Tirado... «cuando triunfe la Revolución serás alcalde».

Yo era muy pobre, esperaba que con el triunfo de la Revolución hubiera un cambio y mejorara mi situación.

Carlos Fonseca nos dijo que cuando triunfe la Revolución no habrá campesinos sin tierra, ni tierra sin hombres...

Con el triunfo de la revolución sandinista buena parte de los colaboradores históricos de las comarcas rurales donde anteriormente se había cobijado el FSLN fueron ignorados, abandonados o, simplemente, desatendidos, violando así el código campesino de la «ayuda mutua» y de la «mano vuelta». Los dirigentes que ellos conocieron, y que a partir de 1979 salían por la radio y eran famosos, nunca volvieron. Estos mismos colaboradores expusieron luego (CIERA, 1985: 107):

Cuando el triunfo... supimos que nuestros hermanos, hijos, eran dirigentes, pero no regresaron más. Llegaron otros a mandar en la zona, más jóvenes que aquellos, pero hablaban otro idioma y no eran como aquellos... y no nos tomaron en cuenta...

Ello produjo, inicialmente, decepción y en algunos casos resentimiento. Posteriormente, muchos de ellos vieron cómo su situación económica sufría un deterioro progresivo, frustrando su sueño de una vida mejor.

Con los inicios de la Revolución hubo un período de euforia. Los dirigentes comarcales de la Iglesia se integraron en las instancias locales de la Revolución —generalmente los Comités de Defensa Sandinista (CDS)—; los campesinos bajaron de la montaña a la Junta Municipal, facilitaron sus mulas a las nuevas autoridades y prestaron sus casas a los alfabetizadores; los jóvenes colaboraron como brigadistas de salud; los mozos y los colonos se quedaron trabajando en las haciendas confiscadas y, en las comarcas con presencia de comunidades indígenas, éstas reclamaron sus tierras históricas.

Al poco tiempo, sin embargo, empezó a percibirse un *desencuentro*. Los CDS y las Juntas Municipales que permitían establecer un vínculo directo entre el nuevo poder y la comarca campesina fueron concebidos por los sandinistas con el mismo carácter que tenían en la ciudad: instancias de movilización y socialización política. Los campesinos al ver la falta de respuestas concretas a sus problemas los fueron abandonando y poco después de las primeras reuniones solo se redujeron a su presidente; presidentes que, a la vez —tal como se observa en el testimonio que se expone seguidamente—, cuestionaron rápidamente su papel.

Al inicio de la Revolución nosotros nos dedicamos con más alegría y esfuerzos a trabajar. Nos encontrábamos diferentes campesinos, nos reuníamos en diferentes casas, nos sentíamos contentos. Para esos tiempos yo no sabía lo que significaba un CDS. Se hizo una reunión donde Mario Amador [...] Allí me encontré a tres militares que comenzaron a decirnos que había que formar una directiva, que había que hacer una organización [...] A mí me dijeron: «Usted va a hacer un CDS», y yo no sabía qué cosa era, entonces le dije que me explicaran primero. Solamente me dijeron: «Mire, si usted acepta va a ayudar a su gente». Yo acepté [...] Me dijeron que me fuera a Matagalpa para que me explicaran exactamente qué era un CDS [...] una persona del Frente Sandinista me dijo cómo era todo eso. Inmediatamente renuncié y me regresé a casa. No me gustó porque me explicaron que era ser «oídos y ojos de la Revolución», que era algo para mantener vigilada a la gente de la zona, o sea que no era para ninguna ayuda [...] Yo miré que era un error y que no me convenía estar allí⁵⁾.

En el *país campesino* la institucionalidad revolucionaria se materializó a partir de dos instituciones: el Banco Nacional de Desarrollo (BND) y la distribuidora pública de insumos PROCAMPO. Pero ninguna de éstas tomó como base la comarca o el núcleo familiar, sino la cooperativa que se vinculaba, a la vez, con los nuevos aparatos del Estado que tenían su sede en el pueblo.

Por otro lado, los dirigentes de la ATC (que llegaron al pueblo procedentes del Pacífico) quedaron desconcertados al ver que ni los mozos ni los colonos querían ser proletarios, sino campesinos; y que lo que exigían era tierra

5) Entrevista a Pedro Turín Blandón, quien posteriormente se integraría a la Contra, registrada en BENDAÑA, 1991: 129-162.

para sembrar su huerta, y si les daban tierra preferían las del Estado a las del patrón. Finalmente, cuando los representantes de los sindicatos agrícolas terminaron por potenciar solo las cooperativas y las ERA, quienes pasaron a ser los socios y trabajadores no estuvieron a gusto porque —tal como se observa en los testimonios que se presentan a continuación (CIERA, 1985: 123)— no recibieron la parcela que «les prometió» el FSLN.

Yo me quedé como colono en el Jobo, donde tenía mi *tuquito* de tierra para subsistir [...] pues cuando estaba en la Empresa del Estado el administrador decía que éramos empleados y que si usábamos tierras para nosotros destruíamos los pastos con nuestras quemas... pero si siempre habíamos tenido trabajo...

Todos los colectivos de trabajo se desbarataron al año de funcionar porque cortaron el financiamiento, y quedamos endeudados. Tuvimos que vender parte de la cosecha para pagar el crédito. Fue culpa de la mala organización... no había coordinación ni atención por parte del Estado y ni yo mismo entendía mucho qué era eso de las cooperativas.

De esta manera, en los primeros meses de la Revolución, no se impulsó el desarrollo de un movimiento campesino, sino que más bien se intentó agrupar al campesinado a partir de un movimiento organizativo concebido y dirigido desde la ciudad y del Estado. En ese marco, algunos cuadros sandinistas —generalmente jóvenes de origen urbano— se limitaron a permanecer en el centro del pueblo y a repetir un discurso reiterativo desligado de los problemas específicos que vivía la comunidad campesina; y precisamente por ello algunos campesinos aún exponen que «muchos cuadros aprendieron a hacer informes, pero no a discutir problemas en el lugar de los hechos».

Efectivamente, la decisión del FSLN de priorizar la lealtad al partido (con el establecimiento de cuadros sin historial en su zona de mando) en vez de aprovechar la red de líderes naturales propios de cada zona fue un craso error. Los cuadros del Frente necesitaban hablar el lenguaje de las comarcas —conversar de los *frijoles de apante*, del ganado vacuno y de los *chanchos*, del *maíz de wintaka*, del invierno y del verano—, pero algunos cuadros se cerraron a la realidad campesina y exigieron *corrección política* a los campesinos mientras ellos mantenían actitudes dudosas; y así lo expresaron diversos militantes sandinistas al analizar los resultados electorales después de la derrota electoral de 1990 (Mendoza, 1990: 35).

El secretario político no se preocupó en absoluto por las Organizaciones de Masas, sólo de exigir trabajo. ¡Cómo iba a preocuparse si andaba con *cachimbo* de mujeres! Más bien andaba ganándose enemigos con las familias de las muchachas. Nunca se preocuparon por los «colaboradores históricos». Ahora éstos están en la Contra o muertos o resentidos.

Con todo, las medidas que más negativamente impactaron en el *país campesino* fueron las confiscaciones y la política de comercio; ambas provocaron un trauma en cada uno de los sujetos sociales en que se articulaba la sociedad rural, creando la primera ruptura entre el proyecto revolucionario y el campesinado (CIERA, 1985: 117).

En primer lugar cabe destacar que en buena parte del *país campesino* se llevaron a cabo las confiscaciones del decreto 3 a partir de criterios políticos —«golpear a los somocistas»—, pero en muchos sitios este hecho supuso una arma de doble filo, ya que la categoría somocista era tan amplia que abarcaba a todos aquellos que habían desempeñado cargos administrativos y políticos locales (Jueces de Mesta, presidentes cantonales electorales...) en tanto que formaban parte del sistema de mediaciones en que se articulaba dicha sociedad, y que no siempre suponía un compromiso con el somocismo ni con su historia de represión. Así, se expropiaron *finqueros* a quienes «todo el mundo les debía un *favor*».

Se confiscaron haciendas de terratenientes, pero también de *finqueros*, ignorando el papel de mediador que éstos cumplían en las comarcas. El MIDINRA implementó el proceso de confiscaciones sin un balance de las características socioeconómicas de la zona, buscándose «burgueses, proletarios y semi-proletarios» como si se tratara de las zonas de la macroregión del Pacífico. Así, al aplicarse de un modo arbitrario la política de confiscaciones ésta se convirtió en un acto que violó los cimientos de la sociedad; ya que el *finquero* — ante los ojos de la sociedad campesina — no era ni un terrateniente ni un «burgués».

El efecto de estas medidas no se hicieron esperar, bastó con tres o cuatro confiscaciones arbitrarias para que los *finqueros* se sintieran amenazados, cundiera el pánico y el *fantasma* de la expropiación se expandiera en todo el territorio con el grito de alarma de «la Revolución es comunista, le quita la tierra a todo el mundo, todo terminará siendo del Estado». De esta forma, la aplicación rígida de dichas medidas terminó por desarticular al conjunto de la sociedad, generándose un resentimiento que fácilmente sería capitalizado por la coalición contrarrevolucionaria.

La otra medida que impactó muy negativamente fue la política de comercialización. En el marco de la construcción del poder revolucionario estaba la tarea de eliminar al intermediario —quien, según los ideólogos del MIDINRA, simbolizaba la explotación del campesino. Sin embargo se ignoró que el mercado era el eje que ponía en movimiento toda la vida del municipio y que sobre la base de éste se materializaba todo un sistema de mediaciones. En otras palabras, que el comerciante de la zona no era un oscuro personaje, ni era el hombre fuerte de la comarca, ni era solamente un abastecedor; sino que se trataba de quien compraba la producción de la montaña y quien ponía en contacto la familia campesina con la comarca, y la comarca con el municipio, y el municipio con el mundo exterior. Así, con el monopolio de las operaciones de compra y venta por parte de ENABAS, las redes de comercio tradicional que cruzaban toda la montaña se quebraron, golpeando fuertemente la base de la economía campesina.

De esta manera, el Estado apareció ante los ojos de la comunidad como quien descomponía los puntos estratégicos del comercio en la montaña, prohibiendo la venta libre del café, del cacao y de los granos básicos; arrinconando y persiguiendo a comerciantes tradicionales. Pero en muchos lugares el Estado no solo desbarató las redes tradicionales sino que no logró sustituir las redes de suministro ni de comercialización, y mucho menos asumir la tarea de mediador —de la que desconocía totalmente su existencia. Como consecuencia de ello, comenzó un *estado de incertidumbre, angustia e impotencia* entre el campesinado al no saber qué sucedería con la venta de su cosecha, de la que dependía el sustento de su familia —tal como relató un campesino en una conversación:

Un día llegaron los de MICOIN y me exigieron que les vendiera a ellos, que ya no podía vender al pueblo. *Hombré*, eso es una barbaridad. *Mirá*, yo compré la semilla, yo lo trabajé, nadie me regaló nada. Amigo, esto a mí me cuesta puro sudor. ¿Entonces? Yo tengo derecho de vender a quien yo quiera, hasta de *botarlo* al río. Yo he visto cómo éstos en un *ratito* ganan más que uno, mientras que un pobre campesino se *zafa* meses trabajando. ¿*Idiay?* ¡Ahora viene MICOIN y quiere obligarme a que le dé a esos jodidos! ⁽⁶⁾.

6) Extraído de una tertulia realizada con diversos campesinos en la zona de Copalar. Registrado en un trabajo inédito encargado por el EPS y realizado por el CIERA.

Y este proceso degeneró al fracasar la política de abastecimiento en el campo y al agudizarse el ciclo inflacionario, deteriorando el nivel de vida de los campesinos —tal como demuestran los testimonios presentados a continuación (CIERA, 1985: 145-147):

Da pesar, aquí hay gente pobrecita, *pobrecita de viaje*, toda esa gente está padeciendo hambre, uno porque no se halla: hace meses que estamos sin maíz, sin arroz; pero por otro, la gente ya no retira lo mismo: sólo compran el azucarito para sus *chigüines*... el aceite ya no lo comen. Es que no se puede. No ajusta. Y andan los niños desnudos... un zapato cuesta 2.000 córdobas... ¡De dónde saca un campesino para comprarle los zapatos a sus hijos si con costo puede comprarse un machete! No sé a dónde vamos a ir, por lo menos antes se hallaban las cosas, ahora yo tengo que hacer mil viajes a Matiguás para traer la cuota del puesto. Y siempre que no hay, que venga otro día... ¡Nosotros los pobres de aquí estamos sufriendo con esta Revolución!⁽⁷⁾.

Todo ello agravó la vida económica y social del campesino hasta llegar a extremos kafkianos. Así, la desarticulación de las redes de mediación terminaron por conducir a los campesinos a situaciones absurdas, tal como expuso metafóricamente Marchetti (en CIERA, 1985: 205) en un informe:

Un campesino quiere comprar un par de pantalones. Tiene que ir al BND a buscar plata el día que su CCS tiene asignada. En el banco aprende que no se da plata para comprar pantalones, sino para sembrar maíz. El campesino acepta el trato. Dice que sembrará maíz aunque quiere los pantalones. Pero al llegar a Matiguás ve que son demasiado caros y no le ajusta [...] Va a la parroquia a ver si el padre Antonio ha traído ropa de Italia. Le dicen que no hay. Va a buscar en PROAGRO los insumos necesarios para sembrar maíz. No tiene lima, va a su finca y afila su machete con un antiguo machete. Dos horas más tarde rompe su machete porque no le quedó bien limado [...] Al fin cosecha su maíz y encuentra que en vez

7) Extraído de un testimonio de la encargada del puesto de abastecimiento de Las Limas, en una comarca del municipio de Matiguás. Registrado en un trabajo inédito encargado por el EPS y realizado por el CIERA.

de tener dos o tres comerciantes peleando para comprárselo él tiene que arrendar una bestia para ir a ENABAS [...] Allí recibe un precio muy bajo y el funcionario le explica que se controlan los precios de los granos para que no haya inflación en las ciudades para evitar que los precios de los pantalones suban. El campesino pregunta si hay pantalones en Matiguás. En ENABAS le dicen que tendrá que preguntar donde Bartolo, en el establecimiento de MICOIN [...] Al preguntar a don Bartolo descubre que los pantalones de Fabritex que cuestan 1.600 no llegan hasta dentro de dos meses. El campesino coloca los reales en su bolsillo, decide no cancelar su préstamo con el BND y se vuelve a La Patriota a beber *guaro*...⁽⁸⁾

Así, con la ejecución de estas políticas —y su impacto— se empezó a crear la imagen de un Estado que, además de poseer las tierras confiscadas y de ser el «nuevo comerciante», atentaba directamente contra la lógica de la vida campesina —a la vez que no se atrevía a penetrar en el interior de las comarcas rurales. Consiguientemente, ante tal vacío, en algunas comarcas la *Contra* empezó a llenar ese espacio. Espacio en el que solo la Iglesia (a veces enfrentada simbólicamente a la Revolución) cumplía el papel de *mediador* legitimado que antes ejercía junto a los *finqueros* y el mercado. Y precisamente por todo ello, tal como veremos en el próximo capítulo, el *país campesino* terminaría por constituir el *talón de Aquiles* del proyecto revolucionario.

8) Extraído de un testimonio en una comarca del municipio de Matiguás. Registrado en un trabajo inédito encargado por el EPS y realizado por el CIERA.

CAPÍTULO 13

**LOS CAMPESINOS
DE LA FRONTERA AGRÍCOLA:
LA GESTACIÓN DE LA
CONTRA CAMPESINA**

Los campesinos ubicados en las zonas de frontera agrícola nunca llamaron a los contrarrevolucionarios *contras*, sino simplemente *la otra gente*. En toda la frontera agrícola, desde Wiwilí hasta Nueva Guinea se podía escuchar este apelativo.

La llegada de la revolución, y la posterior presencia de la contrarrevolución modificó abruptamente el escenario donde vivía este colectivo campesino. De golpe aparecieron dos fuerzas que pretendían ganar su apoyo y que se lo disputaban —hecho que les trajo, más que ninguna otra cosa, dolor, confusión e incertidumbre. Como testificaron muchos habitantes de esa zona, «el campesino estuvo como un venado entre dos tigres; estuvo entre dos ejércitos».

La revolución, al implementar su línea de defensa, golpeó la unidad económica campesina y violó su naturaleza como sujeto social. En un inicio, después de los primeros ataques de las «bandas contrarrevolucionarias» la administración sandinista intentó incorporar a amplios colectivos (y, entre ellos, al campesinado) en la tarea de la *defensa*; pero, tal como intentaremos mostrar, la forma con que se intentó movilizar al *mundo campesino* terminaría por alejarlo aún más del proyecto revolucionario.

Uno de los grandes desaciertos de la «política de defensa» fue su desprecio hacia los valores del campesinado, de su forma de vida y de producción. De esta forma, la revolución llegó al extremo de enajenar sus «milicianos campesinos» —quienes, incluso, en un primer momento se habían integrado voluntariamente— y de levantarlos contra ella. Los elementos de este fenó-

meno fueron —además de las políticas analizadas en el capítulo anterior— la forma de reclutamiento por parte de las autoridades sandinistas, el trabajo realizado por la contrarrevolución en la zona, y el tratamiento recibido por parte de las fuerzas del Ejército Popular Sandinista (EPS) y de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) del Ministerio del Interior (MINT) —la llamada *seguridad*.

El reclutamiento de campesinos para *defender* la revolución (en una zona caracterizada por la inexistente implantación del sandinismo) se realizó sin la presencia de un trabajo político previo. Así, simplemente se contactó con los representantes sandinistas presentes en las comarcas y se les dio la orden de reclutar milicianos para completar batallones que serían movilizados de inmediato. Así sucedió, por ejemplo, con el batallón 50/83 (BON 50/83) —reclutado entre campesinos de Matiguás, Muy-Muy y Pancasán— destinado a Puerto Cabezas (la Costa Atlántica), célebre por sus errores para con los campesinos reclutados y por los efectos contraproducentes que tuvo para la revolución sandinista (CIERA, 1985: 132-137).

En la confección del BON 50/83, según testimonios que posteriormente efectuarían campesinos de esa compañía, sucedió lo siguiente (CIERA, 1985: 131-134):

Los dirigentes nos dijeron: «Van a movilizarse sólo por 15 días» [...] nos metieron en un camión y nos mandaron, sin uniformes y sin que muchos supiéramos manejar el fusil [...] nos dijeron que la cosa *estaba chiva* en la Costa [Atlántica] y que había que ir a defender la revolución del imperia- lismo [...] bueno, esas cosas.

Nos dijeron que nada les faltaría a nuestras familias, y que podríamos ve- nir a ver nuestras huertas [...] pero nada de eso pasó así [...] todo fue una gran decepción [...] un gran engaño [...] una gran pérdida para nosotros, los campesinos.

Tal como señaló uno de los dirigentes políticos del BON 50/83, al no decir el destino ni el tiempo real de movilización a los milicianos, éstos se sintieron traicionados por los mandos quienes, ante las quejas de los campesinos reaccionaron con medidas coactivas (CIERA, 1985: 134):

Ya era marzo... la gente me decía: «*compa* déjeme ir a la finca por unos días... mi mujer no puede levantar sola la cosecha y yo tengo deudas con

el banco»... yo ya observaba un gran desánimo entre mi gente... una incertidumbre.

Logré sofocar la situación... hablé con el comandante y éste se reunió con los mandos... andaban muchos presidentes de cooperativas y se decidió que se elaborara una carta exponiendo su situación como productores movilizados a la Región Militar... esta carta nunca recibió respuesta...

La situación estaba tan tensa que los presidentes de las cooperativas decidieron ir a las diferentes comarcas a visitar las familias de los movilizados a resolver la cuestión de las cosechas... pero no resolvieron nada, más bien trajeron malas noticias de sus familias... que si estaban padeciendo hambre, que si nadie les dio ayuda, que si la finca estaba abandonada, que si la cosecha estaba perdida... entonces la gente decidió que se iba, «¡yo me voy!», dijeron... y desertó uno, otro y otro, y al final la compañía entera... estábamos en Rosita, y de ahí se vino la gente a pie con sus cosas, sin fusiles... y así todos, hambrientos y jodidos, aparecieron en sus comarcas... ¿cómo hicieron?... no sé pero días caminaron para llegar a sus casas...

La gente tenía razón... nosotros los engañamos... la Región Militar tiene su cuota de responsabilidad...

Efectivamente, el desplazamiento de campesinos hacia zonas lejanas violentó el sentido de «pertenencia comarcal» y su sistema de producción. Con todo, la deserción del BON 50/83 fue solo el primer paso de una cadena de decepciones del campesinado de la zona y un elemento a partir del cual la contrarrevolución iría ganando espacio. Así, la mayoría de gente que llegó del batallón dejó el fusil, abandonó la cooperativa y nunca más se vinculó a instituciones ni actividades relacionadas con la revolución —e, incluso, algunos decidieron destinar parte de la cosecha para abastecer a la Contra. Con ello, la Contra tuvo un ámbito donde realizar trabajo político⁽¹⁾, capitalizando ese descontento, y desautorizando a parte de los líderes vinculados al sandinismo. Todo ello a la par que, como relató un campesino que desertó del BON 50/83, empezaba a generarse un clima de creciente

1) En este sentido cabe comprender y contextualizar el famoso *Manual de Operaciones Psicológicas* de la Contra, editado por la CIA y distribuido entre los combatientes de la FDN.

desconfianza entre los campesinos y los cuadros políticos y militares sandinistas (CIERA, 1985: 136):

Cuando regresamos no encontramos apoyo... más bien comenzamos a recibir amenazas y acusaciones por parte de los *compas*... —«vos seguro que *andás* con la Contra ahora que desertaste del batallón... vas a ver lo que le pasa a los desertores»... Y ya uno tenía miedo de toparse con los *compas*... ya uno tenía miedo de bajar al pueblo...

Pero a pesar de hechos como el arriba expuesto no hubo ninguna línea de rectificación hasta muy avanzado el proceso revolucionario (en la segunda mitad de la década). Las movilizaciones continuaron sin previo aviso ni preparación. Posteriormente, se crearon las Cooperativas de Autodefensa (CAD) y, a partir de 1984, se instauró el servicio militar —bajo el nombre de Servicio Militar Patriótico (SMP). Los efectos de estas medidas continuaron siendo nocivas para los campesinos de la zona.

Así, por ejemplo, se repitieron casos como el anterior (CIERA, 1985: 142):

Acababa de llegar del batallón, eran las diez de la noche y estaba durmiendo en casa cuando llegó un *IFA*⁽²⁾ con la orden de una nueva misión... «mire» —me dijo—, «el jefe de la Guardia anda en Sabaleta, me reúne 100 hombres y me espera en el Laberinto»... yo solo *ajusté* 30 hombres... el hombre apareció el día siguiente con 20 hombres más sin preparación, mal armados... casi todos eran jornaleros de las ERA... la gente era tímida y estaba nerviosa... llegamos al Tawa... yo sabía que si nos enfrentábamos a la Guardia íbamos al fracaso... cuando vimos que en el cerro de Sabaleta estaba apostada la Contra... eran más de 600 y nos lanzaron una ofensiva... teníamos gente para hacerle frente, pero era inexperta y no tenía preparación... no logré controlarla... me quedé sólo con seis *compas* y el resto huyeron a la desbandada... cuando llegué a la comarca había cundido de nuevo el rumor de lo sucedido...

2) Camión de fabricación germano-oriental que usaba el Ejército Popular Sandinista durante la década de los ochenta.

A partir del año 1983, después de que diversos comandos de la Contra atacaran directamente a asentamientos y cooperativas y de que las reiteradas movilizaciones por parte del EPS —cada vez más autoritarias y compulsivas— no surtían efecto para organizar unidades de combate, el Estado «orientó» a los campesinos a que se organizaran en Cooperativas de Autodefensa, bajo el fundamento de que éstos tenían que defender las tierras que habían recibido. De esta forma se intentó formar un *cinturón de protección* a lo largo de toda la frontera agrícola. Esta política, sin embargo, terminaría por extender la creencia de que la revolución, como dijo un campesino, «también cobraba lo que daba».

Y si bien el *Zonal de Reforma Agraria* priorizaría las CAD, éstas —debido a las constantes movilizaciones de que eran objeto sus componentes— fracasarían económicamente, configurando una nueva fuente de endeudamiento. Ambas cosas terminarían por minar la consciencia campesina sobre las *ventajas* de la organización cooperativa —que ya de por sí era débil— y alimentó la creencia de que *estar organizado* en una CAS o en una CAD constituía más bien un *peligroso compromiso* que una ventaja (CIERA, 1985: 167).

Con las CAS nos endeudamos, pero con las CAD fuimos *de viaje* al fracaso... prácticamente no se trabajaba en las cooperativas... ni tiempo había para ver la huerta... las cosechas se perdieron, siempre nos estaban movilizándolo.

Si uno les decía que esperaran a levantar la cosecha, decían que era uno que no quería ir, que no quería colaborar con la revolución, y ya uno quedaba marcado... mejor era ir para evitarse problemas... es que esos *compas* podían joder a uno...

Era como estar de permanente del EPS, pero nosotros teníamos un compromiso con el banco, y el banco lo que quiere es que uno le pague... no entiendo de cuestiones de movilizándolo...

Sin embargo, el golpe definitivo en la ruptura entre el campesinado y el *país campesino* fue la instauración del Servicio Militar Patriótico. El SMP destruyó la posibilidad de reproducir la economía campesina, ya que al reclutar a los jóvenes por largos períodos (generalmente de dos años) prácticamente destruyó las bases de la economía de la zona. Con esas medidas se quitó la mano de obra a las unidades productivas y, con ello, su futuro. Pero no solo eso, también se cortó el lazo vital que unía al campesino con *su mundo* (la comarca), y se lo llevó a lugares desco-

nocidos a combatir. Por todo ello, el campesino tuvo miedo y empezó a huir, a *escondarse* en la selva.

Como hemos señalado, las formas de reclutamiento forzado violaron los valores fundamentales de la familia campesina; y las incursiones nocturnas del EPS para reclutar a los jóvenes terminaron por convencer que la revolución sandinista estaba contra él, contra su familia y su economía y, a partir de entonces, los mismos campesinos empezaron a desarrollar mecanismos de defensa:

La gente comenzó a desarrollar su solidaridad en las comarcas... se establecieron puestos de observación permanentes para detectar los operativos del SMP... cuando se veía venir a los *compas* que andaban reclutando ya no se encontraba ningún hombre...⁽³⁾.

La implementación del SMP en el *país campesino* fue un gran error, es más, a 18 meses de su instauración el EPS no tuvo avances militares substanciales en esa zona, más bien al contrario: la relación entre los que se fueron con *la otra gente* y los que reclutaron los *compas* fue, en esa época, de 5 a 1 a favor de los primeros⁽⁴⁾.

De esta forma, el EPS fue la única cara que los habitantes del *país campesino* conocieron de la revolución; ya que, poco a poco, fue desapareciendo el comercio, los préstamos del BND, la educación y la salud... Tal como lo expuso un funcionario del MIDINRA destinado a la región VI, «la Contra nos retiró *al suave*».

Así, *en el país campesino*, poco después de varias incursiones armadas de la Contra, muchas de las cooperativas se desarticularon y, junto con ello, también desaparecieron las instituciones gubernamentales y las organizaciones gremiales y partidarias del FSLN. Y se quedaron solo las entidades de carácter armado, reforzando el *imaginario campesino* de que la revolución solo les había traído unos cuerpos armados que cometían abusos, los maltrataban y reprimían. Y si bien los comportamientos abusivos obedecían, en sus inicios, a actitudes individuales y aisladas, con el tiempo —a medida que la Contra fue ganando apoyo campesino— se generalizaron. Fue entonces cuando los sandinistas se ganaron, en el *país campe-*

3) Fragmento de una entrevista realizada a un ex-colaborador de la Contra en Matiguás.

4) Según informes realizados por expertos del CIERA a petición del EPS y el MINT (CIERA, s/f).

sino, el apodo de *piris* ⁽⁵⁾. Muchos de esos abusos fueron injusticias realizadas por los cuerpos armados sandinistas que, al cabo de un tiempo, no solo denunciaron los campesinos, sino que también lo reconocieron las mismas instancias del Estado y los propios dirigentes del FSLN, el EPS y de la DGSE ⁽⁶⁾.

Los campesinos declararon múltiples abusos, aduciendo, por ejemplo ⁽⁷⁾:

Que la *seguridad* [miembros de la Dirección General de la Seguridad del Estado] interrogó y golpeó a un campesino que se escapó de la Contra cuando se presentó a realizar la denuncia...

Que la *seguridad* llegó de noche en una casa campesina a sacar y llevarse al padre de familia porque existía una denuncia que su hijo *andaba alzado*...

Que vinieron los *compas* y rodearon toda la capilla en una comarca, interrumpiendo la misa *a punta de bala* para rescatar un supuesto desertor del SMP.

Y estos acontecimientos —relatados por miembros de uno u otro bando— se extendían con rapidez, de boca en boca, por todas las comarcas de la zona; tal como sucedió con el testimonio expuesto a continuación (CIERA, 1985):

Veníamos bien *vergueados*, la Contra nos había salido por el Guabo y nos encontramos con la gente del *Chele*... nuestro batallón capturó a un sospechoso que llevaba un número grande de tortillas y cuajadas... nuestros jefes dijeron que era de la Contra y que andaba trayendo comida cuando lo capturaron... entonces el teniente del EPS, para sacarle la verdad lo *hijoputeó* y para asustarlo sacó la bayoneta... el hombre se *zafó* y el teniente

5) Apodo derivado de *piricuaco*, sinónimo de perro de presa.

6) Ver, en este sentido, el documento redactado en la Asamblea de Cuadros del FSLN, realizada a inicios de 1990 en el municipio del El Crucero, donde se reflexionaba sobre la derrota electoral de los sandinistas y se exponía un riguroso listado de errores cometidos, sobre todo, en el *país campesino*; este documento fue editado posteriormente en la revista *Envío* (1990).

7) Comentarios extraídos de diversos informes realizados por el CIERA (1984) a encargo del Ministerio del Interior.

le disparó al aire, pero con tan mala suerte que le pegó en la cabeza... era un *contra* legítimo ese, pero la gente dice que era un campesino que andaba remendando botas de hule...

De esta forma, las actitudes de los militares se traducían a menudo en comportamientos prepotentes y en formas represivas que violaban la histórica *neutralidad* de los campesinos. En muchos lugares los jefes de la *seguridad* fueron el terror de los campesinos, quienes temían incluso bajar al poblado a hacer sus compras, porque de inmediato eran interrogados. También a veces la *seguridad* llegaba a la casa de los campesinos siguiendo «alguna información» y actuaba de forma abusiva, tratando de sacar información sobre la *Contra*, o acusando a los pobladores de haber dado comida a las fuerzas contrarrevolucionarias. E incluso, durante parte de la primera mitad de la década, la política del EPS y de la *seguridad* fue la confiscación de los bienes y propiedades de quienes se iban o apoyaban a la *Contra* —tal como se desprende del comentario siguiente:

Yo conocía a unos campesinos que se fueron con la *otra gente*, luego también se fueron sus cuatro hijos mayores, y sólo se quedó la señora con los *chigüines*. Le quitaron vacas y mulas, y la señora se quedó sin nada para mantener al resto de los hijos⁽⁸⁾.

Posteriormente, en los momentos más duros de la guerra, el EPS utilizó cohetes de largo alcance —los BM-21 (más conocidos como *Katiuskas*)— disparándolos a varios kilómetros de los asentamientos de la *Contra*. Evidentemente, estos cohetes caían —muchas veces— cerca de las casas de los campesinos o en sus *milpas*. Este fenómeno produjo pánico entre la población. En referencia a ello, cuando unos sociólogos de la UCA que realizaban un estudio sobre la guerra preguntaron a un campesino si los bombardeos eran peligrosos, éste les contestó: «¿Si son peligrosos? Para la *Contra* no... No porque nunca les toca... Pero para nosotros sí... Vamos a pagar justos por pecadores...».

La *Contra*, en sus inicios, llegaba también a las comarcas y actuaba con una brutalidad estremecedora. Cuando la contrarrevolución estaba con-

8) Extraído de un testimonio en una comarca del municipio de Matiguás. Registrado en un trabajo inédito encargado por el EPS y realizado por el CIERA.

Extraída de una entrevista realizada en una comunidad de ex-contras en la localidad de Copalar.

formada mayoritariamente por ex-guardias somocistas, éstos hicieron gala de imponer una represión indiscriminada. Acusaban a los campesinos de ser sandinistas, de apoyarlos y de darles comida. Tal como expuso un campesino de un asentamiento, «la Contra secuestró, torturó y cometió los crímenes más atroces contra nosotros, los campesinos»⁽⁹⁾.

La *otra gente*, al ver que los campesinos no simpatizaban con ellos, los torturaban y los humillaban. Ellos violaban a nuestras hijas, a nuestras mujeres. Se llevaban nuestras vacas. Y después de que pasaran, quedaban los *enlaces*⁽¹⁰⁾. Entonces, si te comían una vaca no tenías que contar ni denunciar nada, porque el *enlace* oía, y en otro pase de la *otra gente* le podían matar a uno. Cuando había combates, huíamos, porque ellos se comían *chanchos* y reses⁽¹¹⁾.

La Contra destruyó todo lo que era la cooperativa: la máquina de secar café, los dormitorios de los recolectores, los generadores de electricidad, siete vacas, la fábrica, el almacén de los alimentos. Había un muchacho de unos quince años, retrasado y aquejado de epilepsia. Cuando regresamos... vimos que lo habían degollado, le habían abierto el estómago y le habían dejado los intestinos colgando en el suelo, como una cuerda. Hicieron lo mismo con Juan Corrales, que resultó muerto por un balazo durante la lucha. Le abrieron en canal, le sacaron los intestinos y le cortaron los testículos⁽¹²⁾.

El mensaje de estas brutales campañas de la Contra era claro: si alguien se metía o colaboraba con alguna organización sandinista se convertía automáticamente en un blanco de la contrarrevolución (entre 1982 y 1984, por

9) Existen múltiples y conocidos testimonios sobre la crueldad de las muchas torturas realizadas por la Contra al atacar a las instituciones que simbolizaban la revolución. Para citar solo algunas referencias exponemos el informe de la misión de derechos humanos de *Pax Christi* en Nicaragua (1981), el libro de CHOMSKY sobre la intervención de los Estados Unidos en América Central (1985), los testimonios de un ex-contra (REIMANN, 1987), los informes periódicos de la ONG norteamericana *Witness for Peace*, o la reciente película de Ken Loach *La canción de Carla*, basada en hechos sucedidos en las comarcas del municipio norteño de Condega.

10) Los *enlaces* eran campesinos vinculados a la Contra que informaban sobre los movimientos del EPS y de los campesinos que apoyaban a los sandinistas.

11) Testimonio extraído del trabajo de MENDOZA (1990: 27).

12) De un testigo de una cooperativa en 1984, en: CHOMSKY, 1985: 22.

ejemplo, la Contra torturó y asesinó en la región VI a más de 400 campesinos por estar organizados en cooperativas). Los campesinos comprendieron rápidamente el *mensaje*.

Por otro lado, la Contra también realizó —a través de los *enlaces*— un trabajo ideológico basado en rumores y mentiras como que «la *otra gente* dice que se llevan a los jóvenes para que el comunismo no se los lleve»; «que los *piris* se comen a los niños *chiquitos*»; «que los *piris* hacen jabón de los más viejos»; «que los *piris* son unos *rejodidos ateos* que les van a quitar a sus mujeres...». Estos argumentos —junto con una «explotación» de mensajes vinculados a una religiosidad de cuño tradicionalista— terminaron por arraigar y tener gran ascendencia en el *imaginario* de amplios colectivos del *país campesino*.

Conforme a lo expuesto, durante los ochenta, la dinámica entre el EPS y la Contra sucumbió a la lógica del enfrentamiento militar, lógica que nunca tuvo en cuenta al campesinado. Así, muchísimos campesinos fueron «secuestrados» por la Contra y otros —acusados de colaboradores— fueron «*hechados presos*» por el EPS; y sus propiedades y cultivos fueron dañados por ambos —ya fuera por el robo de un *chancho* o por *el despale de un chagiütal*, o por la *siembra* de minas. Todo ello constituyó la constante violación de las estructuras del poder local del *país campesino* por parte de dos poderes ajenos a la comarca. Las mismas expresiones de *la otra gente* o de *los piris* revelaban la «ajenidad» de los campesinos, su *neutralidad*.

Pero en el desarrollo de la guerra quien finalmente ganó el apoyo mayoritario del campesinado fue quien supo cooptarle desde su *neutralidad* y, en ese caso, el FSLN —a través de sus instancias políticas, militares y económicas— la violó más que *la otra gente*. Este hecho no solo se notó en las elecciones de 1984 y 1990 (en que los campesinos votaron mayoritariamente en contra del Frente Sandinista), sino también en su progresiva cooptación por parte de la Contra. Así, violentada su *neutralidad*, al campesinado le quedaban dos alternativas: esperar la muerte en su finca o colaborar con uno de los bandos (Mendoza, 1990: 39).

Así a partir de 1983, la Contra fue aprovechando los espacios que le brindaron los errores de la revolución e hizo un trabajo de cooptación de líderes locales para montar su red de apoyo —tal como hizo el FSLN antes de 1979. Este trabajo no solo le permitió conseguir buenos colaboradores, sino también desarticular algunas cooperativas, boicotear propuestas planteadas por las autoridades sandinistas de la zona, y reclutar y movilizar masivamente jóvenes campesinos como combatientes de la contrarrevolución.

De esta forma, en 1983, cuando un contingente contrarrevolucionario (formado por el Comando Regional Jorge Salazar [CRJS], dirigido por el *comandante de campo* apodado *Quiché*) se trasladó de Honduras y se enclavó en Zelaya Central —entre la zona sur de la región VI y Río San Juan— tuvo la capacidad de permanecer de forma permanente en territorio nicaragüense; llegando solo provisionalmente a las bases de la Contra en Honduras. Pero no solo eso, sino que en un breve período de tiempo el número de integrantes del comando rebasó todas las previsiones, teniendo que reorganizarse en cinco comandos, cuyos dirigentes llegaron a ser, en su mayoría, de origen campesino —se trataba de los *comandantes de campo* conocidos bajo el seudónimo de *Emiliano, Franklin, Capulina, Dumas y Fernando*.

De esta manera, la actividad *guerrillera* del CRJS en la región V y VI dejó de realizarse por parte de «fuerzas mercenarias y ex-guardias» (tal como rezaban los medios de información sandinistas), sino que la Contra se convirtió en una *guerrilla campesina* que recibía órdenes de sus antiguos patrones. En el fondo, en esa zona, la Contra llegó a constituirse en el ejército de los *finqueros*, quienes se habían puesto a la cabeza de miles de *colonos* y *parceleros* empobrecidos por las medidas desarrolladas por el MIDINRA, y que durante la mayor parte de la década recibieron directrices militares de coroneles de la ex-Guardia Nacional y de agentes de Washington.

Al realizar un análisis de la composición y estructura de los cinco comandos que integraban el CRJS o del Comando Regional Diriangén (CRD) —de la misma naturaleza del CRJS, que actuaba en la zona de Jinotega—, se observa un sorprendente mimetismo con la estructura social presente en el *país campesino* antes de 1979 (CIERA, 1985: 172-174; 1986; 1989f: 231-340; Núñez *et al.*, 1991: 401-404). Estos comandos articularon sus estructuras sobre la base de una clara diferenciación social, y a partir de la estratificación de cargos y funciones según su pertenencia y origen social. De esta forma, tal como mostramos en el cuadro 3, los rangos de Jefe Político y Jefe Militar de las *Fuerzas de Tarea* ⁽¹³⁾ correspondían generalmente a los *finqueros* o a sus hijos, y la tropa era conformada por colonos, mozos o parceleros. Una vez estructurados los diferentes comandos, éstos también organizaron su *red de colaboradores* ⁽¹⁴⁾ a través de mecanismos de articulación similares a los

13) Las *Fuerzas de Tarea* eran las unidades de combate en que se dividía la Contra.

14) Las *redes de colaboradores* eran la estructura civil que protegía, alimentaba e informaba a las unidades militares de la Contra, eran el *agua donde se movía el pez*. La red se iniciaba a partir del reclutamiento de un hombre *clave* de la comarca que contara con recursos y que por su tipo de activi-

empleados en las fincas y haciendas tradicionales, es decir, de acuerdo con un código de poder en armonía con el mundo simbólico campesino.

Cuadro 1. Composición del Comando Regional Diriangén

Estrato	Rango Militar	Red de colaboración
Campesino pobre	Tropa	Correo o enlace
Campesino medio	Tropa, JFT, JD	Colaborador
Ganadero/ <i>finquero</i>	No combatiente	Jefe de red
Campesino rico (padre)	No combatiente	Jefe de red
Campesino rico (hijo)	JD, JCR	Generalmente solo combate
Mujer de alzado	No combatiente	Colaboradora

JFT: Jefe de Fuerza de Tarea; JD: Jefe de Destacamento; JCR: Jefe de Comando Regional.

Fuente: A partir de entrevistas a capturados del Plan Llovizna (1985), en CIERA, 1989f: 268.

Con todo, los intereses y deseos de los diversos estratos integrados en las filas de la Contra eran diferentes. Los *finqueros* y sus hijos se enrolaron para recuperar sus fincas y posesiones; los colonos, *parceleros* y *mozos* lo hicieron ante la imposibilidad de construir una economía campesina y por los malos tratos recibidos por las fuerzas armadas vinculadas al sandinismo; finalmente, quienes componían la *red de colaboradores* se vincularon con *la otra gente* con la nostalgia de recuperar la economía campesina tradicional —con su sistema de abastecimiento y comercio— y para que desapareciera el régimen que había desarticulado el *país campesino*, se había llevado a sus hijos al servicio militar, y había empobrecido sus economías. En definitiva, el motivo central era la lucha para un *retorno al pasado...* Y así lo repetían *la otra gente*:

dad económica gozara de una gran movilidad, para que no pudiera levantar sospechas. Generalmente se trataba de alguien acomodado —un ganadero, un comerciante, un delegado de la palabra o incluso un presidente de una cooperativa—, ése se convertía en el *jefe de red*. Los *correos* casi siempre eran reclutados entre los subordinados de los *jefes de red*, quienes tenían la función de realizar trabajos concretos como llevar mensajes o hacer de guías esporádicos de *la otra gente*.

Con la victoria sobre el sandinismo todo va a cambiar... no habrá racionamiento... volverán los comerciantes... vamos a comprar ropa como antes... no habrá represión... no habrá servicio militar...

A la vez, enrolarse en la Contra suponía para los campesinos la posibilidad de quedarse en la misma comarca (cosa que no permitía el SMP), viendo a sus familiares de vez en cuando y, en los momentos de cosecha, incluso trabajar durante el día e integrarse en las *Fuerzas de Tarea* por la noche —y así nació el apelativo acuñado por los sandinistas al referirse a este colectivo como *campesinos de medio tiempo*. Tal como expuso un campesino, a partir de la implantación del SMP, *meterse con la otra gente* era la opción «menos mala» (CIERA, 1985: 132):

Al campesino no le gusta andar de un lado para otro... es mejor quedarse con *la otra gente* porque no siempre lo llevan lejos y así uno puede ir a dar su *vueltecita* a la huerta... pero con el SMP la familia se muere de hambre por andar uno por lugares que ni conoce... y que *ahí no más* lo matan a uno y quién se va a enterar... y ahí queda uno *botado* en esos montes...¿cómo va a ser eso una buena cosa para un campesino?

Posteriormente, en la segunda mitad de la década, cuando el FSLN rectificó parte de sus políticas para recuperar base social en el *país campesino* surgió el fenómeno —del que se quejaron los cuadros locales del FSLN— de que muchos campesinos enrolados en la Contra tenían familiares beneficiándose de las prestaciones que otorgaba el Estado revolucionario. Y así lo expuso Mendoza (1990: 41) en un trabajo donde se cuestionaba la actuación del régimen sandinista en el *país campesino*:

No se hubieran ido, aunque de todos modos hubieran sido base social de ellos y hubieran quedado trabajando con ellos, pero no se hubieran ido. Pero con las políticas que hicimos ellos pensaron: «yo me voy, dejo mi familia y queda *de a verga*. A mi mujer siempre me le darán préstamo». Y eso es lo que ha sucedido aquí. ¿Qué es lo que resultó? Que hubo muchos que se metieron en la Contra, pero que a sus mujeres el Frente les asistía. Y así, la gente se *alzó* masivamente.

Según lo descrito, en los años 1985-1986, diversos comandos de la Contra se mantuvieron de forma permanente en el interior de Nicaragua —y sus dirigentes solo llegaban a las bases hondureñas para abastecerse, recibir

órdenes y, según el caso, ver a sus familiares. Los enclaves donde permanecieron los comandos de la Contra situados en Nicaragua eran siete: la montaña de Batistán —en Zelaya Central—, el Almendro y el Cerro Musún —en región V—, Copalar y Río Blanco —región VI—, y Waslala y la Reserva de Bosawás —el oeste de Costa Atlántica. Fruto de ello, para ese entonces, y hasta las elecciones de febrero de 1990, la Contra se implantó entre la base social campesina de toda la frontera agrícola, movilizándose con comodidad en una amplia faja territorial que atravesaba Nicaragua de norte a sur —desde San José de Bocay (cerca de la frontera hondureña), pasando por El Rosario y Wamblán, el Cuá (al norte de la cordillera Isabelia), el Río Tuma, la cordillera Dariense, río Blanco, el este de Matiguás, San Pedro del Norte, Bocana de Paiwas, el este de Boaco, el Ayote, el Tortuguero, Wapi y Chontales, el Rama, Nueva Guinea, hasta el Río San Juan (colindante con Costa Rica).

Ante esa situación, el EPS y el MIDINRA desplazarían a gran cantidad de campesinos en *asentamientos* ⁽¹⁵⁾, organizándolos en cooperativas (generalmente Cooperativas de Autodefensa) con el fin de crear un *cinturón de seguridad* frente a los enclaves de la Contra —*cinturón* que, de *facto*, se convertiría en la *frontera del Estado sandinista*— y desarrollarían, con una efectividad desigual según la zona, diversos proyectos para combatir a la Contra y cooptar la *base social enemiga* (16).

15) Los *asentamientos* se concentrarían en las regiones II, V, VI y en la región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). En la Región I existían 39 asentamientos distribuidos en los diferentes municipios; en la V había 66 concentrados en las zonas del Rama, Muelle de los Bueyes, Boaco, Juigalpa, Villa Sandino, Acoyapa, Santo Tomás, Camoapa y Nueva Guinea; y 39 en la región V se concentraban en las zonas de Río Blanco, Jinotega y Cuá-Bocay; y en la RAAN había 92 asentamientos distribuidos en cuatro zonas ubicadas entre el río Prinzapolka y el fronterizo río Coco. Para un diagnóstico de los refugiados, repatriados y población desplazada durante los ochenta ver el documento editado por CRIES y elaborado por Deborah BARRY y Luis SERRA (1989). Posteriormente se ampliaría dicha información con los informes de la CIAV, institución responsable de realizar la integración de los movilizados de la Resistencia Nicaragüense.

16) Se trataba del proyecto integral —que incorporaba aspectos económicos, sociales y defensivos— llamado Plan General Único (PGU, 1985) que se implementó, con resultados muy desiguales, en las regiones I, V y VI.

Tabla 3. Total de población desplazada por región (1981-1988)

Región	Número de familias	Número de personas	% de desplazados sobre la población total
I	14.000	84.000	23,6
II	3.028	18.172	2,8
III	-	-	-
IV	183	1.100	0,7
V	16.451	105.093	31,5
VI	14.166	85.000	18,7
RAAN*	7.216	43.300	26,8
RAAS*	950	5.700	8,5
RSJ	2.000	12.000	30,2
Total	57.994	354.365	

(*) RAAN se refiere a la zona norte de la Costa Atlántica; que a partir de 1987 se denominó administrativamente Región Autónoma Atlántico Norte. (*) RAAS se refiere a la zona sur de la Costa Atlántica; que a partir de 1987 se denominó administrativamente Región Autónoma Atlántico Sur.

Fuente: Informes de los gobiernos regionales sobre la población desplazada, en Barry y Serra, 1989: 42.

Un ejemplo gráfico del espacio que conquistó *la otra gente* y su base social fue la respuesta que dio *un contra* apresado por el EPS al preguntarle *si iba a secuestrar gente para pelear*. Éste respondió: «¿Nosotros buscar gente? Ahora es la gente la que nos busca para integrarse... Ahora la Contra entrena *aquí no más*, no sólo en Honduras...».

La respuesta era cierta; y si bien en los primeros años la Contra construyó parte de su tropa mediante amenazas, secuestros y extorsión, a mediados de la década cambió de métodos. A partir de entonces el «reclutamiento» se realizó de forma voluntaria y a través de un *ritual* reglado. El proceso era el siguiente: un dirigente de algún comando acordaba un lugar y una fecha con el joven que quería enrolarse; el joven esperaba a la Contra y ésta pasaba a un kilómetro del punto acordado; el

joven tenía que correr detrás de la columna para unirse a ella; y una vez alcanzada, un integrante advertía al *novicio* que si quería estar en la Contra tenía que dejar padre, madre y familia *hasta la victoria*.

Así, la Contra llegó a constituir bastante más que un pertrechado ejército enclavado en Nicaragua por los norteamericanos. La Contra fue, además, «un ejército compuesto por campesinos de las zonas del interior que luchaban contra un régimen que amenazaba su identidad mercantil y su axiología tradicional; un régimen que cometió la osadía de desautorizar a sus líderes y que coartó su libertad de movimiento; un régimen que, al imponer el servicio militar, les quitó a los jóvenes —su bien máspreciado y su principal fuerza de trabajo—» (Núñez *et al.*, 1991: 44). Esta Contra —la *contra campesina*— fue, sin duda, la que puso los hombres, el esfuerzo y los sacrificios a la hora de combatir militarmente al régimen sandinista.

Esta *contra campesina*, finalmente liderada por *comandantes de campo* de origen campesino, tuvo siempre como objetivo la recuperación del *país campesino*, la derrota del sandinismo y la satisfacción de sus demandas de *tierra y libertad*. Su contacto con el resto de la *coalición contrarrevolucionaria* (donde la administración norteamericana tuvo un rol determinante⁽¹⁷⁾) siempre se realizó a través de intermediarios; con quienes diferían no solo en su forma de interpretar el conflicto, sino también en la forma de vivirlo, conducirlo y—en su momento— terminarlo. Así, si bien entre la *contra campesina* y el resto de la *coalición contrarrevolucionaria* existían coincidencias de tipo coyuntural, posteriormente se observaría que los objetivos —al igual que los costos— eran sustancialmente diferentes. Pero el cómo y por qué de ello —la manipulación y utilización de las tropas campesinas (primero) y su traición (después) por parte de las élites de la Contra y la *conexión* estadounidense— corresponde a otro trabajo.

17) Sobre ello existe una abundante literatura —así como documentos que la corroboran. Entre las múltiples obras existentes cabe destacar: CHOMSKY, 1988; GUTMAN, 1988; LAFEBER, 1993; KORNBLUH, 1987; LOZANO, 1988; WALKER DE., 1987; WHITEHEAD, 1983; YEVES, 1991.

CAPÍTULO 14

**A MODO DE CONCLUSIÓN:
¿LA ÚLTIMA REBELIÓN
CAMPESINA?**

Tal como expone Skocpol (1979: 77), para el estudio de las revoluciones, indudablemente sigue siendo cierta la máxima de Hegel de que «el búho de Minerva emprende el vuelo al caer la noche». En esta dirección, a cierta distancia de la efervescencia revolucionaria (o contrarrevolucionaria) que impregnó el estudio del proceso acontecido en Nicaragua durante la RPS, cabe reflexionar sobre aquellas cuestiones que hemos expuesto al iniciar el presente trabajo y que, hasta la fecha, han quedado silenciadas o, en todo caso, se han resuelto con evasivas, y ahora es posible indagar focalizando el análisis de lo local —en contraposición de los estudios macro-estructurales.

Parte de la respuesta a las preguntas de por qué los campesinos de la frontera agrícola nicaragüense constituyeron la base social de la *Contra* reside en la misma construcción del «nuevo orden» gestado en la Revolución Popular Sandinista. La dirección de la insurrección y el posterior proyecto revolucionario gravitó en torno al imaginario *vanguardista* que tenía sus referentes en la Revolución Cubana, la Teología de la Liberación y el *mito desarrollista* de la Teoría de la Dependencia (Martí, 1997: 78-102). Este fenómeno, junto al sesgo urbano —proletario y *pobretario*— que adquirió el proceso insurreccional en su tramo final, condujo a la subestimación (por parte de los dirigentes) de las especificidades socioeconómicas y culturales de la Nicaragua interior (Bugazski, 1990; Núñez *et al.*, 1991; Rizo, 1999) y costeña (Hale, 1994; Nietzsche, 1989; Vilas, 1989).

El triunfo de la *convocatoria revolucionaria*, a la vez, debe interpretarse, tal como expone la obra de Wickham Crowley (1993: 320) a partir de la singularidad que ofrecía la articulación social y política de Nicaragua. A nivel social, la eclosión del proceso de *desarrollo económico* acelerado acontecido a partir de la segunda mitad de siglo supuso —a la par de la creación de la aparición de un *modelo capitalista campesino* en las zonas rurales del interior y que se relaciona directamente con el fenómeno de la *Contra campesina*— el incremento de la marginación urbana (nutrida por campesinos expulsado de sus posesiones en las regiones del Pacífico debido a la vertiginosa expansión de los cultivos destinados a la exportación). De esta forma, el *sujeto social* que se sumó a la convocatoria revolucionaria luchaba (además de revelarse frente al carácter indiscriminado de la represión que hizo gala el somocismo en su período terminal) contra un futuro sin perspectivas y donde la *pobreza* era habitual en su quehacer cotidiano. Se trataba, en definitiva, de los colectivos urbanos que, en palabras de Vilas (1984), *no tenían un lugar bajo el sol*, y que tenían un carácter más *popular*, en el sentido amplio de masas trabajadoras, que *proletario*.

El protagonismo de estos colectivos insurrectos fue, sin embargo —y no solo por el *carácter primitivo* ni *dantesco* del régimen somocista, tal como han señalado diversos teóricos—, la fructificación del trabajo y de la organización desarrollada por el FSLN durante largos años. El FSLN dio espacios y medios a estos colectivos para que sus reivindicaciones surtieran efectividad; y éstos —al salir a la calle— le dieron el *poder*. Pero éstos le dieron a la vez, un sustrato social, una base humana, un discurso, un *imaginario*, unas demandas y un *rostro*. Ese *rostro*, eminentemente urbano, daría *carne* a la Revolución Popular Sandinista y ésta le cedería la simbología, lo integraría en las instituciones y realizaría políticas públicas a su favor (Bendaña, 1991; Martí, 1997; Núñez *et al.*, 1991). Su reverso, sin embargo, sería un sector de los colectivos campesinos de las zonas rurales de la frontera agrícola que, si bien compartía con sus homólogos urbanos el marco de la subordinación y la pobreza, diferían en cuanto a su actitud, simbología y demandas.

Así, la construcción de un entramado institucional a partir de estrategias hegemónicas, la creación de un mundo simbólico que excluía y despreciaba los referentes culturales de cuño tradicionalista, la extensión de un aparato partidario movilizador que penetraba en la intimidad de los núcleos familiares, y la implementación de políticas substantivas de carácter modernizador, terminaron por agredir cada uno de los aspectos de la axiología propia de los habitantes del *país campesino*.

Así, desde la perspectiva de los campesinos, la *creación* de una «nueva sociedad» corrió paralela a la *reproducción* de viejas conductas, ya que si bien, por un lado, se desmanteló el aparato represivo del somocismo, por otro aumentaron las directrices políticas emanadas desde los cuadros políticos del FSLN (que casi nunca

fueron originarios de esas zonas). Y aunque por primera vez llegó la educación, la salud, el crédito y la capacitación, también aumentaron las exigencias, el control y los condicionantes. Ciertamente se organizaron cooperativas y se crearon organizaciones para representar los intereses de los colectivos rurales, pero también permanecieron muchos campesinos sin tierra que continuaron luchando por la obtención de lotes y por el acceso de los recursos que se concentraban progresivamente en las haciendas estatales y privadas. Todo ello en el marco de un sistema político conducido por el FSLN y basado en una concepción hegemónica que poseía rasgos corporativos, ofreciendo bienes materiales y simbólicos a los dirigentes a cambio de su control y la lealtad, reproduciendo así las seculares relaciones clientelares entre quienes detentaban el poder y quienes lo padecían —pero esta vez sin que un marco legitimador lo hiciera justificable ni comprensible a los habitantes del *país campesino*.

Estos acontecimientos —junto a la sensación de encontrarse entre dos ejércitos que transgredían su histórica *neutralidad*— violaron la identidad económica, social y cultural de los colectivos campesinos de las zonas rurales del interior. La implementación de las políticas del proyecto modernizador (la reforma agraria) y la expansión del Estado, supusieron la demolición de las relaciones de reciprocidad y de las redes de intermediación existentes entre los *finqueros*, mozos y colonos.

En el sentido expuesto, la administración sandinista eliminó a las tres instituciones que controlaban casi la totalidad de los «recursos de intermediación» del *país campesino*, a saber: el patrón, el mercado y la iglesia. Cada una de estas instituciones ejercía su poder a través de un sistema de mediaciones, pero el control tenía un carácter fundamentalmente personal: era el comerciante, el *finquero* o el cura a quienes se dirigían los mozos o los colonos. Se trataban de relaciones de subordinación que no se percibían antagónicas, sino basadas sobre un sistema de lealtades personales y de respeto al más fuerte (lealtades que se plasmaban en un código tácito donde destacaban las *relaciones horizontales* de compadrazgo y ayuda mutua, y las *verticales* de respeto al más fuerte y de paternalismo para con los débiles). Precisamente por ello, el imaginario que configuraba la conciencia de los sujetos sociales del *país campesino* era la *identidad de oficio*, en oposición a la *identidad de clase* —tal como señala E. P. Thompson (1979: 15) al caracterizar la articulación de las sociedades precapitalistas. Además de eso, a la vez, la reforma agraria violó la estructura de la tenencia de la tierra, donde la propiedad asumía su valor verdadero dentro de una determinada estructura de poder político, de influencias, intereses y dependencias.

Así la *revuelta campesina* se generó, en sus inicios, como producto de una *estrategia reproductiva* complementaria a los procesos de adaptación típicos del campesinado (Bourdieu, 1988), y que sitúa el eje temático de este trabajo en el

centro del debate existente en la literatura que versa sobre las *respuestas* campesinas. Así, la *revuelta* fue producto —además de la propia situación «real»— de la percepción que el campesinado tuvo del «nuevo orden». En este sentido, la protesta no se fundamentó solo en el fenómeno de la pobreza y la explotación, sino que surgió del sentimiento que el campesino interiorizó a consecuencia de las «nuevas» formas de coerción a que se vio sometido. Este sentimiento —mediado por un conjunto de categorías morales acerca de lo que está bien o mal, y de lo que es correcto desde el punto de vista reproductivo— puede asemejarse perfectamente al concepto que E. P. Thompson (1979) definió como *economía moral de los pobres*, o que James Scott (1976) llamó *economía moral del campesino*.

Efectivamente, uno de los detonantes del estallido campesino fue la sensación de impotencia y el enfurecimiento que supusieron la transformación de una realidad y la ejecución de unas medidas que iban contra su cosmovisión del mundo («¡Nos encachimbamos!» es la respuesta común de los campesinos al preguntarles por qué se alzaron contra la revolución), dando razón a Jeff Goodwin (1994) cuando expone que «los científicos sociales a veces pierden una de las piezas claves de la interpretación de los fenómenos revolucionarios, a saber, el fervor y la rabia que guía a los *alzados* [...] en el seno de la revolución subyace el conflicto emocional, la indignación moral, la repulsión y la furia contra el poder establecido».

Además de los factores arriba explicitados, los colectivos campesinos también padecieron la sensación de encontrarse «entre dos fuegos» —tal como han analizado David Stoll (1993) y Le Bot (1993) al referirse a la situación de las comunidades Ixil (Guatemala), y Mark Danner (1994) al analizar la matanza acontecida en El Mozote (El Salvador). Dicha sensación fue otro de los factores que determinaron la integración de diversos colectivos campesinos a la *coalición contrarrevolucionaria*. Y, muchas veces, aquéllos se unieron al movimiento contrarrevolucionario no tanto por sus ideales, sino también por la pretensión de salvar sus vidas —pues el fuego cruzado de presiones y coerción que emanaba de dos actores ajenos a su realidad les obligaron a «definirse» (Stoll, 1993: 20). La extrema represión a la que se vio inserto el *país campesino* (por parte, primero, de la Contra y luego de la *seguridad del Estado*) fue una combinación «necesaria y suficiente» para interpretar el posicionamiento final de sus habitantes (Seligson, 1996). Y es en esta dirección que cabe analizar e interpretar este tipo de fenómenos, cuestionándonos hasta qué punto los procesos de movilización se deben a las contingencias estructurales y hasta dónde son producto de estrategias y conductas elaboradas por *agencias movilizadoras*.

De lo expuesto —además de la aseveración de Skopol (1979: 441) de que tras las revoluciones los Estados resultantes surgen más centralizados, burocráticos y autónomamente poderosos— se desprende el ya conocido fenómeno de que los

procesos modernizadores (y en este sentido cabe interpretar el proyecto de reforma agraria diseñada por la administración sandinista) inciden, tarde o temprano, negativamente sobre el campesinado. Y así ocurrió con la RPS. En el plano económico, la modernización que supuso el proyecto económico sandinista conllevó la extensión de las relaciones de intercambio a un área mucho más amplia que antes (y bajo el control de la administración); el progresivo reemplazo de los cultivos de subsistencia por otros destinados a satisfacer exigencias externas —con el objetivo de generar divisas—; y la integración del campesinado en modalidades organizativas para la producción que no casaban con sus prácticas consuetudinarias. Por otro lado, en el plano político, la Revolución exigió el encuadramiento partidario de este colectivo y el establecimiento de un *orden público* que violó el principio de la *neutralidad campesina*. De esta forma, en el proceso revolucionario nicaraguense —a semejanza de otras revoluciones— los pequeños y medianos campesinos tuvieron dificultades para encontrar su lugar y, al final, muchos terminaron por enfrentarse a él. Ante tal proceso también cabría preguntarse por qué los cuadros dirigentes de la revolución (ya fueran del EPS, MINT o MIDINRA) no cambiaron de actitud, proceder y discurso para con dichos colectivos, ya que éstos sí tenían información verídica y razonada de lo que allí acontecía —en este sentido solo cabe exponer que buena parte del material utilizado en el presente estudio fue confeccionado por el CIERA a petición de otras instituciones y que el trabajo de campo realizado viene, en gran medida, a confirmar las hipótesis y datos de dichos estudios.

Sobre ello, a la vez, cabe insertar el debate que versa sobre el proceso de construcción del *estado-nación* en los países en vías de desarrollo, así como la inclusión de las diferencias y contradicciones que supone su construcción en ámbitos económica, social y demográficamente heterogéneos —tal como le ocurrió a la administración sandinista a la hora de llevar la revolución en todo el territorio nacional.

Siguiendo con el fenómeno acontecido en Nicaragua, cabe anotar que la *clase incómoda* —utilizando la expresión acuñada por Teodor Shanin (1983) al referirse al campesinado— ha sido el sujeto social que ha nutrido las *rebeliones* y *asonadas* (que generalmente han sido instrumentalizados por las élites contrarrevolucionarias) que han combatido a los regímenes revolucionarios —tal como nos muestra Tilly (1964) en el episodio de la *Vendée* después de la Revolución Francesa. En esa dirección cabe interpretar la aparición de *rebeliones campesinas* inmediatamente posteriores a la instauración de regímenes revolucionarios —como, por ejemplo, el fenómeno de los *Cristeros* en el México postrevolucionario, el de los *kulaks* rusos, o el de las primeras guerras *carlistas* de inicios de la década de los veinte del siglo pasado frente a la gestación de la España liberal. Y es en ese marco, precisamente, donde deberíamos preguntarnos *si la guerra contrarrevolucionaria acontecida en*

las zonas rurales del interior de Nicaragua fue también una rebelión campesina... quizás ¿la última rebelión campesina?

Sin pretensión de agotar la(s) respuesta(s) a la pregunta formulada cabe indicar que, a pesar de la instrumentalización de la guerra por parte de los sectores más reaccionarios de la burguesía nicaragüense y de la administración imperial (norteamericana, se entiende), la *reacción campesina* no fue específicamente *contrarrevolucionaria*, aunque tampoco implicó una supuesta alternativa a la revolución en curso. Hay que entenderla, sencillamente, como testimonio de oposición a la modalidad concreta que revistió la liquidación del *orden anterior* presente en el *país campesino* y, en particular, a la transformación del mundo rural en la formación resultante de ese proceso. Dicha oposición no solo fue desatada a causa de las condiciones materiales de vida que en el transcurso de dicho proceso padeció el campesinado, sino también a causa del hondo malestar que le infligía. En efecto, quienes sufrieron en mayor grado las injusticias y miserias del *orden anterior* (los mozos y los colonos del *país campesino*) no tenían por objeto preparar el acceso a «un estadio superior de la evolución histórica»; en todo caso, su alternativa al *viejo orden* hubiera sido la consolidación de un *país campesino de trabajadores libres*, dueños de su pedazo de tierra y sus cosechas, e interlocutores directos con el mercado, la aldea y *su Dios*. El *utopismo del proyecto*, es decir, la carencia de una estrategia precisa para hacerlo realidad y la superposición de jerarquías militares y administrativas presentes en el andamiaje de la *Contra*, no menguaba su atractivo. Pero, con el abandono (¿o traición anunciada?) de las élites contrarrevolucionarias a partir de 1987 (cuando empezaron a desarrollarse las diversas rondas de negociaciones producto de los acuerdos de Esquipulas II), incluso esa *utopía* les fue arrebatada. Para este colectivo enrolado en la *Contra campesina* —confiscado por el Estado, embaucado por las élites contrarrevolucionarias, y posteriormente inducido hacia el *orden neoliberal* reinante después de 1990— la liquidación del *viejo orden* que representaba el *país campesino* no significó ningún progreso, sino justamente la prolongación de un angustioso horizonte de desarraigo, subordinación y desigualdades acrecentadas; y, posteriormente, el desenlace tuvo como producto un profundo sentimiento de frustración.

En cuanto a dicho producto —el de la frustración—, *paradójicamente* terminaron por coincidir en él tanto los colectivos rurales de las zonas del interior, como aquellos amplios sectores urbanos y de la macroregión del Pacífico que *no tenían un lugar bajo el sol* y que apoyaron el proceso revolucionario durante la década de los ochenta. No deja de ser éste un sorprendente desenlace teniendo en cuenta que, en esencia, fueron estos dos colectivos quienes se enfrentaron entre sí (unos defendiendo su única oportunidad de ser protagonistas en el desarrollo de una sociedad

más justa y más *propia*, y los otros como reacción ante la destrucción de un mundo en el que se sustentaban su existencia) en una lucha encarnizada que el sarcasmo político calificó de *baja intensidad*. Ahora queda por observar si estos colectivos — anteriormente movilizados de forma compulsiva — se reinsertan en la sociedad, reconstruyen sus comunidades y desmilitarizan sus conductas... En todo caso se trataría de llevar a cabo el tan coreado deseo de «la reconciliación desde abajo».

El reverso de dicho proceso ha tenido su correlato entre las élites a partir de dos episodios: la confección de acuerdos — donde el marco internacional tuvo gran importancia — a partir de los cuales *desactivar* el conflicto bélico, y la posterior articulación de intereses y proyectos comunes. Y este espacio de *elementos* compartidos entre las élites políticas *salientes* y *entrantes* (antes enfrentadas), y su estilo consociativo, ha conllevado una progresiva *reunificación* política de los sectores tradicionalmente dominantes con relativa independencia del conflicto ideológico-partidario que cercenó la sociedad nicaragüense durante algo más de una década.

BIBLIOGRAFIA

PARTE 1

- ABRAMS, E. 1987. *Central America: What are the Alternatives?* US Department of State, Bureau of Public Affairs. *Current Policies*, n.º 944, Washington.
- AGÜERO, F. y TORCAL, M. 1993. «Elites, factores estructurales y democratización». *Revista de Estudios Políticos*, n.º 80: 329-350.
- AGUILERA, G. et al. 1991. *Centroamérica: de Reagan a Bush*. FLACSO, San José.
- ALEGRÍA, C. y FLAKOLL, D. J. 1982. *Nicaragua: la revolución sandinista. Una crónica política 1855-1979*. Era, México.
- AMNESTY INTERNATIONAL (AI). 1977. *The Republic of Nicaragua*. AI, London.
- ARCE, B. 1983. «El partido, el Estado y las Organizaciones de Masas». Conferencia de la Escuela de Cuadros del FSLN, Managua, Mimeo.
- , 1985. *Sandinismo y política imperialista*. Editorial Nueva Nicaragua, Managua.
- ARIAS, P. 1980. *Nicaragua: Revolución. Relatos de combatientes del Frente Sandinista*. Siglo XXI, México.
- ARNOVE, R. 1995. *La educación como terreno de conflicto*. UCA, Managua.
- AYA, R. 1985. «Reconsideración de las teorías de la Revolución». *Zona Abierta*, n.º 36-37: 1-80.
- BALMORI, D. et al. 1990. *Las alianzas de familias y la formación del país en América Latina*. Fondo de Cultura Económica, México.
- BALOYRA, E. 1982. *El Salvador in Transition*. North Carolina University Press, Chapell Hill.
- , 1983. «Reactionary Despotism in Central America». *Journal of Latin American Studies*, 15: 295-319.
- BARAHONA, C. et al. 1983. *Economía y sociedad en la construcción del estado de Nicaragua*. ICAP, San José.
- BARBÉ, E. 1985. «Centroamérica y el Caribe en la percepción de la seguridad de los Estados Unidos». en: VV. AA, *Centroamérica en la encrucijada internacional de nuestro tiempo*. Ediciones de la Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba.

- BARNES, W. & WEAVER, E. 1991. «Opposition and Coalition», en: Walker, T. H. (ed.) 1991. *Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua*. Westview Press, Boulder.
- BARRACLOUGH, S. *et al.* 1988. *Nicaragua. Desarrollo y Supervivencia*. TNI-CIP-CRIES-IEPALA, Madrid.
- BARRY, D. y CASTRO, J. R. 1990. «Cuatro hipótesis para entender la transición». *Revista Pensamiento Propio*, n.º 66.
- BARRY, D.; VERGARA, R. y CASTRO, R. 1986. *Nicaragua: País sitiado. Guerra de Baja Intensidad: y sobrevivencia*. CRIES, Managua.
- BARRY, G. & ROCAMORA, J. 1992. «Low Intensity Democracy». *Third World Quarterly*, Vol. 13, 3: 501-523.
- BARRY, T. 1986. *Low Intensity Conflict. The new Battlefield*. Inter-Hemispheric Education Resource Center, New Mexico.
- BATAILLÓN, G. 1993. «La violencia en Nicaragua y El Salvador. 1991-1992». *Revista Polémica*, n.º 19: 18-32.
- BAUMEISTER, E. 1991. «Agrarian Reform», en: Walker, T. H. (ed.) 1991. *Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua*. Westview Press, Boulder.
- , 1998 *Estructura y reforma agraria en Nica (1979-1989)*. CDR-ULA, Managua.
- BAUMEISTER, E. y NEIRA, O. 1987. «La conformación de la economía mixta: estructura de clases y política estatal en la transición nicaragüense», en: Núñez *et al*: *La transición difícil*. Vanguardia, Managua.
- BENDAÑA, C. 1984. «Reflexiones sobre la participación popular». *Revista Pensamiento Propio*, n.º 13: 8-15.
- BENDAÑA, A. 1991. *La guerra campesina*. CRIES, Managua.
- BERNTZEN, E. 1990. «The Relationship between the process of State- and Nation-Building and the development of Political Democracy: The cases of Nicaragua and Costa Rica Compared». *Paper* presentado en el XII World Congress of Sociology.
- , 1991. «Explaining successful democratization in Central America: A Conjuntural Approach». *Paper* presented in IPSA, XV World Congress, Buenos Aires.
- , 1993. «A Qualitative Comparatie Approach to Democratization in Central America». *Paper* presentado en el ECPR, Mímeo.
- BERRYMAN, P. 1984. *Religious Roots of Rebellion. Christian in the Central American Revolution*. Maryknoll, Washington.
- BETHELL, L. (ed.). 1991. *Central America since Independence*. Cambridge University Press, Cambridge.
- BLACK, G. 1981. *Triumph of the People: The Sandinista Revolution in Nicaragua*. Zed Press, London.

- BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 1991. *Nicaragua Trade and Finance Adjustment Loan*. BID, Washington.
- , 1993. *Reforma social y pobreza*. BID, Washington.
- BISCHOPING, K. & SCHUMAN, H. 1992. «Pens and Polls in Nicaragua: An Analysis of the 1990 Preelection Surveys». *American Journal of Political Science*, vol. 36, n.º 2: 331-50, Austin.
- BM (Banco Mundial). 1992. *Nicaragua: Managing the Transition from Stabilization to Sustained Economic Growth*. BM, Washington.
- BOESNER, D. 1982. *Relaciones Internacionales de América Latina*. Nueva Sociedad, Caracas.
- BOOTH, J. A. 1982. *The End and the Begining: The Nicaraguan Revolution*. Westview Press, Boulder.
- , 1991a. «Socioeconomic and Political Roots of National Revolts in Central America». *Latin American Research Review*, 26: 34-35.
- , 1991b. «Theories of Religion and Rebellion: The Central American Rebellion». *Journal of Third World Studies*, 8, n.º 2.
- BOOTH, J. A. & SELIGSON, M. A. 1989. *Elections and Democracy in Central America*. North Carolina University Press, Chapell Hill.
- BOOTH, J.A. & WALKER, T. 1993. *Understanding Central America*. Westview Press, Boulder.
- BORGE, T. 1979. «Unidad estratégica Sandinista». *Revista Diálogo Social*, n.º 3: 5-9.
- , 1982. *Carlos, el amanecer ya no es una tentación*. Editorial Nueva Nicaragua, Managua.
- , 1984. «El nuestro es un proyecto enredado». *Revista Pensamiento Propio*, n.º 15: 7-15.
- , 1985. «A seis años, una pausa de reflexión». *Revista Pensamiento Propio*, n.º 24: 6-15.
- , 1987. *Síntesis histórica. El FSLN y la Revolución Nicaragüense*. Barricada, Managua.
- BORGE, T. y CARRIÓN, L. 1979. «Se unifican las tres tendencias del FSLN: Hacia el mismo objetivo». *Revista Bohemia*, n.º 13: 4-10.
- BOSSET, T. J. & KJARÚN, P. F. (eds.) 1986. *Promise of Development. Theories of Change in Latin America*. Westview Press, Boulder.
- BOSWELL, T. 1989. *Revolution in the world-system*. Greenwood Press. Connecticut.
- BRINTON, C. 1942. *Anatomía de la revolución*. Fondo de Cultura Económica, México.
- BROCKETT, C. D. 1988. *Land, Power, and Poverty: Agrarian Transformation and Political Conflict in central America*. Unwin Hyman, Boston.

- BULMER-THOMAS, V. 1987. *The Political Economy of Central America since 1920*. Cambridge University Press, Cambridge.
- , 1991. «A Long-Run Model of Development for Central America». Institute of Latin American Studies, London.
- BUTLER *et al.*, 1995. *Contesting Everything, Winning Nothing. The Search for Consensus in Nicaragua, 1990-1995*. Hemisphere Initiatives, Cambridge, Massachusetts.
- CABESTERO, T. 1983a. *Revolucionarios por el Evangelio*. Desclée de Brouwer, Bilbao.
- , 1983b. *Ministros de Dios, Ministros del Pueblo*. Ministerio de Cultura, Managua.
- CABEZAS, O. 1982. *La montaña es algo más que una inmensa estepa verde*. Nueva Nicaragua, Managua.
- , 1988. «Organícense como quieran y para lo que quieran». *Revista Pensamiento Propio*, n.º 55: 45-48.
- CARDENAL, E. 2003 *La revolución perdida*. Managua: Anama.
- CARDENAL, F. 1994. *Sobre el debate sandinista*. INIEP, Managua.
- CARMAGNANI, M. 1982. *La grande illusione delle oligarchie. Stato e società in America Latina (1850-1930)*. Loescher, Turín.
- CARPENTIER, A. 1982. *El siglo de las luces*. Cátedra, Madrid.
- CARR, B. & ELLNER, S. (eds.) 1993. *The Latin American Left. From the Fall of Allende to Perestroika*. Westview Press, Boulder.
- CARRIÓN, L. 1986. «Los cristianos y el FSLN». *Revista Envío*, n.º 29.
- , 1991. «El carácter del Congreso del FSLN». *Revista L'Avispa*, n.º 5.
- CASALDÁLIGA, P. 1986. *Nicaragua. Combate y Profecía*. Ayuso-Misión Abierta, Madrid.
- CASAÚS, M. 1992. «La metamorfosis de las oligarquías centroamericanas». *Revista Mexicana de Sociología*, n.º3: 69-113.
- CASTELLS, M. 1983. *The City and the Grassroots*. Edward Arnold, Londres.
- CASTILLO RIVAS, D. 1983. «Modelos de acumulación, agricultura y agroindustria en Centroamérica», en: Castillo Rivas (ed.). *Centroamérica: Más allá de la crisis*. SIAP, México.
- CASTRO, R. y BARRY, D. 1990. «Por qué el FSLN perdió el vínculo con las masas». *Revista Pensamiento Propio*, n.º 72.
- CAVAROZZI, M. 1991. «Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina». *Revista de Estudios Políticos*, 74: 85-111.
- CERDAS, R. 1986. «Nicaragua: One Step Forward, Two Steps Back», en: Di Palma, G. y Whitehead, L. (eds.) 1986. *The Central American Impasse*. London.
- CHALLIAND, G. 1978. *Revolution in the Third World*. Penguin, Harmondsworth.

- CHAMORRO *et al.* 1980. *La caída del somocismo y la lucha sandinista en Nicaragua*. EDUCA, San José.
- CHRISTIAN, S. 1986. *Nicaragua. Revolución en la familia*. Planeta, Barcelona.
- CHOMSKY, N. 1988. *La quinta libertad. La intervención de los Estados Unidos en Centroamérica y la lucha por la paz*. Crítica, Barcelona.
- CHOMSKY, N. y HERMAN, E. S. 1990 *Los guardianes de la libertad*. Crítica, Barcelona.
- CIAV-OEA. 1998. *La desmovilización y reinserción de la resistencia nicaragüense*. OEA: Washington.
- CLAUSEWITZ, K. V. 1832: 1984. *De la guerra*. Labor, Barcelona.
- CLACSO. 1990. *Movimientos sociales y políticas: El desafío de la democracia en América Latina*. CES-CLACSO, Santiago.
- CLOSE, D. 1985. «The Nicaraguan Elections of 1984». *Electoral Studies*, vol. 4, n.º 2: 152-158.
- , 1989. «Responding to Low Intensity Conflict: Counterinsurgency in Nicaragua». *Paper* presentado el XIV LASA Congress, Mimeo.
- , 1994. «Are the 1993 Constitutional Reforms Nicaragua's Stabilizing Pact?». *Paper* presentado en el Congreso «15 anys de Canvi Política a Centre Amèrica», Barcelona, Mimeo.
- , 2005. *Los años de Doña Violeta. Historia de la transición política*. Lea Editorial, Managua.
- COHEN, J & ARATO, A. 1992. *Civil Society and Political Theory*. MIT Press, Cambridge.
- COLBURN, F. D. 1995. *Mi carro en Nicaragua. O de cómo conocí la tierra del güegüence*. Managua, Editorial Nueva Nicaragua.
- COLLIER, D. (ed.). 1979. *The New Authoritarianism in Latin America*. Princeton University Press.
- COLLIER, B. C. & COLLIER, D. 1991. *Shaping the Political Arena*. Princeton University Press, Princeton.
- COMAS, C. 1990. «L'Amèrica Llatina i la Nicaragua sandinista». *Revista Papers*, n.º 42: 69-84.
- COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA (CEPAL). 1989. *Notas para el estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1988. Nicaragua*. CEPAL, México.
- , 1994. «Nicaragua: An Economic Transition». LC/MEX, México.
- , 1995. «Nicaragua: Evolución económica durante 1994». LC/MEX, México.
- CORAGGIO, J. L. 1986. «La hegemonía del poder popular en la revolución Sandinista». *Revista Encuentro*, n.º 23.
- CORAGGIO, J. L y Torres, R. M. 1987. *Transición y crisis en Nicaragua*. DEI, San José.

- CORNAP (Corporaciones Nacionales del Sector Público). 1991. *Estrategia de privatización del gobierno de Nicaragua*. Managua.
- , 1992. *Proceso de privatización de empresas: Evaluación del impacto económico y social*. Managua.
- Crónica. 1990. «Perspectivas de los polos de desarrollo». *Revista Crítica*, n.º 2: 5-11.
- , 1990. «Luis Enrique Mejía propone: ¡Dirección Nacional, escuche!». *Revista Crítica*, n.º 2: 48-58.
- CRUZ, A. 1989. *Memory of Counter-Revolution -life with the Contras, the sandinistas and the CIA*. Doubleday, New York.
- CUADRA, P. A. et al, 1985. 1984. *Nicaragua*. Libro Libre, San José.
- DAHL, R. 1971. *Polyarchy, Participation and Opposition*. Yale University Press, New Haven.
- DÉBRAY, R. 1961. *La revolución dentro de la revolución*. Casa de las Américas, La Habana.
- DEERE, C. MARCHETTI, S. J. & REINHARDT, N. 1985. «The Worker-Peasant Alliance in the First Year of the Nicaraguan Agrarian Reform». *Latin American Perspective*, vol. 8, n.º 2: 40-74.
- DEUSTCH, K. 1961. «Implicaciones de la movilización social para la política del desarrollo», en Blondel et al. *El gobierno: estudios comparados*. Ed. Alianza, 1981, Madrid.
- DIAMOND, L.; LINZ, J. J. y LIPSET, S. M. (eds.). 1989. *Democracy in Developing Countries. Latin America*. Vol. 4, Lynne Rienner, Boulder.
- DI PALMA, G. 1988. «La consolidación democrática: Una visión minimalista». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 42: 67-92.
- DI PALMA, G. y WHITEHEAD, L. (eds.) 1986. *The Central American Impasse*. Croom Helm, London.
- DÍAZ-LACAYO, A. 1992. «El FSLN dos años después de la derrota electoral: Aún perdido en la tormenta». *Barricada Internacional*, n.º 120.
- DODSON, M. 1991. «Religion and Revolution», en: Walker, T. H. (ed.) 1991. *Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua*. Westview Press, Boulder.
- DORE, E. & WEEKS, J. 1992. *The Red and the Black. The Sandinistas and the Nicaraguan Revolution*. Institute of Latin American Studies, London.
- DOSIER AMBROSIO MOGORRÓN. 1992. «Nicaragua post-revolucionaria». Barcelona, Mimeo.
- DRAGO, T. 1988. *Centroamérica, una paz posible*. País-Aguilar, Madrid.
- DUNKERLEY, J. 1982. *The Long War: Dictatorship and Revolution in El Salvador*. Junction Books, London.

- , 1988. *Power in the Isthmus*. Verso, London
- , 1992. *Political Suicide in Latin America*. Verso, London.
- , 1993. *The Pacification of Central America*. Institute of Latin American Studies, London.
- DUNKERLEY, J. & SIEDER, R. 1994. *The Militar in central America: the Challenge of Transition*. Institute of Latin American Studies, London.
- DUVERGER, M. 1961. *Los partidos políticos*. FCE, México.
- ECKSTEIN, S. 1986. *Power and Popular Protest. Latin America Social Movements*. University of California Press, Berkeley.
- ELLACURÍA, I. 1985. «Respuestas políticas a los desafíos sociales centroamericanos», en: VV. AA. *Centroamérica en la encrucijada internacional de nuestro tiempo*. Ediciones de la Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba.
- Encuentro. 1980. «Primera proclama de gobierno de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional». *Revista Encuentro*, n.º 17.
- ENRÍQUEZ, L. 1991. *Harvesting Change. Labour and Agrarian Reform in Nicaragua. 1979-1990*. University of North Carolina Press, Chapel Hill.
- ENRÍQUEZ, L. et al. 1991. «Nicaragua: Reconciliation Awaiting Recovery. Politics, the Economy and the US Aid under Chamorro Government». WOLA, Washington.
- ESCOBAR, A. & ALVAREZ, S. (eds.). 1992. *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and democracy*. Westview Press, Boulder.
- EVANS, Trevor. 1995. «Ajuste estructural y sector público en Nicaragua», en: Evans, Trevor (ed.). *La transformación neoliberal del sector público: Ajuste estructural y sector público en Centroamérica y el Caribe*. CRIES/Latino Editores, Managua.
- EVERNINGHAM, M. & ROIG, E. 1995. *Central America: Balancing Development and Democracy in the Nineties*. ICAS, Washington.
- FELIU, L. 1993. *La política exterior de Drets Humans dels Estats Units*. Tesina de M. A. en Ciencia Política de la UAB, Barcelona.
- FERNÁNDEZ, A. 1994. «Mujeres y grupos domésticos: Estrategias de supervivencia en la Nicaragua post-sandinista». *Paper* presentado en el XVIII LASA Congress, Mimeo.
- FLAKOLL, D. 1992. «Controversia en el FSLN». *Barricada Internacional*, n.º 346.
- FLORA, J.L. y TORRES-RIVAS, E. 1989. «Sociology of Developing Societies: Historical Bases of Insurgency in Central America», en: Flora, J. L. y Torres-Rivas, E. (eds.). *Central America*. Macmillan Education, London.
- FMI (Fondo Monetario Internacional). 1991. *Nicaragua. Request for Stand-By Arrangement*. FMI, Washington DC.

- , 1994. *Nicaragua: Recent Economic Developments*. Washington.
- FNT (Frente Nacional de Trabajadores). 1991. «Posición del FNT ante el FMI y BM». Managua.
- FONSECA, C. 1981. *Bajo la bandera del sandinismo. Textos políticos*. Nueva Nicaragua, Managua.
- FONT, J. 1994. «Movimientos populares y cambio político en Centro América. Un impacto bidimensional». *Paper* presentado en XVIII LASA Congress, Mimeo.
- FONT, J. y GOMÀ, R. 1990. «Análisis de las elecciones nicaragüenses de 1990». Mimeo, Departamento de Ciencia Política de la UAB, Barcelona.
- , 1991. «El proceso de democratización en Nicaragua, actores, estrategias y conflicto». *Revista Afers Internacionals*, n.º 20: 49-75.
- , 1994. «Actores y cambio político en Centroamérica. Un marco de análisis». *Paper* presentado en las Jornadas de Debate «Quinze anys de canvi polític a Centreamèrica». UAB, Barcelona.
- FLOWERAKER, J. 1995. *Theorising Social Movements*. Pluto Press, Londres.
- FSLN. 1970. «Programa del Frente Sandinista de Liberación Nacional». *Revista Tricontinental*, n.º 18.
- , 1979. «Acuerdos de unidad del FSLN. Puntos básicos». *Revista Diálogo Social*, n.º 3.
- , 1982. *Habla la Vanguardia*. Departamento de Educación Política del FSLN, Managua.
- , 1982. *Estatutos del FSLN*. Mimeo.
- , 1991. *Estatutos del FSLN*. Mimeo.
- GALEANO, E. 1986. *Memorias del Fuego. El siglo del viento*. Siglo XXI, Madrid.
- GARCÍA MÁRQUEZ, G. 1993:1984. *El general en su laberinto*. RBA Editores, Barcelona.
- GERPE, M. y VINTRÓ, J. 1996. «Un análisis de las reformas a la Constitución de Nicaragua de 1987». Mimeo, Universidad de Barcelona, Barcelona.
- GILBERT, D. 1988. *Sandinistas*. Basil Blackwell, Cambridge.
- GIRARDI, G., FORCANO, B. y VIGIL, J. M. (eds.) 1987. *Nicaragua trinchera ideológica. Para una Teología de la Liberación desde Nicaragua*. Centro Ecuménico Antonio Valdivieso-López Ediciones, Salamanca.
- GODOY, V. 1992. «Nicaragua 1944-1984: Political Parties and Electoral Process», en: Goodman, LeoGrande, Mendelson (eds.). *Political Parties and democracy in Central America*. Westview Press, Boulder.
- GOMÀ, R. 1994. «De la Revolución al Neoliberalismo: Actores, Estrategias y Políticas Públicas». *Paper* presentado en XVIII LASA Congress, Mimeo.

- GONZÁLEZ, S. 1990. «Las propuestas teóricas sobre cambios de régimen y el caso nicaraguense: el sandinismo en el poder». Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Mimeo.
- , 1991. «La transición a la democracia en Nicaragua». *Revista de Estudios Políticos*, 74: 449-469.
- , 1992. *El sandinismo: Análisis de un cambio de régimen*. Tesis Doctoral. Ediciones de la Universidad Complutense de Madrid, Colección Tesis Doctorales n.º 42/92, Madrid.
- , «La consolidación de la democracia en Nicaragua, Fuerzas Armadas y Partidos Políticos en una democracia frágil». *Revista América Latina Hoy*, 4: 64-70.
- , 1994. «Los procesos de cambio político», en: Pastor, M. (ed.) *Fundamentos de Ciencia Política*. McGraw-Hill, Madrid.
- GOODMAN, L. W.; LEGRANDE, W. M.; FORMAN, J. M. (eds.) 1992. *Political Parties and democracy in Central America*. Westview Press, New Jersey.
- GORMAN, S. C. 1984. «Social Change and Political Revolution: The Case of Nicaragua», en: Ropp y Morris (eds.) 1984. *Central America: Crisis and Adaptation*. University of New Mexico Press, Albuquerque.
- GOROSTIAGA, X. 1984. «La experiencia de la crisis centroamericana». *Revista de Pensamiento Iberoamericano*, n.º 5.
- , 1987. «Economía mixta y revolución sandinista». *Revista Mientras Tanto*, n.º 32.
- , 1989. *El patrimonio internacional y los retos del sandinismo*. Cuadernos de Trabajo de HEGOA, n.º 2, Bilbao.
- GOULD, L. J. *To Leads as Equals. Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979*. North Carolina University Press, Chapel Hill.
- GRABENDORFF, W. et al. (ed.) 1985. *Political Change in Central America. Internal and External Dimensions*. Westview, Boulder.
- GREEN, G. 1984. *Descubriendo al general. Historia de un compromiso*. Plaza & Janés, Barcelona.
- HARNECKER, M. 1987. *Estudiantes, cristianos e indígenas en la revolución*. Siglo XXI, México.
- HARRIS, R. y VILAS, C. M. (comp.) 1985. *Liberación nacional, democracia popular y transformación económica*. ERA, México.
- HAUGAARD, L. 1991. «In and Out of Power: Dilemmas for Grassroots Organizing in Nicaragua». *Socialism and Democracy* 7/3.
- HELWEDGE, A. 1989. «Three Socialist Experiences in Latin America: Surviving US Economic Pressure». *Bulletin of Latin American Research*, vol. 8, n.º 2: 211-234.

- HIGLEY, J. y GUNTHER, R. (eds.) 1992. *Elites and democratization consolidation: Latin America and Southern Europe*. Cambridge University Press, Cambridge.
- HODGES, D.C. 1986. *Intellectual Origins of Nicaraguan Revolution*. University of Texas Press, Austin.
- HUMPHREYS, R. A. 1969. *Tradition and Revolution in Latin America*. Tinling & Co. Ltd., Liverpool.
- HUNTINGTON, S. 1984. «Will more Countries Be Democratic?». *Political Science Quarterly*, 1986: 2, 193-218.
- IBARRA, P. 1991. *Centroamérica. Conflicto y negociación*. Libros de la Catarata-HEGOA, Madrid.
- INSTITUTO DE ESTUDIOS NICARAGÜENSES (IEN). 1991. «La transición de los partidos políticos nicaragüenses en el período post-electoral. Febrero 1990-1991». Managua, Mimeo.
- INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL SANDINISMO (IES). 1983. *El sandinismo. Documentos básicos*. Vanguardia, Managua.
- INFORME SANFORD. 1989. *Pobreza, conflicto y esperanza: un momento crítico para Centroamérica*. Tecnos, Madrid.
- INVERNIZZI *et al.* 1986. *Sandinistas*. Vanguardia, Managua.
- KAMPWIRTH, K. 1995. «Social Policy in Nicaragua». *Paper* presentado en el XIX LASA Congress, Mimeo.
- KARL, T. L. 1990. «Dilemmas of Democratization in Latin America». *Comparative Politics*, n.º 23: 1-21.
- KARL, T. L. & SCHMITTER, P. 1988. «Modes of transition in South and Central America, South Europe and Eastern Europe». Department of Political Science Stanford University, Mimeo.
- KNIGHT, A. «Social Revolution: a Latin American Perspective». *Bulletin of Latin American Research*, vol. 9, n.º 2: 175-202.
- KORNBLUH, P. 1991. «The US Role in the Counterrevolution», en: Walker, T. H. (ed.) 1991. *Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua*. Westview Press, Boulder.
- KRUMWEIDE, H.-W. 1984. «Regimes and Revolution in Central America», en: Grabendorff *et al.* 1984. *Political Change in Central America: Internal and External Dimensions*. Westview Press, Boulder.
- LACAYO OYANGUREN, A. 2005. *La difícil transición nicaragüense. En el gobierno con doña Violeta*. Managua: Colección Cultural de Centro América.
- LAFEBER, W. 1993. *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*. W. W. Norton, NY.
- LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION (LASA), 1984. *The Electoral Process in Nicaragua. Domestic and International Influences*. LASA, Pittsburg.

- , 1990. *Electoral Democracy. Under International Pressure*. LASA, Pittsburg.
- LAWSON, S. 1993. «Conceptual Issues in the Comparative Study of Regime Change and Democratization». *Comparative Politics*, Vol. 25, n.º 2: 183-205.
- LEOGRANDE, L. W. 1992. «Political Parties and Postrevolutionary Politics in Nicaragua», en: Goodman, LeoGrande, Forman (eds.) 1992. *Political Parties and democracy in Central America*. Westview Press, Boulder.
- LEVINE, D. 1986. *Religion and Political Conflict in Latin America*. University of North Carolina Press, Chapel Hill.
- , 1988. «Assessing the Impacts of Liberation Theology in Latin America». *The Review of Politics*, n.º 50: 603-622.
- , 1990. «How Not to Understand Liberation Theology, Nicaragua or Both». *Journal of Inter American Studies and World Affaires*, n.º 32: 229-246.
- , 1992. *Popular Voices in Latin American Catholicism*. Princeton University Press, New Jersey.
- LIPHART, A. 1987. *Las democracias contemporáneas*. Ariel, Barcelona.
- , 1990. «The Southern European Examples of Democratization: Six Lessons for Latin America». *Government and Opposition*, Vol. 25, n.º 1: 68-83.
- LIPSET, S. M. y ROKKAN, S. 1967. «Cleavage Structures, party Systems, and Voter Alignments: An Introduction», en: Lipset y Rokkan (eds.) *Party System and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*. Free Press, NY.
- LINZ, J. J. 1975. «Totalitarian and Authoritarian Regimes», en: Greenstein, F. y Polsby, N. (eds.). *Handbook of Political Science*, vol. 3. Addison Wesley, Reading.
- LINZ, J. J. y STEPAN, A. (eds.) 1978. *The Breakdown of Democratic Regimes*. The John Hopkins University Press, Baltimore.
- LIPSET, S. M. 1960. *Political Man. The Social Bases of Politics*. Doubleday, New York.
- LISS, S. B. 1991. *Radical Thought in Central America*. Westview Press, Boulder.
- LÓPEZ, G. & STOHL, M. (eds.). 1987. *Liberalization and Redemocratization*. Greenwood Press, New York.
- LOZANO, L. 1983. *De Sandino al triunfo de la revolución*. Siglo XXI, México.
- , 1989. «Estados Unidos frente a Nicaragua». *Revista Síntesis*, n.º 8: 286-303.
- MALLOY, J. M. & SELIGSON, M. A. 1987. *Authoritarians and Democrats. Regime Transition in Latin America*. University of Pittsburg Press, Pittsburg.
- MAINWARING, S. 1989. *Transition to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical and Comparative Issues*. WP#130, The Hellen Kellog Institute for International Studies, Notre Dame.
- MAINWARING, S.; O'DONNELL, G. & VALENZUELA, J. S. 1992. *Issues in Democratic Consolidation*. Notre Dame University Press, Notre Dame.

- MARTÍ I PUIG, S. 1992. *El FSLN, del poder revolucionari a l'oposició parlamentària*. Memoria de licenciatura en Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.
- MARTÍNEZ, A. 1994. *Del Enfrentamiento a la negociación. Factores que determinaron el fin de la Guerra Civil por medio de la Negociación*. Tesina de Máster en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.
- MARTÍNEZ CUENCA, A. 1990. *Nicaragua: una década de retos*. Nueva Nicaragua, Managua.
- McCLINTOCK, M. 1985. *The American Connection. State, Terror and Popular Resistance in El Salvador*. Vol. 1. Zed Books, London.
- McCOY, J. 1991. «Notes on the Process of Democratic Consolidation in a Post-Revolutionary Context: From Bargaining to Social Concertation in Nicaragua». *Paper* presentado en LASA, XVI International Congress, mimeo.
- McDONALD, R. H. & RUHL, M. 1989. *Party Politics and Elections in Latin America*. Westview Press, Boulder.
- MILLETT, R. L. 1977. *Guardians of the Dynasty: A History of the U.S.-Created Guardia Nacional and the Somoza family*. Orbis Books, NY.
- MOLERO, M. 1988. *Nicaragua sandinista: del sueño a la realidad (1979-88)*. IEPALA-CRIES-Fundació Jaume Bofill, Madrid.
- MORLEY, M. & PETRAS, J. 1992. *Latin America in the Time of Cholera*. Routledge, London.
- MORLINO, L. 1985. *Cómo cambian los regímenes políticos*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- MONJÁRREZ, L. 1992. «Breve análisis sobre la crisis de poder en el seno del gobierno de Nicaragua (diferendo en la coalición UNO-Poder Ejecutivo-Poder Legislativo)». Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de León-UNAN, Mimeo.
- MONTGOMERY, T. S. 1982. *Revolution in El Salvador: Origins and Evolution*. Westview Press, Boulder.
- MONTEALEGRE, H. *et al.* 1990. «Programa de estabilización y ajuste estructural para Nicaragua, 1990-1993». Mimeo, Managua.
- MOORE, Jr. B. 1966. *Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord in the Making of the Modern World*. Beacon Press, Boston.
- NEIRA, Oscar y ACEVEDO, Rodolfo. 1992. *Nicaragua: Hiperinflación y desestabilización, análisis de la política económica, 1988 a 1991*. Cuadernos CRIES/21, Managua.
- NICARAGUA, REPÚBLICA DE. 1990. «Acuerdos de la concertación económica y social y la política exterior del gobierno». Managua.

- NORSWORTHY, K. & ROBINSON, W. 1987. *David and Goliath. Washington's War against Nicaragua*. Zed Books, London.
- NOHLEN, D. & LÓPEZ-PINTOR, R. 1992. «Government and Opposition facing Opening Elections: How was it in Nicaragua?». Instituto de Estudios Políticos de Heidelberg-Universidad Autónoma de Madrid, Mimeo.
- NOLAN, D. 1986. *La ideología sandinista y la revolución nicaragüense*. Ediciones 29, Barcelona.
- NÚÑEZ, O. 1987. *Transición y lucha de clases en Nicaragua, 1979-86*. Siglo XXI-CRIES, México.
- , 1990. «La derrota electoral del FSLN y las dos caras del poder». *Revista L'Avispa*, n.º 1.
- NÚÑEZ, *et al.* 1991. *La guerra en Nicaragua*. CIPRES-NORAD, Managua.
- O'DONNELL, G. 1973. *Modernization and Bureaucratic Authoritarianism*. Berkeley University Press, Berkeley.
- , 1992. «Transitions, Continuities and Paradoxes», en: Mainwaring, O'Donnell & Valenzuela (eds.) *Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective*. University of Notre Dame Press, Indiana.
- O'DONNELL, G. y SCHMITTER, P. C. 1988. *Transiciones desde un Gobierno Autoritario*. Paidós, Buenos Aires.
- O'KANE, T. 1990a. «The New Old Order». *NACLA*, vol. XXIV, n.º 1: 28-33.
- , 1990b. «Frenando la contrarrevolución». *Revista Pensamiento Propio*, n.º 76.
- , 1991. «Haciendo las microrevoluciones». *Revista Pensamiento Propio*, n.º 84.
- O'KANE, T. y KUAN, E. M. 1989. «Las opciones de Bush». *Revista Pensamiento Propio*, n.º 64.
- OQUIST, P. 1992. «The Sociopolitical Dynamics of Nicaraguan Elections». *Paper* presentado en XVII LASA Congress, Mimeo.
- ORTEGA, H. 1981. *Sobre la insurrección*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.
- ORTEGA, M. 1988. «Democracia y partidos políticos en Nicaragua». *Revista Pensamiento Iberoamericano*, n.º 14.
- PAIGE, J. M. 1975. *Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*. Free Press, NY.
- , 1989. «The Social Origins of Dictatorship, Democracy and Revolution in Central America». *Paper* presentado en el Annual Meeting of the American Sociological Association.
- PANEBIANCO, A. 1990. *Modelos de partido*. Editorial Alianza, Madrid.
- PASTOR, R. 1988. *Condemned to Repetition. The United States and Nicaragua*. Princeton University Press, New Jersey.

- PÉREZ BRIGNOLI, H. 1990. *Breve Historia de Centroamérica*. Alianza Editorial, Madrid.
- , 1993. *Historia general de Centroamérica. De la posguerra a la crisis*. Vol. 5. Comisión Quinto Centenario-FLACSO-Editorial Siruela, Madrid.
- PÉREZ BRIGNOLI, H. & BARRES, Y. 1983. «Growth and Crisis in the Central American Economies, 1950-1980». *Journal of Latin American Studies*, 15: 365-398.
- PEZZULLO, L. & PEZZULLO, R. 1993. *At the Fall of Somoza*. University of Pittsburg Press, Pittsburg.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 1994. «Statement for the Consultative Group Meeting on Nicaragua». PNUD, Paris.
- POMARES, G. 1979. «Dieciocho años de guerrilla sandinista». *Cuadernos del Tercer Mundo*, n.º 26, México.
- PORTANTIERO, C. 1989. *Perspectivas de las Ciencias Sociales en América Latina*. ICPS, Barcelona.
- POZAS, V. 1988. *La revolución sandinista (1979-1988)*. Editorial Revolución, Madrid.
- PRZEWORSKI, A. 1985. *Capitalism and Social Democracy*. Cambridge University Press, Cambridge.
- , 1988. «Capitalism, Democracy, Pacts: Revisted». *Paper* presentado en Conference on the micro-foundations on Democracy, Chicago, Mimeo.
- , 1991. *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge University Press, Cambridge.
- , 1992. «The Neoliberal Fallacy». *Journal of Democracy* 3/3.
- RAMIREZ, S. 1974. *Pensamiento vivo de Sandino*. EDUCA, San José.
- , 1990. «Nicaragua: Identidad y Transformación». *Revista Claves*, n.º4: 31-35.
- , 1991. *Nicaragua en el corazón*. Nueva Nicaragua, Managua.
- RANDALL, M. 1983. *Cristianos en la Revolución*. Nueva Nicaragua, Managua.
- REAGAN, R. 1983. *Central America: Defending Our Vital Interests*. Department of State, Bureau of Public Affairs. *Current Policy*, n.º 482, Washington.
- REEDING, A. A. 1991. «Governmental Institutions», en: Walker, T. H. (ed.) *Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua*. Westview Press, Boulder.
- REIMAN, E. 1987. *Yo fui un Contra. Historia de un «paladín de la libertad»*. Vanguardia, Managua.
- REMMER, K. L. 1991. «New Wine or Old Bottleneks? The Study of Latin American Democracies». *Comparative Politics*, July 1991: 479-495.
- RENZI *et al.* 1993. *¿Qué hace la mujer nicaragüense ante la crisis económica?* FIDEG, Managua.
- RICCIARDI, J. 1991. «Economic Policy», en: Walker, T. H. (ed.) 1991. *Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua*. Westview Press, Boulder.

- RIEKE, T. 1990. «The World of Good and Nicaragua». *Ann Arbour Observer*, noviembre.
- ROBINSON, W. I. & NORSWORTHY, K. 1987. *David and Goliath. Washington War against Nicaragua*. Zed Books, NY.
- ROITMAN, M. y ZILUAGA, T. 1990. «Elecciones y democracia en Nicaragua (1979-1990)». *Revista Política y Sociedad*, n.º 6/7: 25-38.
- ROKKAN, S. 1975. «Dimensions of State Formation and Nation-Building: A Possible Paradigm for Research on Variations within Europe», en: Tilly (ed.). *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton University Press, Princeton.
- , 1978. *Citizens, Elections, and Parties*. David Mckay, NY.
- ROSENBERG, M. B. 1987. «Political Obstacles to Democracy in Central America», en: Malloy, J. M. & Seligson, M. A. (eds.). *Authoritarians and Democrats. Regime Transition in Latin America*. University of Pittsburg Press, Pittsburg.
- ROUQUIÉ, A. 1984. *El Estado militar en América Latina*. Siglo XXI, México.
- ROUQUIÉ, A. (comp.) 1991. *Les forces politiques en Amérique Centrale*. Karthala, París.
- ROXBOROUGH, I. 1992. «Neoliberalism in Latin America: Limits and Alternatives». *Third World Quarterly* 13/3.
- RUIZ, H. 1980. «La montaña era como un crisol donde se forjaban los héroes». *Revista Nicarauac*, n.º 1.
- RUSHDIE, S. 1987. *La sonrisa del jaguar. Un viaje a Nicaragua*. Alfaguara, Madrid.
- SABALLOS, A. 1990. *Las elecciones 90. Mis preguntas*. CIRA, Managua.
- SAINT EXUPÉRY, A. 1946:1992. *El Petit Princep*. EMECÉ, Barcelona.
- SANABRIA, O. y SANABRIA, E. 1986. *Nicaragua: diagnóstico de una traición. El FSLN en el poder*. Plaza & Janés, Barcelona.
- SARTORI, G. 1987. *Partidos y Sistemas de Partidos*. Alianza Editorial, Madrid.
- SCHULZ, D. E. y GRAHAM, D. H. (eds.) 1984. *Revolution and Counterrevolution in Central America and the Caribbean*. Westview Press, Boulder.
- SCOTT, J. 1976. *Moral Economy of the Peasant*. Yale University Press, New Haven.
- SELBIN, E. 1993. *Modern Latin American Revolutions*. Westview Press, Boulder.
- SELIGSON, M. A. 1987. «Development, Democratization and Decay: Central America at the Crossroad», en: Malloy, J. M. & Seligson, M. A. (eds.) *Authoritarians and Democrats. Regime Transition in Latin America*. University of Pittsburg Press, Pittsburg.
- SELSER, G. 1974. *Sandino, general de hombres libres*. EDUCA, San José.
- SERRA, L. 1988. «Organizaciones populares: entre las bases y el poder». *Pensamiento Propio*, n.º 56: 42-45.

- , 1989. «Limitada por la guerra; pendiente a futuro. Participación y organización popular en Nicaragua». *Revista Nueva Sociedad*, n.º 104: 134-143.
- , 1991. «The Grass-Rots Organizations», en: Walker, T. H. (ed.) *Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua*. Westview Press, Boulder.
- , 1993. «Democracy in Times of War and Socialist Crisis. Reflections stemming from the Sandinista Revolution». *Latin American Perspective*, Issue 77, vol. 20, n.º 2: 21-44.
- SKOCPOL, T. 1979. *State and Social Revolution*. Cambridge University Press, Cambridge.
- SLATER, D. 1991. «New Social Movements and Old Political Questions. Rethinking State-Society Relations in Latin American Development». *International Journal of Political Economy* 21/1.
- SMITH, P. H. 1991. «Crisis and Democracy in Latin America». *World Politics* 12: 608: 634.
- SMITH, H. 1993. *Nicaragua. Self-determination and Survival*. Pluto Press, Boulder-Londres.
- SNYDER, S. 1992. «Explaining Transitions from Neopatrimonial Dictatorships». *Comparative Politics*, vol. 24, n.º 4: 379-399.
- SOJO, C. 1991. «Nicaragua en el ocaso del Reaganismo», en: Aguilera *et al. Centroamérica de Bush a Reagan*, FLACSO, San José.
- SOLÍS, P. 1993. «Welfare in Nicaragua: The Somocista and Sandinista Experiences Compared», en: Abelc, C. & Lewis, C. M. (eds.) *Welfare, Poverty and Development in Latin America*. The Macmillan Press, London.
- SOLÓRZANO, M. 1983. «Centroamérica: Democracias de fachada». Ponencia presentada en el XV Congreso latinoamericano de Sociología, Managua, Mimeo.
- SOTELO, I. 1990. «La lección de Nicaragua». *Revista Claves*, n.º4: 36-46.
- SOTO, R. 1991. «Central American popular movements: Challenges and Prospects». *El Taller Reflexión*, vol. 1, n.º 2: 52-66.
- SPALDING, R. J. (ed.) 1987. *The Political Economy of Revolutionary Nicaragua*. Allen & Unwin, Boston.
- , 1991. «Capitalism and Revolution: State-Private Sector Relations in Revolutionary Nicaragua (1979-1990)». *Paper* presentado en el XVI LASA Congress, Mimeo.
- , 1991. «Capitalism and Revolution: State-Private sector Relations in Revolutionary Nicaragua». *Paper* presentado en XVI LASA Congress, Mimeo.
- SPOOR, M. 1994. «Issues for the State and Market: From Interventionism to Deregulation of Food Markets in Nicaragua». *World Development*, 22/4.
- STAHLER-SHOLK, R. 1987. «Building Democracy in Nicaragua», en: Malloy, J. M. & Seligson, M. A. (eds.) *Authoritarians and Democrats. Regime Transition in*

- Latin America*. University of Pittsburg Press, Pittsburg.
- , 1991. «Economic Stabilization in Nicaragua and the Sandinista Project. 1979-1990». *Paper* presentado en XVI LASA Congress, Mimeo.
 - , 1994. «El ajuste neoliberal y sus opciones: la respuesta del movimiento sindical nicaragüense». *Revista Mexicana de Sociología*, 3: 59-88.
 - , 1995. «Breaking the Mold: Economic Orthodoxy and the Politics of Resistance in Nicaragua». *Paper* presentado en XIX LASA Congress.
 - STAHLER-SHOLK, R. y LÓPEZ, C. 1989. *La política económica de Nicaragua. 1979-1989*. CRIES, Managua.
 - STÉPHANNE, R. 1987. *Les Institutions politiques dans l'État révolutionnaire du Nicaragua*. Memoria de licenciatura en Teoría Política, Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Bruselas.
 - STONE, S. 1990. *The Heritage of the Conquistadores. Ruling Classes in Central America from the Conquest to the Sandinistas*. Nebraska University Press, Lincoln.
 - THOMAS, C. 1984. *The Rise of the Authoritarian State in Peripheral Societies*. *Monthly Review*.
 - THOME, J. & KAIMOWITZ, D. 1985. «Agrarian Reform», en: Walker, T. (ed.) 1985. *Nicaragua: the First Five Years*. Estview Press, Boulder.
 - TILLY, Ch. 1975. *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton University Press, Princeton.
 - TINOCO, V. H. 1989. *Conflicto y paz en Centroamérica*. Editorial Mestiza, México.
 - TIRADO, V. 1986. «Nuestro socialismo». *Revista Nicaragüense de Ciencias Sociales*, n.º 1.
 - TORRES DEL MORAL, A. 1991. «Elecciones y transición política en Nicaragua». *Revista de Derecho Político de la UNED*, n.º 32.
 - TORRES-RIVAS, E. 1983. *Crisis de poder en Centroamérica*. EDUCA, San José.
 - , 1988. «Centroamérica: Democracia de Baja Intensidad». *Revista Pensamiento Iberoamericano*, n.º 14.
 - , 1989. *Repression and Resistance. The Struggle for Democracy in Central America*. Westview Press, Boulder.
 - , 1990. «La recomposición del orden: elecciones en Centroamérica». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n.º 50.
 - , 1991a. «Democracia electoral y sus dificultades en América Latina», en: López Maya, M. (ed.) *Desarrollo y Democracia*. Nueva Sociedad, Caracas.
 - , 1991b. «Centroamérica: la transición autoritaria hacia la democracia». *Revista de Estudios Políticos*, n.º 74: 431-447.
 - , 1994. «La gobernabilidad centroamericana en los noventa». *Paper* presentado en

- el Congreso «15 anys de canvi Polític a Amèrica Central», Barcelona, Mimeo.
- TORRES-RIVAS, E. (ed) 1993. *Historia general de Centroamérica. La Historia inmediata*. Vol. 6. Comisión Quinto Centenario-FLACSO-Editorial Siruela, Madrid.
- TOURAINÉ, A. 1988. *The Retour of the Actor: Social Theory in Post-Industrial Society*. University of Minnesota Press, Minneapolis.
- , 1989. *América Latina. Política y Sociedad*. Espasa Calpe, Madrid.
- UNO (Unión Nacional Opositora). 1990. «Agenda para el rescate de la economía nacional». Managua.
- USAID (US Agency for International Development). 1995. *Retos para el desarrollo de una sociedad estable*. USAID, Washington.
- US Department of State. 1985. *Sandinista Intervention in Central America*. US Department of State, Bureau of Public Affairs. Special Report n.º 132, Washington.
- , 1986. *Comandante Bayardo Arce's Secret Speech before the Nicaraguan Socialist Party*. US Department of State, Bureau of Inter-American Affairs, Coordinator of Public Diplomacy for Latin American and Caribbean, Washington.
- VV. AA. 1981. *El Salvador. Central America in the New Cold War*. Grove Press, Inc., New York.
- VV. AA. 1984. *Central America. Opposing Viewpoints*. Greenhoven Press, St. Paul.
- VV. AA. 1989. *Democracia y Revolución*. CEDEL, Managua.
- VV. AA. 1990. *Elecciones en Nicaragua*. Revolución, Madrid.
- VAYSSIERE, P. 1988. *Nicaragua: les contradictions du sandinisme*. CNRS, Toulouse.
- VARGAS, M. 1990. «Los hombres de la presidenta». *Revista Crítica*, n.º 2.
- VARGAS, O. R. 1990. *Partidos políticos y la búsqueda de un nuevo modelo*. CONSA-ECOTEXTURA, Managua.
- , 2004. *25 años después (1979-2004) De los comandantes a los banqueros*. CEREN, Managua.
- VICKERS, G. R. 1990. «A Spider's Web». *NACLA*, vol. XXIV, n.º 1: 19-27.
- VICKERS, G. R. & SPENCE, J. 1992. «Nicaragua: Two Years after the Fall». *World Policy Journal* 3: 533-562.
- VILAS, C. M. 1980. «Insurgencia popular y revoluciones sociales: en torno a la revolución sandinista». *Revista Mexicana de Sociología*, n.º 3: 185-209.
- , 1983. «Democracia popular y participación obrera en la Revolución Sandinista». *Revista Estudios Sociales Centroamericanos*, n.º 35: 95-138.
- , 1984. *Perfiles de la Revolución sandinista*. Ediciones Casa de las Américas, La Habana.

- , 1986. «Nicaragua: las organizaciones de masas. Problemática actual y perspectivas». *Revista Nueva Sociedad*, n.º 86: 41-48.
- , 1987. «¿Socialismo en Nicaragua?». *Revista Nueva Sociedad*, n.º 91: 159-175.
- , 1988. «War and Revolution in Nicaragua. The impact of the US counter-revolutionary war on the Sandinista strategies of revolutionary transition», en: Milliband, R. (ed.) *The Socialist Register*. Merlin Press, London.
- , 1990a. «Especulaciones sobre una sorpresa: las elecciones en Nicaragua». *Revista de Ciencias Sociales Desarrollo Económico*, n.º 118: 250-276, Buenos Aires.
- , 1990b. «Después de la revolución: Centroamérica en la década de 1990». Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, CIIH-UNAM, Mimeo.
- , 1990c. «Nicaragua después de las elecciones: los primeros cien días». Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, CIIH-UNAM, Mimeo.
- , 1990d. «What Went Wrong?». *NACLA*, vol. XXIV, n.º 1: 8-18.
- , 1991a. «Factores exógenos y elecciones en la democratización de Nicaragua». *Paper* presentado en LASA, XVI International Congress.
- , 1991b. «Una patria para todos: Revolución, Desarrollo y Democracia en Nicaragua». *Paper* presentado en el Seminario «La democracia en América Latina: Actualidad y perspectivas», Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- , 1991c. «El debate interno sandinista». Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, CIIH-UNAM, Mimeo.
- , 1992a. «Después de la Revolución: Centroamérica en la década de 1990». *Revista Mexicana de Sociología* 3/92: 3-44.
- , 1992b. «Asuntos de familia: Clases, linaje y política en la Nicaragua contemporánea». *Revista Polémica*, n.º 18: 6-30.
- , 1994a. «Changing Patterns of State-Market-Society Relations in Latin America». *Paper* presentado en XVIII LASA Congress, Mimeo.
- , 1994b. «Betwen Adan Smith and Thomas Hobbes: State, Market and Privatization in Latin America». *Paper* presentado en XVIII LASA Congress, Mimeo.
- , 1994c. «Democratización y Gobernabilidad en un escenario postrevolucionario: Centroamérica». Ponencia presentada en el IX Congreso Centroamericano de Sociología.
- , 1995. «Family Networks and Democracy in Central American Politics». *Paper* presentado en XIX LASA Congress, Mimeo.
- , 2005. *El legado de una década*. Managua: Lea Grupo editorial
- VINTRÓ, J. 1987. «La constitución nicaragüense y la tradición liberal-democrática». *Revista Parlamentaria Iberoamericana*, n.º 3: 1-34.
- WALKER, T. H. (ed.) 1985. *Nicaragua: the First Five Years*. Estview Press, Boulder.

- , 1991. *Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua*. Westview Press, Boulder.
- WALTER, K. 1993. *The Somocista Regime*. North Carolina University Press, Chapel Hill.
- WEEKS, J. 1986. «Land, Labour and Despotism in Central America», en Di Palma y Whitehead (eds.) *Central American Impasse*. St. Martin's Press, NY.
- WHEELOCK, J. 1976. *Imperialismo y dictadura: Crisis de una formación social*. Siglo Veintiuno Editores, México.
- , 1985. *El gran desafío*. Nueva Nicaragua, Managua.
- WHITEHEAD, L. 1983. «Explaining Washington's Central American Policies». *Journal of Latin American Studies*, n.º 15: 321-363.
- , 1992. «The Alternatives to "Liberal Democracy": on a Latin American Perspective». *Political Studies*, XL, Special Issue: 146-159.
- WICKHAM-CROWLEY, T. P. 1993. *Guerrillas and Revolution in Latin America: A comparative study of Insurgents and Regimes since 1956*. Princeton University Press, New Jersey.
- WILLIAMS, H. 1991. «The Social Programs», en: Walker, T. H. (ed.) 1991. *Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua*. Westview Press, Boulder.
- WILLIAMS, P. J. 1994. «Dual Transitions from Authoritarian Rule. Popular and Electoral Democracy in Nicaragua». *Comparative Politics*, vol. 26, n.º 2: 169-185.
- YEYES, E. *La Contra. Una guerra sucia*. Ediciones B, Barcelona.
- ZAMPAGLIONE, H. 1992. *Bajo los volcanes*. Editorial Empuries-INFOPAL, Barcelona.

■ PUBLICACIONES PERIÓDICAS

- Barricada*, Managua
- Barricada Internacional (BI)*, Barcelona
- Bohemia*, La Habana
- Claves*, Madrid
- Crítica*, Managua
- Diálogo Social*, Panamá
- El País*, Madrid
- Encuentro*, Managua
- Envío*, Managua
- L'Avispa*, Managua
- La Prensa*, Managua

- La Vanguardia*, Barcelona
- Nueva Sociedad*, Caracas
- Nuevo Diario*, Managua
- Pensamiento Iberoamericano*, Madrid
- Pensamiento Propio*, Managua

PARTE 2

- ALEMÁN, E. *et al.* 1991. *Revolución, ajuste económico y cooperativismo agrario en Nicaragua. 1979-1991*. Managua, UNAN.
- AMERICAS WATCH 1986. *Human Rights in Nicaragua: 1985-1986*. New York, Americas Watch.
- , 1987. *Human Rights in Nicaragua: 1986*. New York, Americas Watch.
- , 1990. *Nicaragua: A Human Rights Chronology, July 1979-July 1989*. New York, Americas Watch.
- AMPIÉ, S. *et al.* 1990. *Cooperación y subordinación en las familias campesinas*. Managua, CIPRES.
- ATC 1980. *Pequeño vocabulario de la Reforma Agraria*. Managua, MIDA-INRA.
- AUSTIN, J. & FOX, R. 1985. «Food Policy», en Walker, T. *Nicaragua. The First Five Years*. New York, Praeger.
- AYMAND, M. 1983. «Autoconsumo y mercados: ¿Chayanov, Labrousse o Le Roy Ladrurie?». Mimeo.
- AZNAR, P. *et al.* 1989. «Ideología campesina: los desplazados de guerra de Nueva Guinea». *Envío* 37/38.
- BARRY, D. & SERRA, L. 1989. *Diagnóstico nacional de Nicaragua sobre refugiados, repatriados y población desplazada*. Managua, CRIES.
- BASTIANSEN, J. 1991. *Peasants & Economic development: A case study on Nicaragua*. Antwerpen, PhD Thesis, U. of Antwerpen.
- BATAILLON, G. 1999, *forthcoming*. «Un balance de los actores políticos de la Costa Atlántica nicaragüense». Paper presented in the Workshop *Nicaragua: L'heure des bilans*. Paris, La Press de l'EHHSS.

- BAUMEISTER, E. 1983. «Conceptualización teórica y los análisis sobre el desarrollo del capitalismo en el campo y la formación de su estructura de clase». *Estudios Sociales Centroamericanos*, 36.
- , 1984. *Un balance del proceso de reforma agraria en Nicaragua*. Amsterdam, CEDLA.
- , 1985. «Estructuras productivas y Reforma Agraria en Nicaragua». *Investigación Económica*, 173.
- , 1987. *Tendencias de la agricultura centroamericana en los años 80*. San José, FLACSO.
- , 1988a. «Tres condicionantes político-ideológicos en la formación de las políticas agrícolas en Nicaragua». *Boletín Socio-Económico*, 7.
- , 1988b. «El problema agrario y los sujetos del desarrollo nicaragüense». *Debate Agrario*, 87.
- , 1988c. «Debate en la política agropecuaria: Desarrollistas y Campesinistas». *Pensamiento Propio*, 52.
- , 1989. «El problema agrario y los sujetos del desarrollo nicaragüense», en: Ruben y De Groot (eds.): *El debate sobre la reforma agraria en Nicaragua*. Managua, INIES-ECS.
- , 1991. «Agrarian Reform», en: Walker, T. H. (ed.): *Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua*. Boulder, Westview Press.
- , 1998. *Estructura y reforma agraria en Nicaragua (1979-1989)*. Managua, CDR-ULA.
- BAUMEISTER, E. y NEIRA, O. 1987. «La conformación de la economía mixta: estructura de clases y política estatal en la transición nicaragüense», en: Núñez et al.: *La transición difícil*. Managua, Vanguardia.
- BENDAÑA, C. 1991. *La guerra campesina*. Managua, CEI-EARIES.
- BIONDI-MORRA, B. 1990. *Revolución y política alimentaria. Un análisis crítico de Nicaragua*. México D.F., SXXI/CRIS.
- BLOOKLAND, K. 1989. «Participación campesina en el programa de estabilización y ajuste económico en Nicaragua». *Encuentro* 37/38.
- , 1992. *Participación campesina en el desarrollo económico. La UNAG durante la Revolución Sandinista*. Doetinchem, Ed. Paulo Freire Stichting.
- BOURDIEU, P. 1988. «De la regla a la estrategia». *Cosas Dichas*, 18.
- BROCKETT, C. D. 1988. *Land, Power, and Poverty: Agrarian Transformation and Political Conflict in central America*. Boston, Unwin Hyman.
- BUGAZSKI, J. 1990. *Sandinista Communism and Rural Nicaragua*. New York: Praeger.
- BULLOVEN, H. P. 1989. «Tierras comunales y conflicto en las regiones Atlánticas», en: Ruben y Groot: *El debate sobre la reforma agraria en Nicaragua*. Managua, INIES-ECS.

- BULMER-THOMAS, V. 1987. *The Political Economy of Central America since 1920*. Cambridge, Cambridge University Press.
- CABALLERO, J. M. 1982. *Notas sobre la estrategia nacional de desarrollo cooperativo*. Managua, Misión FIDA.
- CALVA, J. L. 1982. *Los campesinos y su devenir en la economía de mercado*. México D.F.: S XXI.
- CARDENAL, G. 1987. «La Reforma Agraria Sandinista». Managua, Ponencia presentada en el III Congreso Nicaragüense de Ciencias Sociales.
- CERRATO, M. 1988. *L'État et cooperatives agraires au Nicaragua*. Louvaine-la-Neuve, Memoire Maitrise en Sociologie, Université Catholique de Louvaine.
- CHAYANOV, V. A. (1927) 1966. *Chayanov on the Theory of Peasant Economy*. Itwin, Thorner-Smith & Kerblay.
- CHOMSKY, N. 1988. *La quinta libertad. La intervención de los Estados Unidos en Centroamérica y la lucha por la paz*. Barcelona, Crítica.
- CIAV-OEA (Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos) 1999. *La desmovilización y reinserción de la Resistencia Nicaragüense*. Washington, OEA.
- CIERA 1982. *Tres años de reforma agraria*. Managua, CIERA.
- , 1983. *Informe para la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural*. Managua, CIERA.
- , 1984a. *Nicaragua: ... Y por eso defendemos la frontera. Historia agraria de las Segovias Occidentales*. CIERA, Managua.
- , 1984b. *La democracia participativa en Nicaragua*. CIERA, Managua.
- , 1985. *El movimiento campesino en Matiguás. Formas organizativas y líneas de masas en la Revolución Popular Sandinista*. Managua, Mimeo.
- , 1985. *Estudio sobre las Cooperativas de producción*. Managua, CIERA.
- , 1986. *Estudio sobre las Cooperativas de Créditos y Servicios*. Managua, CIERA.
- , 1989a. *Estrategia y políticas*. Managua, Col. 10 años de Reforma Agraria, vol. 1. CIERA.
- , 1989b. *Sistema alimentario*. Managua, Col. 10 años de Reforma Agraria, vol. 2. CIERA.
- , 1989c. *Formación y participación*. Managua, Col. 10 años de Reforma Agraria, vol. 3. CIERA.
- , 1989d. *Economía campesina*. Managua, Col. 10 años de Reforma Agraria, vol. 4. CIERA.
- , 1989e. *El movimiento campesino en el sector agropecuario*. Managua, Col. 10 años de Reforma Agraria, vol. 5. CIERA.
- , 1989f. *Participación y organización popular en el campo*. Managua, Col. 10 años

- de Reforma Agraria, vol. 6. CIERA.
- , 1989g. *Mujer y transformación en la vida rural*. Managua, Col. 10 años de Reforma Agraria, vol. 7. CIERA.
 - , 1989h. *Marco jurídico de la Reforma Agraria*. Managua, Col. 10 años de Reforma Agraria, vol. 8. CIERA.
 - , 1989i. *Cifras y referencias de la Reforma Agraria*. Managua, Col. 10 años de Reforma Agraria, vol. 9. CIERA.
 - , (s.f.). «Dos pasos atrás, dos y medio adelante. Reflexiones sobre la política agraria y militar de la RPS». Managua, Mimeo.
 - COLBURN, F. 1986. *Post-Revolutionary Nicaragua: State, Class, and the Dilemmas of Agrarian Policy*. Berkley, University of California Press.
 - , 1989. *Everyday Forms of Peasant Resistance*. Armonk, M.E. Sharpe.
 - COLLINS, J. 1986. *Tierra y subsistencia en la Nueva Nicaragua*. México D.F., SXXI/IFDP.
 - DANNER, M. 1994. *The Massacre at El Mozote*. New York, Vintage.
 - DEERE, C. D. 1981. «Nicaraguan Agricultural Policy». *Cambridge Journal of Economics*, 5.
 - DEERE, C. D. & MARCHETTI, P. 1985. «The Peasantry and the Development of Sandinista Agrarian Policy». *Latin American Research Review*, 20/3.
 - DEERE, C. D., MARCHETTI, P. & REINHARDT, N. 1985. «The Worker-Peasant Alliance in the First Year of the Nicaraguan Agrarian Reform». *Latin American Perspective*, 8/2.
 - DORE, E. 1990. «The Great Grain Dilema. Peasants & State Policy in Revolutionary Nicaragua». *Peasant Studies*, 17/2.
 - DORE, E. & WEEKS, J. 1992. *The Red and the Black. The Sandinistas and the Nicaraguan Revolution*. London, Institute of Latin American Studies.
 - ENRÍQUEZ, L. 1991. *Harvesting Change. Labour and Agrarian Reform in Nicaragua. 1979-1990*. Chapel Hill, University of North Carolina Press.
 - , 1992. «La Reforma Agraria en Nicaragua: Pasado y futuro», en: Vilas, C. M. *Democracia emergente en Centroamérica*. México D.F., UNAM.
 - FITZGERALD, J. 1985. «Agrarian Reform as a Model of Accumulation: the Case of Nicaragua since 1979», en: Saith (ed.): *The Agrarian Question in Socialist Transition*. London, Cass.
 - , 1988. «Problems in financing a Revolution: Accumulation, Defence and Income Distribution in Nicaragua 1979-1986», en: Fitzgerald & Vos (eds.): *Financing Economic Development: a Structuralist Approach to Monetary Policy*. London, Gower.
 - , 1989. «An Evaluation of the Economic Cost of US Agression against Nicaragua»,

- en: Spalding (ed.): *The Political Economy of Revolutionary Nicaragua*. New York, Allen and Unwin.
- FSLN (1969) 1981. *Programa del Frente Sandinista de Liberación Nacional*. Managua, DPEP-FSLN.
 - GILBERT, D. 1988. *Sandinistas*. Cambridge, Basil Blackwell.
 - GILBERT, D. & BLOCK, P. (eds.) 1990. *Sandinistas: Key Documents*. New York, Cornell University Press-Latin American Studies Program.
 - GONZÁLEZ CASADO, A. 2004. *Experiencias populares y prácticas en la revolución sandinista. Nicaragua 1979-1990*. Tesis doctoral, Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
 - GOODWIN, J. 1994. «Toward a new sociology of revolutions». *Theory and Society*, 23.
 - HALE, Ch. 1994. *Resistance and Contradiction: Miskitu Indians and the State, 1894-1987*. Stanford, Stanford University Press.
 - HORTON, L. 1998. *Peasants in Arms. War and Peace in the Mountains of Nicaragua, 1979-1994*. Athens, Ohio University Centre for International Studies.
 - HOUTARD, F. y LEMERCIENIER, G. 1988. *Campesinos y cultura. Análisis de los perfiles culturales de una población campesina en Nicaragua*. Managua, UCA/Lovaine-la-Neuve.
 - , 1992. *El campesino como actor. Sociología de una comarca de Nicaragua: el Comején*. Managua, Nicarao.
 - HUIZIER, G. 1973. *El potencial revolucionario de los campesinos en América Latina*. México, SXXI.
 - IES-IHN 1987. *Discursos de los Comandantes de la Revolución*. Managua, Mimeo.
 - JANVRY, A. 1981. *The Agrarian question and Reformism in Latin America*. Baltimore, The John Hopkins U. P.
 - KAIMOWITZ, A. 1986. «Nicaraguan Debates on Agrarian Structure». *Journal of Peasant Studies*, 14/1.
 - KELLER, F. 1986. *Wiwilí 1980: Monografía de un municipio nicaragüense en cambio*. Frankfurt am Main, Vervuert.
 - KLEITERP, N. 1988. «El modelo de acumulación: un problema de balances. El caso de Nicaragua», en: Ruben y Groot (eds.): *El debate sobre la reforma agraria en Nicaragua*. Managua, INIES-ECS.
 - LANDSBERGERGER, H. 1978. *Rebelión campesina y cambio social*. Barcelona, Crítica.
 - LE BOT, G. 1993. *La guerra en tierras mayas*. México, FCE.
 - LUCIAK, I. A. 1987. «Popular Democracy in the New Nicaragua: The Case of Rural Mass Organization». *Comparative Politics*, 20/1.

- MARCHETTI, P. 1986. «War, Popular Participation and transition to Socialism», en: Deere & Coraggio (eds.): *Transition and Development: Problems of Third World Socialism*. New York, Monthly Review Press.
- , 1989. «Semejanzas y diferencias en dos debates sobre el campesinado, la economía mixta y la vía al socialismo». *Encuentro* 37-38.
- MARTÍ, S. 1997a. *Nicaragua 1977-1996: La Revolución Enredada. Un análisis de la realidad política desde la insurrección hasta las inciertas elecciones de 1996*. Madrid, Catarata-Cooperacció.
- , 1997b. *Revoluciones, rebeliones y asonadas. Transformación social y violencia política en Nicaragua, 1961-1993*. Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.
- MARTÍNEZ, P. 1993. «Peasant Policy Within the Nicaraguan Agrarian Reform. 1979-1989». *World Development*, 21/3.
- MARX, K. 1869/1985. *18 de brumario de Luís Bonaparte*. Madrid, Ariel.
- MENDOZA, O. et al. 1992. *Nicaragua. Evolución de la estructura agraria, 1960-1985*. San José, CSUCA/CDR-ULA.
- MICOIN 1984. *ABC del abastecimiento. Todo para los frentes de guerra, todo para los combatientes*. Managua, MICOIN.
- MIDINRA 1980. *Diagnóstico socio-económico del sector agropecuario. Boaco*. Managua, CIERA.
- , 1980a. *Diagnóstico socio-económico del sector agropecuario. Matagalpa*. Managua, CIERA.
- , 1980b. *Diagnóstico socio-económico del sector agropecuario. Jinotega*. Managua, CIERA.
- , 1980c. *La estrategia económica sandinista. 1980-1984*. Managua, Mimeo.
- , 1980d. *Marco estratégico del desarrollo agropecuario*. Managua, MIDINRA.
- , 1982a. *Desarrollo y Reforma Agraria*. Managua, MIDINRA.
- , 1982b. *Tres años de Reforma Agraria*. Managua, CIERA.
- , 1983a. *Informe de Nicaragua a la FAO*. Managua, CIERA.
- , 1983b. *Política agropecuaria de Nicaragua*. Managua, MIDINRA.
- , 1983c. *Marco estratégico de desarrollo agropecuario*. Managua, MIDINRA.
- , 1984. *Resultados 1983. Plan de trabajo 1984*. Managua, CIERA.
- , 1985. *Plan de trabajo: Balance y Perspectivas, 1985*. Managua, MIDINRA.
- , 1986. *La Dirección Nacional y las Organizaciones Campesinas*. Managua, Tierra Arada.
- , 1987a. *Sobre la gestión del Estado para la atención del campesinado y al movimiento cooperativo*. Managua, MIDINRA.
- , 1987b. *Diagnóstico Región V*. Managua, MIDINRA.

- , 1987c. *Inventario nacional de maquinaria e implementos agrícolas*. Managua, MIDINRA.
- , 1987d. *Evaluación de la red de distribución en el campo*. Managua, MIDINRA.
- MIGDAL, J. 1974. *Peasants, Politics and Revolution: Pressure Toward Political and Social Change in the Third World*. Princeton, Princeton University Press.
- MIPLAN 1980. *Qué es el Plan 80*. Managua, MIPLAN.
- , 1981. *Programa económico de austeridad y eficiencia*. Managua, MIPLAN.
- MOORE, Jr. B. 1966. *Social Origins of Dictatorships and Democracy. Lord in the Making of Modern World*. Boston, Beacon Press.
- NIETSCHMANN, B. 1989. *The Unknown War: The Miskito Nation, Nicaragua and the United States*. New York, Freedom House.
- NITLAPÁN 1993. *El campesino ninguneado. Sistemas de producción y sectores sociales en el agro de Nicaragua*. Managua, Mimeo.
- NÚÑEZ, O. 1987. *Transición y lucha de clases en Nicaragua, 1979-86*. México D.F., Siglo XXI-CRIES.
- , 1990. «La derrota electoral del FSLN y las dos caras del poder». *L'Avispa*, 1.
- NÚÑEZ, O. et al. 1991. *La guerra en Nicaragua*. Managua, CIPRES-NORAD.
- ORTEGA, M. y MARCHETTI, P. 1986. «Campesinado, democracia y Revolución Sandinista. Notas sobre los límites y las posibilidades de la democracia en una sociedad rural atrasada». Managua, Mimeo.
- PAIGE, J. M. 1975. *Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*. New York, Free Press.
- , 1989. *The social origins of Dictatorship, Democracy and Revolution in Central America*. Paper presentado en el Annual Meeting of the American Sociological Association.
- PALERM, A. 1980. *Antropología y marxismo*. México, Nueva Imagen.
- PARÉ, M. L. 1977. *El proletariado agrícola en México: ¿Campesinos sin tierra o proletariado agrícola?* México D.F., Siglo XXI.
- PAX CHRISTI INTERNATIONAL 1981. *Derechos humanos. Informe de la Misión Internacional en América Central*. Amberes, Pax Christi.
- REIMAN, E. 1987. *Yo fui un contra. Historia de un «paladín de la libertad»*. Managua, Vanguardia.
- REINHARDT, L. 1987. «Agroexports and Peasantry in the Agrarian Reforms in El Salvador and Nicaragua». *World Development* 15/7.
- RIZO, M. 1999, *forthcoming*. «Los campesinos de las zonas rurales del interior de Nicaragua: Un nuevo sujeto social». Paper presented in the Workshop *Nicaragua: L'heure des bilans*. Paris, La Press de l'EHHSS.
- RUBÉN, R. y GROOT, J. 1989. *El debate sobre la Reforma Agraria en Nicaragua*.

- Transformación agraria y atención al campesinado en 9 años (1979-1988)*. Managua, INIES/ECS.
- SAITH, A. 1986. «Primitive Accumulation. Agrarian Reform and Socialist Transition: An argument». *The Journal of Development Studies*, 22/1.
 - SCOTT, J. 1976. *Moral economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in South East Asia*. New haven, Yale University Press.
 - SELIGSON, M. A. 1996. «Agrarian Inequality and the Theory of Peasant Rebellion». *Latin American Research Review*, 2/96.
 - SERRA, L. 1982. «The Sandinist Mass Organizations», en: Walker (ed.): *Nicaragua in Revolution*. New York, Praeger.
 - , 1985. «Grass-Roots Organizations», en: Walker (ed.): *Nicaragua: The First Five Years*. New York, Praeger
 - , 1986. *Las representaciones políticas del campesinado en Nicaragua*. Lovaine-la-Neuve, Tesis de Maestría, U. Lovaine-la-Neuve.
 - , 1988. «Organizaciones populares: entre las bases y el poder». *Pensamiento Propio*, 56.
 - , 1989. «Limitada por la guerra; pendiente a futuro. Participación y organización popular en Nicaragua». *Nueva Sociedad*, 104.
 - , 1990. *El movimiento campesino y su participación en la Revolución Popular Sandinista*. Lovaine-la-Neuve, PhD Thesis, U. Lovaine-la-Neuve.
 - , 1991. «The Grass-Rots Organizations», en: Walker, T. H. (ed.): *Revolution & Cuonterrevolution in Nicaragua*. Boulder, Westview Press.
 - , 1993. «Democracy in Times of War and Socialist Crisis. Reflections stemming from the Sandinista Revolution». *Latin American Perspective*, 77/20.
 - SHANIN, T. (ed.) 1987. *Peasants and Peasant Society*. Worcester, Basil Blackwell.
 - SKOCPOL, T. 1979. *Sate and Social Revolution*. Cambridge, Cambridge University Press.
 - , 1982. «What Makes Peasant Revolutionary?». *Comparative Politics*, 14/3.
 - , 1994. *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge, Cambridge University Press.
 - SMITH, H. 1993. *Nicaragua. Self-determination and Survival*. London, Pluto Press.
 - SPALDING, R. J. 1986. «Food, Politics and Agricultural Change in Revolutionary Nicaragua: 1979-1982», en: Super & Wright (eds.): *Food, Politics and Society in Latin America*. Loncoln, University of Nebraska Press.
 - , 1991. «Capitalism and Revolution: State-Private Sector Relations in Revolutionary Nicaragua. (1979-1990)». *Paper* presentado en el XVI LASA Congress, Mimeo.

- , 1994. «Capitalists and Revolution in Nicaragua: Opposition and Accomodation». *Latin American Research Review*, 20/3.
- SPALDING, R. J. (ed.) 1987. *The Political Economy of Revolutionary Nicaragua*. Boston, Allen & Unwin.
- STOLL, D. 1993. *Between two armies in the Ixil Twons of Guatemala*. New York: Columbia University Press.
- TILLY, Ch. 1978. *From Mobilization to Revolution*. New York, Random House.
- THOMPSON, E. P. 1979. *La formación histórica de la clase obrera*. Barcelona: Laia.
- , 1989. *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*. Barcelona, Crítica.
- , 1995. *Costumbres en común*. Barcelona, Crítica.
- TORRAS, J. 1976. *Liberalismo y rebeldía campesina. 1820-1823*. Madrid, Ariel.
- UNAG 1981. *Estatutos*. Managua, UNAG.
- UNAN 1989. *El brigadista rural*. Managua, CIERA.
- , 1993. *El universo de la tierra: Las culturas campesinas en el Pacífico y Centro de Nicaragua*. Managua, UNAN.
- UTTING, P. 1988. *The Peasant question & Development Policy in Nicaragua*. Génève, UNRISD.
- , 1991. *Economic Adjustment under the Sandinistas: Policy Reform, Food Security & Livelihood in Nicaragua*. Génève, UNRISD.
- VILAS, C. M. 1984. *Perfiles de la Revolución sandinista*. La Habana, Ediciones Casa de las Américas.
- , 1991. *Del colonialismo a la Autonomía: Modernización capitalista y Revolución social en la Costa Atlántica*. Managua, Nueva Nicaragua.
- , 1995. *Between Earthquakes and Volcanoes*. New York, Monthly Review Press.
- WARMAN, A. 1980. *Ensayos sobre el campesinado en México*. México, Nueva Imagen.
- WHEELOCK, J. 1976. *Imperialismo y dictadura: Crisis de una formación social*. México D.F., Siglo XXI.
- , 1979. *¡La Reforma va!* Managua, MIDA-INRA.
- , 1980. «No hay dos reformas agrarias iguales». *Nicaráuac*, 1.
- , 1983. *El gran desafío*. Managua, Nueva Nicaragua.
- , 1985. *Entre la crisis y la agresión. La Reforma Agraria Sandinista*. Managua, Nueva Nicaragua.
- , 1986a. *Nicaragua: El papel de la Vanguardia*. Ciudad de Panamá, CCS.
- , 1986b. *Balance y perspectivas de la reforma agraria*. Managua, MIDINRA.
- , 1990. *La Revolución Agraria Sandinista*. Managua, Vanguardia.

- , 1992. «Los cambios de la propiedad en Nicaragua», en: Paguaga y Litton: *El derecho nicaragüense de la propiedad después de la reforma agraria*. León, UNAN.
- WICKHAM-CROWLEY, T. 1991. *Exploring Revolutions. Essays on Latin American Insurgency and Revolution Theory*. New York, Sharpe-Inc.
- WOLF, E. 1969. *Peasant Wars of the Twenty Century*. New York, Harper & Row.
- ZALKIN, M. 1986a. *Peasant Response to State Intervention in the Production of Basic Grains in Nicaragua: 1979-1984*. Amherst, Tesis Doctoral, Massachusetts University.
- , 1986. «Nicaraguan Debates on Agrarian Structure and their Implications for Agricultural Policy and the Rural Poor». *Journal of Peasant Studies*, 14/1.
- , 1987. «Agrarian Class Structure in Nicaragua in 1980: A new Interpretations and Some Implications». *Journal of Peasant Studies*, 16/4.
- , 1988. *Estructura de clases y campesinado en Nicaragua, 1980: Una nueva interpretación*. Managua, CIERA.

ACRÓNIMOS



- **APP:** Área de Propiedad del Pueblo
- **ATC:** Asociación de Trabajadores del Campo
- **BND:** Banco Nacional de Desarrollo
- **BON:** Batallón
- **CAD:** Cooperativa de Autodefensa
- **CAS:** Cooperativa Agraria Sandinista
- **CCS:** Cooperativa de Crédito y Servicios
- **CDS:** Comité de Defensa Sandinista
- **CIERA:** Centro de Investigaciones para la Reforma Agraria
- **CRD:** Comando Regional Diriangén
- **CRJS:** Comando Regional Jorge Salazar
- **DGSE:** Dirección General de la Seguridad del Estado
- **ENABAS:** Empresa Nacional de Alimentos Básicos
- **EPS:** Ejército Popular Sandinista
- **ERA:** Empresas de Reforma Agraria
- **ETC:** Encuesta de Trabajadores del Campo
- **FSLN:** Frente Sandinista de Liberación Nacional
- **INRA:** Instituto de Reforma Agraria
- **JGRN:** Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional
- **MICOIN:** Ministerio de Comercio Interior
- **MIDA:** Ministerio de Desarrollo Agrario
- **MIDINRA:** Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria
- **MINT:** Ministerio del Interior
- **MIPLAN:** Ministerio de Planificación
- **SMP:** Servicio Militar Patriótico
- **UNAG:** Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
- **UPANIC:** Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua

NICARAGUA (1979-1990) LA REVOLUCIÓN ENREDADA

SALVADOR MARTÍ I PUIG

Durante la década de los ochenta Nicaragua y su revolución estuvieron en el epicentro de la agenda mediática internacional. Colectivos de solidaridad, partidos políticos, intelectuales e iglesias se fijaron en este pequeño país centroamericano y colaboraron con su proyecto emancipador. También los Estados Unidos y sus agencias, las juntas militares de los países vecinos y los Think Tanks de la nueva derecha se interesaron por este proceso y dieron apoyo a una heterogénea coalición contrarrevolucionaria que se nutrió de campesinos pobres. La intención de este libro, que consta de dos partes aparentemente opuestas, es comprender a partir de un análisis riguroso, los complejos acontecimientos que se sucedieron en Nicaragua desde la insurrección hasta mediados de los años noventa.